



El cuidado de adultos mayores en Paraguay: estrategias colectivas y circulación de cuidados en familias transnacionales

Nuria Pena

O impacto da segregação ocupacional por gênero e raça na desigualdade de renda no Brasil em três décadas (1986-2015)

Leonardo Souza Silveira y Natália Siqueira Leão

El inicio de la vida sexual en México. Un análisis de los cambios en el tiempo y las diferencias sociales

Olga Lorena Rojas y José Luis Castrejón Caballero

La sobreeducación en México: ¿promotora o inhibidora de la exclusión laboral?

Ana Ruth Escoto Castillo, María Clara Márquez Scotti y Victoria Prieto Rosas

Juventudes invisibilizadas en Argentina: la relevancia de los trabajos no remunerados y la validez de la categoría nini

María Marta Santillán Pizarro y Eduardo Javier Pereyra

Distribución espacial del homicidio juvenil masculino y desigualdad territorial en Ciudad de México y Estado de México (2000-2002 y 2010-2012)

Ma. Guadalupe Mejía Escamilla, Jeroen Spijker y Alex Manetta

Acumulación de desventajas en América Latina: aportes y desafíos para el estudio de la desigualdad

Gonzalo A. Saraví

Sincronicidades entre la transición sanitaria y la segunda transición demográfica en Argentina durante la primera década del siglo XXI

Javiera Fanta y Natalia Tumas

Contenido

- 4 Nota de las editoras**
Irene Casique y Sonia M. Frías
- 5 El cuidado de adultos mayores en Paraguay: estrategias colectivas y circulación de cuidados en familias transnacionales**
Nuria Pena
- 41 O impacto da segregação ocupacional por gênero e raça na desigualdade de renda no Brasil em três décadas (1986-2015)**
Leonardo Souza Silveira y Natália Siqueira Leão
- 77 El inicio de la vida sexual en México. Un análisis de los cambios en el tiempo y las diferencias sociales**
Olga Lorena Rojas y José Luis Castrejón Caballero
- 115 La sobreeducación en México: ¿promotora o inhibidora de la exclusión laboral?**
Ana Ruth Escoto Castillo, María Clara Márquez Scotti y Victoria Prieto Rosas
- 149 Juventudes invisibilizadas en Argentina: la relevancia de los trabajos no remunerados y la validez de la categoría nini**
María Marta Santillán Pizarro y Eduardo Javier Pereyra
- 185 Distribución espacial del homicidio juvenil masculino y desigualdad territorial en Ciudad de México y Estado de México (2000-2002 y 2010-2012)**
Ma. Guadalupe Mejía Escamilla, Jeroen Spijker y Alex Manetta
- 228 Acumulación de desventajas en América Latina: aportes y desafíos para el estudio de la desigualdad**
Gonzalo A. Saraví
- 257 Sincronicidades entre la transición sanitaria y la segunda transición demográfica en Argentina durante la primera década del siglo XXI**
Javiera Fanta y Natalia Tumas
- 295 Os efeitos das desigualdades: bem-estar, população e ambiente no início do século XXI**
Raphael Villela y César Marques

Revista Latinoamericana de Población

ISSN 2393-6401

Avenida Universidad 1001, Chamilpa,

A.P. 4-106, C.P. 62431

Cuernavaca, Morelos, México

Editoras:

Irene Casique y Sonia M. Frías

Comité editorial:

Susana Adamo, Wanda Cabella, Dídimo Castillo Fernández, Suzana Cavenaghi, Marcela Cerrutti, Joice Melo, Ignacio Pardo, Jorge Andrés Rodríguez Vignoli, Fermina Rojo y Tania Vásquez,

Consejo editorial:

Carlos Aramburú, Gilbert Brenes-Camacho, José A. Magno de Carvalho, María Teresa Castro, Anitza Freitez, Brígida García, José Miguel Guzmán, Paulo Saad, María Coleta de Oliveira, Edith Alejandra Pantelides, Adela Pellegrino, Joseph Potter, Eduardo Rios Neto, Miguel Villa y Ma. Eugenia Zavala.

Diseño:

Ana Laura Mayer Olagaray

Corrección de estilo:

Perla Alicia Martín Laguerenne

Patrocinios:

*Asociación Latinoamericana de Población
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Universidad Nacional Autónoma de México
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias*



Las opiniones expresadas en los artículos aquí publicados son de exclusiva responsabilidad de los/as autores/as y no de las instituciones involucradas.

The views expressed in this journal are those of the authors and is not responsibility of the institutions involved.

Nota de las editoras

En los meses de preparación de este número, la población a nivel mundial ha enfrentado —y sigue enfrentando— la experiencia de una pandemia global que ha afectado de manera profunda nuestras vidas. Más allá de los costos inmediatos en salud y economía de los pueblos, el COVID-19 y sus secuelas afectarán nuestra vida presente y futura. Cada actividad, cada hábito, cada plan, cada elemento de nuestra cotidianidad se ve transfigurado por las medidas necesarias para evitar —en realidad solamente reducir— los contagios de este virus.

Difícilmente podemos imaginar algún proceso o dinámica demográfica que no se haya visto o se esté viendo alterada, y frente a ello nos queda la certeza de que la nueva realidad (la “nueva normalidad”) reclama la atención y los esfuerzos de todos/as nosotros/as para dar cuenta de ella, para entenderla y atenderla, para explicarla y para prever acciones y medidas que serán necesarias para trazar nuevas rutas hacia el bienestar de los seres humanos. El de todos/as.

En ese espíritu, el pasado mes de mayo lanzamos una convocatoria entre las/os integrantes de ALAP para el envío de contribuciones, para conformar lo que esperamos pueda ser un número temático de RELAP sobre “Consecuencias sociodemográficas del COVID-19 en Latinoamérica”, el cual tentativamente se publicaría en marzo o abril del 2021. Este plan está sujeto tanto a condiciones económicas que nos permitan publicar tres números en 2021, como a la generosa respuesta de ustedes que nos permita lograr la recepción de un número suficiente de trabajos publicables. Si nos quedamos cortos en alguno de estos dos frentes (recursos y/o potenciales trabajos), los trabajos que recibamos podrían ser publicados en los números regulares de la revista. Pero somos optimistas, y creemos que frente a la magnitud de este problema ninguna/o de nosotras/os mirará hacia otro lado y que entre todas/os podremos apuntar claves y elementos para describirlo, analizarlo y afrontarlo.

Mientras tanto, queremos enviarles nuestro saludo solidario y desear que todas las personas que integramos ALAP nos mantengamos protegidas, proactivas y con el ánimo en alto, desde la certeza de que sí podemos hacer aportaciones para un nuevo mundo más justo.

*Irene Casique
Sonia M. Frías*

El cuidado de adultos mayores en Paraguay: estrategias colectivas y circulación de cuidados en familias transnacionales

Caring of the Elderly in Paraguay: Community Strategies and the Circulation of Care in Transnational Families

Nuria Pena

Orcid: 0000-0001-6784-314X

Correo: nuria.pena@sit.edu

SIT Study Abroad-IDES, Argentina

Resumen

Este artículo analiza las formas en las que se organiza el cuidado de adultos mayores paraguayos con especial foco en áreas rurales y en aquellas familias cuyos hijos han migrado a Argentina. Como insumo principal se analizan entrevistas y observaciones de un trabajo de campo binacional. Se examinan prácticas de cuidados en espacios colectivos y recursos diferenciados a los que acceden las familias transnacionales. La investigación concluye que, en contextos de aislamiento y escasos apoyos estatales, la participación en familias transnacionales mejora las condiciones de vida de adultos mayores en Paraguay rural. Además, reflexiona en torno a la necesidad de avanzar hacia modelos conceptuales adecuados que faciliten avanzar en el desarrollo de políticas nacionales y transnacionales que garanticen responsabilidades públicas en el cuidado de adultos mayores.

Palabras clave

Cuidados
Adultos mayores
Migración internacional
Género

Abstract

This article analyses the ways in which the care of the Paraguayan elderly is organized, in rural areas and in contexts in which their children have migrated to Argentina.

Main findings stem from an analysis of interviews and observations carried out both in Paraguay and Argentina. Practices of care in collective spaces as well as differentiated resources available to transnational families are examined. The research concludes that in contexts of severe deprivations and scarce public intervention, being part of transnational families improves life conditions of the elderly in Paraguay. Furthermore, it reflects upon the need of developing adequate analytical frameworks aimed at advancing towards the design of national and transnational policies guaranteeing public responsibilities in the care of the elderly.

Keywords

Care
Elderly
International
migration
Gender

Recibido: 30/1/2019

Aceptado: 2/8/2019

Introducción

Se estima que en muy poco tiempo el trabajo invisible del cuidado de los adultos mayores —un trabajo arduo, exigente y agotador— tendrá cada vez más demanda, ya que se prevé que habrá 100 millones de adultos mayores en América Latina con necesidad de apoyo y asistencia (Batthyány, 2007). Siguiendo tendencias mundiales y de la región, Paraguay ha iniciado un proceso de envejecimiento: presenta una población total estimada en 6 926 100 habitantes, de los cuales aproximadamente 779 205 son personas de 60 años y más que constituyen un 11,3% del total (Zavattiero y Serafini, 2016). Las previsiones indican que para el año 2050 la población adulta mayor llegará a los 2 millones, lo que representará para ese entonces el 20% de la población (Díaz, Escobar Carísimo y Domínguez, 2013).

Los datos del censo nacional argentino realizado para el año 2010 indican que la población paraguaya representa la primera minoría migratoria en el país, constituida por 550 713 personas, que constituye el 8,2% de la población de Paraguay. Esta migración es de larga data y ha pasado por diversas etapas desde finales del siglo XIX (Masi y Borda, 2011). Uno de sus rasgos más salientes es la importante presencia de mujeres en la migración paraguaya hacia Argentina. Si bien el fenómeno de mujeres que migran solas no es totalmente nuevo para la sociedad paraguaya, se percibe un progresivo aumento de la incorporación de las mujeres a

mercados de trabajo internacionales que aumentan los flujos de migraciones femeninas a países como Argentina (Soto, González y Dobrée, 2012).

En un contexto regional de cuidados informales de tipo familistas y llevados a cabo por las mujeres —se estima que 80 % de los cuidados a familiares con enfermedades son realizados por las mujeres dentro del hogar (Batthyány, 2007)— se vuelve especialmente importante estudiar los impactos de la migración en los modos en que las familias organizan los cuidados de los familiares dependientes que quedan en el lugar de origen. Los estudios que buscan comprender la forma en que las sociedades latinoamericanas organizan el cuidado de este sector de la población indican que, ante la insuficiencia de un apoyo integral por parte del Estado, son las familias, y sobre todo las más pobres y marginadas, quienes llevan a cabo estas labores con sus propios recursos. Paraguay no es excepción a esta tendencia: en efecto, es uno de los países latinoamericanos que presenta mayores porcentajes de cuidados de carácter informal, ya sean realizados por las familias o la comunidad (Martínez Franzoni, 2007). Asimismo, los estudios muestran que en el caso de migrantes con hijos que no se trasladan con sus familias enteras, son principalmente las abuelas quienes quedan a cargo del cuidado de los niños y adolescentes (Gaudio, 2013). La sobrecarga de algunas abuelas en su rol de cuidadoras, con frecuencia invisibiliza las necesidades de cuidados que con la edad empiezan a requerir (Soto, González y Dobrée, 2012).

Siendo Paraguay un país con muy débiles estructuras y respuestas estatales a necesidades básicas de sus ciudadanos —salud, vivienda, acceso a mercados laborales—, el presente trabajo se concentrará en las siguientes líneas de indagación: 1) ¿cómo se organiza el cuidado de los adultos mayores en contextos rurales y socioeconómicamente desfavorecidos, ¿cuáles son las preferencias y prácticas que despliegan las familias?, y 2) ¿cuáles son los recursos diferenciados a los que acceden las familias transnacionales con hijos migrantes en Argentina para organizar el cuidado de sus adultos mayores?

La inquietud que guía esta investigación se acrecienta a partir del proceso de envejecimiento poblacional y de transformaciones sociales y económicas de dicho entorno. El modelo de cuidados familista como esquema único y principal ve agudizada su fragilidad frente a la

disminución en el tamaño de las familias, es decir la disponibilidad de personas para realizar tareas de cuidado. Esta investigación reflexiona también sobre el surgimiento de espacios de cuidado comunitarios, además de que el trabajo presentado invita a reflexionar en términos conceptuales y de desarrollo de políticas públicas.

Se utiliza la terminología *adultos mayores* o *personas mayores* para evitar términos que encierran representaciones sociales negativas de la sociedad actual y que promueven una visión de fragilidad y/o minusvalía, como *viejos*, *ancianos* o *tercera edad* (Grosman, 2013). A su vez, frente al aumento del porcentaje de personas mayores —fenómeno que se está dando de forma más vertiginosa en la región latinoamericana que en el mundo desarrollado (Huenchuan, 2013, citado en Peláez y Minoldo, 2018)— son cada vez más los estudios que abordan el tema desde una visión de derechos y al hacerlo eligen este término.

Sobre la categoría del cuidado y los contextos migratorios

En sus inicios, la categoría *cuidado* se refería al trabajo informal y no remunerado dentro de la familia (Finch y Groves, 1983). Dicha categoría surgió para visibilizar todas aquellas actividades realizadas por mujeres generalmente consideradas como no trabajo y esenciales para garantizar el bienestar, la salud y las capacidades psicofísicas de los miembros de las familias (Faur, 2014).

Impulsada por las feministas de la Segunda Ola, la categoría de cuidado problematiza la concepción hegemónica del concepto *trabajo* restringido en forma exclusiva al trabajo remunerado para el mercado. La jerarquización de las tareas de cuidado persigue exponer las bases a través de las cuales históricamente se ha construido un sistema cultural que valora lo productivo y las tareas comúnmente asociadas a la masculinidad y desacredita las vinculadas a la reproducción generacional y social, asociadas a la feminidad. Asimismo, la discusión sobre el cuidado pone en cuestión que la política social haya naturalizado dichas tareas como algo propio del ámbito familiar (y femenino) despojando a quienes las realizan de ingresos o derechos sociales (Pérez Orozco, 2010).

Con el tiempo, estas nociones sobre el cuidado han evolucionado e incorporado también una dimensión normativa: el cuidado no solo visto como una actividad, sino como una relación social con costos emocionales específicos. Se considera que el cuidado no es solamente la suma de una serie de actividades conmensurables en términos de cantidad y tiempo, sino que también se trata de un estado de ánimo (Budig y Folbre, 2004, como se citan en Esquivel, Faur y Jelin, 2012).

Ahora bien, la mayor parte de estudios realizados con relación a la migración y el cuidado en la región latinoamericana han abordado las consecuencias de la feminización de la migración en el cuidado de hijos, no así en el cuidado de adultos mayores. Paraguay no escapa a esta tendencia que presenta escaso conocimiento en torno a consecuencias de la migración en los arreglos de cuidado de los adultos mayores y su bienestar. Los estudios sobre la migración femenina en Paraguay a Argentina han señalado la práctica frecuente de mujeres migrantes que al migrar de forma autónoma dejan a sus hijos en el lugar de origen y al cuidado de otras mujeres, generalmente las abuelas (Gaudio, 2013). Sin embargo, estas indagaciones no han profundizado en el destino de las mujeres que brindan cuidados cuando ellas mismas comienzan a necesitarlo.

Este trabajo se basa en una investigación cuyo foco fueron las familias rurales y que buscó comprender el rol que juega la migración hacia Argentina en estos contextos. Toma como punto de partida el modelo analítico propuesto por Razavi (2007), conocido como el diamante de cuidado. Mediante esta aproximación se analizan cuatro áreas para dar cuenta de la diversidad de agentes que proporcionan cuidados: la familia, el mercado, el sector público y el sector sin fines de lucro. La propuesta de utilizar la noción de *diamante de cuidado* busca exponer de modo comparativo el peso que adquieren los diferentes pilares del diamante en la distribución del cuidado. Este modelo sirve también para exponer la interacción de estos actores más allá de las fronteras nacionales.

De modo complementario y dadas las evidencias del caso analizado, la investigación utiliza también algunas conceptualizaciones propuestas por Baldassar y Merla (2014) en torno a la circulación de los cuidados en familias transnacionales. Según su perspectiva, la circulación del cuidado puede considerarse como constitutiva de la familia transnacional: el cuidado circula de forma dispareja y asimétrica entre sus

diferentes miembros a lo largo del tiempo. Además, su distribución está sujeta a diversidad de variables, entre las cuales se superponen regímenes migratorios, culturales y de género tanto de la sociedad de origen como de la de destino. Las facilidades o dificultades en movilidad y transporte a través de la frontera, así como la existencia o no de sistemas de cuidados estatales, influyen de forma variada y compleja en las expectativas y preferencias de cuidados en torno a cómo cuidar a los adultos mayores de estas familias (Baldassar 2008, citado en Merla, 2013). En tal sentido, visualizar las influencias de regímenes de tipo institucional y cultural con características “territorializadas” y propias de los lugares en los que circulan los miembros de estas familias, puede ser útil para captar mejor los modos y direcciones múltiples a través de los cuales circulan los cuidados. Esta perspectiva permite además identificar diversidad de actores que son menos visibles en conceptualizaciones tradicionales del cuidado, como lo pueden ser figuras familiares ficticias (Baldassar y Merla, 2014).

Metodología

El presente análisis se basa en un enfoque predominantemente cualitativo con el apoyo de bases de datos secundarias. Con el fin de caracterizar la situación sociodemográfica y socioeconómica de la situación general de los adultos mayores en Paraguay, se utilizaron datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del año 2016. Esta encuesta es realizada por el gobierno nacional paraguayo una vez al año a través de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. La muestra total de la EPH 2016 incluye los 17 departamentos del país más Asunción. El levantamiento de los datos corresponde al período de octubre a diciembre de 2016 y el tamaño de la muestra fue de 13 056 viviendas, distribuidas en todos los departamentos del país de manera de lograr la representatividad correspondiente.

Vale destacar que en la presente investigación se considera adultos mayores a las personas de 60 años y más, valiéndose de parámetros comúnmente utilizados. Este parámetro es utilizado por diferentes estudios, entre ellos la encuesta SABE (Salud, Bienestar y Envejecimiento) elaborada por el Centro de Demografía y Salud y Envejecimiento de la Universidad de Wisconsin-Madison junto a la organización Panamericana de la Salud. La definición de lo que es un adulto mayor

ha sido muy debatida y la idea de que pueda definirse a través de una edad precisa es a menudo cuestionada. Para este caso en particular, se resalta la necesidad de utilizar un rango etario más joven debido a las duras condiciones de vida a la que ha estado expuesta gran parte de la población rural en Paraguay. Estas carencias pueden conllevar a una menor expectativa de vida y el inicio de un proceso de envejecimiento prematuro en comparación con otros grupos poblacionales (Torrado, 1995). El envejecimiento no es solamente un proceso biológico, sino también psicológico y social, determinado por múltiples factores relacionados con el estilo de vida, la clase y el género (Grosman, 2013; Martínez Maldonado y Mendoza Núñez, 2009).

Para identificar las estrategias que despliegan las familias frente a recursos escasos, se realizó un trabajo de campo binacional basado en 50 casos de adultos mayores en cinco departamentos de Paraguay, en localidades con diferentes grados de ruralidad. Los casos fueron seleccionados mediante el método de bola de nieve, siguiendo criterios analíticos. Se buscó contar con diversidad de situaciones en cuanto a nivel de dependencia y sexo: 28 casos de dependencia baja y 22 de dependencia alta, de los cuales 32 eran mujeres y 18 varones.

Para determinar diferentes niveles de dependencia de esta población, se consultaron diversas fuentes, particularmente los instrumentos desarrollados por Katz, Lawton y Brody¹. Sus indicadores permitieron identificar las diversas situaciones en las que se encontraban los adultos mayores entrevistados en relación con los diferentes apoyos que requerían para actividades diarias y de otro tipo. Asimismo, estos niveles de dependencia fueron clave para distinguir entre personas que proveen cuidados y las que los requieren.

Otro rasgo central para la selección de los casos fue que los adultos mayores tuvieran o no hijos migrantes (26 con hijos en Argentina y 24 casos de adultos mayores con hijos únicamente en Paraguay o sin hijos). La naturaleza de la migración paraguaya a Argentina, así como

1 El índice de Katz y el de Lawton y Brody son dos instrumentos comúnmente utilizados. El de Katz describe todas aquellas actividades que se consideran *básicas* para la vida diaria: la movilidad de un lugar a otro, la ingesta de alimentos y medicamentos, la ayuda para vestirse, para ir al baño y para la higiene personal, entre otras. Por su parte, el índice de Lawton y Brody enumera actividades *instrumentales* de la vida diaria que incluirían: la compra de comida y su elaboración, el uso del teléfono, el lavado de ropa, la capacidad de gestión de dinero y de trámites, la movilidad en la comunidad, las visitas médicas y la gestión de medicamentos.

el volumen de sus flujos, ha estado influida tanto por factores económicos como políticos de corto y largo plazo en Argentina y Paraguay (Cerrutti y Parrado, 2006). Teniendo en cuenta que la migración paraguaya en Argentina es de larga data y se mantiene en el tiempo a través de amplias redes de solidaridad de parentesco y amistad (Cerrutti y Parrado, 2006; Imas, 2014), para el trabajo cualitativo fue preciso no solo distinguir entre familias migrantes y familias no migrantes, sino también entre aquellas que incurrían en prácticas transnacionales y las que no. Siguiendo definiciones teóricas dentro del campo de los estudios transnacionales (Glick Schiller, Bach y Szanton Blanc, 1992), aquellos migrantes que mostraron evidencias de desarrollar relaciones con dos o más sociedades de modo simultáneo y de forma específica, con sus familias, fueron considerados como parte de esta categoría. Por último, en 32 de los casos se trata de adultos mayores con residencias en viviendas familiares, mientras que los restantes 28 habitan hogares de cuidado no familistas.

La duración del trabajo de campo fue de un total de tres meses distribuidos en varias visitas de campo en Argentina y Paraguay. El trabajo de campo incluyó visitas a diferentes miembros de las familias—incluidos cuidadores y los adultos mayores mismos— y observaciones de los espacios de residencia de los adultos mayores. Las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas y exploraron elementos de las historias de vida de los adultos mayores. Se indagó también en torno a la circulación de ingresos dentro de las familias y necesidades de asistencia de los mayores y de las personas encargadas de brindarlas. En aquellos casos donde fue posible, las entrevistas se acompañaron de observaciones: incluso en algunos casos la investigadora fue invitada a pernoctar con algunas de las familias, elemento que resultó clave para buena parte del análisis presentado en esta investigación.

A continuación, un resumen de la composición de la muestra cualitativa.

Cuadro 1
Resumen del trabajo de campo cualitativo

Descripción: 50 casos de adultos mayores (AM) desagregados según franja etaria, sexo, grado de dependencia, tipo de residencia, relación con la migración		
Número de casos según edad	AM de 60 a 69	8
	AM de 70 en adelante	42
Número de casos según sexo	Mujeres AM	32
	Varones AM	18

(continúa)

Descripción: 50 casos de adultos mayores (AM) desagregados según franja etaria, sexo, grado de dependencia, tipo de residencia, relación con la migración		
Número de casos según nivel de dependencia	Casos dependencia baja	28
	Casos dependencia alta	22
Número de casos según lugar de residencia	Viviendas familiares	32
	Hogares de cuidados	18
Relación con la migración: A los fines de esta investigación, 26 pertenecen a familias migrantes por tener hijos migrantes en el exterior actualmente o por haber sido migrantes ellos mismos. Estos casos excluyen aquellos con hermanos o nietos en el exterior. Los otros 24 son no migrantes.		
Distribución geográfica del trabajo de campo cualitativo		
Santory (Repatriación) y Caaguazú, departamento de Caaguazú: 15 casos		
Villa del Rosario, departamento de San Pedro: 11 casos		
Yroysá 5ta línea (Colonia Independencia) y Villarica, departamento de Guaira: 10 casos		
Santa Teresita (Caazapá), departamento de Caazapá: 6 casos		
Ka'atymi (La Colmena), departamento de Paraguarí: 2 casos		

Fuente: Elaboración propia.

Condiciones de vida de los adultos mayores de Paraguay

Aunque los datos oficiales de Paraguay revelarían que la pobreza y la pobreza extrema han disminuido en los últimos años, se estima que la pobreza todavía afecta a 1 800 000 de personas (Rojas Viñales, 2018). Tanto la pobreza como la pobreza extrema alcanzan niveles más altos en el campo, situación que inevitablemente afecta también a los adultos mayores que permanecen residiendo en estas áreas. Esta situación viene dada por una variedad de deficiencias estructurales, entre las cuales se encuentra el bajo nivel de cobertura de la seguridad social, ocasionado por la elevada incidencia del empleo informal. Una de las expresiones más contundentes de la informalidad en el empleo para quienes trabajan en relación de dependencia es la carencia de cotización en un sistema de jubilación. Se estima que menos de la mitad de la población actualmente asalariada o dependiente cotiza para su jubilación: solo un 41,7% lo hace (DGEEC, 2016), además de que en las zonas rurales las cotizaciones son mucho más bajas y llega solamente a un tercio de la población en relación de dependencia (27,8%). Para el caso de personas de 65 años y más, la EPH de 2016 indica que solo un

12,5% del total de esta población accede a una jubilación y que 6 de cada 10 personas mayores no cuentan con acceso a un seguro de salud por fuera de aquel previsto por el sistema público. En tal sentido, a pesar de que con el nuevo milenio se realizaron diversas transformaciones al sistema sanitario paraguayo, este sigue siendo deficitario. Para las familias en situación de pobreza y con muy bajos ingresos, la dificultad de acceso a un sistema de salud gratuito puede resultar altamente desafiante, ya que la aparición de un gasto de salud no planificado puede amenazar la seguridad alimentaria de las familias (Giménez, 2012, citado en Benítez, 2017). Para el caso de personas mayores, esta situación es especialmente alarmante, ya que por su condición de salud requieren de atención sanitaria con más frecuencia.

La EPH 2016 revela que 2 de cada 10 adultos mayores se encuentran en situación de pobreza. A su vez, al analizar el acceso a jubilaciones y seguro de salud por sexo y área de residencia, la situación de las personas mayores que residen en zonas rurales y de las adultas mayores mujeres es para todos los casos aún más desalentadora. Solo 8,7% de las mujeres adultas mayores y 2,6% de todos los adultos mayores con residencia rural acceden a ingresos jubilatorios. Por otro lado, no existe gran diferencia de acceso a servicios sanitarios entre adultos mayores hombres y mujeres, aunque sí es marcado y notorio el hecho de que 80,7% de todos los adultos mayores en zonas rurales no dispongan de ningún servicio médico por fuera del sistema público.

Cuadro 2
Porcentaje de población de 65 años y más que accede a
ingresos jubilatorios por sexo y lugar de residencia

Acceso a ingresos jubilatorios	% con ingresos jubilatorios	N
Todos	12,5	408 889
Hombres	16,8	193 110
Mujeres	8,7	215 779
Urbanos	19,2	244 101
Rurales	2,6	164 788

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH 2016.

Por último, teniendo en cuenta que las condiciones habitacionales son clave para el bienestar de los adultos mayores y las personas que los cuidan, es importante resaltar su alto nivel de precariedad: el 22 % vive en casas con piso de tierra, 70 % usa leña como combustible para cocinar, 20 % no cuenta heladera y un 45 % no dispone de lavarropas.

Cuadro 3
Acceso a seguro médico por fuera de los servicios públicos (en porcentajes)

¿Tiene seguro médico vigente en el país?	IPS*	Seguro privado individual o familiar	Seguro privado laboral	Sanidad militar o policial	No tiene en ningún lugar	Totales	N
Todos	29,0	5,9	0,3	1,8	62,6	100	613 366
Hombres	27,9	5,6	0,3	2,1	64,2	100	316 915
Mujeres	30,8	6,4	0,2	1,6	61,1	100	296 451
Urbanos	38,6	8,5	0,4	2,1	50,5	100	367 562
Rurales	15,6	2,2	0,1	1,4	80,7	100	245 804

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH 2016.

*El Instituto de Previsión Social (IPS) es el principal responsable del seguro social del país, que se financia con aportes de empleados y empleadores del sector privado, y con aportes del Estado dentro del Régimen General. Algunas de las profesiones allí inscritas reciben servicios de salud en áreas como maternidad, riesgos de enfermedad no profesional, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, provisión de medicamentos, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores asalariados.

Preferencias y prácticas de cuidado de adultos mayores en zonas rurales: el seno familiar

Paraguay no cuenta aún con una política integral de atención a los adultos mayores. En la región latinoamericana y con el amparo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, se procura favorecer el desarrollo de políticas públicas que atiendan los derechos de este colectivo (Pautassi, 2015). Aunque Paraguay no ha ratificado aún esta Convención, este y otros instrumentos sirven como fuente de presión hacia el Estado con relación a estándares básicos sobre los derechos de los adultos mayores. Estos estándares van más allá de una mera subsistencia y refieren a visiones más completas que apuntan a promover un *envejecimiento activo*: optimizar el bienestar físico, social, mental en aras de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez (OMS, 2002).

En el entorno rural de Paraguay el cuidado se desarrolla primordial y casi exclusivamente por las familias, y dentro de ellas, por las mujeres. No existen opciones reales para adultos mayores con bajos ingresos de habitar espacios diferentes al familiar cuando empiezan a requerir mayores apoyos. Los espacios de cuidado no familistas son escasos en todo el país. Se estima que existen ochenta instituciones (algunas muy pequeñas) y la información censal disponible indica que la mayoría se encuentra en Asunción.

A partir de las entrevistas realizadas con las familias se constata que existen fuertes preferencias para que el cuidado sea realizado en el ámbito familiar. No obstante, como lo demuestran investigaciones en países de características similares (Merla 2013), es probable que esta preferencia esté relacionada con las características del sistema de cuidado de Paraguay, donde las opciones institucionales son casi nulas. Además, la responsabilidad familiar en torno al cuidado parece estar fuertemente estimulada por visiones religiosas (de diferentes creencias) que abonan representaciones de esquemas de cuidado donde las responsabilidades estatales se asoman solo débilmente.

Los recursos estatales destinados al bienestar de los adultos mayores son muy limitados. Además de la carencia de hogares para adultos mayores, tampoco se proveen apoyos mínimos para su cuidado familiar dentro de sus viviendas particulares. Las zonas rurales padecen fuertes déficits de salud y con frecuencia los servicios se encuentran muy alejados y están desprovistos de atención y/o medicamentos básicos. Por lo general faltan equipamientos básicos para el bienestar de los adultos mayores. En la oficina de Acción Social de la gobernación de Caazapá, la encargada de gestionar el pedido de sillas de ruedas y otros insumos (colchones de agua, por ejemplo) explicó en una entrevista que los registros de pedidos son siempre superiores a los que ellos pueden satisfacer, y que se tiende a priorizar las necesidades de los jóvenes:

La última vez pedimos 120 sillas más o menos, pero llegaron 50 solamente... Para entregarlas priorizamos a niños y jóvenes. Si no, a los ancianos más grandes. Por ejemplo, le dimos a un veterano de la guerra del Chaco que tenía 103 años. (Empleada de oficina, comunicación personal, julio de 2016)

Todo esto repercute fuertemente en la calidad de vida de los adultos mayores y sobre todo, en la de las abuelas, que con frecuencia están sobrecargadas en sus funciones de cuidadoras —a veces debido a que sus hijos se mudan a la ciudad o fuera del país y ellas quedan a cargo del cuidado de sus nietos—. Las arduas condiciones de vida que atraviesan estas familias convierten el cuidado en una tarea aún más estresante, ya que este se realiza en condiciones de precariedad.

Existe una fuerte invisibilización de las tareas que realizan otros familiares —sobre todo mujeres— para cuidar a los adultos mayores. Por un lado y tal como revelan estudios en otros países latinoamericanos, las tareas domésticas de las mujeres en estos contextos son más arduas y extensas —ya que combinan tareas domésticas y del campo— en una continuidad sin pausa (Salgado de Snyder, 2003). Por otro lado, en el caso de adultos mayores con dependencia alta, la falta de recursos materiales y sanitarios hace que las tareas de cuidado sean sumamente demandantes.

La sensación de tener que estar todo el día en estado de alerta o de estar preocupada todo el tiempo por otra persona, denominada por investigaciones afines como “dependencia sin tregua” (Findling y López, 2015), apareció con fuerza en el relato de familiares cuidadoras. Edelmira, por ejemplo, a cargo del cuidado de sus dos padres adultos mayores, que se encuentran en situación de un alto nivel de dependencia, expresa una sensación de responsabilidad constante que es agravada también por su sentimiento de impotencia frente al estado de salud de su padre. A partir de una caída, su padre había sufrido un fuerte declive en sus niveles de salud. Esto habría intensificado los niveles de dependencia, al mismo tiempo que se tradujo en un fuerte sentimiento de impotencia por parte de Edelmira al no contar con recursos adecuados para sostener los cuidados. Incluso en su testimonio ella transmite sentirse totalmente tomada por la situación: “A veces estoy en otro lugar de la casa e imagino que me están llamando... A veces siento que me voy a volver loca” (Edelmira, comunicación personal, febrero de 2015).

Entonces, en repetidas ocasiones son las hijas quienes se encargan y, aunque muchas manifiestan agotamiento y estrés, ellas consideran que es su deber realizarlo, a la vez que expresan satisfacción en la posibilidad de encargarse de sus padres, como modo de retribución por los

sacrificios que sus progenitores realizaron para mantenerlas. El sentido de responsabilidad moral pareciera pesar más sobre las hijas mujeres, tal como lo demuestran otras investigaciones que han analizado casos similares (Paoletti, 2007).

Aurora, hija de una adulta mayor con problemas de alzhéimer y párkinson, dedica actualmente gran parte de su tiempo al cuidado de su madre en un hogar rural en Santa Teresita, Caazapá, y comparte el cuidado de su madre con su hija y con una vecina. La vecina colabora de modo informal y parcial en el cuidado de la adulta mayor a cambio de una pequeña remuneración. Así y todo, Aurora expresa sentirse “atada” y sin la posibilidad de descanso cuando su madre se queda sola en su hogar. Ella explica:

No sabés cómo luchamos... Muy difícil, yo no puedo salir [de la casa]. Cuando mi hija va a trabajar, yo tengo que cuidar. Yo no salgo ni a una parte. Yo no descansaba si ella estaba allá. Porque ponía el gas. Y era un peligro. (Aurora, comunicación personal, julio de 2016)

Aunque, los cuidados en general se realizan en el seno familiar con baja o nula intervención de otros actores, existen casos particulares en los que se logran activar redes de intercambio entre los vecinos, por ejemplo, con relación a la alimentación o a la colaboración con medios de transporte propios para trasladar a los adultos mayores a visitas médicas. En relación con el acceso a medicamentos o a recursos médicos específicos, algunas personas entrevistadas refieren la ayuda provista por “primos”, “compadres” y/o pseudoparientes que descansan en lógicas de padrinazgo y/o compadrazgo.

Según Morínigo (2008), en el caso de la sociedad paraguaya y también como consecuencia de modos de funcionamiento del stronato², se presentan elementos que distorsionan los modos clásicos de la ciudadanía y se desarrollan relaciones nacidas desde vínculos más personales, resultado de relaciones de lealtad y reciprocidad dentro de un marco de posicionamiento desigual. Según el autor, el clientelismo y el padrinazgo

2 Paraguay padeció una de las dictaduras más largas de Latinoamérica con casi 35 años en el poder de Stroessner (entre 1954 y 1989). Autores como Morínigo (2008) y Nickson (2010) sostienen que este régimen tuvo gran impacto en el modo de relacionamiento de los ciudadanos paraguayos hacia el Estado. En un sentido similar, López (2016) argumenta que el tipo de represión política realizada durante este largo período formateó una sociedad “apolitizada” y donde incluso al día de la fecha el sistema democrático funciona de forma limitada y con carácter de tipo procedimental.

vinculan a los dominados en una relación familística que no se funda en vínculos de sangre, sino en vínculos de lealtad entre quien domina y quienes son dominados para alcanzar cada uno el objetivo buscado. Estos vínculos, presentes en los relatos de las personas entrevistadas, encarnan también una realidad del cuidado más compleja que aquella que se podría captar a través del diamante de cuidado y los diferentes actores que lo componen (familia, Estado, mercado, sector sin fines de lucro). Para el caso paraguayo, se trata de una superposición de espacios más que de espacios independientes, donde la identidad de algunos aparece difusa o en forma híbrida. A modo de ejemplo, Edelmira —a cargo del cuidado de sus dos padres adultos mayores (de un nivel de dependencia alto)— narró que, para conseguirles medicamentos, ella contaba con la ayuda de un primo vinculado a la gobernación local que se los conseguía en forma gratuita. También expresó que acudía a él en caso de enfermedad: “Cuando se enferma, llamo a mi primo. Porque acá no hay nadie que te ayude...” (Edelmira, comunicación personal, febrero de 2015). Si bien no es su primo por vínculo sanguíneo, es para ella una figura crucial para navegar la burocracia estatal, lo que de otro modo no podría hacer por carecer de recursos culturales.

En otro caso, Mirta Raquel, nieta de la adulta mayor Laureana, explica que ella cuenta con la ayuda de una vecina para tareas de cuidado de su abuela y su hijo de tres años. Esta relación que ella describe como “ayuda” entre vecinos contiene ciertas lógicas de mercado —existe un pago de por medio por las tareas realizadas— más allá de que la relación no sea presentada como mercantil y se describe como dentro de una suerte de colaboración entre vecinos.

A su vez, en los esquemas de cuidado de las familias analizadas, aparece el apoyo de diversos actores del sector sin fines de lucro. Es interesante señalar aquí que entre ellos figuran diversidad de instituciones religiosas—Iglesia católica, evangélica, testigos de Jehová, Pueblo de Dios, menonitas— a las cuales acuden las familias no solamente en busca de apoyo moral y espiritual ante las diferentes dificultades que enfrentan, sino para acceder a recursos y servicios concretos.

A continuación, una breve reflexión en torno al funcionamiento de residencias colectivas de cuidado que ilustran bien el importante rol que ocupan estos actores y las estructuras híbridas que se desarrollan en estos espacios con la superposición de lógicas de cuidado asistencia- listas, estatales y mercantiles.

Espacios de cuidado colectivos fuera del seno familiar

En las áreas que se entrevistaron adultos mayores con residencia en hogares familiares, se indagó sobre la existencia de espacios de cuidado no familistas. De este modo, se llegaron a conocer cuatro residencias colectivas. La mayoría surge como resultado de la acción de vecinos y/o parroquias comunitarias que con el tiempo aspiran a convertir estos espacios en lugares permanentes de residencia para los adultos mayores. En ningún caso son el resultado de una planificación estatal, más allá de que, más tarde en el proceso, el Estado puede apoyar determinados aspectos de su funcionamiento. A continuación, una descripción básica de dichas residencias.

Cuadro 4
Descripción básica de espacio de cuidado colectivo y no familista

Nombre	Fuentes de financiación y apoyos	Condiciones de alojamiento
Hogar de Villa del Rosario, departamento de San Pedro	Lo inició una vecina. No cuenta con el apoyo del Estado. Se mantiene con fondos de la iglesia, donaciones y escasos ingresos de sus residentes y la vecina a cargo.	Capacidad máxima: 4 adultos mayores; al momento de la entrevista residían 2 bajo el cuidado de una persona con la ayuda de sus hijas adolescentes.
Santa Lucía, Villarica, Guairá	Lo impulsó una religiosa española de la Iglesia de Santa Lucía y creció con la ayuda de los vecinos. Cuenta con apoyos estatales. Los sueldos de las cuidadoras, entre otros, son cubiertos por el Estado.	En el momento de la visita, alojaba a 26 adultos mayores, su capacidad máxima. Contaba con cuidadoras y apoyo voluntario de estudiantes.
Juan Pablo II, Caazapá	Lo impulsó una persona perteneciente a una familia política. Recibió apoyo y donaciones de la iglesia local, los vecinos, empresas y el Estado.	En el momento de la visita, alojaba a 10 adultos mayores, pero tenía capacidad para al menos 5 más. Contaba con cuidadoras profesionales y apoyo voluntario de estudiantes.

Hogar de Santa Clara, Caaguazú	Iniciado por la iglesia. Recibe apoyo de la Fundación Santa Clara, de vecinos y de las personas que allí residen y pueden contribuir. Recibe escasos apoyos estatales.	En el momento de la visita, alojaba a 13 adultos mayores y no podía aceptar más por contar con solo 4 cuidadores que trabajan de a dos y en turnos.
--------------------------------	--	---

Fuente: Elaboración propia.

En comparación con los recursos a los que acceden algunos adultos mayores que viven por su cuenta, estos espacios colectivos cuentan con mayor acceso a alimentos, medicamentos y otros insumos como confort habitacionales. En el caso del Hogar Santa Lucía, su encargada relata que, en sus inicios, escaseaban los alimentos y que incluso una vez se los encontró cocinando en una olla “un hueso con arroz”. Sin embargo, hoy cuenta con un caudal de donaciones variadas que les garantiza en mayor medida cierta seguridad alimentaria:

La hermana ayuda con donaciones. Va y viene. Trae pañales, jabones industriales para las lavadoras, y después la gente de buen corazón que viene, estudiantes, siempre traen aporte de alimentos no perecederos. Siempre recibimos visitas de algún grupo social o estudiantes. Todo lo que es la parte de alimentación, asistencia médica, ellos vienen a alegrar el día... También hay empresas que colaboran. Hay una de aceite que ayuda, otra que ahora nos da fideos, pero es temporal. La de Asunción es más permanente... (Lucía, comunicación personal, febrero de 2016)

Un rasgo destacado de los cuatro hogares visitados es que la mayoría de los adultos mayores que acceden a estos espacios son admitidos ya sea porque no cuentan con ningún familiar vivo en el país y/o por haber sido “abandonados” por su círculo familiar. A modo de ejemplo, la encargada de la residencia de Santa Lucía explica al respecto:

Hay una lista de espera de abandonados o viviendo solos. Ahora tenemos diez que esperan y no estamos pudiendo hacer nada por ellos... También hay muchos casos de familiares que vienen y dicen que por trabajo no pueden cuidarlos... Pero a ellos no los ponemos en la lista. No son la prioridad. (Encargada de la residencia, comunicación personal, julio de 2016)

En dos de los hogares se advirtió la convivencia de adultos mayores desprovistos de protección familiar con otros adultos mayores que habían sido trasladados allí por sus familias y pagaban una cuota mensual para garantizar que recibieran cuidados. Estos dos hogares

presentaron entonces la convivencia de diferentes lógicas de provisión de cuidado en un mismo espacio en el que empieza a aparecer tímidamente una forma de cuidado mercantilizada. Como ejemplo, una de las adultas mayores de la residencia de Santa Clara cuenta con enfermeras propias que la atienden solo a ella y cuyos gastos son cubiertos por su hija. En contrapartida, Amado llegó a la residencia por medio de los vecinos por encontrarse en una situación de indigencia y sin recursos básicos para la subsistencia. Así lo explica Silvia, la enfermera que lo cuida parte del tiempo y conoce su situación:

Tiene 88 años. Le trajeron los vecinos. Él vivía solo, no tuvo hijos y nadie lo podía atender. Los vecinos no podían atenderlo. Tiene presión alta y reuma, tiene su andador también. Pero no mucho más. Él camina bien con el andador. El tema es que vivía en una carpa en muy mala situación... Al principio le insistimos para que se bañara y no quería, se quería ir. Ahora se está acostumbrando... (Silvia, comunicación personal, septiembre de 2017)

Respecto a la intervención del Estado en estos espacios, en general es de carácter reactiva. Los presupuestos asignados son bajos, arbitrarios y sujetos a discontinuidades. Las condiciones laborales de las personas que asisten a los adultos mayores en estos espacios son heterogéneas y en general precarias. En uno de los casos, la principal cuidadora lo hace de forma voluntaria y su expectativa para el futuro es recibir un reconocimiento y apoyo formal por parte del Estado —en forma de sueldo— para continuar con sus tareas. En otras de estas residencias, las personas a cargo comenzaron a realizar tareas de cuidado de forma voluntaria y espontánea, y con el pasar del tiempo comenzaron a recibir una remuneración. Por ejemplo, cuando se iniciaron las actividades de cuidado de la residencia Juan Pablo II en 2015, las cuidadoras que allí trabajaban no recibían un sueldo por sus tareas. A partir de 2016, la empresa Yaciretá comenzó a hacerse cargo de los salarios de su personal. Esta situación —como también aquella vivenciada por los trabajadores del hogar de Santa Lucía, cuyos sueldos paulatinamente comenzaron a ser cubiertos por el Estado— contribuyó así a una transformación de la mirada en torno al cuidado de los adultos mayores. Un trabajo que, tal como se manifestó de diferentes formas en las entrevistas realizadas, requiere de capacidades y de saberes específicos.

En otro orden, no existen regulaciones claras en torno al funcionamiento de estos espacios, por lo cual el Estado no cumple de forma cabal con responsabilidades fundamentales que protejan las condiciones de vida de los adultos mayores que habitan estas residencias. En efecto, aunque muchos de los cuidados ofrecidos allí son de mayor calidad a los que pueden potencialmente recibir muchas personas mayores en sus viviendas privadas, no existen en funcionamiento controles claros en estos espacios.

Por otro lado, en estos espacios conviven representaciones y lógicas disímiles. De modo similar a los resultados presentados por investigaciones afines (Vega, Martínez-Buján y Paredes, 2018), los arreglos de cuidados comunitarios pueden presentarse a través de prácticas de un alto nivel de heterogeneidad. En algunos de los espacios analizados prevalece un espíritu de funcionamiento político, de tejido de vínculos y respuesta a la falta de políticas públicas. En otros, se presentan rasgos donde prevalecen lógicas más acordes al funcionamiento de residencias privadas. En todos los casos y probablemente como consecuencia de la débil planificación e intervención estatal en torno a ellos, se advierten lógicas de funcionamiento cambiantes. Espacios híbridos donde pueden convivir prácticas solidarias y comunitarias (sostenidas por vecinos y/o la iglesia local) con prácticas mercantilizadas. Entonces, y tal como se plantea en las discusiones abordadas por el trabajo recién mencionado, lo comunitario no es necesariamente algo preciso, perfecto y diferenciado de otros actores (familia, el Estado, el mercado).

A modo de ejemplo, la perspectiva del personal de la residencia Juan Pablo II es que esta fue iniciada como obra de caridad y como tal, se espera que lo siga siendo: se promueve la búsqueda de donaciones para su funcionamiento. Sin embargo, algunos vecinos sostienen que, para ingresar y permanecer en esta residencia, es necesario abonar una cuota y que muchos de los adultos mayores que acceden, cuentan con familiares con recursos para cubrir estos gastos y están, en términos relativos, en una mejor situación respecto a gran parte de los adultos mayores de la zona.

En síntesis, son disímiles los recorridos y las proyecciones —cuando las hay— de estas residencias, en donde en primer lugar se erigen en respuesta solidaria a la situación de emergencia que atraviesan

algunos adultos mayores de la comunidad y en las que, en una segunda instancia, parece haber poca claridad respecto al tipo de instituciones en que se convertirán en el futuro.

Cuidado de adultos mayores en familias transnacionales

Según Glick Schiller, Basch & Szanton Blanc (1992):

Los transmigrantes desarrollan y mantienen múltiples relaciones —familiares, económicas, sociales, organizacionales, religiosas, políticas— que sobrepasan fronteras. Los transmigrantes actúan, toman decisiones, se sienten implicados y desarrollan identidades dentro de redes sociales que los conectan con dos o más sociedades de forma simultánea.

En este sentido, no toda persona que migra mantiene lazos fuertes con su sociedad de origen, del mismo modo que no todas las familias pueden ser consideradas transnacionales.

Sørensen y Guarnizo (2007) advierten sobre la necesidad de estudiar a las familias desde una comprensión amplia que evite utilizar el parámetro de familia nuclear como modelo idealizado y explore, en cambio, otros sentidos de familia atravesados por lógicas rurales y trayectorias de migraciones más complejas. Así, existen personas que cuando migran pueden hacerlo como resultado de una decisión familiar y no puramente individual. Además, en muchos casos tanto el inicio como la continuación de la migración puede estar sostenida por la familia en su totalidad y motivada por una búsqueda de diversificación y maximización de ingresos. Entonces, en un contexto de pobreza, una familia de bajos recursos y sin acceso a ningún tipo de seguro o garantía puede eventualmente disponer de una seguridad mayor al contar con la posibilidad de acceso a otro mercado laboral y/o frente a la posibilidad de recibir una remesa económica y así disponer de mecanismos adicionales a través de los cuales enfrentar situaciones de dificultades económicas.

En la presente investigación, las familias de adultos mayores sin hijos, sin hijos migrantes o con hijos migrantes que no mantienen contactos fluidos tras la separación física mostraron padecer graves deficiencias de acceso a recursos materiales. En muchos casos relataron padecer

fuertes dificultades para satisfacer necesidades alimenticias básicas. Muchos de ellos y más aún en las zonas rurales no son beneficiarios de ingresos previsionales porque no han podido realizar aportes a lo largo de sus vidas. Otros han logrado acceder a una pensión mínima que el Estado otorga desde la sanción de la ley 3728/09 en el año 2009 a aquellos que se encuentran en situación de pobreza. Sin embargo, para estos últimos, los ingresos son insuficientes: el estipendio que se otorga equivale a un cuarto del salario mínimo. Entonces, en varios de los casos estudiados, los adultos mayores con ingresos magros deben recurrir a ayudas solidarias de vecinos para obtener alimentos y costear la diversidad de gastos de transporte en zonas débilmente comunicadas. También la falta de acceso a recursos estables dificulta la posibilidad de realizar mejoras en las viviendas que residen, que les resultan cada vez más necesarias a medida que van avanzando en edad.

En contrapartida, aquellos adultos mayores que cuentan con redes familiares más extensas y/o con hijos en el exterior, se encuentran en una situación de notable ventaja comparativa con relación al acceso de recursos materiales diversos. Se trata de recursos fundamentales en economías de subsistencia. Por ejemplo, María Paula explica que su hermana Saturnina, con residencia en Buenos Aires, ayuda con los cuidados de su madre, enviando diferentes tipos de mercancías: “Sí, ella siempre trae mercadería cuando viene, artículos de limpieza. Ella, pobre, ya está enferma, pero trae de todo cuando viene. Y acompaña con una platita para comprar carne” (María Paula, comunicación personal, julio de 2016).

Caftorina, por su parte, adulta mayor de 64 años, explicó que no estaba en edad de recibir la pensión del adulto mayor y entonces no contaba con ningún tipo de apoyo estatal para su subsistencia. Explicó además que ninguna de las personas que compartían vivienda con ella contaba con ingresos provenientes de un trabajo formal. Uno de sus hijos realiza trabajos temporales en estancias vecinas, otro de sus hijos padece una leve discapacidad mental que lo inhabilita a realizar tareas fuera del hogar. En la entrevista realizada con ella, explicó que como madre de seis hijos a cargo del cuidado de todos ellos y también debido a las dificultades de empleo femenino en su lugar de residencia, ella nunca había accedido a un empleo formal. A cargo de tareas de subsistencia para el autoconsumo, ella explicó que, desde que sus hijos eran mayores

de edad, su exmarido no le brindaba ningún apoyo económico y que ella había pasado a depender completamente de los aportes de los ingresos de sus hijos, que le enviaban remesas desde afuera o dentro del país. También explicó que debido a limitaciones físicas que había ido adquiriendo con el paso del tiempo, su situación de dependencia fue acentuándose a medida que ella ha debido limitar la posibilidad de realización de otras labores de subsistencia. Además, el uso y significado de las remesas ha ido cambiando para ella y los hijos que las envían. Una de sus hijas enviaba dinero para ayudarla a realizar mejoras en la casa, pero además era una forma de apoyarla a pesar de no poder estar cerca de ella para acompañarla durante la vejez. Este tipo de acciones cumplen una función que va más allá del apoyo económico y que representa, en el sentido que fue explorado por otros investigadores en otros contextos, un apoyo simbólico y afectivo para suplir aquellos cuidados que no pueden darse frente a la ausencia física del hijo o la hija migrante (Krzyżowski y Mucha, 2014).

La reflexión anterior no debería llevar a idealizar las condiciones a las que en ocasiones vienen sujetas estas remesas. El dinero que típicamente se obtiene a través de actividades productivas pareciera jerarquizar fuertemente las relaciones al interior de las familias. En el mismo sentido que Stolen (2004), identifica en su trabajo de campo que aquellas tareas realizadas por las mujeres son “ayuda”, y aquellas realizadas por los hombres son “trabajo”, y las tareas por las cuales una mujer ha conseguido dinero parecieran ser más valoradas que aquellas tareas de trabajo realizadas en el ámbito doméstico. También, en un modo similar al explorado por Pedone (2006), quien envía dinero tiene gran impacto en la toma de decisiones al interior de la familia.

Betty, una mujer migrante residente en Argentina, con varios hermanos en uno y otro lado de la frontera, explicó estar en desacuerdo con las responsabilidades de cuidado que algunos de sus hermanos le delegan a su madre a cambio de una remesa. En una de las entrevistas a Betty, ella manifestó estar particularmente enojada con una de sus hermanas que había migrado y le había dejado un bebé a su cuidado. Ahora volvía a estar embarazada y pretendía dejarle otro. Desde la perspectiva de Betty, su madre estaba a cargo del cuidado de demasiados niños y adolescentes. Betty explicó que las hermanas que enviaban dinero para estas tareas de cuidado no dejaban a su madre decidir ni disponer del

dinero de forma autónoma. La contraprestación enviada, por otro lado, no era una real remuneración por el trabajo realizado. Además, Betty consideraba que su madre no podía moverse libremente ni cumplir su anhelo de visitar a otros hijos dentro y fuera del país debido a las exigencias de aquellas hermanas que le enviaban dinero. Por último, ella consideraba que algunos de sus hermanos se habían aprovechado de su madre y ahora que no la necesitaban, no la atendían.

Una, mi hermana la que vive acá, le llevó 4 hijos. [...] Otro, mi hermano que se separó, le dejó los dos hijos a mi mamá y también se fue para España, pero ahora está por Asunción otra vez. [...] Yo a veces ya le digo, vos tenés que vivir la vida, pero como están ahí... A veces cuando viene [a Buenos Aires], se quiere quedar más tiempo. Pero después se preocupa por los de allá. La otra vez vino un mes y me dijo que se quería quedar más tiempo, pero como tiene a mi sobrina y eso, no puede quedarse mucho tiempo. Tampoco mi hermana de allá le deja. Entonces muchas veces ahí está el problema conmigo, que no viene a quedarse mucho tiempo. Porque ella la quiere más ahí para que le atienda a sus hijos. Muchas veces por eso tenemos ahí el problema con mis hermanas. Mi mamá ya es grande y ya no tiene que estar ahí cuidando a los nietos. [...] Mi mamá crió 10 hijos, más nietos, para mí que ya está en la edad de disfrutar lo que hizo. Yo a veces tengo problema por eso con mis hermanos. Por ejemplo, Nancy, ella quiere que esté mi mamá pendiente de la casa que [está] mandando a arreglar. [...] Ella a veces quiere salir y no puede. Quiere venir, junto a mí [a Buenos Aires] o donde está mi hermana, la que vive en Ciudad del Este, y no puede. Ahora porque tiene uno de dos años; antes estaban los cuatro hijos de mi hermana que nunca le dejaban salir. Ella dice: yo estoy acá todo el día, no tengo sueldo, no tengo nada. Porque mi hermana Nimia [la que vive en España] manda, pero para los gastos de la casa. No le queda nada extra porque siempre manda justo y tenemos problemas por eso [mi hermana y yo]. Además, a veces mi hermana le echa en cara que le manda plata... El tema es que mandan plata, pero para lo justo. Esto es para esto, esto es para aquello. Y ya no le sobra, ponle, para un viático. Y mi mamá quiere ir a Asunción, ahí tiene sus hermanos. Ella quiere ir, pero muchas veces no puede porque no le alcanza la plata que le mandan. [...] Y Alcides [mi hermano] es otro sinvergüenza, digamos, porque mi mamá le crió los dos hijos y se separó y casi nunca está ahí... (Betty, comunicación personal, octubre de 2014)

Entonces, se presentan algunas dinámicas interesantes entre las mujeres que envían dinero a otras mujeres que están a cargo del cuidado de algún adulto mayor. Estas dinámicas perpetúan modos de valoración dicotómica del orden público y privado, siendo más importante el trabajo realizado en el orden público y productivo, donde las tareas reciben un valor económico, que aquellas realizadas en el ámbito

privado y no consideradas como trabajo. Paradójicamente para el caso de muchas mujeres paraguayas que envían dinero a sus familias de origen, estas tareas son las mismas que realizan sus hermanas allá en el campo, solo que la obtención de dinero por parte de las que migran las sitúa en un peldaño superior en la escala familiar. La mujer migrante adquiere un mayor estatus al interior del hogar que la persona (casi siempre mujer) que se queda en el lugar de origen.

Ahora bien, las remesas económicas no son el único modo a través del cual se pueden remediar los ambientes de pobreza de las familias. Las remesas sociales también pueden tener un rol fundamental. Los denominados espacios transnacionales son atravesados por movimientos de ideas, conductas y capital social, lo que puede resultar beneficioso tanto para migrantes como para no migrantes (Levitt, 2001). En el caso de esta investigación en particular, los flujos en términos de servicios y conocimientos sanitarios resultaron particularmente importantes, sobre todo si se les contrasta con casos en que las familias y sus adultos mayores no cuentan con otros servicios más que los circunscritos al territorio paraguayo.

Los datos de la EPH 2016 indican que aproximadamente la mitad de adultos mayores de zonas rurales se atendió por última vez en un hospital o centro de salud del Ministerio. Otros destinos escogidos por la población de este tipo son los puestos de salud del Ministerio (casi el 15 %), los consultorios privados (13,3 %) y los servicios provistos por el Instituto de Previsión Social (IPS) (10,6 %).

Para las familias que habitan en poblados fuera del casco metropolitano de Asunción, escasean insumos sanitarios y médicos, además de que la variedad de especialidades es limitada. Cuando es posible, estas deciden viajar directamente a Asunción en busca de diagnósticos específicos o tratamientos especializados. Así lo indica también el testimonio de Elba, adulta mayor de 77 años que reside en Villa del Rosario: “Hay hospitales, pero no hay médicos, tampoco medicamentos: cuando hay, me dan” (Elba, comunicación personal, julio de 2016). Sobre este aspecto, hay que agregar también la situación de desamparo y abandono que enfrentan muchas de estas familias frente a una eventual emergencia y la necesidad de transportarse a un hospital. Las ambulancias no llegan a estas localidades, por lo cual aquellas personas que no disponen de vehículos propios dependen de los vehículos de sus vecinos.

Respecto a la posibilidad de atención en servicios provistos por el IPS, en varios casos los adultos mayores acceden a estos a través de sus hijos registrados en trabajos formales y haciendo aportes a dicha institución. Este dato es importante porque muestra también los recursos diferenciados a los que pueden acceder las personas que residen en el país. Tal fue el caso de tres de las adultas mayores entrevistadas para esta investigación, quienes contaban con la posibilidad de acceder al IPS a través de los aportes realizados por sus hijos.

Los adultos mayores con hijos migrantes en Argentina cuentan con la posibilidad de acceder a servicios sanitarios del otro lado de la frontera. Al respecto, cabe señalar que en Argentina la salud es considerada un derecho que se extiende a todos los habitantes del país, independientemente de su estatus de nacionalidad o residencia. Los servicios públicos no tienen condiciones para el acceso, más allá de las que surgen de sus limitaciones operativas, por lo que cualquier persona residente o no puede acceder a las prestaciones asistenciales del sector público. Las evidencias recogidas demuestran que para algunos puede resultar una mejor opción viajar a Argentina y hospedarse con familiares que allí residen para realizar una consulta médica que trasladarse a Asunción, por ejemplo, donde también deben cubrir costos de hospedaje y atención. Además, y para el caso de cuidado de adultos mayores, los hijos que residen en Argentina sienten el orgullo de poder costear los desplazamientos de sus padres y la satisfacción de “sacrificarse por ellos” a modo de retribución. A continuación, se incluyen algunos testimonios que dan cuenta de la relación que tienen muchos paraguayos con el sistema de salud argentino, que además pareciera en ocasiones exceder a los vínculos migratorios:

Acá mis compatriotas, gripe tienen y van corriendo a Argentina. Argentina es la solución. Y después critican a los argentinos. (Isabel, comunicación personal, julio de 2016)

Hay mucha gente que viene a operarse para cuestiones hospitalarias, sí. Yo tengo una vecina mía que vino a operarse de la cabeza porque le salía mejor. De un tumor de la cabeza y salió bien. Y viene cada seis meses. A hacerse ver. Eso sí. Hay mucha gente que viene a operarse, después está bien y se va de vuelta. (Juana, migrante residente en Argentina, comunicación personal, febrero de 2014)

Las familias con menores recursos activan estrategias que diversifican el riesgo. Además, el escenario del ir y venir se transforma en parte del repertorio de posibilidades con las que cuentan estas familias y que no se limita al momento del envejecimiento únicamente. La posibilidad de costear este tipo de viajes de un miembro de la familia —y no únicamente el de los adultos mayores— es un recurso que excede la disponibilidad de recursos monetarios necesarios para el transporte, los costos de atención (ya que muchas veces pagan por servicios médicos), los estudios o los medicamentos. Esto incluye el conocimiento de los recursos y de procesos burocráticos para acceder a la atención o la pertenencia a redes para el acceso a insumos. Estas estrategias constituyen un capital social que excede la cuestión monetaria relacionada con la capacidad de costear un viaje a Argentina: posibilitan al mismo tiempo el desarrollo de saberes en relación con cuidados sanitarios no solo para los adultos mayores que hacen la consulta, sino también para su familia cercana. Este es un valor relevante al considerar que hay adultos mayores en situación de aislamiento que residen en áreas rurales de Paraguay, quienes encuentran limitaciones al momento de comunicarse y trasladarse. Se trata de recursos distintivos con los que cuentan las familias que van y vienen, en el sentido amplio de lo que significa ir y venir, habitando espacios y comunidades transnacionales. Representa una continuidad dentro de cuidados transnacionales de tipo no económicos y que consideramos adecuado denominar en el mismo sentido que lo hace Levitt (2001): remesas sociales.

Entonces, en contextos de agudo aislamiento y donde la presencia estatal es débil, la posibilidad de acceso a la protección social de un segundo Estado se vuelve fundamental. Además, dado que en estos mismos contextos los adultos mayores no cuentan con estructuras sólidas para ejercer tareas de autocuidado, la posibilidad de contar con redes extensas de familiares, incluso vecinos y conocidos en un lado y otro de la frontera, no debe desestimarse.

La práctica de intercambios de favores entre personas ligadas por un sentido de lealtad, reciprocidad o incluso de deuda, puede también cruzar las fronteras nacionales. Por ejemplo, dos de las migrantes entrevistadas hicieron referencia a los favores que recibieron de sus “compadres” o “comadres” en Argentina en virtud del vínculo laboral —por muchos años informal— que mantuvieron con sus empleadores.

Estos favores en algunos casos tuvieron un alcance transnacional: en una oportunidad un empleador colaboró con el pago de estudios médicos para la madre adulta mayor de su empleada, que visitó Argentina con ese motivo. En otro caso, una migrante hizo repetidas referencias a que su expatrona en Argentina era la madrina de su hija, y por ello explicó que no quería pedirle a su “patrona” que la registrara en blanco o le pagara todos los años de aportes que le debía. A su vez, fue interesante en este caso cómo la misma migrante manifestó resistencia a la idea de dejar esa relación de favores y lealtad implícita entre su patrona y ella, pronunciando también frente a la propuesta que le había hecho su nueva empleadora de pagar sus aportes que su preferencia era que no lo hiciera y dejando entrever en cambio una expectativa de que su relación se asentara por fuera de un contrato puramente económico.

Considerando la línea de determinadas críticas que recibieron los estudios transnacionales en relación con una visión “celebratoria”, la transnacionalidad y la migración no tienen la capacidad de modificar la falta de equidad en la que se desarrollan estos intercambios considerados globalmente. De modo similar al expuesto por Skornia (2014) en su investigación, la situación de muchos migrantes y sus familias en relación con el tipo de cuidados a los que acceden está atravesada por una intersección de regímenes que van más allá del migratorio y en este caso particular incluye también regímenes laborales, de seguridad social y de género, de un lado y otro de la frontera.

En relación con el régimen migratorio vigente, desde 2003 en adelante hubo una serie de medidas que favorecieron el contexto institucional y de ciudadanía de los migrantes paraguayos y de otros países en la región. La Ley 25871 del 2003 confirió derechos ciudadanos a personas miembro del Mercosur y en el 2006 se implementó el Programa de Regularización Migratoria Patria Grande. A su vez, a partir del 2013 se establecieron mejoras sustanciales de las condiciones laborales, salariales y contributivas del sector doméstico a través de la Ley 26844 (Esquivel y Pereyra, 2014). Esta transformación es de su suma importancia para muchas de las mujeres migrantes entrevistadas que mayoritariamente trabajan en este sector. Aunque muchas de ellas no se verán inmediatamente beneficiadas por estos cambios, es indudable que el cambio en el marco legal, así como también su gradual implementación, tenderá a favorecer su acceso a una seguridad social

acorde al trabajo realizado en el mediano y largo plazo. Así, estas políticas reducen la vulnerabilidad de los migrantes (Rossi y Canevaro, 2017) y, de forma indirecta, la de sus familias en el origen.

En este contexto, tal como examinamos en un trabajo afín (Merenson y Pena, 2017), las prácticas transnacionales favorecidas por la legislación posibilitan una mejora de la calidad de vida de los adultos mayores. En este sentido, los adultos mayores que se encuentran en una situación equiparable, pero que no tienen hijos migrantes o contacto fluido con ellos, presentan mayores carencias en cuanto a la posibilidad de acceder a prestaciones de salud adecuadas, lo que habitualmente conlleva un aceleramiento en la presentación de discapacidades o propicia el desarrollo de situaciones de gran dependencia. Esta observación no implica que no haya costos en la condición material y de otros capitales de quienes migran y sostienen el vínculo con sus familiares inmediatos: estos procesos sufren continuos desafíos debido a la vulnerabilidad social que presenta la mayor parte de los paraguayos que migraron a Argentina.

En primer lugar, existe una situación paradójica para quienes migraron, atravesaron la vejez de sus padres y ahora comienzan a necesitar una jubilación propia debido al escaso desarrollo de políticas que garanticen la portabilidad a otros países de este tipo de derechos. Por una parte, quienes hayan aportado al sistema previsional argentino tienen el temor de que ese derecho jubilatorio no se vea amparado si retornan a Paraguay. Por otra, quienes aún no iniciaron el trámite jubilatorio temen que las frecuentes mutaciones de la situación política argentina perjudiquen sus posibilidades de acceder a la seguridad social, principalmente cuando no hayan realizado aportes de modo formal (Merenson y Pena, 2017). Estos son dos testimonios que evidencian esas inseguridades³:

Yo tengo una compañera de edad que va todos los meses a cobrar. Guapa todavía. Pero ahora hay mucha observación de la gente que vive acá y va a allá. [...] Y lo más probable es que le van a sacar a todos. Eso es lo que me estaba diciendo una señora del Alto Paraná. Que está muy difícil ahora. Porque ahora chequean la entrada y salida del país. Entonces la gente viaja 15 días antes de cobrar para que no piense que no vive ahí. Porque algunos piensan que la pierden si no viven ahí. Mi amiga trabajó allá toda la vida. Vino de grande, cuando su marido

3 Estos testimonios ya fueron incluidos en la publicación de Merenson y Pena (2017).

falleció. Vive acá en una casita con sus hijos e hijas. Ella lo que me decía es que es muy difícil la gestión allá. Además, está en peligro... (Alicia, 50 años, comunicación personal, septiembre de 2017)

Viví 20 años en Argentina... Trabajé de todo en Argentina. Menos mal, no robé. Fui empleada doméstica, trabajé en lugares de comida rápida. [...] Muchas veces, cuando las mujeres migramos a Argentina es porque no podemos con nuestros hijos y nuestros padres. [...] Yo a Argentina no le debo nada ni ellos me deben a mí. [...] Todos me dicen que tengo que hacer la cédula allá. Tengo hijos allá. Aunque tenés que tener contactos... Yo ahora ya no tengo a mi mamá. Estoy preocupada por mí. (Kelly, 65 años, comunicación personal, julio de 2015)

Es decir que, aunque la posición de Argentina sea mejor respecto a las posibilidades de acceso a salud, trabajo y jubilación en relación con Paraguay, algunos de los migrantes que residen o han residido en Argentina dejan entrever su inseguridad respecto al acceso a la seguridad social en cualquiera de los dos países (Merenson y Pena, 2017).

En segundo lugar, un interrogante que reviste especial interés para los estudios transnacionales que se han caracterizado por una mayor acumulación teórica dedicada a analizar los impactos en la vida de los migrantes entre países Norte-Sur es cómo estos beneficios se presentan en procesos migratorios que se dan entre países Sur-Sur. Teniendo en cuenta que las distancias simbólicas y estructurales que se presentan en países Sur-Sur son con frecuencia menos abismales (Merenson y Pena, 2017), cabe entonces preguntarse también sobre la real magnitud del beneficio de la migración para las personas de origen paraguayo y sus respectivas familias. El modo de inserción de Argentina en la economía global, su mayor volatilidad y fragilidad económica e institucional sin lugar a duda plantean desafíos más profundos para sus comunidades migrantes y los derechos adquiridos. En este sentido y tal como plantean Rodríguez y Zaracho (2016), medidas de corte liberal y de pronunciada retracción del gasto público en Argentina tienen un fuerte impacto en las condiciones de vida de los migrantes. De alguna forma, los cambios políticos que atravesó Argentina en los últimos tiempos, con claras alusiones y medidas a un cambio de mirada respecto a la migración como un derecho humano, ponen de manifiesto la vulnerabilidad que atraviesan los migrantes y sus familias en un lugar y otro.

Reflexiones finales

El modelo de cuidados que sostiene a las familias paraguayas de residencia rural está en crisis por las transformaciones relacionadas con las circunstancias de vida en los ámbitos rurales, cambios en el tamaño de las familias y diversidad de variables que van más allá de la migración en sí. Las condiciones a través de las cuales las familias organizan los cuidados de sus adultos mayores en sus propias viviendas están desprovistas de apoyos estatales mínimos. La ausencia de estructuras estatales repercute con más fuerza en la calidad de vida de las mujeres de las familias que por una variedad de motivos y, tal como se evidenció en la presente investigación, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y sobrecarga.

Por otro lado, son escasas o casi nulas las alternativas de cuidado de adultos mayores disponibles fuera del ámbito familiar. Las residencias colectivas existentes surgen y permanecen funcionando con altos niveles de voluntarismo, pero también de improvisación, donde la acción estatal se asoma tímidamente y sin una verdadera planificación. Su heterogeneidad y modo de funcionamiento disparan múltiples preguntas con relación a su potencialidad: ¿serán instituciones que operarán con lógicas más cercanas a las que operan en el mercado —cuotas para quienes ingresan— o se convertirán gradualmente en conquistas de espacios públicos para el cuidado de adultos mayores?

Frente a este contexto de alternativas de cuidados deficitarios para la población adulta mayor, las familias con hijos migrantes en Argentina parecieran ofrecer *a priori* discursos diferenciados para afrontar el cuidado de dicha población. Aquellas familias que mantienen lazos fuertes a la distancia y se mantienen unidas de forma fluida —familias transnacionales— presentan mejores oportunidades para satisfacer necesidades y cuidados básicos de sus adultos mayores.

En aquellos casos en que los hijos que migran mantienen lazos económicos y afectivos con sus padres, los aportes que ellos hacen a su bienestar son variados y significativos. Los datos cualitativos evidencian las múltiples formas en que el acceso a recursos monetarios adicionales —en muchos casos, provenientes del envío de remesas— pueden contribuir a la realización de mejoras en la calidad de las viviendas, aspecto fundamental para la dimensión de los cuidados. Además, la

vida transnacional permite a las familias moverse con mayor fluidez y mitigar riesgos frente a sucesos inesperados o coyunturas económicas desfavorables.

Entre los recursos diferenciados a los que acceden los adultos mayores pertenecientes a familias transnacionales —remesas económicas y sociales— se destaca la posibilidad de acceso a derechos en otro Estado nación en relación con la salud y la jubilación, así como también ciertos indicios de nuevos modos de posicionamiento de los ciudadanos hacia el Estado. Entonces, tal como demuestran Baldassar y Merla (2014) en investigaciones afines, lejos de presentarse como situaciones ideales o de simetría entre los diferentes familiares, la circulación de capitales sociales dentro de las familias transnacionales puede a menudo resultar beneficiosa.

A pesar de que la migración en sí no puede interpretarse como motor de cambio ineludible, esta facilita ciertas mejoras económicas además de algunos intercambios que trascienden la esfera económica y que están relacionados con otro tipo de capitales fundamentales para la calidad de vida de los diferentes miembros de las familias. Estos cambios son particularmente notables en áreas de residencia rurales donde persisten estilos de vida tradicionales y donde los adultos mayores y demás familiares padecen mayores niveles de aislamiento.

Ahora bien, esto no significa que las prácticas transnacionales no traigan aparejadas con ellas una variedad de desafíos. En el caso concreto de las remesas económicas de las cuales dependen muchos adultos mayores para su subsistencia, las mismas están a menudo sujetas a condicionamientos por parte de los familiares que las envían, lo cual reduce la autonomía y poder de decisión de los adultos mayores. Al mismo tiempo, la migración puede ser un recurso adicional que resuelve y mejora la situación de algunas familias a corto y mediano plazo, pero

no ofrece una solución permanente para el conjunto de la sociedad, además de que no todas las familias con miembros migrantes en el exterior mantienen lazos fuertes y entonces, en casos de modelos de cuidados familistas y frente a escasa responsabilidad estatal, la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores puede volverse aún más apremiante.

Por último, en la misma línea de otras investigaciones (Baldassar y Merla, 2014) y teniendo en cuenta que las ausencias físicas son cada vez más frecuentes en el contexto de las familias transnacionales contemporáneas, estas realidades requieren del desarrollo de políticas nacionales y transnacionales a tono. Para la realización de estas últimas se vuelve imprescindible también la mejora del uso de modelos conceptuales existentes y/o el despliegue de herramientas analíticas complementarias que permitan captar con mayor precisión las oportunidades y desafíos que presentan determinados contextos.

Referencias

- Baldassar, L. y Merla, L. (2014). Introduction: Transnational family caregiving through the lens of circulation. En *Transnational families, migration and the circulation of care. Understanding mobility and absence in family life* (p. 304). Nueva York: Routledge.
- Batthyány, K. (2007). *Género y cuidados familiares. ¿Quién se hace cargo del cuidado y la atención de los adultos mayores en Montevideo?* Montevideo, Uruguay: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
- Benítez, G. (2017). *Paraguay: Distribución del gasto en salud y gastos de bolsillo. Principales resultados*. Asunción: CADEP.
- Cerrutti, M. y Parrado, E. (2006). Migración de Paraguay a Argentina: género, trabajo y familia en contextos de origen diferenciados. En Grimson, A. y Jelin, E. (Eds.), *Migraciones regionales a Argentina. Diferencia, desigualdad y ciudadanía*. Buenos Aires: Prometeo.
- Díaz, I., Escobar Carísimo, A. y Domínguez, L. (2013). Residencia de los adultos mayores. Permanecer mientras transcurren los años. En CODEHUPY (Ed.), *Derechos Humanos en Paraguay 2013* (pp. 545-549). Asunción: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.

- DGEEC (Dirección General de Estadísticas, Encuesta y Censos de Paraguay) (2015). *Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbanas y Rural por sexo y edad, 2000 2025, Revisión 2015*. Recuperado de <http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Estimacion%20y%20proyeccion%20Nacional.pdf>. Cuadros recuperados de <http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Cuadros%20anexos%20TP-Urbana-Rural.xlsm>
- DGEEC (Dirección General de Estadísticas, Encuesta y Censos de Paraguay) (2016). *Principales indicadores de empleo. Encuesta Permanente de Hogares 2016*. Recuperado de <http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/eph2016/Boletin-de-pobreza-2016.pdf>
- Esquivel, V., Faur, E. y Jelin E. (Eds.) (2012). *Lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el Estado y el mercado*. Buenos Aires: IDES.
- Esquivel, V. y Pereyra, F. (2014). El servicio doméstico y sus desafíos para la protección social. Protecciones y desprotecciones. En Danani, C. y Hintze, M. (Comps.), *Problemas y debates de la seguridad social en Argentina* (II) (pp. 281310). Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. doi: 10.30972/dpd.45811
- Faur, E. (2014). *El cuidado infantil en el siglo xxi. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual*. Buenos Aires: Siglo xxi.
- Finch, J. y Groves, D. (Eds.) (1983). *A labour of love: Women, work and caring*. Londres: Routledge & Kegan Paul.
- Findling, L. y López, E. (Coords.) (2015). *De cuidados y cuidadoras. Acciones públicas y privadas*. Buenos Aires: Biblos.
- Gaudio, M. (2013). *Migración, familia y maternidad: mujeres paraguayas en Buenos Aires* (tesis de doctorado). IDES, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
- Glick Schiller, N., Basch, L. y Szanton Blanc, C. (1992). Towards a definition of transnationalism. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 645(1).
- Grosman, C. P. (2013). El derecho de los adultos mayores a ser cuidados: perspectiva sociojurídica. En Pautassi, L. y Zibecchi, C. (Coords.), *Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura* (p. 219). Buenos Aires: Biblos.

- Imas, V. (2014). *Ejercicio de derechos de seguridad social de las trabajadoras migrantes del servicio doméstico del Paraguay. Una mirada sobre las condiciones sociolaborales desde la perspectiva de las trabajadoras domésticas migrantes a Argentina*. Asunción: OIT.
- Krzyżowski, Ł. & Mucha, J. (2014). Transnational caregiving in turbulent times: Polish immigrants in Iceland and their elderly parents in Poland. *International Sociology*, 29(1), pp. 22–37. doi: 10.1177/0268580913515287
- Levitt, P. (2001). *The transnational villagers*. Berkeley: University of California Press.
- López, M. (2016, enero-junio). Paraguay: pasado y presente. Una revisión desde la historia política. *Albuquerque: Revista de História*, 8(15), 209-228.
- Martínez Franzoni, J. (2007). *Regímenes de bienestar en América Latina*. Documento de Trabajo Número 11. Madrid: Fundación Carolina CeAICI. Recuperado de <http://www.fundacioncarolina.es>
- Martínez Maldonado, M. L. y Mendoza Núñez, V. M. (2009). El viejismo en la enseñanza de la gerontología y sus repercusiones en las prácticas significantes en docentes y alumnos. En Olivo Vianna, M. G. y Piña Morán, M. (Comps.), *Envejecimiento y cultura en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Universidad Central de Chile.
- Masi, F. y Borda, D. (Eds.) (2011). *Estado y economía en Paraguay 1870-2010*. Asunción: CADEP.
- Merenson, S. y Pena, N. (2017). Estudios transnacionales: perspectivas, categorías y debates en torno a dos casos de estudio en el Cono Sur. En Micha, A. y Pena, N. (Coords.), *Progresismos del siglo XXI: reflexiones desde el Cono Sur*. Buenos Aires: Libros del SIT Study Abroad-IDES.
- Merla, L. (2013). *A macro perspective on transnational families and care circulation: Situating capacity, obligation, and family commitments*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/236021508_A_macro_perspective_on_transnational_families_and_care_circulation_situating_capacity_obligation_and_family_commitments/citation/download

- Morínigo, J. N. (2008, julio-diciembre). Clientelismo y padrinzago en la práctica patrimonialista del gobierno del Paraguay. *Revista Paraguaya de Sociología*, 45(132-133), 203-224.
- Nickson, A. (2010). El régimen de Stroessner (1954-1989). En Telesca, I. (Coord.) *Historia del Paraguay*. Asunción: Taurus.
- OMS (Organización Mundial de la Salud) (2002). Envejecimiento activo: un marco político, *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 37(2), 74-105.
- Paoletti, I. (2007). The intricacy of gender, moral, relational, financial and housing issues. En Paoletti, I. (Ed.), *Family caregiving for older disabled people*. Nueva York: Nova Science Publishers.
- Pautassi, L. (2015). Inaugurando un nuevo escenario: el derecho al cuidado de las personas adultas mayores. *Argumentos. Revista de Crítica Social*, (17).
- Pedone, C. (2006). Relaciones de género en las cadenas familiares ecuatorianas en un contexto de migración internacional. "Tú siempre jalas a los tuyos". *Estrategias migratorias y poder*. Quito: Abya-Yala.
- Peláez, E. y Minoldo S. (2018). Impacto del envejecimiento sobre demanda de servicios en el Cono Sur. *Revista Latinoamericana de Población*, 12(23). doi: 10.31406/h23a4
- Pérez Orozco, A. (2010). *Global care chains. Towards a rights-based care regime?* Santo Domingo: United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW).
- Razavi, S. (2007, junio). The political and social economy of care in a development context: Conceptual issues, research questions and policy options. *Gender and Development Programme, Paper Number 3*. United Nations, Research Institute for Social Development.
- Rodríguez, F y Zaracho, G. (2016). Los y las emigrantes paraguayos y paraguayas en el contexto de políticas migratorias represivas y un aumento de la xenofobia en los principales países receptores. Derechos humanos de las personas migrantes. En *Derechos Humanos - Paraguay 2016* (pp. 459-472). Asunción: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

- Rojas Viñales, A. (2018). Crecimiento, pobreza y protección social en Paraguay. *Población y Desarrollo*, 24(47), 87-102. doi: 10.18004/pdfce/2076-054x/2018.024(47)087-102
- Rossi, E. y Canevaro, S. (2017). Prácticas transnacionales de migrantes peruanas en Buenos Aires: afectos, economía y política. Texto de la ponencia antes de su presentación en el *2017 Congress of the Latin American Studies Association*, Lima, Perú, 29 de abril al 1 de mayo de 2017.
- Salgado de Snyder, V. N. (2003). Envejecimiento, género y pobreza en México rural. En Salgado de Snyder, V. N. y Wong, R. (Eds.), *Envejeciendo en la pobreza. Género, salud y calidad de vida*. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública.
- Skornia, A. K. (2014). *Entangled inequalities in transnational care chains. Practices across the borders of Peru and Italy*. Bielefeld: Transcript.
- Sørensen, N. N. y Guarnizo L. E. (2007). La vida de la familia transnacional a través del Atlántico: la experiencia de la población colombiana y dominicana migrante en Europa. *Puntos de Vista*, (9), 7-28.
- Soto, C., González M. y Dobrée, P. (2012). *La migración femenina paraguaya en las cadenas globales de cuidados en Argentina: transferencias de cuidados y desigualdades de género*. Santo Domingo: ONU Mujeres.
- Stolen, K. A. (2004). *La decencia de la desigualdad. Género y poder en el campo argentino*. Buenos Aires: Paidós.
- Torrado, S. (1995, octubre). Vivir apurado para morir joven. *Sociedad*, (7), 31-56.
- Vega, C., Martínez-Buján J. y Paredes M. (2018). *Cuidado, común y comunidad: experiencias cooperativas en el sostenimiento de la vida*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Zavattiero, C. y Serafini, V. (2016). Envejecimiento, pobreza y desigualdad. Un análisis a partir de la desagregación territorial de la población adulta mayor a nivel departamental. En *Derechos Humanos - Paraguay 2016* (pp. 423-438). Asunción: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

O impacto da segregação ocupacional por gênero e raça na desigualdade de renda no Brasil em três décadas (1986-2015)

The Impact of Occupational Segregation by Gender and Race on Income Gap in Brazil over Three Decades (1986-2015)

Leonardo Souza Silveira

Orcid: 0000-0002-9083-3123

Correo: leosilveira.soc@gmail.com

Universidade Federal de Minas Gerais

Natália Siqueira Leão

Orcid: 0000-0002-7925-3400

Correo: leaosnatalia@gmail.com

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo

O artigo tem como objetivo principal analisar a segregação ocupacional por gênero e raça e seu impacto no diferencial de renda no Brasil entre 1986 e 2015. Para isso, replicamos cinco índices multigrupos desenvolvidos por Del Río e Alonso-Villar (2015) que abarcam medidas globais e locais e permitem a decomposição da desigualdade salarial. Por meio da análise da segregação ao longo do tempo, observamos que processos econômicos, sociais e políticos nesses 29 anos levam a uma estrutura ocupacional e um mercado de trabalho mais igualitário no Brasil. Além disso, também realizamos análises para trabalhadores com ensino superior completo e para as regiões Sul e Sudeste. Os resultados apontam uma queda na segregação ocupacional, principalmente por gênero, apesar das heterogeneidades encontradas por escolaridade e na definição salarial (discriminação).

Palabras-chave

Segregação ocupacional

Gênero

Raça

Mercado de trabalho

Brasil

Índices

Abstract

The main objective of this paper is to analyze the occupational segregation by gender and race, and its impact on the income gap in Brazil between 1986 and 2015. In this sense, we replicated five multigroup indexes developed by Del Río e Alonso-Villar (2015). They present global and local measures that allow to decompose wage inequality. Through the timely segregation analysis, we observed that economic, social and political processes in these 29 years led to equal occupational structure and labor market in Brazil. In addition, we only studied workers who attended higher education, in the South and Southeast regions. Results point out to a decreasing occupational segregation, especially by gender, although heterogeneities by schooling and on wage definition (discrimination) have been found.

Keywords

Occupational segregation
Gender
Race
Labor market
Brazil
Indexes

Recibido: 30/7/2019
Aceptado: 3/1/2020

Introdução

Fatores sociais determinantes na escolha laboral por raça e gênero apresentam grande impacto na estrutura das ocupações dentro do mercado de trabalho brasileiro. Neste artigo investigamos tendências e mudanças da segregação ocupacional no Brasil por grupos de gênero e raça por meio dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE) dos anos de 1986, 1995, 2005 e 2015. Para tal finalidade, em consonância com motivações teóricas, replicamos índices multigrupos desenvolvidos por Del Río e Alonso-Villar (2015)¹, que nos permitem observar (i) a concentração dos grupos; (ii) a diferença salarial decomposta em segregação e discriminação, e (iii) a sua variação temporal.

Além disso, buscando compreender a segregação ocupacional por gênero e raça em níveis mais desagregados, realizamos análises para trabalhadores com ensino superior e para as regiões Sul e Sudeste do país. A escolha desses recortes justifica-se, respectivamente, pela

1 O presente trabalho lança mão de metodologia desenvolvida por Del Río e Alonso-Villar (2015) para analisar questão similar nos Estados Unidos entre 1940 e 2010.

mudança estrutural nos grupos educacionais devido à ampliação do ensino superior no país e pela maior média salarial nas regiões Sul e Sudeste².

Os resultados encontrados refletem processos de ordem econômica, social e política que ocorreram no Brasil entre as décadas de 1980 e 2010. Como grande parte do mundo desenvolvido e em desenvolvimento, o mercado de trabalho brasileiro passou por transformações, como a diminuição dos setores primários e secundários e o aumento do setor terciário desde a década de 1970, conformando uma nova demanda laboral (Kon, 2006). Concomitantemente, houve transformações por parte da oferta, com o aumento da participação das mulheres na força de trabalho (Costa Ribeiro & Machado, 2018) e o aumento médio da escolaridade (Alves de Brito, 2017).

Desse modo, a análise da segregação ocupacional mede a forma como processos econômicos, políticos e sociais impactam a estrutura produtiva por raça e gênero. Observa-se se a expansão do setor terciário foi favorável à inserção das mulheres, ou se foi apenas uma “expansão segregada”, em que elas foram incorporadas em setores distintos dos homens. Além disso, é possível observar se a expansão do ensino superior tem levado a um mercado de trabalho mais igualitário, seja por gênero, seja por raça.

Portanto, busca-se sublinhar e mensurar os efeitos para brancos/as e negros/as, de maneira combinada, comparando um intervalo de 29 anos. Por meio da segregação e da discriminação, os indivíduos são analisados com base na distribuição desigual da estrutura ocupacional. Diante das indagações levantadas, articulou-se os achados dos estudos de gênero aos estudos de relações raciais. Charles e Grusky (2004) demonstram que países que apresentam maior igualdade de gênero continuam a ter altos níveis de segregação ocupacional por gênero e, assim, salientam a relevância da realização de estudos com medidas apropriadas para explicar a distinção horizontal existente na segregação ocupacional. Pautados por esse objetivo, buscamos neste artigo

2 A região Centro-Oeste também apresenta alta média salarial comparada às outras regiões do Brasil. Contudo, optamos por não incluí-la na análise devido à alta variação salarial entre os estados que a compõem, problema que não ocorre nas regiões Sul e Sudeste. Vale ressaltar, ainda, que em 2016 os sete estados das regiões Sudeste e Sul do Brasil representavam juntos 70 % do PIB nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), indicando um recorte economicamente mais dinâmico que o restante do país.

descrever e salientar os mecanismos por meio dos quais se dá a segregação ocupacional e estimar seu impacto na desigualdade salarial entre os anos de 1986 a 2015 no Brasil.

O artigo divide-se em quatro seções, além desta introdução. Na primeira seção apresentamos um esforço de discussão teórica, introduzindo as justificativas do estudo, situando o Brasil dentro de uma perspectiva regional e global. Na segunda apresentamos os dados e a construção dos índices desenvolvidos por Del Río e Alonso-Villar (2015), que foram analisados na terceira seção, dedicada à apresentação de resultados. Na quarta e última seção, discutimos os resultados encontrados com base na abordagem teórica aqui utilizada e apresentamos a conclusão.

Retrato da segregação ocupacional por gênero e raça no Brasil

No presente estudo, analisamos as mudanças na estrutura ocupacional brasileira entre 1986 e 2015 e como elas alteraram a inserção e a recompensa salarial por gênero e raça. Nesta seção, elencamos a importância de estudos sobre a estrutura ocupacional de sociedades contemporâneas, a relevância e as implicações do estudo de gênero e raça no mercado de trabalho, e identificamos o contexto social e econômico no qual esta análise se insere.

O estudo da estrutura ocupacional é basilar para a sociologia e a economia na modernidade. Desde os clássicos estudos de Marx e Engels e de Weber até as mais recentes categorizações socio-ocupacionais (Blau & Duncan, 1967; Ganzeboom & De Graaf, 1984; Erikson & Goldthorpe, 1992; Wright, 2005), buscou-se retratar como as sociedades modernas permanecem imbricadas em formas de reprodução de desigualdades, embora mais fluidas que as presentes em sociedades pré-capitalistas. De maneira geral, demonstrou-se que o aumento da complexidade da sociedade e da economia não deixou de correlacionar posições no mercado de trabalho a poder, prestígio, chances de vida, recompensas salariais, dentre outros (Charles & Grusky, 2005; Costa Ribeiro, 2007, 2017; Hirata, 2009).

Contudo, estudos sobre mobilidade social (Costa Ribeiro, 2007; Erikson & Goldthorpe, 1992) desvelaram que o status socioeconômico não é somente resultado de esforços individuais, sendo afetado também por

características de origem. A posição ocupacional alcançada pelo indivíduo é associada à classe de seus pais, bem como outras variáveis da chamada “origem socioeconômica” como nacionalidade, status migratório (Piore, 1979), gênero e raça. Esses efeitos de origem podem ser observados no mercado de trabalho, onde grupos de raça e gênero se concentram em determinadas ocupações.

A segregação ocupacional por gênero é dada por uma conformação de fatores que levam à distribuição desigual entre mulheres e homens na estrutura laboral. A socialização tende a atribuir aos indivíduos desde a infância papéis “de homens” e “de mulheres” que vão sendo reforçados durante todo o ciclo de vida (Hirata & Kergoat, 2007). Ainda, mulheres são vistas como mais aptas para determinadas funções que para outras, como se houvesse pré-disposições naturais, processo chamado pela literatura de “essencialismo de gênero” (Charles & Grusky, 2004). Dessa maneira, forma-se um ciclo vicioso no qual as mulheres optam mais frequentemente por determinadas carreiras —nas áreas de saúde, cuidado, docência infantil, etc.— que por outras, bem como são mais bem recebidas por contratantes em funções “de mulher” do que naquelas entendidas como “de homem”.

A teoria clássica sobre segregação ocupacional por gênero recai sobre escolhas ocupacionais específicas pelos grupos no mercado de trabalho (Becker, 1957). Tais abordagens apontam, por exemplo, que mulheres com filhos tendem a escolher empregos *mother-friendly*, com jornadas de trabalho menores e menos exposição a riscos. Contudo, não há evidências empíricas suficientes que corroborem essa hipótese (England, 2008; Reskin & Debra, 2000). Estudo recente sobre fecundidade no Brasil demonstrou que mulheres com filhos de até um ano de idade tendem a estar mais fora do mercado de trabalho do que mulheres com filhos mais velhos. Além disso, apesar de a taxa de fecundidade ter apresentado forte queda na década de 2010 para todos os grupos de mulheres, as negras ainda apresentam as maiores taxas de fecundidade recente (filhos menores de um ano de idade), o que pode impactar sua permanência no mercado de trabalho (Cavenaghi & Berquó, 2014). Aqui, se pressupõe que existam preferências de trabalho relacionadas especificamente ao gênero e/ou à raça que levariam a diferentes escolhas ocupacionais.

Os padrões de segregação podem ser exemplificados pela sobrerrepresentação de mulheres em ocupações tipicamente femininas, quais sejam profissionais assalariados (*white-collar*)³ e, principalmente, o setor de cuidados e reprodução da vida (*pink-collar*)⁴. Ambos apresentaram considerável crescimento nas economias pós-industriais, um viés que se atribui principalmente ao “essencialismo de gênero”. Outro exemplo é a sub-representação de mulheres em empregos mais valorizados socialmente, com altas recompensas e remunerações. Essa forma de desigualdade é enfrentada pelo igualitarismo de gênero, e apresenta seus maiores efeitos sobre as ocupações de trabalhadores manuais e profissionais (Charles & Grusky, 2005).

A raça tem importante papel no cenário de desigualdades de gênero. Mulheres negras, assim como homens negros, possuem menor qualificação além de sofrerem com a discriminação por gênero, a qual também incide sobre mulheres brancas (Soares, 2000). Ao analisar os quatro grupos —homens negros, homens brancos, mulheres negras, mulheres brancas— Soares (2000) decompôs as fontes do diferencial salarial, e demonstrou como elas atuam sobre cada um deles. Segundo o autor, a definição salarial de um indivíduo decorre de três fatores: formação, inserção e definição salarial. A diferença salarial dos homens negros com relação aos homens brancos se deve aos dois primeiros fatores, ou seja, menor escolaridade e inserção em ocupações de menor prestígio, principalmente manuais. Para as mulheres brancas, pesam os dois últimos fatores, dado que elas se encontram em ocupações intermediárias e, mesmo com maior escolaridade e ocupando os mesmos cargos, recebem menos. Por fim, as mulheres negras sofrem com os três aspectos. Com relação aos homens brancos, em 1987, homens negros recebiam 11% a menos devido à discriminação, sendo que esse valor era de 37% para as mulheres brancas, e 48% para as mulheres negras. Em 1998, esses valores passam para 15%, 29% e 39% (Soares, 2000).

3 Trabalhadores de colarinho branco são geralmente os que trabalham em escritórios, gabinetes, gerenciamento ou administração.

4 Colarinho rosa é um termo normalmente usado para descrever mulheres trabalhadoras do setor de serviços, como babás, esteticistas, floriculturistas, domésticas, recepcionistas, secretárias, garçonetes, massagistas, enfermeiras, professoras, entre outras.

A segregação ocupacional por gênero e raça passa por transformações causadas por processos políticos e macroeconômicos. No período analisado neste artigo, entre 1986 e 2015, o Brasil perpassa por diferentes ciclos, como crises contínuas ao longo da década de 1980, expansão do Estado de bem-estar social e o chamado “milagrinho” nos anos 1990 e 2000 (Carvalho, 2018), até o período recessivo em meados dos anos 2010.

Nos anos 1970, a economia mundial sofre uma forte transformação com a reestruturação produtiva, que influencia a estrutura e o mercado de trabalho nas décadas seguintes. Segundo Kon (2006), essa tendência expressa-se em uma queda nas ocupações agrícolas, na expansão do setor de serviços, e na transformação do setor industrial por meio da substituição do modo de produção fordista pelo toyotista. No Brasil, isso se expressa com o aumento do setor terciário, que passa de aproximadamente 40% do total de ocupações em 1970 para mais de 60% em 2005. O autor demonstra, ainda, que entre 1990 e 2005 grupos ocupacionais técnicos, de construção e comércio aumentaram enquanto diminuíram os grupos de administração, agropecuária, transportes e comunicação (Kon, 2006). Regionalmente, no entanto, não é possível identificar tendências diferenciais para as transformações produtivas.

Essas alterações de ordem macroeconômica levaram a transformações recentes da estrutura ocupacional. Carvalhaes, Barbosa, Souza e Ribeiro (2014) demonstram que entre 2002 e 2012 houve queda na desigualdade de retorno salarial no Brasil devido a mudanças entre e intraocupações. Por um lado, em termos salariais, as ocupações se tornaram menos desiguais, de maneira que a distância se tornou menor. Por outro lado, houve também uma redução nas desigualdades internas às ocupações; isto é, ao estar em uma mesma ocupação, reduziu-se a diferença salarial entre aqueles mais bem pagos, e aqueles que recebiam menos (Carvalhaes et al., 2014). Isso é, em partes, semelhante ao ocorrido no México até a década de 1990, onde a queda no coeficiente de Gini se deu, principalmente, devido às alterações na estrutura laboral do país (Cortés, 2003).

Sendo assim, as mudanças decorrentes do perfil da demanda possuem destaque, embora também haja mudanças na oferta da mão-de-obra no mercado de trabalho brasileiro. A partir dos anos 1990, teve início no Brasil uma expansão do ensino superior que elevou o número de matrículas de 1,5 milhão em 1995 para 6,5 milhões em 2015 (INEP, 1995, 2015).

Além do aumento na oferta de trabalhadores com maior qualificação, reduziu-se a sub-representação por raça e classe no ensino superior (Alves de Brito, 2017; Costa Ribeiro, 2016; Marteleto, Marschner, & Carvalhaes, 2016). Outro ponto que merece atenção é o aumento da População em Idade Ativa acompanhado da queda na Razão de Dependência, fenômeno que tem sido observado no país desde o início dos anos 2000 e que tem seu ápice previsto para a década de 2030 (Alves, Vasconcelos, & De Carvalho, 2010; Lima, Tomás, & Queiroz, 2015).

O artigo, portanto, debruça-se sobre a segregação e as recompensas dos grupos de gênero e raça no mercado de trabalho brasileiro. A partir da análise realizada, buscamos responder se o mercado de trabalho se tornou um ambiente mais igualitário nas últimas três décadas, e se as mudanças políticas, econômicas e sociais revelaram uma diminuição nas disparidades ocupacionais e salariais.

O índice e os dados

A análise dos dados sobre a estrutura ocupacional brasileira por gênero e raça foi feita com base em dados de quatro anos da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD): 1986, 1995, 2005 e 2015. Por meio delas, pode-se ter um panorama da segregação ocupacional no Brasil em três décadas. A pesquisa, realizada pelo IBGE, teve mudanças ao longo do tempo. Como exemplo, podemos citar sua representatividade: só a partir de 2004 a amostra passou a contemplar todo o território nacional (Barbosa, 2014). Por conta disso, a análise foi feita para todas as regiões, com exceção de áreas rurais do Norte, conforme a representatividade do ano de 1986.

A estrutura ocupacional foi analisada por meio das categorias da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que possui variações ao longo dos anos contemplando 347 ocupações em 1986, 372 em 1995, 482 em 2005 e 479 em 2015. Tais variações, no entanto, não refletem grandes oscilações nos resultados finais, uma vez que o objetivo dos índices aplicados é analisar a heterogeneidade interna a cada grupo ocupacional por raça e gênero⁵.

5 Além disso, convém destacar que no artigo de referência (Del Río & Alonso-Villar, 2015), as autoras também lidaram com oscilações no número de ocupações entre 1940 e 2010 (mínimo de 269 e máximo de 389). Outro ponto relevante é que testamos os índices com outras classificações, como o ISCO (Classificação Internacional de Ocupações) e o EGP, de apenas 11 categorias. De maneira geral, todas as variações são sensíveis aos índices. Por outro lado, optamos por permanecer com a CBO, uma vez que quanto maior o número de grupos,

Juntamente às variáveis de raça, gênero e ocupação, há, ainda, a renda horária (rendimento do trabalho principal dividido pelo número de horas trabalhadas e multiplicado por 44), que serve de medida para analisar o retorno salarial para cada uma dessas categorias⁶. Por meio dela, é possível responder em que medida as diferenças salariais se devem à segregação ocupacional, e em que medida indivíduos de grupos raciais e de gênero recebem a mais ou a menos mesmo estando na mesma ocupação (o que indica a discriminação). A variável gênero é dividida entre homens e mulheres, conforme a PNAD, e a variável raça foi agrupada em brancos e negros (pretos e pardos), sendo excluídas as demais.

As análises foram realizadas em três etapas: a primeira contempla todos os adultos entre 25 e 55 anos no mercado de trabalho brasileiro; em um segundo momento, realizamos uma análise restrita aos indivíduos com ensino superior, buscando comparar apenas aqueles com nível de escolaridade similar; por fim, analisamos somente as regiões Sul e Sudeste, de maneira a responder se os resultados têm variações regionais. Uma vez que não se trata de uma análise multivariada, tais recortes permitem “controlar” a influência da escolaridade e das diferenças regionais nos resultados.

Com essas informações, foram gerados índices para a análise da concentração dos grupos de raça e gênero dentro das ocupações, e o ganho salarial médio de cada um desses grupos. O uso de índices descritivos promove ganhos e perdas devido ao mesmo motivo: sua simplicidade. Isto é, por meio de índices, é possível produzir informações objetivas e comparáveis para fenômenos difusos. Com poucos indicadores, pode-se afirmar se processos de segregação estão sendo intensificados ou reduzidos com o passar do tempo. Como perdas, pode-se indicar o fato de que não se trata de análises multivariadas, controladas por covariáveis observadas.

O índice em questão foi desenvolvido por Del Río e Alonso-Villar (2015), chamado pelas autoras de medidas de segregação local (*Local Segregation Measures*). Trata-se de um índice de segregação que pode ser decomposto para subgrupos sociais; por isso é chamado de local.

6 O rendimento do trabalho principal utilizado não foi deflacionado, uma vez que se trata de uma medida comparativa em determinado ponto do tempo.

Em comparação aos índices mais usuais na literatura sociológica e econômica, como o Índice de Dissimilaridade, destacamos três diferenças: (i) é um índice multigrupo, que abarca a inserção de uma grande quantidade de clivagens, especialmente as étnico-raciais. Outros índices permitem a comparação apenas entre dois grupos, restringindo as possibilidades ou exigindo a estimação de vários cálculos⁷; (ii) além do fato de ser multigrupo, ele parte do nível global —aponta o quanto aquela população é segregada— para um nível “local”, podendo indicar o quanto cada subgrupo “contribui” para a o índice geral, e (iii) permite mensurar os ganhos e perdas salariais de cada grupo por meio do índice *Egap*, que ainda mede quanto da diferença salarial se deve a variações entre e intraocupações —isto é, ele delimita se a renda média de cada grupo se deve ao nível de renda das ocupações em que os indivíduos se encontram ou à discriminação contra eles.

O índice é elaborado em cinco etapas. Nas três primeiras, mede-se a segregação, havendo uma medida global que permite a comparação entre diferentes recortes sociais, temporais ou espaciais. As duas últimas medidas decompõem a diferença salarial dos grupos, considerando as distribuições em ocupações segundo seus retornos salariais.

Medidas de segregação. O primeiro índice elaborado por Del Río e Alonso-Villar (2015) reflete um valor local para toda a estrutura ocupacional analisada. Levando em consideração a concentração e/ou dispersão de cada um dos grupos, o índice serve de comparação da segregação entre os anos analisados, e se dá pela seguinte equação:

$$\Phi_1^g(c; t) = \sum_j \frac{c_j^g}{C^g} \ln \left(\frac{\frac{c_j^g}{C^g}}{\frac{t_j}{T}} \right) \quad (1)$$

onde, e daqui em diante, c_j^g representa a quantidade de indivíduos de cada grupo g em cada ocupação t , ao passo que C^g é o total de indivíduos do grupo g na amostra. Além disso, T representa o total de observações na amostra. O índice Φ varia entre 0 e máximo $\ln(T)$, e é interpretado como a quantificação da segregação de cada grupo.

7 No estudo original, são incorporados oito grupos: negros, latinos, asiáticos e brancos, divididos entre homens e mulheres (Del Río & Alonso-Villar, 2015).

Na etapa posterior, trata-se de um índice global que, além de permitir uma análise da estrutura como um todo, é utilizado na elaboração do terceiro índice. A estatística M utiliza-se das medidas Φ de cada grupo g e, como a maioria dos índices binários, quanto mais baixo, menor a segregação daquela população, sendo 0 o valor que indica total igualdade na distribuição populacional nas ocupações j .

$$M = \sum_g \frac{C^g}{T} \Phi_1^g \quad (2)$$

Estabelecido o valor de M , que pode ser utilizado para comparações temporais, é calculado o último índice de segregação. Del Río e Alonso-Villar (2015) nomearam este terceiro índice de “contribuição do grupo g ”. Ele representa o quanto a segregação de um grupo específico contribui para a segregação global naquele aspecto; neste caso, na segregação ocupacional.

$$\text{Contribuição do grupo } g = \frac{\frac{C^g}{T} \Phi_1^g}{M} \quad (3)$$

O valor obtido para cada grupo é interpretado como a proporção que a sua distribuição, ponderada pelo tamanho do grupo, influencia na segregação global. Logo, a soma de todos os valores é igual a 1 . Dessa maneira, temos três índices que indicam a segregação ocupacional local e global, de forma que se pode observar a relação entre elas, uma vez que o aumento no primeiro tipo explica a variação no segundo.

Decomposição da desigualdade. Na segunda etapa de elaboração e estimação dos índices estão aqueles que medem os ganhos e perdas salariais devido à sub ou à sobre-representação em determinados grupos ocupacionais. Isto é, se o grupo de homens tem sobre-representação em ocupações não manuais, de gerência ou supervisão, ou ainda como empregadores, que têm renda média superior à média global, então eles terão consequências positivas em termos salariais da estrutura ocupacional.

Dentre os mecanismos de aumento e diminuição das desigualdades estão a segmentação das ocupações no mercado de trabalho e a discriminação. Os índices propostos por Del Río e Alonso-Villar (2015)

mensuram ambas por meio da variação da renda entre e intragrupos. Sendo assim, a segmentação é mensurada pelo índice r , a discriminação pelo Δ , além da soma de ambos dada pelo *Egap*.

$$r = \sum_j \left(\frac{c_j^g}{C^g} - \frac{t_j}{T} \right) \frac{w_j}{w'} \quad (4)$$

Aos índices de decomposição são acrescidos outros estimadores para o cálculo referentes às rendas médias (por grupo g , por ocupação w_j e total da população). Para o índice r utiliza-se o rendimento médio do trabalho principal para cada ocupação, w_j , e o rendimento médio global, w' . Sua interpretação é feita em termos percentuais, indicando o quanto da renda média de cada grupo se deve às ocupações em que eles estão mais concentrados.

Já o índice Δ conta com a inclusão do estimador w_j^g que é a renda média do grupo g na ocupação j que, como se pode notar na equação 5, é subtraído da renda média da ocupação, w_j . Isso representa a diferença das rendas médias de um grupo pela ocupação como um todo. Se negativo, quer dizer que os salários médios de cada grupo de raça e gênero estão abaixo da média.

$$\Delta = \left[\sum_j c_j^g (w_j^g - w_j) \right] \frac{1}{C^g w'} \quad (5)$$

Dessa forma, o índice Δ fornece o percentual da variação entre grupos, entendida como a discriminação entre os grupos de gênero e raça. Como em r , esse índice também é interpretado no percentual que a renda média do grupo g varia. Se um grupo possui $\Delta = 20\%$, quer dizer que a média de renda desse grupo é 20% maior devido à discriminação. Por fim, Del Río e Alonso-Villar (2015) sugerem a soma de ambos os índices de decomposição, chamado de *Egap*.

$$Egap = \underbrace{\sum_j \left(\frac{c_j^g}{C^g} - \frac{t_j}{T} \right) \frac{w_j}{w'}}_r + \underbrace{\left[\sum_j c_j^g (w_j^g - w_j) \right] \frac{1}{C^g w'}}_{\Delta} \quad (6)$$

Os índices apresentados por Del Río e Alonso-Villar (2015) podem ser compreendidos como um conjunto de operações complementares a esforços anteriores de mensuração da segregação ocupacional, com a vantagem de possibilitarem a estimação de ganhos e perdas salariais

dos grupos. Além disso, a decomposição do diferencial, entre e intra-grupos, permite entender os diferentes processos de segmentação e discriminação aos quais os grupos raciais e de gênero são submetidos no mercado de trabalho.

Quadro 1
Índices de *Local Measure Segregation*, cálculos e interpretações

#	Cálculo	Interpretação
1	$\Phi_1^g(c; t) = \sum_j \frac{c_j^g}{C^g} \ln \left(\frac{\frac{c_j^g}{C^g}}{\frac{t_j}{T}} \right)$	Índice utilizado como medida de segregação da população g no determinado ponto do tempo. Quanto mais os grupos de raça e gênero forem concentrados em determinadas ocupações, maior o seu valor (varia entre 0 e 1).
2	$M = \sum_g \frac{C^g}{T} \Phi_1^g$	O índice M também reflete toda estrutura ocupacional, além de ser possível sua decomposição por raça e gênero. Ou seja, por meio dele, sabe-se quanto da segregação se deve a cada um dos recortes sociais (varia entre 0 e 1).
3	$\text{Contribuição do grupo } g = \frac{\frac{C^g}{T} \Phi_1^g}{M}$	O índice de contribuição reflete qual dos grupos está mais concentrado e influência para os índices globais 1 e 2. Logo, se o valor de um grupo for 0,30, quer dizer que 30% do índice global se deve à sua distribuição na estrutura.
4	$\Gamma = \sum_j \left(\frac{c_j^g}{C^g} - \frac{t_j}{T} \right) \frac{w_j}{w'}$	O índice 4 também é dado por grupo, e reflete o quanto do salário médio de cada um é influenciado pela segregação. Logo, se um grupo estiver em ocupações que pagam salários maiores, seu índice será positivo e maior; não há limites de variação, podendo ser positivo ou negativo, e é lido em termos de proporção ou percentual, se multiplicado por 100.

(continua)

#	Cálculo	Interpretação
5	$\Delta = [\sum_j c_j^g (w_j^g - w_j)] \frac{1}{C^g w'}$	<p>O valor de delta também é dado para cada um dos grupos, refletindo a soma das diferenças entre a renda média em cada ocupação j e a média paga para a ocupação em que ela se insere. Trata-se de uma medida de discriminação salarial, já que reflete as diferenças de rendimento por grupo de indivíduos que preenchem as mesmas ocupações. Também é lido em termos de proporção ou percentual, em caso de multiplicação por 100.</p>
6	$Egap = \Delta + r$	<p>O <i>Egap</i> mede quanto cada grupo recebe a mais ou a menos que a média global de salários. Por ele, pode-se decompor quanto dessa diferença se deve à segregação (índice 4) e à discriminação (índice 5).</p>

Fonte: Elaboração própria.

Resultados

Antes de adentrar às especificidades dos índices analisados, apresentaremos estatísticas descritivas que auxiliam na compreensão do cenário ocupacional por gênero e raça no Brasil entre 1986 e 2015. As análises foram realizadas para o mercado de trabalho brasileiro, bem como seus recortes para aqueles com ensino superior completo, e aqueles residentes nas regiões Sul e Sudeste. A Tabela 1 descreve a participação e o diferencial salarial entre os grupos. No intervalo de 29 anos, a principal mudança foi observada na participação de homens brancos, que têm uma redução de 35,4% para 23,2%, enquanto os demais grupos têm aumento, destacando-se as mulheres negras, com 8,9% a mais na participação total.

Em termos de desigualdade salarial média, com o passar das décadas, a diferença também vai se tornando menor. Em 1986, os homens negros recebiam 53% do salário médio de um homem branco, enquanto para as mulheres brancas esse percentual era de 68% e para as negras, 35%. Os valores identificados em 2015 são maiores: 58,88 e 50%, respectivamente.

Tabela 1
Estatísticas descritivas de participação e razão por grupos de raça e gênero, escolaridade e região – Brasil, 1986, 1995, 2005 e 2015

Categorias	1986		1995		2005		2015	
	%	Razão	%	Razão	%	Razão	%	Razão
Homens brancos	35,4	Ref. (1)	31,2	Ref. (1)	26,8	Ref. (1)	23,2	Ref. (1)
Homens negros	29,8	0,53	26,9	0,51	29,3	0,55	32,2	0,58
Mulheres brancas	19,4	0,68	23,2	0,64	22,1	0,82	20,3	0,88
Mulheres negras	15,4	0,35	18,7	0,34	21,9	0,48	24,3	0,50
S/ensino superior	89,0	Ref. (1)	91,8	Ref. (1)	89,5	Ref. (1)	82,5	Ref. (1)
C/ensino superior	11,0	3,96	8,2	4,85	10,5	4,00	17,5	3,58
Norte	8,5	Ref. (1)	6,7	Ref. (1)	10,3	Ref. (1)	12,3	Ref. (1)
Nordeste	27,9	0,65	28,5	0,68	30,2	0,81	27,4	0,69
Sudeste	35,1	1,05	35,0	1,18	30,9	1,25	31,7	1,41
Sul	16,8	1,00	18,9	1,10	17,1	1,28	17,0	1,21
Centro-oeste	11,7	1,11	10,9	1,08	11,6	1,43	11,7	1,99
Média	Cr\$3.756,79		R\$496,71		R\$1.000,13		R\$3.117,06	
N	68.060		93.689		124.054		114.211	

Fonte: PNAD 1986, 1995, 2005 e 2015.

Por escolaridade, observamos que trabalhadores com ensino superior recebem salários mais elevados. Em 1986, um indivíduo com diploma universitário recebia um salário médio 3,96 vezes maior que outro sem tal diploma. Nos anos 1995 e 2005 essa razão é de 4,85 e 4,00 vezes, atingindo sua menor diferença em 2015, de 3,58 vezes.

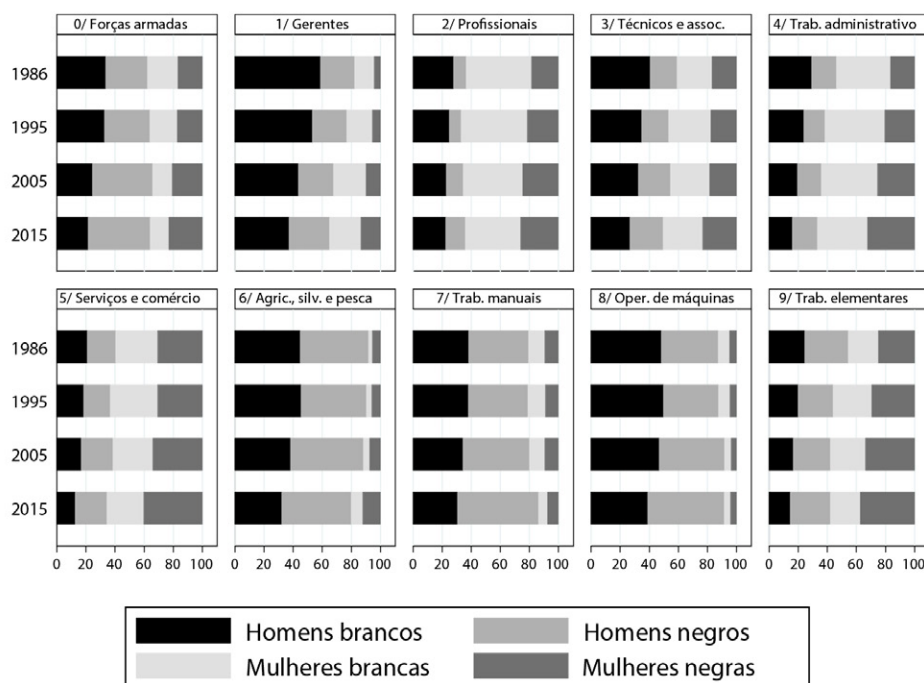
Assim como a escolaridade, as regiões também apresentam heterogeneidades, principalmente no que se refere à razão dos salários médios. De maneira geral, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste têm médias maiores que as regiões Norte e Nordeste. Essas diferenças se acentuam ao longo do tempo, sendo que em 2015, um trabalhador no Sudeste recebia em média 41% a mais que um trabalhador no Norte do Brasil.

A partir da análise, é possível observar se homens e mulheres, brancos e negros, estão concentrados em determinadas categorias em comparação a outras, e em que medida isso afeta a renda desses trabalhadores. Para observar essa distribuição, uniu-se as ocupações nos Grandes Grupos (*Major Groups*) da ISCO⁸ (*International Standard Classification of Occupations*).

No Gráfico 1, observa-se a concentração por gênero e raça em cada um dos grupos, e sua variação temporal. O grupo 4, por exemplo, que refere-se aos Trabalhadores Administrativos, é predominantemente composto por mulheres, em especial as brancas, e não apresenta grandes mudanças entre 1986 e 2015. Já os grupos 7 e 8 (Trabalhadores Manuais e Operadores de Maquinário, respectivamente) são predominantemente compostos por homens, sejam eles brancos ou negros. Por fim, vale destacar que os grupos 1 (Gerentes) e 5 (Serviços e Comércio) passaram por mudanças: no primeiro, houve redução na participação dos homens, enquanto no segundo há um acréscimo substantivo da força de trabalho das mulheres negras. É possível destacar, portanto, que estamos diante de um período em que ocorreram mudanças na estrutura ocupacional, mesmo que não em sua completude.

8 A CBO também possui Grandes Grupos. Porém, como há variações ao longo do tempo, optamos por padronizar esses dados apenas para a descrição nos Gráficos 1 e 2. Todo o restante da análise é baseado na CBO.

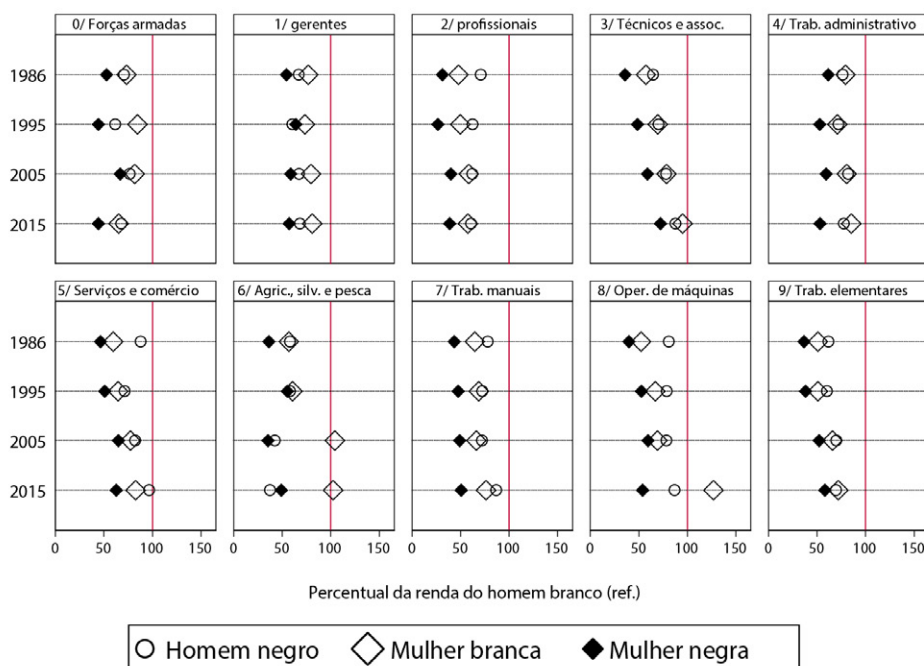
Gráfico 1
Participação por gênero e raça dos Grandes Grupos Ocupacionais
de acordo com a CBO – Brasil, 1986, 1995, 2005 e 2015



Fonte: PNAD 1986, 1995, 2005 e 2015.

No Gráfico 2, está demonstrada a análise da razão salarial entre os grupos de mulheres brancas, homens negros e mulheres negras em comparação aos homens brancos nos quatro anos. Quanto mais próximo à linha vertical, menor é a distância do salário médio entre esses grupos. Permanências e mudanças são observadas. Por exemplo, no Grupo 1 (Gerentes), as razões pouco variam entre 1986 e 2015, mantendo-se uma ampla vantagem dos homens brancos – mesmo sendo um grupo que passou por mudanças, conforme observado no Gráfico 1. Como demonstrado por Santos (2009), quando não controlado por outras variáveis, a vantagem masculina de renda dos brancos é maior do que entre os negros, mas essa desvantagem varia de acordo com a classe a que se pertence, ou, nos termos em que tratamos aqui, varia conforme o grupo ocupacional.

Gráfico 2
Razão salarial por gênero e raça dos Grandes Grupos Ocupacionais
de acordo com a CBO – Brasil, 1986, 1995, 2005 e 2015



Fonte: PNAD 1986, 1995, 2005 e 2015.

Já nos Grupos 3 (Técnicos e Associados) e 5 (Serviços e Comércio) observamos processos de redução de desigualdades salariais. No primeiro, as mulheres negras recebiam apenas 35% do salário horário médio em comparação aos homens brancos em 1986, razão que passa para 72% em 2015. No Grupo 5, a razão salarial das mulheres brancas e homens negros em comparação aos homens brancos, que era de 59% e 87% em 1986, passa para 82% e 97% em 2015.

As descrições iniciais apontam para uma diversificação do mercado de trabalho brasileiro em termos de raça e gênero. Porém, como observamos na Tabela 1 e nos Gráficos 1 e 2, há ressalvas por escolaridade, região e Grandes Grupos Ocupacionais. De maneira ampla, as mulheres aumentaram sua participação em cerca de 10% da composição total, e a razão salarial tornou-se menor. Já quando o recorte é feito por ocupação, encontramos padrões distintos: em algumas delas, essa diversificação é muito pequena, assim como a diminuição da disparidade salarial é mais sensível em algumas ocupações que em outras.

Convém questionar, portanto, se esse cenário tão heterogêneo em termos de mudanças de participação e de desigualdade se reflete em índices de segregação e discriminação menores. Além disso, apresentamos recortes por região e escolaridade, visando avaliar se as variações são mais intensas para determinados grupos.

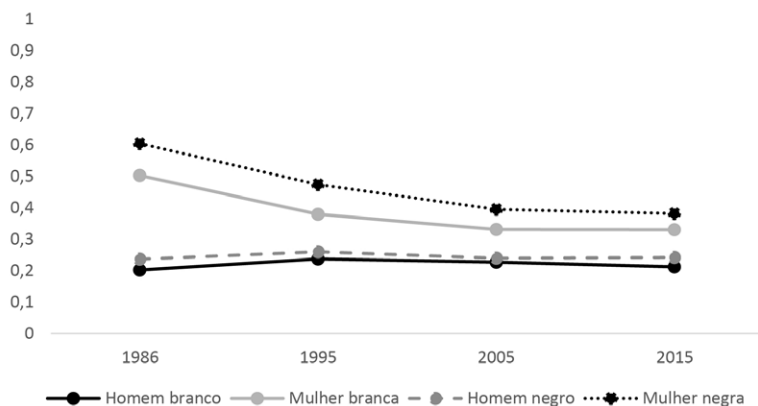
No Gráfico 3 está representado o Índice 1, de *Local Segregation Measure*. Ele indica se o grupo g (nesse caso, cada um dos quatro grupos de gênero e raça) é constantemente sobrerrepresentado em muitas ocupações em determinado ponto do tempo. Para a amostra geral, observamos que as mulheres negras são as mais concentradas em todos os anos, seguidas pelas mulheres brancas. Contudo, ambos os grupos tiveram diminuição entre 1986 e 2015, passando de 0,60 para 0,38 no caso das negras, e as brancas de 0,50 para 0,33. Já os homens possuem índices de *Local Segregation* mais baixos e com menores variações ao longo do tempo, independentemente da raça.

O recorte exclusivo para trabalhadores com ensino superior completo demonstra diferenças. Para todos os grupos, os índices são menores, indicando que, de fato, a escolaridade leva a uma distribuição mais proporcional dos grupos nas ocupações. Os grupos femininos experimentam uma queda em seus índices, destacando que as mulheres negras atingem situação similar aos homens, e as mulheres brancas têm a distribuição mais proporcional dentro da estrutura ocupacional desde 1995, atingindo o valor de 0,10 em 2015, enquanto os demais ainda se concentram acima do 0,20.

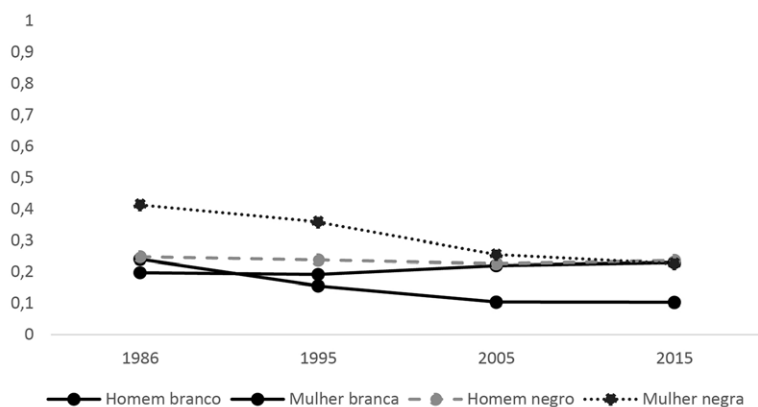
A restrição amostral para o Sul e o Sudeste também apresenta especificidades, principalmente no que se refere à intensidade da segregação por grupo. As mulheres negras permanecem sendo o grupo mais segregado, partindo de um índice de 0,78 em 1986 e caindo para 0,44 em 2015. Quedas constantes também são observadas para as mulheres brancas, destacando a relevância do gênero. Ao mesmo tempo, aponta-se que a hierarquia permanece: a melhor distribuição foi observada entre os homens brancos, e a pior entre as mulheres negras, com exceção da subamostra com ensino superior completo.

Gráfico 3
Local Segregation Measure para o Brasil, por escolaridade superior e regiões Sul/ Sudeste – Brasil, 1986, 1995, 2005 e 2015

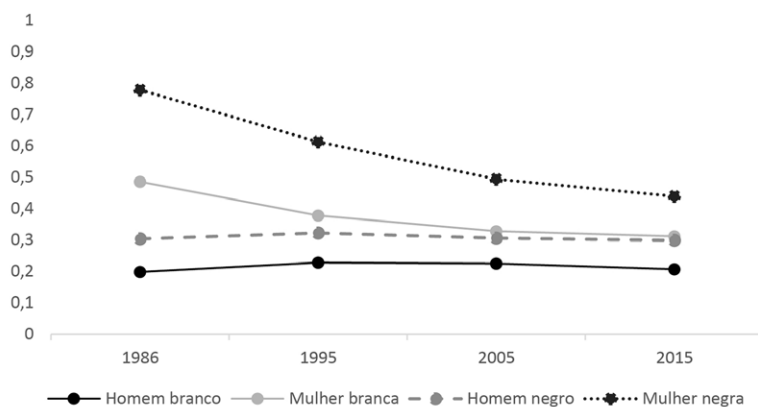
Índice *Local Segregation* para Brasil



Índice *Local Segregation* para amostra com ensino superior



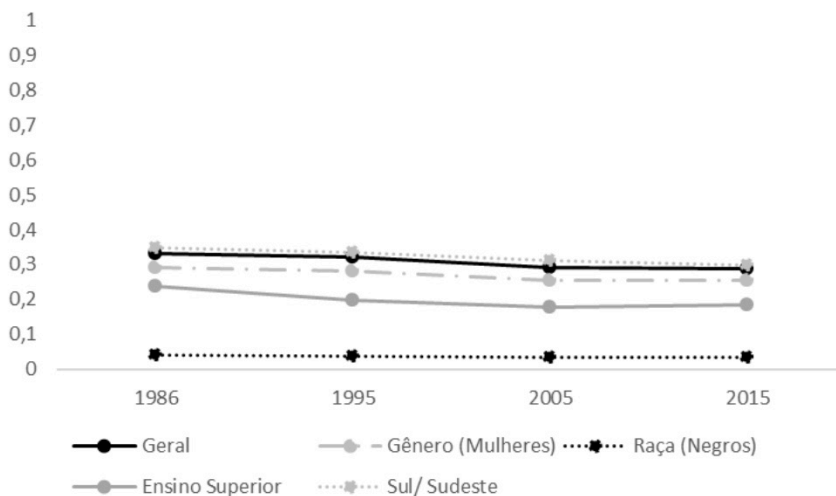
Índice *Local Segregation* para amostra do sul/ sudeste



Fonte: PNAD 1986, 1995, 2005 e 2015.

O segundo índice, chamado de M , é global, e informa uma medida relacionada ao Índice 1. Seu resultado aponta que quanto maiores os valores obtidos no índice de *Local Segregation*, maiores os valores de M . Ele ainda permite que sejam feitas decomposições parciais, por gênero ou por raça. No Gráfico 4, está representado o M para a amostra geral, por gênero e raça, e pelos recortes de escolaridade e região.

Gráfico 4
Medida global de segregação M para o Brasil, por gênero, por raça e segundo recortes por escolaridade superior e regiões Sul/ Sudeste – Brasil, 1986, 1995, 2005 e 2015



Fonte: PNAD 1986, 1995, 2005 e 2015.

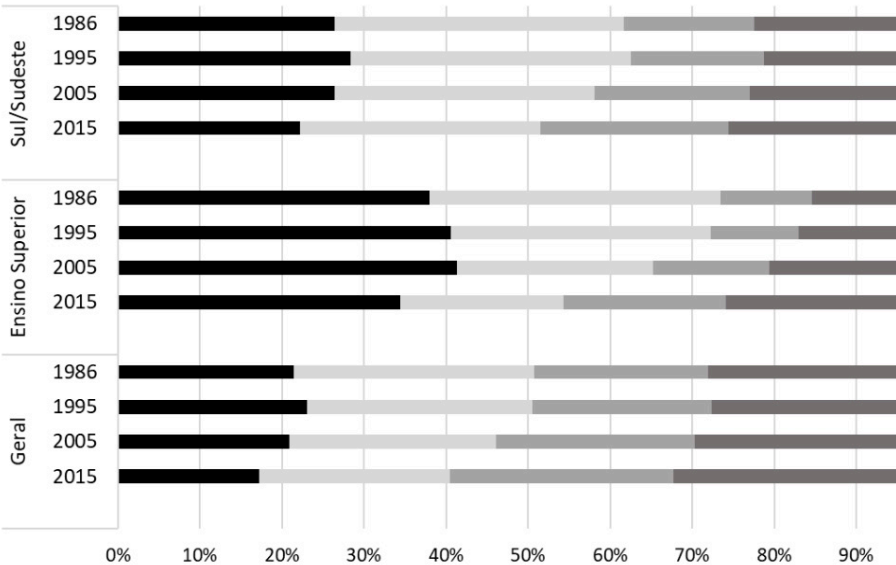
Os dados do Gráfico 4 apontam, de maneira geral, para uma lenta e constante queda no índice global de segregação em todos os subgrupos analisados. É possível observar que as regiões Sul e Sudeste têm índices mais elevados que a população trabalhadora do Brasil em geral ao longo de todo o intervalo. Por outro lado, como esperado, o grupo com ensino superior é consideravelmente menos segregado que a população geral, apesar de um ligeiro aumento entre 2005 e 2015, quando passou de 0,1775 para 0,1846.

Dentre os subgrupos de gênero e raça, o primeiro se destaca com índices entre 0,29 e 0,25, enquanto o último não ultrapassa 0,03. Como observamos nas estatísticas descritivas e no Índice de *Local Segregation*, as principais concentrações se dão por gênero, sendo que a raça acrescenta determinadas vantagens para os brancos e desvantagens

para os negros. Nesse sentido, o baixo valor de M para raça não significa que sua influência seja irrisória, principalmente quando observados os outros índices, mas que o gênero tem um papel preponderante no que se refere à distribuição dos indivíduos, de maneira que seus resultados também têm interação com a raça.

O Gráfico 5 traz outra medida baseada nos índices 1 e 2. O índice de contribuição do grupo refere-se a quanto cada um dos subgrupos influencia na medida global M . Se um dado grupo for muito segregado, ele terá um alto valor em tal índice. Para a amostra geral, observa-se uma transformação na contribuição dos homens e mulheres negros entre 1986 e 2015. Em 1986, as mulheres brancas e negras representavam cerca de 60% desse índice, mas em 2015 elas tomam caminhos opostos. As mulheres brancas caem de 29% para 23% do índice, e as negras sobem de 28% para 32%. Já os homens negros têm a maior variação, passando de 21% para 27%, enquanto os homens brancos vão de 21% para 17%. Desse modo, a raça tornou-se mais importante para a variação desse índice nos 29 anos analisados.

Gráfico 5
Medidas de contribuição do grupo para o Brasil, por gênero,
por raça e segundo recortes por escolaridade superior e
regiões Sul/ Sudeste – Brasil, 1986, 1995, 2005 e 2015



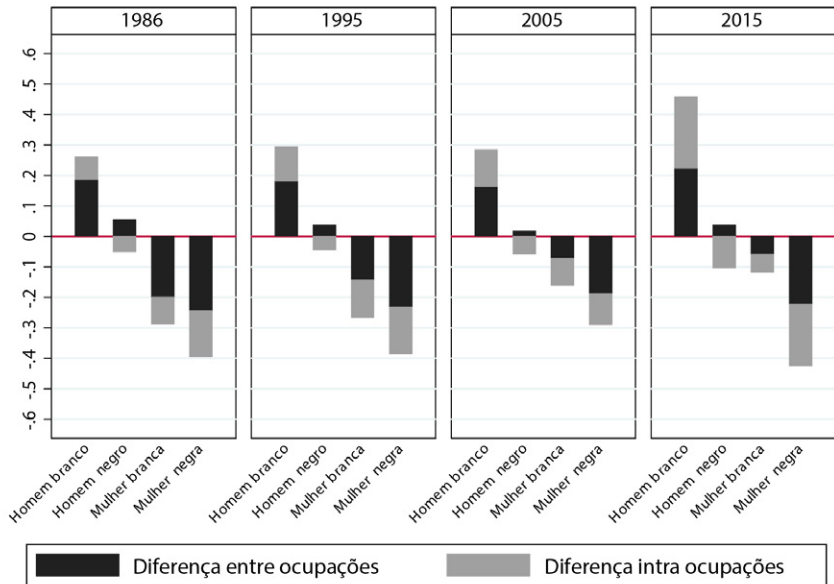
Fonte: PNAD 1986, 1995, 2005 e 2015.

Para a subamostra de trabalhadores com ensino superior completo, o cenário é diferente. Em 1986, o grupo branco era o principal influenciador do Índice 3, respondendo por mais de 70% da contribuição. Com o passar dos anos, os homens tornam-se ainda mais influentes para o Índice 3, atingindo o valor de 0,41 em 2005, mas caem para 0,34, em 2015. No mesmo intervalo, as mulheres brancas deixam de ser o segundo grupo que mais contribui, dando lugar às mulheres negras, que em 2015 têm o valor de 0,26. Isso indica que o processo de expansão do ensino superior no Brasil iniciado nos anos 1990 diminuiu as discrepâncias de segregação, mas, ainda assim, têm homens brancos e mulheres negras com lugares mais demarcados que os demais grupos.

Para as regiões Sul e Sudeste do Brasil, observa-se que a contribuição dos grupos não é similar à amostra geral. Para o Brasil, mulheres brancas e negras predominavam com maiores índices de contribuição em 1986, sendo que no recorte regional destaca-se principalmente o grupo branco. Com o passar dos anos, os negros passam a equilibrar a relação, de maneira que aumentam seus valores no índice, enquanto os brancos os diminuem. Em 2015, as mulheres brancas e negras assumem os dois maiores índices, apesar de ser naquele ano e naquelas regiões que se observa uma distribuição mais igualitária entre todos os quatro subgrupos analisados, diferentemente do ensino superior.

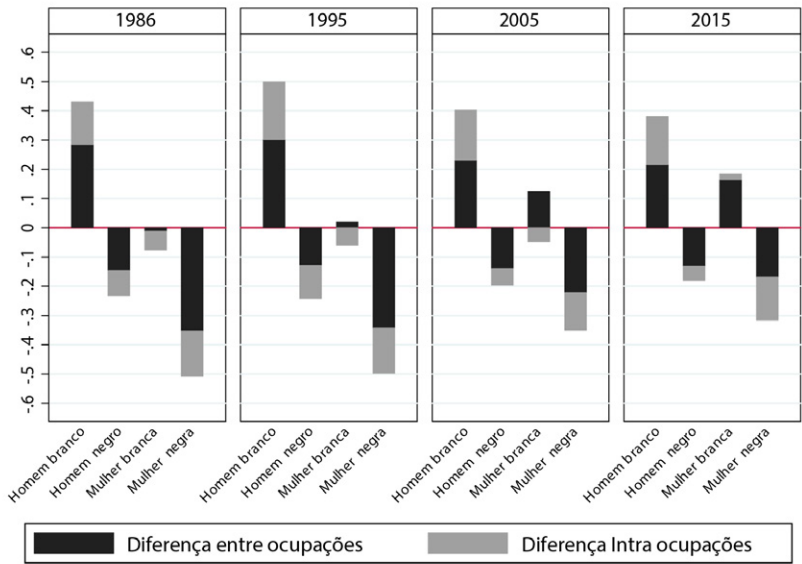
Os Gráficos 6, 7 e 8 trazem os índices finais. Neles são inseridas informações relacionadas à disparidade salarial entre os grupos em função da segregação ocupacional e às diferenças entre indivíduos que se encontram na mesma ocupação. De maneira geral, pode-se dizer que o percentual indicado no eixo y aponta quanto cada grupo recebe a mais ou a menos que a média, sendo dividido entre (i) a diferença entre ocupações, ou seja, se os indivíduos daquele grupo se encontram em ocupações que pagam mais ou menos, e (ii) a diferença intraocupações, que aponta os ganhos ou perdas em comparação aos outros grupos na mesma ocupação – ou seja, uma medida de discriminação salarial.

Gráfico 6
Egap de renda para diferenças inter e intraocupações – Brasil, 1986, 1995, 2005 e 2015



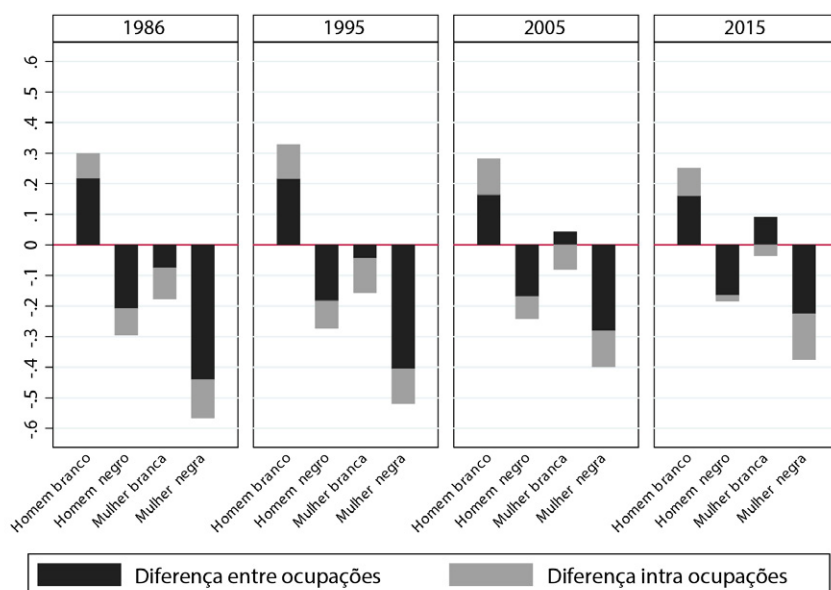
Fonte: PNAD 1986, 1995, 2005 e 2015.

Gráfico 7
Egap de renda para diferenças inter e intraocupações para trabalhadores com ensino superior completo – Brasil, 1986, 1995, 2005 e 2015



Fonte: PNAD 1986, 1995, 2005 e 2015.

Gráfico 8
Egap de renda para diferenças inter e intraocupações para trabalhadores nas regiões Sul e Sudeste – Brasil, 1986, 1995, 2005 e 2015



Fonte: PNAD 1986, 1995, 2005 e 2015.

No Gráfico 6, apresentamos tais medidas para a amostra que representa o Brasil. Em todos os anos, os homens brancos possuem salários horários médios mais elevados que todos os grupos, e as mulheres negras possuem os mais baixos. Os homens brancos têm um salário médio mais de 40 % acima da média, atingindo seu pico em 1995: 50 % a mais. Ao decompor tal índice, porém, observamos que há maior variação entre do que intraocupações para esse grupo. Em 1986, 28 % da diferença devia-se ao primeiro termo da decomposição e 15 % ao segundo; já em 2015 esses percentuais eram de 21,5 % e 16,5 %, respectivamente. Em contraste, os homens negros têm um salário médio -23 % em 1986 e -18 % em 2015, sendo que quatro pontos percentuais se devem à menor discriminação.

Já as mulheres experimentaram mudanças acentuadas. As mulheres negras, mais desfavorecidas no mercado de trabalho, recebiam um salário médio 50 % menor que a média geral em 1986 e passaram para uma perda de 32 % em 2015. Dentre os termos da decomposição, a redução se deve especialmente ao fato de estarem em ocupações que pagam melhores salários, uma vez que o termo de discriminação pouco

se altera no intervalo: -16 % em 1986 e -15 % em 2015, atingindo seu nível mais favorável em 2005, -13 %. As mulheres brancas, por sua vez, têm salários médios 7 % abaixo da média no primeiro ano e 18 % acima no último ano analisado. Para elas, enquanto o termo de discriminação se torna próximo a zero, estar em ocupações com salários médios mais elevados representa um ganho 16 % acima da média.

No que se refere à população trabalhadora com ensino superior completo, há diferenças em comparação ao restante da população analisada. No Gráfico 7, observamos um incremento do diferencial salarial por parte dos homens brancos com relação à média. Eles, que já recebiam 26 % acima da média em 1986, passam a receber 46 % a mais em 2015. Em comparação aos demais, homens brancos com ensino superior conformam o grupo com maior variação no intervalo. Para as mulheres brancas, destaca-se a diminuição de ambos os termos da decomposição, sendo que o diferencial cai de -28 % para -11 % da média geral.

Para o grupo negro, o diferencial varia por gênero. Os homens experimentam uma queda na vantagem por estarem em ocupações com melhores salários, enquanto aumenta o percentual referente à discriminação. Para as mulheres, o diferencial varia de -39 % para -42 %, sendo que a discriminação diz respeito a 20 % da diferença para média em 2015.

Em comparação ao Gráfico 6, a análise das regiões Sul e Sudeste do país no Gráfico 8 destaca principalmente uma menor diferença dos homens brancos com relação à média em 1986 e também em 2015. Ao mesmo tempo, em ambos os anos as mulheres negras possuem maior desvantagem. Por outro lado, essas disparidades tornam-se menores, especialmente a partir dos anos 2000. Para as mulheres brancas, o diferencial diminui, havendo ainda um percentual negativo referente à discriminação, ao contrário da análise para o Brasil. Os homens negros têm uma redução de -29 % em 1986 para -18 % em 2015, sendo a diminuição da discriminação salarial o principal termo no índice *Egap*.

Em resumo, podemos apontar seis processos que se destacam no intervalo entre 1986 e 2015 no mercado de trabalho brasileiro em termos de segregação ocupacional por gênero e raça:

- 1) Conforme os dados descritivos, o mercado de trabalho é mais diversificado segundo todas as variáveis analisadas, devendo-se levar em conta que a heterogeneidade e a queda das desigualdades salariais não são idênticas pelos Grandes Grupos Ocupacionais;
- 2) Apesar do grupo de homens brancos ser o que mais se concentra em ocupações privilegiadas, isso tem se tornado menos forte, o que fica evidente em todos os cinco índices;
- 3) O índice $M(3)$ revela a importância do gênero na distribuição das ocupações, e isso é ressaltado também pela forma como as mulheres obtiveram melhoras consideráveis nos 29 anos analisados, apesar de permanecerem em desvantagem com relação aos homens brancos, especialmente as mulheres negras;
- 4) Temporalmente, destaca-se que entre os anos de 1986 e 1995 há um recrudescimento da segregação e das desigualdades, que se tornam menores a partir do período 1996-2015;
- 5) O grupo com ensino superior tem resultados dúbios, uma vez que em termos de segregação as ocupações são mais bem distribuídas, o que não representa necessariamente salários mais iguais, destacando-se, portanto, o papel da discriminação;
- 6) A região Sul/ Sudeste apresenta uma segregação ligeiramente mais acentuada que o restante do país, sendo mais prejudicial principalmente para as mulheres negras.

Discussão e conclusão

A replicação dos índices de Del Río e Alonso-Villar (2015) demonstram sensibilidade na mensuração das mudanças na segregação ocupacional que ocorreram no Brasil ao longo das últimas três décadas. Entre 1986 e 2015 o país passou por transformações tanto na demanda quanto na oferta de trabalho. Pelo lado da demanda, houve uma redução nos empregos industriais e agrícolas, enquanto o setor de serviços se tornou mais largo. Já a oferta de mão-de-obra tornou-se mais qualificada em termos educacionais e mais diversificada em termos de raça e gênero.

Tais mudanças têm diferentes impactos na segregação ocupacional. A diminuição da segregação e das desigualdades é constante desde 1986, o que condiz com as análises conduzidas por Carvalhaes e colaboradores (2014), que demonstram a relevância da estrutura ocupacional

para a queda da desigualdade de renda entre 2002 e 2012. Nesse sentido, a redução afeta também os grupos de raça e gênero, como se observa no Gráfico 6, em que os homens brancos e as mulheres negras se tornam mais próximos devido ao termo estrutural - isto é, em 2015 a segregação era menor e o nível de renda das ocupações menos distante em comparação a 1986.

Por outro lado, nota-se a permanência da discriminação como elemento diferenciador importante na desigualdade salarial entre esses grupos. No Gráfico 6, por exemplo, observamos que o termo de discriminação sobre as mulheres negras era de -16% em 1986, e de -15% em 2015, enquanto o dos homens brancos era de +21% e de +16%, respectivamente. Ainda acerca das diferenças salariais, observamos, para a amostra com ensino superior (Gráfico 7), que a discriminação se torna mais acentuada entre 1986 e 2015, sendo positiva para os homens brancos, e negativa para mulheres e homens negros. Ou seja, os dados apontam que, dentro do recorte hierárquico mais alto, a discriminação racial se tornou maior, como sugere Soares (2000), ao analisar o “elitismo” desse comportamento:

existe uma visão do que seja o lugar do negro na sociedade, que é o de exercer um trabalho manual, sem fortes requisitos de qualificação em setores industriais pouco dinâmicos. Se o negro ficar no lugar a ele alocado, sofrerá pouca discriminação. Mas se porventura tentar ocupar um lugar ao sol, sentirá todo o peso das três etapas da discriminação sobre seus ombros. (Soares, 2000, pp. 24-25)

Conforme a afirmação de Soares (2000), há expectativas sobre quais ocupações cada um dos grupos sociais deve ocupar. Nesse sentido, observa-se que há muitas permanências no intervalo de tempo analisado, lugares e estereótipos resilientes, tanto para raça quanto para gênero. Contudo, mesmo nesse cenário, têm destaque mudanças que refletem as transformações da estrutura ocupacional, econômica e social, e se refletem em um cenário mais igualitário por gênero e raça.

Ao observar a variação dos índices, pode-se afirmar que as mulheres brancas obtiveram as mudanças mais substantivas. Nas medidas de segregação, os recortes por gênero são mais fortes (índices 1 e 2, especialmente), em que elas experimentam quedas que as

aproximaram dos homens nos anos mais recentes. Em 2015, o grupo das mulheres brancas é o mais bem distribuído dentre os trabalhadores com ensino superior, que se reflete como o menor índice de segregação.

Quando se trata das diferenças salariais, os resultados para todo o Brasil representam uma melhora significativa: as mulheres brancas superaram a média geral, passando de um cenário negativo em 1986 para um cenário positivo em 2015. Porém, na subamostra de ensino superior, elas permanecem em desvantagem por se concentrarem em ocupações que pagam menos, e por receberem menos mesmo ocupando as mesmas posições. Observamos, portanto, que a estrutura ocupacional tem se tornado menos prejudicial às mulheres, que têm se distribuído melhor pelas ocupações, embora no recorte mais elitizado elas sejam penalizadas devido à segregação e à discriminação.

A manutenção da discriminação como elemento de diferenciação salarial enfraquece, portanto, a hipótese de que as diferenças salariais entre mulheres e homens devem ser atribuídas às escolhas individuais. Ao contrário do que se defende na teoria neoclássica, não são somente as escolhas que definem os salários, mas também a interação entre empregador e empregado, e mesmo a interação entre empregados, que levam a uma desvantagem salarial feminina (England, 2008; Reskin & Debra, 2000). Isso é mais evidente dentre as mulheres com ensino superior, que reduziram a alocação diferencial, o que não foi acompanhado pela queda da discriminação salarial, indicando que no topo da estrutura há uma sobreposição entre efeitos de classe e gênero (Santos, 2009).

Sobre as mulheres negras, observa-se os efeitos de raça e gênero. Por um lado, há variações proporcionais grandes no intervalo de 1986 a 2015. Sua distribuição na estrutura ocupacional melhora, principalmente entre 1995 e 2005, e na região Sul/Sudeste. Porém, embora seus ganhos sejam proporcionalmente grandes em comparação aos outros grupos, elas permanecem tendo os piores índices em todas as análises. Assim como sugerem as elaborações interseccionais e consubstanciais (Creenshaw, 1994; Kergoat, 2010), e os resultados encontrados por Soares (2000), as mulheres negras são penalizadas mais de uma vez, como demonstram os resultados do índice 5, em que o termo relativo à discriminação sobre elas é duas vezes maior que a desvantagem sobre homens negros e mulheres brancas.

Já os homens negros têm variações menores que os grupos femininos. Por exemplo, enquanto entre 1986 e 2015 a queda do índice 1 (*Local Segregation*) é de mais de 50 % para as mulheres, o indicador pouco se altera para os homens negros (bem como para os homens brancos). O mesmo é observado para a decomposição da diferença salarial, havendo uma queda de apenas 4 % no valor referente à discriminação em quase 30 anos de análise. Segundo Soares (2000), entre 1987 e 1995 o percentual de discriminação sobre esse grupo aumentou 4 %, enquanto no Índice 5 deste artigo, tal percentual também cresceu 2 % entre 1986 e 1995.

Podemos indicar, portanto, que no processo de expansão do setor terciário e retração do setor secundário, as mulheres têm obtido ganhos mais significativos que os homens negros. Como exemplo, observa-se no Gráfico 1 que nos Grandes Grupos Ocupacionais relacionados à indústria (7/ Trabalhadores Manuais e 8/ Operadores de Maquinário), a participação feminina não teve aumento significativo, o que ocorreu de fato nos Grupos 1 (Gerentes), 3 (Técnicos e Associados) e 4 (Trabalhadores Administrativos), sendo setores de grande expansão junto com os Serviços, já predominantemente feminino em 1986 (Kon, 2006). Contudo, em razão do Gráfico 2, devemos ressaltar que nesses grupos não há uma queda tão acentuada das disparidades salariais, o que fica claro na análise agregada, como nos Índices 4 e 5 (Gráfico 6, especialmente). Não obstante, a maior participação das mulheres no mercado de trabalho é central para a redução das desigualdades, dialogando, por exemplo, com os achados de Costa Ribeiro e Machado (2018), de que o rendimento do trabalho das esposas contribuiu para a queda da desigualdade das famílias brasileiras entre 1992 e 2014.

Os resultados dialogam com a literatura existente acerca do tema no Brasil e no mundo. A ampliação do mercado de trabalho brasileiro e a maior qualificação da população trazem apontamentos de uma estrutura ocupacional mais igualitária. Desde os dados descritivos na Tabela 1, notamos que as médias salariais se tornam menos distantes por grupos de gênero e raça, bem como de escolaridade. Porém, não são todos os índices que apontam para tal direção, havendo ainda indícios da perpetuação da “expansão segregada” (Oliveira, 1998), quando as mulheres aumentam sua participação de maneira segmentada em “ocupações femininas”.

Por fim, destacamos que os índices desenvolvidos por Del Río e Alonso-Villar (2015) contribuem para a compreensão da estrutura ocupacional e sua transformação ao longo do tempo. São índices multigrupos que permitem a análise de desigualdades por gênero e raça, bem como sua interseção, tendo resultados condizentes com análises anteriores, como Oliveira (1998) e Soares (2000). A análise contínua dos índices com o passar dos anos pode ser uma técnica de alguma valia para os estudos no país e na região latino-americana, assim como os processos de reprodução das desigualdades, dando atenção às variações e às heterogeneidades.

Referências

- Alves, J. E., Vasconcelos, D., & De Carvalho, A. (2010). *Estrutura etária, bônus demográfico e população economicamente ativa no Brasil: cenários de longo prazo e suas implicações para o mercado de trabalho*. Textos para Discussão. Brasília: Cepal/Ipea, LC/BRS/R.224.
- Alves de Brito, M. M. (2017). Novas tendências ou velhas persistências? Modernização e expansão educacional no Brasil. *Cadernos de Pesquisa*, 47(163), 224-263. doi: 10.1590/19805314378
- Barbosa, R. J. (2014). *Comparabilidade das informações disponíveis nos Censos (1960-2010) e PNADs (1976, 1985, 1995 e 2005)*. Texto para Discussão, (017/2014). São Paulo: Centro de Estudos da Metrópole. Recuperado de http://centrodametropole.fflch.usp.br/pt-br/publicacoes/artigos-e-working-papers?artigos=rog%C3%A9rio+barbosa&categoria=All&items_per_page=30
- Becker, G. (1957). *The economics of discrimination*. Chicago: University of Chicago Press.
- Blau, P. M. & Duncan, O. D. (1967). *The American occupational structure*. Nova York: Wiley.
- Carvalhaes, F., Barbosa, R., Souza, P., & Ribeiro, C. (2014). Os Impactos da geração de empregos sobre as desigualdades de renda: uma análise da década de 2000. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 29(85), 81-98. doi: 10.1590/s0102-69092014000200006
- Carvalho, L. (2018). *Valsa brasileira – Do boom ao caos econômico*. São Paulo: Todavia.

- Cavenaghi, S. M. & Berquó, E. S. (2014). Perfil socioeconômico e demográfico da fecundidade no Brasil de 2000 a 2010. *Anais do VI Congresso da Associação Latino Americana de População*, de 12 a 15 de agosto de 2014, Lima, Peru.
- Charles, M. & Grusky, D. B. (2004). *Occupational ghettos: The worldwide segregation of women and men*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Cortés, F. (2003). El ingreso y la desigualdad en su distribución. México: 1997-2000. *Papeles de Población*, 9(35), 137-152. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252003000100007&lng=es&nrm=iso. ISSN 2448-7147
- Costa Ribeiro, C. A. C. (2007). *Estrutura de classe e mobilidade social no Brasil*. Bauru, SP: Edusc, Anpocs.
- Costa Ribeiro, C. A. C. (2016). Desigualdades de gênero no ensino superior no mercado de trabalho no Brasil: uma análise de idade, período e coorte. *Revista Sociedade e Estado*, 31(2). doi: 10.1590/S0102-69922016000200002
- Costa Ribeiro, C. A. C. (2017). Occupational and income intergenerational mobility in Brazil between the 1990s and 2000s. *Revista Sociologia e Antropologia*, 7(1), 157-185. doi: 10.1590/2238-38752017v7i7
- Costa Ribeiro, C. A. C. & Machado, W. (2018). Rendimento do trabalho das esposas e tendências da desigualdade de renda no Brasil (1992-2014). *Dados*, 61(1), 103-135. doi: 10.1590/001152582018148
- Crenshaw, K. W. (1994). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Em M. Fineman e R. Mykitiuk. (Eds.), *The public nature of private violence* (pp. 93-118). Nova York: Routledge.
- Del Río, C. & Alonso-Villar, O. (2015). The evolution of occupational segregation in the United States, 1940-2010: Gains and losses of gender-race/ethnicity groups. *Demography*, 52: 967-988. doi: 10.1007/s13524-015-0390-5
- England, P. (2008). Devaluation and the pay of the comparable male and female occupations. Em D. Grusky. (Ed.), *Social stratification: Class, race, and gender in sociological perspective*. Philadelphia, PA: Westview Press.

- Erickson, R. & Goldthorpe, J. (1992). The CASMIN Project and the American Dream. *European Sociological Review*, 8(3), 283-306. Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/522720>
- Ganzeboom, H. & De Graaf, P. (1984). *Intergenerational occupational mobility in the Netherlands in 1954 and 1977. A log-linear analysis*. Em B. J. D. Bakker e H. Ganzeboom. (Ed.), *Social stratification and mobility in the Netherlands*. Amsterdam: SISWO.
- Hirata, H. (2009). A precarização e a divisão internacional e sexual do trabalho. *Sociologias*, (21). Recuperado de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222009000100003&lng=pt&nrm=iso. doi: 10.1590/s1517-45222009000100003
- Hirata, H. & Kergoat, D. (2007). Novas configurações da divisão sexual do trabalho. *Cadernos de Pesquisa*, 37(132), 595-609. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/cp/v37n132/a0537132.pdf>
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (2018). *Sistema de Contas Regionais: Brasil: 2016*. Brasília: IBGE. Recuperado de <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101619>
- INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) (1995). *Sinopse Estatística do Ensino Superior*. Brasília: INEP.
- INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) (2015). *Sinopse Estatística do Ensino Superior*. Brasília: INEP.
- Kergoat, D. (2010). Dinâmicas e consubstancialidade das relações sociais. *Novos Estudos*, 86, 93-103. doi: 10.1590/S0101-33002010000100005
- Kon, A. (2006). Mudanças recentes no perfil da distribuição ocupacional da população brasileira. *Revista Brasileira de Estudos Populacionais*, 23(2), 247-267. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v23n2/a04v23n2>
- Lima, E., Tomás, M., & Queiroz, B. (2015). The sandwich generation in Brazil: Demographic determinants and implications. *Revista Latinoamericana de Población*, 9(16). doi: 10.31406/relap2015.v9.i1.n16.3

- Marteleteo, L., Marschner, M., & Carvalhaes, F. (2016). Educational stratification after a decade of reforms on higher education access in Brazil. *Research in Social Stratification and Mobility*, 46, 99-111. doi: 10.1016/j.rssm.2016.08.004
- Oliveira, A. M. H. C. (1998). Indicadores de segregação ocupacional por sexo no Brasil. *XI Encontro Nacional de Estudos Populacionais da ABEP*, Caxambu, 1998.
- Piore, M. J. (1979). *Birds of passage: Migrant labor and industrial societies*. Cambridge: University Press Cambridge.
- Reskin, B. F. & Debra B. M. (2000). Why not ascription? Organizations' employment of male and female managers. *American Sociological Review*, 65(2), 210-233. doi: 10.2307/2657438
- Santos, J. A. F. (2009). A interação estrutural entre a desigualdade de raça e de gênero no Brasil. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 24(70), 37-60. doi: 10.1590/S0102-69092009000200003
- Soares, S. (2000). O perfil da discriminação no mercado de trabalho – homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. *Texto para Discussão*, (769). Ipea.
- Wright, E. O. (2005). *Approaches to class analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

Anexo 1

Índices de *Local Measure Segregation*, *M*, Contribuição do grupo, decomposição entre e intragrupos – Brasil, 1986, 1995, 2005 e 2015

Índices/categorias	Geral				Ensino superior				Sul/sudeste			
	1986	1995	2005	2015	1986	1995	2005	2015	1986	1995	2005	2015
<i>Índice 1 – Local Measure Segregation</i>												
Homem branco	0,2021	0,2370	0,2275	0,2125	0,1967	0,1913	0,2197	0,2295	0,1985	0,2276	0,2244	0,2064
Mulher branca	0,5033	0,3797	0,3314	0,3301	0,2402	0,1547	0,1033	0,1029	0,4855	0,3781	0,3281	0,3112
Homem negro	0,2363	0,2597	0,2398	0,2422	0,2476	0,2374	0,2257	0,2359	0,3036	0,3222	0,3053	0,2987
Mulher negra	0,6046	0,4743	0,3953	0,3821	0,4135	0,3589	0,2549	0,2261	0,77764	0,6126	0,4937	0,4392
<i>Índice 2 – M</i>												
M	0,3328	0,3205	0,2908	0,2870	0,2364	0,1962	0,1775	0,1846	0,3484	0,3338	0,3097	0,2970
Gênero	0,2902	0,2824	0,2556	0,2534								
Raça	0,0396	0,0355	0,0340	0,0327								
<i>Índice 3 – contribuição do grupo</i>												
Homem branco	0,2147	0,2309	0,2092	0,1721	0,3794	0,4053	0,4129	0,3445	0,2645	0,2837	0,2639	0,2219
Mulher branca	0,2928	0,2748	0,2519	0,2328	0,3549	0,3175	0,2396	0,1985	0,3520	0,3414	0,3167	0,2934
Homem negro	0,2118	0,2179	0,2414	0,2718	0,1118	0,1071	0,1414	0,1975	0,1589	0,1625	0,1900	0,2290
Mulher negra	0,2805	0,2764	0,2972	0,3231	0,1538	0,1699	0,2059	0,2594	0,2246	0,2123	0,2292	0,2555

(continua)

Índices de *Local Measure Segregation*, M, Contribuição do grupo, decomposição entre e intragrupos – Brasil, 1986, 1995, 2005 e 2015 (*continuação*)

Índices/categorias	Geral				Ensino superior				Sul/ Sudeste			
	1986	1995	2005	2015	1986	1995	2005	2015	1986	1995	2005	2015
Índice 4 – Decomposição Salarial Entre Ocupações												
Homem branco	0,2844	0,3008	0,2314	0,2150	0,1863	0,1815	0,1628	0,2235	0,2181	0,2162	0,1649	0,1611
Mulher branca	-0,0122	0,0196	0,1235	0,1633	-0,1988	-0,1424	-0,07159	-0,0582	-0,0748	-0,0432	0,0426	0,0900
Homem negro	-0,1465	-0,1282	-0,1390	-0,1307	0,0558	0,0379	0,0182	0,0384	-0,208	-0,183	-0,168	-0,1654
Mulher negra	-0,3525	-0,3426	-0,2218	-0,1684	-0,2443	-0,2308	-0,1873	-0,2226	-0,441	-0,4047	-0,2813	-0,2259
Índice 5 – Decomposição Salarial Intraocupações												
Homem branco	0,1458	0,1980	0,1710	0,1651	0,0752	0,1128	0,1215	0,2354	0,0814	0,1115	0,1168	0,0899
Mulher branca	-0,0644	-0,0605	-0,0481	0,0207	-0,0899	-0,1242	-0,0898	-0,0595	-0,1032	-0,114	-0,0809	-0,0364
Homem negro	-0,0875	-0,1138	-0,0582	-0,0497	-0,0508	-0,0447	-0,0584	-0,1035	-0,0866	-0,0909	-0,0740	-0,0186
Mulher negra	-0,1567	-0,1559	-0,1288	-0,1482	-0,1509	-0,1556	-0,1033	-0,2024	-0,1254	-0,1142	-0,1183	-0,1495

Fonte: PNAD 1986, 1995, 2005 e 2015.

El inicio de la vida sexual en México. Un análisis de los cambios en el tiempo y las diferencias sociales

The Beginning of Sexual Life in Mexico. A study of the Changes over Time and Social Differences

Olga Lorena Rojas

Orcid: 0000-0002-5374-5378

olrojas@colmex.mx

El Colegio de México, México

José Luis Castrejón Caballero

Orcid: 0000-0002-7541-1811

ljcastrejon@gmail.com

Escuela Nacional de Antropología e Historia, México

Resumen

En este artículo presentamos los resultados de un estudio sobre el inicio de la vida sexual en México, con la finalidad de detectar posibles cambios en su calendario y, en las circunstancias en las que se lleva a cabo, identificar distintos patrones de ocurrencia por cohortes para dar cuenta de los factores sociodemográficos que pueden ser predictores de esta experiencia. Con datos de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2017 y mediante diversas técnicas estadísticas, obtuvimos resultados que confirman que en las cohortes más jóvenes estudiadas se registra un ligero adelanto en la edad de iniciación sexual. Observamos además notorias diferencias en las circunstancias en las que hombres y mujeres experimentan esta transición al considerar el tipo de localidad de residencia y el estrato social de origen. Constatamos también que en México sigue vigente un doble estándar de iniciación sexual marcado por el género. Finalmente, encontramos que la coresidencia en el hogar de los padres es un factor protector para hombres y mujeres, mientras que la asistencia a la escuela

Palabras clave

Iniciación sexual
Cambios
generacionales
Diferencias
sociales
México

lo es para el caso femenino. En contraste, dejar la escuela, estar trabajando y haberse unido son fuertes predictores del riesgo de iniciarse sexualmente.

Abstract

In this article, we present the results of a study on the beginning of sexual life in Mexico in order to detect possible changes in its calendar and, in the circumstances in which it takes place, identify different patterns of occurrence by cohorts and account for sociodemographic factors that may be predictors of this experience. Using data from the Retrospective Demographic Survey (EDER) 2017, we conducted various statistical techniques that confirm that in the younger cohorts there is a slight advance in the age of sexual initiation. We observe notable differences in the circumstances in which men and women experience this transition considering the type of place of residence and the social stratum of origin. We also detect that a double standard of sexual initiation marked by gender continues to be applied in Mexico. Finally, we find that living in the parents' home is a protective factor for men and women, while school attendance is so for the female case. Instead, leaving school, working and being married are strong predictors of risk of sexual initiation.

Keywords

Sexual initiation
Generational
changes
Social differences
Mexico

Recibido: 20/02/2020
Aceptado: 25/04/2020

Introducción

La investigación social desarrollada desde la perspectiva de género ha contribuido a evidenciar que las prácticas sexuales se encuentran normadas por las concepciones culturales de lo que se considera masculino o femenino. La sexualidad adopta distintos significados para las personas en cada contexto social; por ello, debe estudiarse tomando en cuenta las características de grupos sociales particulares, considerando además que las relaciones sexuales están inmersas en inequidades orientadas por las diferencias de edad, raza, estrato social, condición ocupacional y el género. Por lo general, las mujeres se encuentran más limitadas que los hombres para decidir sobre su vida sexual y reproductiva (Dixon-Mueller, 1996).

Las inequidades de género en el ejercicio de la sexualidad se expresan en diferencias evidentes en el tiempo de la iniciación, así como en el número de parejas que se tienen, cuestiones que revelan la existencia

de un doble estándar sexual en casi todas las sociedades, el cual involucra relaciones de poder (Rivas, 1997). El tránsito al inicio de la vida sexual implica la conclusión de la niñez y la entrada a la etapa adulta en diversas culturas. El sentido otorgado por hombres y mujeres a esta importante experiencia se ubica en un ámbito cultural particular, que provee determinados marcos de interpretación (Amuchástegui, 2001). Las percepciones y las prácticas sexuales están profundamente moldeadas por el ámbito social y cultural en el cual las vidas de los jóvenes se desenvuelven. Por ello, en el estudio de esta transición es importante considerar, además del momento de ocurrencia, las características del contexto en el que ocurre esta experiencia (Zhu y Bosma, 2019).

Cuando se analiza la influencia de distintos factores sociales como marcadores de las experiencias sexuales de los jóvenes, se ha observado de manera sistemática que el nivel de escolaridad tiene fuertes efectos sobre la posibilidad de postergar o adelantar el inicio de la vida sexual. En particular, alcanzar un mayor nivel educativo, asistir a la escuela y tener mejores condiciones de vida se relacionan con un inicio más tardío de la vida sexual (Binstock y Gogna, 2015; Menkes, De Jesús y Sosa, 2019; Nigatu, Seme, Fituma y Segni, 2018; Solís, Gayet y Juárez, 2008).

Se ha observado que cuando los jóvenes tienen mayor autonomía respecto a sus padres al haberse incorporado al mercado de trabajo y haber dejado la escuela, es mayor la probabilidad de que se inicien sexualmente de manera más temprana (Binstock y Gogna, 2015; Kassahun, Gelagay, Muche, Dessie y Kassie, 2019; Nigatu et al., 2018; Solís, Gayet y Juárez, 2008; Young, Burke y Gabhainn, 2018). En cambio, cuando son más dependientes económicamente de sus padres —quienes ejercen mayor control y supervisión sobre los comportamientos juveniles— y se encuentran asistiendo a la escuela, es más probable que retrasen su entrada a la vida sexual (Binstock y Gogna, 2015; Nigatu et al., 2018; Vargas, Martínez y Potter, 2010; Zhu y Bosma, 2019).

La investigación sobre la práctica anticonceptiva durante el debut sexual de los jóvenes en diversos contextos reporta sistemáticamente que a medida que mejoran las condiciones de vida de los jóvenes es mayor la probabilidad de que usen anticoncepción durante sus

primeras experiencias sexuales, sobre todo en los ámbitos urbanos, entre la población más escolarizada y entre aquellos que se inician sexualmente a edades más tardías (Binstock y Gogna, 2015; Martes, 2015; Menkes, De Jesús y Sosa, 2019; Menkes y Suárez, 2004; Stern y Menkes, 2008; Szasz, 2001).

Es interesante destacar que, en los países europeos, desde finales del siglo XX se han registrado cambios importantes en la vida sexual y amorosa de la población juvenil. Aunque con diferencias entre los países, hombres y mujeres jóvenes inician su vida sexual a edades cada vez más semejantes y marcadamente desvinculada de las uniones conyugales. En términos del calendario de ocurrencia, se observa que el comienzo de esta transición está en declive desde hace tiempo. Sin embargo, aunque ha ido desapareciendo el inicio tardío, posterior a los 20 años, los porcentajes de los jóvenes que se inician tempranamente, antes de los 16 años, no se han modificado de manera significativa (Bozon, 2003; Gayet y Gutiérrez, 2014; Zhu y Bosma, 2019).

Por otro lado, América Latina, en general, registra un inicio de la vida sexual más temprano que otras regiones, como la asiática, pero más tardío que los países africanos (Menkes, De Jesús y Sosa, 2019; Nigatu et al., 2018). Sin embargo, conviene señalar que al interior de la región pueden distinguirse diversos calendarios de inicio sexual, puesto que se han observado edades más tempranas en países como Haití, República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Colombia y Argentina, al compararlos con otros países como México, en donde se registra un calendario un poco más tardío (Binstock y Gogna, 2015; Gayet y Gutiérrez, 2014; Martes, 2015).

Para el caso mexicano, la investigación social de corte cualitativo ha evidenciado la existencia de un doble patrón, marcado por el género, para la iniciación sexual de las personas, que se expresa mediante normas internalizadas, vigilancia social y presión del grupo de pares. De acuerdo con esta doble normativa de género, los hombres requieren tener actividad sexual y dar prueba de ella, y de este modo, confirmar la identidad masculina. En ese marco, la virginidad de los varones después de cierta edad despierta sospechas porque representa un signo de dudosa masculinidad (Amuchástegui, 2001; De Jesús, 2011; Szasz, 1998).

En contraste, las normas de género imprimen para las mujeres una connotación negativa al deseo y al placer sexual. Se espera que muestren recato y seriedad, que no hayan tenido experiencia sexual antes del matrimonio y que manifiesten no tener conocimiento o deseos sexuales. Por eso, es común que el inicio sexual entre ellas esté vinculado a una relación afectiva y al comienzo de su vida en pareja, así como de su actividad procreativa. Estas valoraciones en torno a la sexualidad femenina constituyen un fuerte obstáculo para el uso de anticoncepción, sobre todo cuando las jóvenes comienzan su actividad sexual (Amuchástegui, 1998; Menkes y Suárez, 2004; Szasz, 1997, 2001).

Es necesario tomar en cuenta, sin embargo, que la sociedad mexicana se ha transformado de manera significativa durante las recientes décadas como resultado de los cambios económicos y socioculturales promovidos por los procesos de modernización y globalización. Estas transformaciones pueden estar contribuyendo a modificar —sobre todo entre la población juvenil de las urbes y de grupos sociales más favorecidos— los significados de la sexualidad y a comenzar a cuestionar su vinculación con la reproducción. En ello ha tenido que ver la extendida difusión de la anticoncepción mediante las masivas campañas de planificación familiar, así como la educación sexual impartida en la escuela secundaria (Amuchástegui, 2001; Rivas, 1997; Szasz, 1997, 2008).

Tomando en cuenta estas premisas, realizamos un estudio sobre el inicio de la vida sexual, heterosexual y coital entre la población mexicana, con los datos provenientes de una fuente de información longitudinal como la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2017. Con este análisis queremos actualizar y ampliar los hallazgos aportados por investigaciones precedentes en el país sobre esta experiencia. Estamos particularmente interesados en detectar posibles cambios en su temporalidad y en las circunstancias en las que ocurre, para lo cual comparamos las experiencias de distintas generaciones de hombres y mujeres, considerando sus diferencias según el tipo de localidad de residencia y la pertenencia a distintos estratos sociales. Nuestros objetivos particulares son detectar posibles cambios en el calendario y en las circunstancias en las que se lleva a cabo el inicio de la vida sexual a través del tiempo, identificar distintos patrones de ocurrencia y dar cuenta de los factores sociodemográficos que pueden ser predictores de la iniciación sexual.

Algunas limitaciones de este estudio tienen que ver con los retos que enfrentan las fuentes de información como las encuestas, que, al tratar de dar cuenta de los comportamientos sexuales de las personas, enfrentan dificultades en la elaboración de las preguntas, en las declaraciones de los entrevistados y en la recolección de la información. Consideramos que las respuestas que aportan los entrevistados sobre este tema pueden tener algunas imprecisiones debido a que pueden experimentar cierta incomodidad o porque puede haber dificultades para recordar experiencias ocurridas en el pasado. En ese sentido, consideramos que los datos provenientes de encuestas por muestreo sobre la sexualidad de las personas y su análisis deben ser considerados como indicios más que verdades o certezas en torno a esas prácticas (Ericksen y Steffen, 1999).

Antecedentes de investigación

La información proveniente de diversas encuestas en el país permite constatar que, en efecto, los hombres tienen comportamientos sexuales marcadamente diferentes con respecto a las mujeres. Entre ellos, la actividad coital heterosexual ocurre a una edad más temprana que las mujeres y, por lo general, señalan haber tenido diversas experiencias sexuales alejadas de vínculos afectivos antes de unirse. Para ellos, el comienzo de la vida sexual y la unión conyugal son eventos claramente distanciados en el tiempo (Menkes, De Jesús y Sosa, 2019; Szasz, 1998).

En cambio, entre las mujeres se ha observado un inicio sexual más tardío que los hombres, además de que la distancia respecto a la unión conyugal es mucho menor. En su experiencia hay una fuerte relación entre su iniciación sexual y su entrada en unión. Es todavía muy común que comiencen la vida sexual con su cónyuge, al comenzar la unión o poco tiempo antes, cuando todavía son novios. Por ello, no es extraño que continúe prevaleciendo una escasa distancia entre el inicio de la vida sexual y el inicio de la procreación entre ellas (Menkes y Suárez, 2003, 2004; Szasz, 2001, 2008).

Cambios en el comienzo de la vida sexual

Aunque entre la población masculina mexicana todavía prevalece una iniciación sexual fuera de una relación amorosa, comienza a observarse entre los hombres más jóvenes la disminución paulatina de

experimentarla con una desconocida, mientras, se incrementa la preferencia de tenerla con una amiga y, en ocasiones, con la novia. En el caso de las mujeres continúa vigente el debut sexual como parte de una relación amorosa, puesto que tienen esta experiencia de manera generalizada con el esposo o el novio. Sin embargo, si se observa con detenimiento, se pueden detectar diferencias por generaciones, puesto que entre las de mayor edad prevalece la iniciación con el cónyuge, mientras que en las jóvenes se incrementa la experiencia con el novio (Menkes, De Jesús y Sosa, 2019; Stern y Menkes, 2008; Szasz, 2008).

Estos cambios posiblemente tengan relación con las modificaciones que las diferentes generaciones de mujeres atribuyen a sus prácticas heterosexuales. Mientras que las generaciones más antiguas asocian su sexualidad con el cumplimiento de un deber conyugal, las generaciones más jóvenes están comenzando a relacionar la experiencia sexual con sus parejas en el contexto de concepciones más modernas, relacionadas con el amor romántico (Núñez, 2007; Rivas, 1997).

En ese contexto, conviene destacar que en el país se han registrado algunos cambios respecto a la edad de la primera unión. En los años setenta los hombres se unían en promedio a los 24 años y las mujeres a los 21 años, en tanto que en 1990 los hombres incrementaron paulatinamente su edad a la unión a los 24.5 años y las mujeres a los 22 años. Estas edades alcanzaron hacia el año 2000 los 26 años para los hombres y los 24 años para las mujeres (Conapo, 2002). Estos importantes cambios aumentan entre la población juvenil la posibilidad de comenzar la actividad sexual antes de unirse. Por ello, no es extraño que comiencen a observarse, de manera más notoria en los estratos sociales más acomodados, incrementos en las proporciones de personas solteras que informan que son sexualmente activas (Solís, Gayet y Juárez, 2008; Stern y Menkes, 2008; Szasz, 2008).

Estos datos estarían indicando que el retraso en la edad a la primera unión puede estar contribuyendo al incremento de la distancia entre la edad del debut sexual y la edad de entrada en unión. Sin embargo, en el caso de las mujeres, aunque en su gran mayoría siguen la pauta normativa de iniciarse sexualmente en el marco de su primera unión conyugal, ya se ha detectado que aproximadamente un tercio de ellas comienza a tener actividad sexual antes de unirse, disociando claramente su actividad sexual de la vida conyugal (Menkes y Suárez, 2004; Solís, Gayet y Juárez, 2008). Este abandono de la secuencia normativa

del inicio sexual y la entrada en unión conyugal es más notorio entre las mujeres de generaciones más jóvenes y con elevados niveles de escolaridad (Gayet y Szasz, 2014).

En cuanto a la posible existencia de cambios en la edad de iniciación sexual, la investigación en el país aporta diferentes hallazgos. Los datos de algunas fuentes de información estarían señalando que entre las cohortes más jóvenes se estaría incrementando la actividad sexual entre las personas solteras, además de que estarían experimentando esta transición de manera más temprana (Conapo, 2004; Menkes y Suárez, 2003).

En este sentido, al comparar los datos de diversas encuestas se reporta que, en efecto, el calendario de esta transición se está adelantando, pero no a edades muy tempranas. Se señala que el calendario de inicio sexual en realidad muestra leves modificaciones, puesto que el inicio más temprano entre las cohortes más jóvenes de hombres y mujeres puede estar asociado a una tendencia al adelanto del calendario previo a los 20 años, pero no antes de los 16 años, que se consideraría un inicio muy temprano (Gayet y Gutiérrez, 2014; Gayet y Szasz, 2014).

Hay que considerar que el comienzo más temprano de la vida sexual puede estar relacionado con uniones igualmente tempranas, todavía vigentes en las comunidades indígenas y rurales, así como en las zonas populares urbanas. Además de ello, algunas investigaciones señalan que el inicio sexual precoz entre la población urbana mejor posicionada socialmente puede estar asociado a nuevas concepciones sobre la sexualidad, a mayores niveles de libertad —en parte debido a la influencia estadounidense— y a la postergación de la unión conyugal (Menkes y Suárez, 2003).

Diferencias sociales en el comienzo de la vida sexual

En México se ha constatado, en el caso de las mujeres, que la edad de inicio sexual es menor entre aquellas que tienen los niveles de escolaridad más bajos, y que se incrementa sistemáticamente conforme alcanzan niveles superiores. En particular, las mujeres pertenecientes a las cohortes más jóvenes con niveles escolares elevados están postergando de manera notoria el comienzo de su vida sexual, conyugal y reproductiva después de los 20 años, al compararlas con las mujeres de generaciones anteriores. Entre ellas es común el uso de anticoncepción

durante los primeros años de su actividad sexual y en mayor proporción que las del medio rural y menos escolarizadas. El caso de las mujeres que han alcanzado el nivel profesional en sus estudios es notable, dado que han logrado establecer una clara disociación entre la entrada a la actividad sexual, el inicio de la vida en pareja y el comienzo de su reproducción (Gayet y Szasz, 2014; Solís, Gayet y Juárez, 2008).

En contraste, se ha documentado que entre las mujeres con escasa escolaridad es común que se inicien de manera precoz las relaciones sexuales y la unión marital. Estas mujeres experimentan trayectorias de vida muy tradicionales, marcadas por la simultaneidad de esas transiciones (Gayet y Szasz, 2014; Solís, Gayet y Juárez, 2008; Szasz, 2001, 2008; Welti, 2005).

Cuando se toma en consideración el ámbito de residencia, se ha observado que la población juvenil de contextos urbanos cuenta con acceso a mejores niveles de escolaridad, mayor diversidad en sus opciones de vida y más amplias posibilidades de movilidad espacial, además de que se encuentran en contacto con nuevos repertorios y normativas en torno a la sexualidad. En estos contextos urbanos existe mayor aceptación respecto a los deseos y las vivencias sexuales de las mujeres previas a la entrada a la vida matrimonial (Esteinou, 2008; Szasz, 2001). Es probablemente por ello que, entre la población femenina de cohortes más jóvenes, se observa una posposición de su iniciación sexual, que estaría más relacionada con sus deseos y no tanto con la entrada en unión. Además, también se ha detectado que la joven población masculina está postergando el inicio de su vida sexual y su entrada en unión; decisiones que estarían relacionadas con una selección más cuidadosa de la pareja con quien desean iniciarse sexualmente (Amuchástegui, 2001; Szasz, 2001).

Esta situación contrasta con la que se experimenta en las áreas rurales y en las comunidades indígenas, sobre todo entre las mujeres, quienes se inician sexualmente a edades más tempranas que en las ciudades —en ocasiones cuando todavía son púberes— y de manera simultánea con el comienzo de su vida marital y procreativa. En estas condiciones resulta prácticamente imposible para las muchachas poder usar algún método anticonceptivo, puesto que la práctica anticonceptiva femenina en estos ámbitos es fuertemente rechazada, ya sea antes o durante la unión (Amuchástegui, 2001; Bellato, 2001; Szasz, 2001, 2008).

Por otra parte, la estratificación social de la población también es un factor que se encuentra vinculado a las diferencias observadas en las experiencias sexuales iniciales de la población juvenil, ya que los jóvenes de estratos más favorecidos prefieren dejar pasar algún tiempo entre su iniciación sexual y el comienzo de su vida en unión. Además, en virtud de que estos grupos sociales se encuentran vinculados con nuevos significados y valoraciones sobre la sexualidad y la virginidad, se ha documentado que las primeras experiencias sexuales masculinas comienzan a estar inmersas con mayor frecuencia en relaciones afectivas y las experiencias sexuales femeninas en soltería tienen mayor aceptación que en otros grupos sociales (Amuchástegui, 2001; Stern, 1997; Szasz, 2001).

En estos grupos sociales, la posibilidad de permanecer en el sistema educativo de manera más prolongada con miras a la obtención de un empleo está contribuyendo a ampliar las opciones de vida para los jóvenes y, en particular, para las mujeres más allá del matrimonio y la maternidad. Son estas posibilidades vitales las que influyen en un uso más frecuente de anticoncepción antes del matrimonio. Algunos estudios han dado cuenta de la existencia de un grupo de mujeres de estratos medios y altos que señalan que han permanecido solteras algunos años después de haber comenzado su actividad sexual (Solís, Gayet y Juárez, 2008; Stern, 1997; Szasz, 2001, 2008).

Sin embargo, conviene señalar que en estos estratos sociales acomodados persisten todavía inequidades entre las experiencias sexuales masculinas y femeninas. La prerrogativa social de iniciarse sexualmente antes de la unión todavía es más restringida para las mujeres, puesto que entre ellas la iniciación sexual se experimenta generalmente en el contexto del noviazgo y de manera más tardía que los varones. Es probable que esto contribuya a explicar una mayor diferencia en la edad media del inicio de la vida sexual entre hombres y mujeres de estos grupos sociales, que la observada en los estratos bajos (Szasz, 2008).

En contraste, para las mujeres de estratos sociales más empobrecidos, sigue vigente el estereotipo femenino conformado alrededor de fuertes restricciones y vigilancia social en torno a la sexualidad y la negación de su deseo. Esta estricta normativa de género establece como obligación para las mujeres la estrecha cercanía entre la iniciación sexual y el comienzo de la vida en pareja, puesto que la sexualidad femenina solo tiene sentido en el contexto de la unión conyugal y de la maternidad.

Ambos elementos continúan definiendo la vida y la valoración social de las mujeres de estos grupos sociales (Szasz, 2008). La permanencia de esta norma social permite entender la persistencia del embarazo adolescente como parte de la trayectoria de vida de las mujeres de estos estratos sociales, marcada por una unión muy temprana y seguida de —o incluso precedida por— un embarazo (Menkes y Suárez, 2003, 2004; Stern, 1997, 2007; Stern y Menkes, 2008).

El uso de anticoncepción en el comienzo de la actividad sexual

En México, como resultado de las campañas de prevención del VIH-Sida y de la educación sexual obligatoria, impartida en la escuela secundaria desde los años noventa, se ha incrementado el uso del condón entre la población juvenil. Sin embargo, se observa que cuando los jóvenes se inician sexualmente de manera precoz hay un menor uso de anticonceptivos durante la primera relación sexual (Vargas, Martínez y Potter, 2010).

Las posibilidades de usar condón durante la primera relación sexual son más escasas para las mujeres que para los hombres. Los varones usan con mayor frecuencia que las jovencitas algún anticonceptivo, en particular el condón, sobre todo si se inician con la novia. En cambio, la probabilidad de usar anticoncepción cuando los jóvenes se inician con la esposa o con el esposo, es muy escasa. En particular, son las mujeres indígenas quienes emplean muy escasamente algún método durante esta experiencia (Stern y Menkes, 2008; Szasz, 2001).

Puede decirse entonces que el uso del condón durante la iniciación sexual es menor entre las mujeres, entre la población de estratos sociales desfavorecidos, en las zonas rurales, en las generaciones mayores, entre quienes se inician a edades muy tempranas y entre quienes tienen esta experiencia con su cónyuge (Menkes, De Jesús y Sosa, 2019).

Aspectos metodológicos

La fuente de información, las variables y los métodos de investigación

Considerando estos antecedentes de investigación, en este estudio queremos actualizar y ampliar, en la medida de lo posible, el conocimiento sobre la iniciación sexual de la población mexicana con la

finalidad de observar posibles cambios en su calendario y en las circunstancias en las que se lleva a cabo, además de detectar distintos patrones de ocurrencia entre generaciones y dar cuenta de los factores sociodemográficos que pueden ser predictores de esta transición. Para ello, comparamos las experiencias de distintas generaciones de hombres y mujeres, tomando en consideración el tipo de localidad en la que residen y su pertenencia a distintos estratos sociales.

Utilizamos los datos de la Encuesta Demográfica Retrospectiva 2017, una fuente de información longitudinal con representatividad a nivel nacional, que provee datos relevantes sobre la historia de vida de la población entrevistada. En particular, sobre las trayectorias residencial, escolar, laboral, anticonceptiva, conyugal y reproductiva, con las cuales se pueden establecer vinculaciones analíticas, como es nuestro caso. La muestra total es de 23,831 personas, de las cuales el 45.1% son hombres y el 54.9% mujeres. Considerando el enfoque de curso de vida, la base de datos de los años-persona proporciona información de un total de 886,976 registros (INEGI, 2018). Es importante señalar que para la pregunta sobre la edad de iniciación sexual se observó una tasa de no respuesta de 12.3% para toda la población entrevistada, resultando mayor entre la población masculina (15.7%) que entre la femenina (9.5 por ciento).

Para observar la existencia de posibles cambios en esta transición, analizamos la experiencia de tres cohortes o generaciones, aquellas nacidas en 1965-1969, 1975-1979 y 1985-1989. La muestra total de las tres cohortes consideradas es de 8,833 personas, de las cuales 2,390 pertenecen a la generación 1965-1969; 3,184 a la de 1975-1979 y 3,259 a la de 1985-1989. La selección de estas cohortes se debió a la ubicación en el tiempo histórico y social en el que se desarrollaron sus vidas como adolescentes y jóvenes, y en el cual tuvo lugar su iniciación sexual. Estas tres cohortes han vivido en un contexto de masificación de la escolaridad, de amplia difusión y legitimación de la práctica anticonceptiva y, en particular, las cohortes intermedia y más joven recibieron educación sexual en la enseñanza secundaria. Con la finalidad de observar la existencia de posibles cambios en la experiencia de esta transición, hemos elegido una separación de diez años entre las cohortes seleccionadas para su estudio.

Para analizar las diferencias sociales y su influencia en las circunstancias en las que ocurre la iniciación sexual, consideramos el tipo de localidad de residencia y el estrato social de origen de los entrevistados. En cuanto al tipo de localidad, distinguimos tres: a) indígena, si la persona habita en una localidad rural (menor de 2,500 habitantes) y habla alguna lengua indígena; b) rural, si reside en una población rural (menor de 2,500 habitantes) y no habla una lengua indígena, y c) urbana, si habita en una localidad de 2,500 habitantes o más.

La variable de estrato social de origen retoma el índice de origen social (IOS) construido a partir de las características de la familia de origen del entrevistado, cuando tenía 15 años de edad. Las variables que conforman este índice incluyen el nivel de educación y la ocupación de los padres, además de la posesión de bienes y la disponibilidad de servicios en la vivienda (Solís, 2016). La consideración de este índice nos permitió distribuir a los individuos en tres estratos sociales de origen: muy bajo, bajo y medio/alto.

Para analizar las circunstancias en las que ocurre la iniciación sexual, estudiamos la asociación entre el tipo de localidad de residencia y el estrato social de origen con diversas variables sociodemográficas al momento de la iniciación sexual: coresidencia en casa de los padres; permanencia en el sistema educativo; incorporación al mercado de trabajo; uso de anticoncepción; estado civil, y nivel de escolaridad al momento de iniciarse sexualmente. Respecto al estado civil, es conveniente señalar que estamos particularmente interesados en la vinculación entre el inicio de la vida sexual y la primera unión. Entre las mujeres fue relativamente frecuente encontrar casos en los que la entrada en unión y la iniciación sexual ocurrieron en el mismo año, sin saber exactamente cuál evento ocurrió primero. Por ello, en nuestros análisis señalamos que en estos casos el comienzo de la vida sexual ocurrió en el marco de su primera unión.

Para realizar este estudio llevamos a cabo un análisis estadístico en cuatro fases. En la primera calculamos las edades medianas y los intervalos de confianza de la iniciación sexual para hombres y mujeres por cohorte, tipo de localidad de residencia y estrato social de origen. En la segunda parte realizamos un análisis estadístico bivariado (prueba de Chi-cuadrada X^2) para analizar la asociación entre el tipo de localidad de residencia y el estrato social de origen con diversas características sociodemográficas para cada una de las tres cohortes estudiadas. En la

tercera parte utilizamos el análisis de correspondencias múltiples para detectar en cada cohorte la existencia de diferentes patrones de iniciación sexual. Finalmente, a partir de un enfoque de curso de vida, estimamos varios modelos de regresión de Cox con la intención de dar cuenta de los factores sociodemográficos que pueden ser predictores del riesgo de experimentar la primera relación sexual. Dos de ellos consideran a la cohorte como variable explicativa, para el caso masculino y el femenino. Y otros seis modelos, uno para cada una de las tres cohortes estudiadas, para el caso de los hombres y de las mujeres.

Resultados de la investigación

Edades medianas a la iniciación sexual

De acuerdo con la información del Cuadro 1, en términos generales, la edad mediana a la iniciación sexual de hombres y mujeres ha ido disminuyendo a través de las cohortes. Sin embargo, este rejuvenecimiento ha sido paulatino y no ha implicado grandes cambios, en términos de una iniciación precoz (antes de los 16 años). Si en la cohorte más antigua (1965-1969) los varones registraban un inicio sexual alrededor de los 18 años, en la cohorte más joven (1985-1989) esta edad era de 17 años. Las mujeres han registrado una disminución semejante, pues en la cohorte intermedia (1975-1979) sus edades medianas rondaban los 19 años, en tanto que para la cohorte más joven es de 18 años.

Llama la atención que en la cohorte más joven se observen edades medianas uniformes entre los hombres como entre las mujeres. Al respecto, consideramos que estos datos pueden estar reflejando importantes cambios en los comportamientos sexuales de las generaciones más jóvenes y que probablemente estén propiciando una disminución de las desigualdades sociales en el calendario de ocurrencia de esta experiencia. De cualquier manera, estos hallazgos sugieren la importancia de continuar investigando sobre este particular, desde aproximaciones cuantitativas como cualitativas.

Al interior de cada cohorte no encontramos diferencias significativas entre hombres y mujeres indígenas, ni entre la población rural de la cohorte más antigua (1965-1969). En todos los demás grupos sociales, definidos por el tipo de localidad y el estrato social de origen, se observa una edad mediana de inicio sexual más temprana en los hombres respecto a las mujeres.

Cuadro 1
Edades medianas a la iniciación sexual por
cohorte, sexo y grupos sociales

Variable / Categoría	1965-1969					
	Hombres			Mujeres		
	n	Med	IC 95 %	n	Med	IC 95 %
Tipo de localidad						
Indígena	60	17	16-19	78	17*	16-18
Rural	189	18^	18-19	249	18*	18-19
Urbana	720	18+^	18-19	1030	19+*^	19-20
Estrato social de origen						
Muy bajo	332	18^	18-19	493	18*^	18-19
Bajo	286	18+^	18-19	458	19+*^	19-20
Medio/Alto	337	17+	17-18	383	20+*^	20-21
1975-1979						
Tipo de localidad						
Indígena	73	18	18-20	91	18*	17-20
Rural	239	18+^	18-19	326	19+*	19-20
Urbana	1008	17+^	17-18	1348	19+*^	19-20
Estrato social de origen						
Muy bajo	477	18+^	18-19	646	18+*^	18-19
Bajo	403	18+^	18-19	599	19+*^	19-20
Medio/Alto	427	17+	17-18	489	20+*^	20-21
1985-1989						
Tipo de localidad						
Indígena	75	17	16-18	107	18	18-19
Rural	248	17+^	17-18	334	18+	18-19
Urbana	1063	17+^	17-18	1305	18+^	18-19
Estrato social de origen						
Muy bajo	411	17+^	17-18	653	18+^	18-19
Bajo	458	17+^	17-18	584	18+^	18-19
Medio/Alto	508	17+	17-18	495	18+^	18-19

+ Diferencias significativas ($p < 0.05$) entre hombres y mujeres en cada tipo de localidad, estrato social y cohorte

* Diferencias significativas ($p < 0.05$) entre: a) tipo de localidad y b) estrato social para cada cohorte y sexo

^ Diferencias significativas ($p < 0.05$) entre cohortes para: a) cada tipo de localidad y sexo y b) cada estrato social y sexo

Fuente: Elaboración propia con base en la EDER 2017.

Al comparar en detalle la experiencia entre los hombres y entre las mujeres por tipo de localidad de residencia y estrato social de origen, solo encontramos diferencias significativas en las cohortes femeninas de 1965-1969 y 1975-1979. En ambas cohortes se observa que las mujeres indígenas se iniciaron sexualmente a una edad más temprana que las rurales, en tanto que las mujeres que habitan en zonas urbanas experimentaron esta transición a una edad más tardía. También se observa para el caso de estas cohortes una relación directa entre el estrato social de origen y la edad de la primera relación sexual, es decir, a mejores condiciones de vida, las mujeres tienen una iniciación sexual más tardía respecto a las mujeres de los estratos sociales menos favorecidos.

Las circunstancias en las que ocurre la iniciación sexual por tipo de localidad de residencia

Al analizar la asociación entre el tipo de localidad de residencia y las características sociodemográficas de la población masculina en las tres cohortes estudiadas (Cuadro 2), observamos que, en los ámbitos urbanos, la iniciación sexual masculina ocurrió de manera preponderante en la cohorte más joven cuando los varones todavía vivían con sus padres (80 %). Y, en las tres cohortes estudiadas, fue más común que estos hombres urbanos comenzaran su vida sexual mientras se encontraban estudiando y se encontraban solteros. Por ello, son elevadas las proporciones de los que se iniciaron sexualmente contando con una escolaridad de secundaria o bachillerato. Estos porcentajes se incrementan de manera importante en la cohorte más joven.

En cambio, la población masculina de contextos rurales y comunidades indígenas tuvo su primera relación sexual de manera mayoritaria cuando habían dejado la escuela —en los niveles de primaria y secundaria— y se habían incorporado al mercado de trabajo. Proporciones importantes de ellos comenzaron su vida sexual en el marco de su primera unión.

Es notorio que, a través de las generaciones, en todos los tipos de localidad de residencia, se registre una importante disminución en las proporciones de los hombres que se iniciaron sexualmente en el contexto de su entrada en unión.

Cuadro 2
Hombres. Asociación entre tipo de localidad de residencia y características sociodemográficas al momento de la primera relación sexual. Porcentajes por tipo de localidad de residencia

	1965-1969		
	Indígena (n=61)	Rural (n=189)	Urbana (n=720)
Corresidencia con padres	65.0	68.3	71.7
Estudiaba	16.7	22.3	40.0
Trabajaba	61.7	66.7	54.3
Usó anticoncepción	0.0	4.2	5.0
Unido/casado	33.3	27.5	17.8
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	68.3	54.0	28.6
Secundaria	13.3	30.2	33.8
Bachillerato o superior	18.3	15.9	37.6
	1975-1979		
	Indígena (n=61)	Rural (n=189)	Urbana (n=720)
Corresidencia con padres	61.6	66.5	71.3
Estudiaba	11.0	20.5	44.1
Trabajaba	79.5	64.0	54.5
Usó anticoncepción	2.7	2.5	7.0
Unido/casado	28.8	24.3	14.8
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	61.6	52.3	23.1
Secundaria	28.8	32.6	34.2
Bachillerato o superior	9.6	15.1	42.7
	1985-1989		
	Indígena (n=61)	Rural (n=189)	Urbana (n=720)
Corresidencia con padres	68.0	73.8	79.9
Estudiaba	29.3	41.5	61.2
Trabajaba	65.3	55.2	43.4
Usó anticoncepción	2.7	8.5	10.7
Unido/casado	17.3	14.9	9.7
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	44.0	25.4	10.1
Secundaria	41.3	39.5	33.5
Bachillerato o superior	14.7	35.1	56.4

Prueba de χ^2 . Todas las asociaciones fueron significativas ($p < 0.05$), excepto donde se resaltan las cifras con negritas.

Fuente: Elaboración propia con base en la EDER 2017.

Cuadro 3
Mujeres. Asociación entre tipo de localidad de residencia y características sociodemográficas al momento de la primera relación sexual. Porcentajes por tipo de localidad de residencia

	1965-1969		
	Indígena (n=78)	Rural (n=249)	Urbana (n=1030)
Corresidencia con padres	28.2	23.3	41.6
Estudiaba	6.4	7.2	18.1
Trabajaba	43.6	34.1	46.4
Usó anticoncepción	0.0	4.4	5.9
Unida/casada	65.4	74.3	55.7
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	89.7	68.3	35.0
Secundaria	5.1	18.9	24.5
Bachillerato o superior	5.1	12.9	40.5
	1975-1979		
	Indígena (n=78)	Rural (n=249)	Urbana (n=1030)
Corresidencia con padres	36.3	33.1	48.1
Estudiaba	11.0	7.4	26.0
Trabajaba	46.2	34.7	50.1
Usó anticoncepción	2.2	6.1	9.2
Unida/casada	62.6	64.1	44.5
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	75.8	58.0	24.5
Secundaria	14.3	26.4	31.0
Bachillerato o superior	9.9	15.6	44.5
	1985-1989		
	Indígena (n=78)	Rural (n=249)	Urbana (n=1030)
Corresidencia con padres	29.9	40.4	60.5
Estudiaba	28.0	24.0	47.0
Trabajaba	43.0	39.8	40.0
Usó anticoncepción	4.7	6.0	8.9
Unida/casada	59.8	58.1	31.3
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	40.2	26.6	12.5
Secundaria	31.8	41.3	28.6
Bachillerato o superior	28.0	32.0	58.9

Prueba de X². Todas las asociaciones fueron significativas (p<0.05), excepto donde se resaltan las cifras con negritas.

Fuente: Elaboración propia con base en la EDER 2017.

En el caso de las mujeres (Cuadro 3)—de manera similar a la experiencia de los hombres—, en las tres cohortes estudiadas, aquellas que residían en las ciudades se iniciaron sexualmente de manera preponderante cuando se encontraban coresidiendo con sus padres y estaban estudiando. Probablemente esta condición esté relacionada con las mayores proporciones de mujeres urbanas que habían alcanzado el bachillerato o el nivel superior de escolaridad cuando tuvieron esta experiencia. A pesar de ello, es notorio que importantes porcentajes de estas mujeres se iniciaron sexualmente en el marco de su primera unión, aunque a través de las generaciones esta circunstancia disminuye paulatinamente, al tiempo que se incrementa entre ellas el uso de anticoncepción durante esta experiencia, sobre todo en la cohorte intermedia respecto a la más antigua.

Las mujeres de las tres cohortes en estudio que residían en contextos rurales o indígenas se iniciaron sexualmente de manera preponderante cuando ya habían dejado la escuela —con muy escasos niveles de escolaridad, cuando mucho de primaria— y en el contexto de su entrada en unión. Proporciones importantes de ellas ya estaban insertas en el mercado laboral cuando experimentaron esta transición.

Queremos llamar la atención sobre la importante disminución a través del tiempo y en los tres tipos de localidad de residencia, de los porcentajes de mujeres que comenzaron su vida sexual en el marco de su primera unión. Destaca el caso de la cohorte más joven (1985-1989) en la que se incrementaron notablemente las proporciones de aquellas que tuvieron esta experiencia cuando todavía coresidían con sus padres y estaban en el sistema escolar.

Las circunstancias en las que ocurre la iniciación sexual por estrato social de origen

Al analizar las circunstancias en las que los hombres experimentaron su primera relación sexual de acuerdo con su estrato social de origen (Cuadro 4), notamos que la coresidencia con los padres y la asistencia a la escuela generalmente se incrementan en cada cohorte, y entre cohortes, cuanto mejor es su situación social.

Cuadro 4
Hombres. Asociación entre estrato social de origen y características sociodemográficas al momento de la primera relación sexual. Porcentajes por estrato social de origen

	1965-1969		
	Muy bajo (n=332)	Bajo (n=286)	Medio / Alto (n=337)
Corresidencia con padres	67.2	67.8	78.9
Estudiaba	14.5	31.2	59.6
Trabajaba	68.1	58.4	45.1
Usó anticoncepción	2.7	3.5	7.4
Unido/casado	26.8	23.1	11.6
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	65.7	32.2	10.4
Secundaria	24.7	37.8	32.3
Bachillerato o superior	9.6	30.1	57.3
	1975-1979		
	Muy bajo (n=332)	Bajo (n=286)	Medio / Alto (n=337)
Corresidencia con padres	62.3	69.0	80.3
Estudiaba	17.8	33.3	66.3
Trabajaba	69.4	61.3	40.5
Usó anticoncepción	2.9	6.7	8.7
Unido/casado	25.4	15.4	10.1
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	53.5	28.3	5.9
Secundaria	31.4	40.2	30.4
Bachillerato o superior	15.1	31.5	63.7
	1985-1989		
	Muy bajo (n=332)	Bajo (n=286)	Medio / Alto (n=337)
Corresidencia con padres	68.9	79.5	84.8
Estudiaba	35.0	51.6	76.9
Trabajaba	58.4	51.3	33.3
Usó anticoncepción	4.4	7.9	16.1
Unido/casado	19.7	10.3	4.9
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	32.8	11.6	2.8
Secundaria	41.8	39.7	25.0
Bachillerato o superior	25.3	48.7	72.2

Prueba de χ^2 . Todas las asociaciones fueron significativas ($p < 0.05$).

Fuente: Elaboración propia con base en la EDER 2017.

En las tres cohortes estudiadas, encontramos en el estrato social medio/alto importantes proporciones de hombres que alcanzaron elevados niveles de escolaridad —como el bachillerato o educación superior— cuando tuvieron esta experiencia. En cambio, los porcentajes de quienes tuvieron su debut sexual en el marco de su entrada en unión o se encontraban insertos en el mercado de trabajo, disminuyen en este mismo estrato social.

La experiencia sexual inicial de los varones de estratos más precarios (muy bajo y bajo), en las tres cohortes, tuvo lugar mayoritariamente entre los que no estudiaban en ese momento, los que se habían incorporado al mercado de trabajo y, en las cohortes más antigua e intermedia, entre los que únicamente habían alcanzado niveles primarios y secundarios de escolaridad. Estas condiciones se vinculan a las proporciones importantes de quienes tuvieron esta experiencia en el contexto de su primera unión.

El uso de anticoncepción durante esta experiencia fue realmente escaso a través de las cohortes masculinas estudiadas, aunque llama la atención que el empleo de algún método fue siempre más frecuente en el estrato social medio/alto, incrementándose de manera importante en la cohorte más joven (16 por ciento).

Entre la población femenina (Cuadro 5), se observa que a través de las generaciones se ha incrementado la posibilidad de iniciarse sexualmente cuando todavía vivían con sus padres y se encontraban estudiando. Es notorio que en el estrato social medio/alto, esta situación siempre ha sido más común que en los otros estratos sociales. De manera preponderante, las mujeres de este estrato tuvieron su debut sexual cuando habían alcanzado estudios de nivel bachillerato o superior, además de que importantes porcentajes de ellas ya se encontraban insertas en el mercado de trabajo.

En cambio, entre las mujeres de estratos sociales más desfavorecidos (muy bajo y bajo), de las tres cohortes, ha sido más frecuente iniciarse sexualmente cuando ya no estaban asistiendo a la escuela y en el contexto de su primera unión. En concordancia, las mujeres del estrato social muy bajo contaban mayoritariamente con estudios de primaria cuando tuvieron su primera relación sexual, mientras que las del estrato bajo alcanzaron niveles de secundaria.

Cuadro 5
Mujeres. Asociación entre estrato social de origen y
características sociodemográficas al momento de la primera
relación sexual. Porcentajes por estrato social de origen

	1965-1969		
	Muy bajo (n=493)	Bajo (n=458)	Medio / Alto (n=383)
Corresidencia con padres	26.6	37.6	51.7
Estudiaba	6.5	10.9	32.7
Trabajaba	40.2	45.6	48.8
Usó anticoncepción	3.2	6.1	7.3
Unida/casada	68.4	63.5	43.6
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	75.1	39.5	8.6
Secundaria	18.3	29.9	18.8
Bachillerato o superior	6.7	30.6	72.6
	1975-1979		
Corresidencia con padres	32.5	47.7	58.7
Estudiaba	10.4	19.4	40.3
Trabajaba	42.6	48.4	51.7
Usó anticoncepción	5.4	6.7	14.5
Unida/Casada	61.6	46.7	35.2
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	62.8	23.9	4.5
Secundaria	23.1	42.2	22.1
Bachillerato o superior	14.1	33.9	73.4
	1985-1989		
Corresidencia con padres	38.9	57.2	73.7
Estudiaba	22.5	41.3	66.9
Trabajaba	39.2	45.2	35.4
Usó anticoncepción	6.9	6.3	11.5
Unida/casada	54.1	36.5	19.0
Nivel de escolaridad a la 1. ^a relación sexual			
Sin escolaridad/primaria	33.4	11.1	1.6
Secundaria	38.0	37.3	14.9
Bachillerato o superior	28.6	51.5	83.4

Prueba de X². Todas las asociaciones fueron significativas (p<0.05).

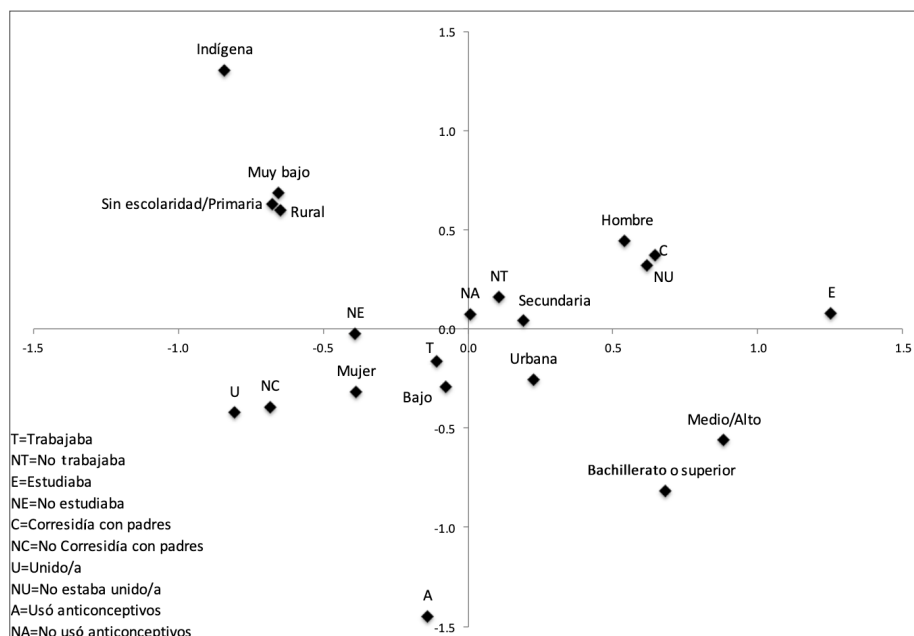
Fuente: Elaboración propia con base en la EDER 2017.

En los tres estratos sociales de la cohorte femenina más joven ha disminuido de manera notoria la iniciación sexual en el contexto de la unión marital. A pesar de que en las tres cohortes de mujeres se reportan bajos porcentajes de uso de métodos anticonceptivos durante esta experiencia, llama la atención que entre aquellas del estrato social medio/alto —al igual que en el caso masculino— ha habido un mayor uso de anticoncepción respecto a las mujeres de los otros estratos sociales, que se ha ido incrementando a través del tiempo.

Patrones de iniciación sexual por cohortes

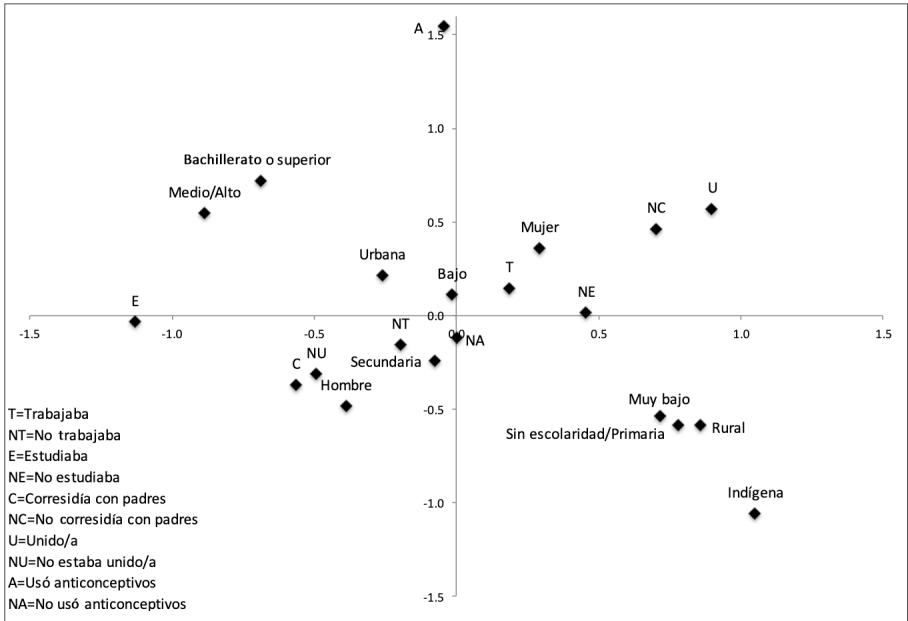
Con el objetivo de detectar distintos patrones de iniciación sexual para cada una de las tres cohortes estudiadas, 1965-1969, 1975-1979 y 1985-1989, hemos considerado de manera simultánea o multivariada, mediante el análisis de correspondencias múltiple, el tipo de localidad de residencia, el estrato social de origen y el sexo, junto con las variables que caracterizan las circunstancias en las que se tuvo dicha experiencia. Los resultados se muestran en las Gráficas 1, 2 y 3, en las que se representan en dos dimensiones la cercanía o lejanía de las categorías de las variables estudiadas a partir de las relaciones existentes entre ellas.

Gráfica 1
Diferentes patrones de iniciación sexual
en México, cohorte 1965-1969



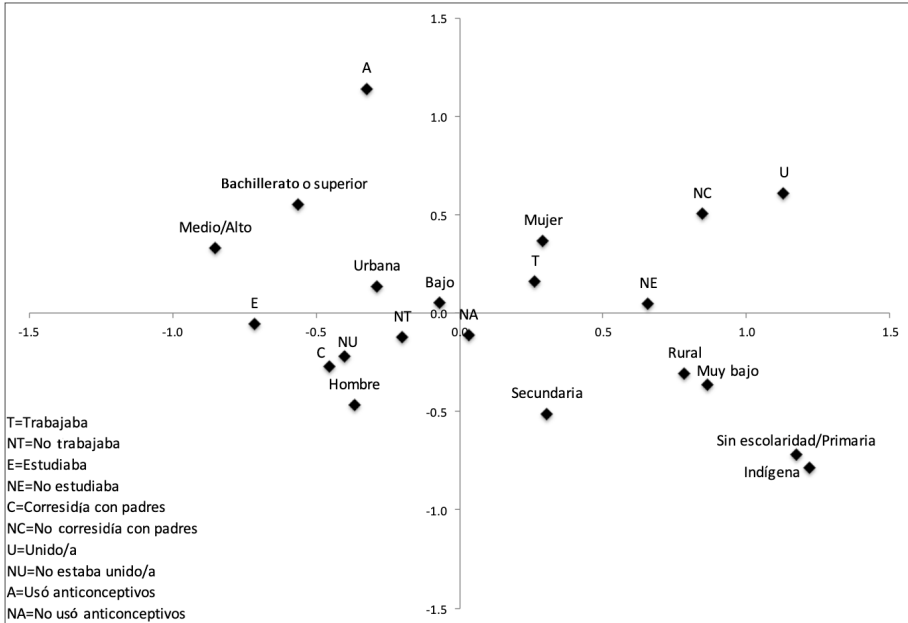
Fuente: Elaboración propia con base en la EDER 2017.

Gráfica 2
Diferentes patrones de iniciación sexual
en México, cohorte 1975-1979



Fuente: Elaboración propia con base en la EDER 2017.

Gráfica 3
Diferentes patrones de iniciación sexual
en México, cohorte 1985-1989



Fuente: Elaboración propia con base en la EDER 2017.

En el caso de la cohorte 1965-1969 (Gráfica 1), se puede observar en el cuadrante superior derecho una agrupación en la que se encontrarían los hombres de estrato bajo que tuvieron su primera relación sexual cuando corresidían con sus padres, estaban en la escuela (con nivel de secundaria), no se habían incorporado al mercado laboral y no estaban unidos, además de que no usaron ningún método anticonceptivo al momento de tener esta experiencia. En el cuadrante superior izquierdo se observa un patrón de iniciación sexual que correspondería a las personas que residían en localidades rurales e indígenas, de estrato social muy bajo y con escasa escolaridad.

Por su parte, las mujeres de estrato bajo se agruparon en otro patrón de iniciación sexual, en el cuadrante inferior izquierdo, que ocurrió de manera preponderante en el contexto de su primera unión, cuando ya no corresidían con sus padres, habían dejado la escuela y se encontraban trabajando. Es muy probable que no hayan utilizado algún método anticonceptivo durante esta experiencia. Finalmente, en el cuadrante inferior derecho se agruparon aquellas personas de ámbitos urbanos, que pertenecían al estrato social medio/alto y que tenían una escolaridad de bachillerato o nivel superior.

Para la cohorte 1975-1979 (Gráfica 2), se puede observar en el cuadrante superior derecho un patrón de iniciación sexual que corresponde a las mujeres de estrato bajo, quienes en su mayoría ya no corresidían con sus padres ni estaban estudiando, se encontraban trabajando y probablemente estaban unidas cuando tuvieron su primera relación sexual, seguramente sin haber utilizado anticoncepción.

En el cuadrante superior izquierdo, se encontrarían agrupadas aquellas personas de localidades urbanas, de estrato social medio/alto y que tenían estudios de bachillerato o nivel superior cuando se iniciaron sexualmente.

Los hombres de estrato bajo tienden a agruparse, en el cuadrante inferior izquierdo, en un patrón de iniciación sexual caracterizado por la corresponsión con sus padres, la permanencia en el sistema escolar (con un nivel de escolaridad de secundaria), sin estar unidos, ni incorporados al mercado laboral y sin haber usado anticoncepción.

Finalmente, en el cuadrante inferior derecho se observa nuevamente el patrón estructural que corresponde a las personas que residían en localidades rurales e indígenas, de estrato social muy bajo y con muy precarios niveles de escolaridad.

En la cohorte más joven (1985-1989) (Gráfica 3), se observan patrones semejantes a los detectados en las cohortes anteriores. En el cuadrante superior derecho se agrupan las mujeres, quienes se iniciaron sexualmente en el marco de su primera unión, cuando ya habían dejado de corresidir en el hogar de sus padres y ya no asistían a la escuela, muy probablemente porque se encontraban trabajando. Es probable que no hayan usado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

En el cuadrante superior izquierdo, se agrupan aquellas personas que habitaban en contextos urbanos, de estrato medio/alto, con elevados niveles de escolaridad y que probablemente utilizaron anticoncepción durante su iniciación sexual.

En el cuadrante inferior izquierdo se aprecia otro patrón que agrupa a los hombres de estrato bajo, que corresidían con sus padres, que estaban estudiando y no estaban trabajando. Estos varones no se encontraban unidos y tampoco utilizaron algún método anticonceptivo al momento de tener su primera relación sexual.

Finalmente, en el cuadrante inferior derecho existe una asociación entre las personas que residían en localidades rurales e indígenas, de estrato social muy bajo y con niveles bajos de escolaridad.

Modelos de regresión de Cox

Considerando el enfoque de curso de vida, en el cual cada caso representa un año-persona, se construyeron ocho modelos de regresión de Cox con la intención de estimar las razones de riesgo de tener la primera relación sexual. Los dos primeros, uno para cada sexo, consideran a la cohorte como un factor explicativo, en tanto que los restantes se han hecho para cada una de las tres cohortes estudiadas, separándolos para el caso masculino y el femenino.

Los resultados de los ajustes de los dos primeros modelos que se presentan en el Cuadro 6, permiten observar que el riesgo de iniciar la vida sexual a una edad más temprana se ha incrementado significativamente, tanto en el caso masculino como en el femenino, en la

cohorte más joven al compararla con la cohorte *más antigua*. Este riesgo es de 21% entre los hombres y se incrementa en 26% para las mujeres.

En cuanto al estrato social, se aprecia que para los hombres el riesgo de iniciarse sexualmente a una edad más temprana se incrementa significativamente en un 30% en el estrato social medio/alto respecto al muy bajo. Entre las mujeres el riesgo de iniciarse más temprano en el estrato bajo es 11% mayor respecto al estrato muy bajo y se incrementa a 18% en el estrato medio/alto. El tipo de localidad de residencia solo permite inferir riesgos significativamente mayores (16%) de iniciarse sexualmente más temprano para las mujeres urbanas respecto a las que habitan localidades indígenas.

El ingreso al mercado de trabajo incrementa el riesgo de iniciar la vida sexual para ambos sexos, pues entre los hombres es de 1%, y de 2% para las mujeres. Encontrarse unido incrementa en 3% el riesgo de iniciarse sexualmente para los hombres, mientras que para las mujeres este riesgo es todavía mayor (8 por ciento).

En cambio, estar todavía en el sistema educativo disminuye solamente para las mujeres el riesgo de tener la primera relación sexual en 1%. La coresidencia con los padres también disminuye el riesgo de comenzar la vida sexual en 1% para los hombres y en 2% para las mujeres.

Por otro lado, para indagar sobre las particularidades en cada una de las tres cohortes estudiadas, se ajustó un modelo para cada una y para cada sexo (Cuadros 7 y 8). En cuanto al estrato social de origen, se observa en la cohorte más avanzada (1965-1969) e intermedia (1975-1979), un incremento en el riesgo de iniciarse sexualmente entre los hombres y las mujeres del estrato social medio/alto respecto a aquellos del estrato muy bajo. Además, las mujeres de estas mismas cohortes y del estrato social bajo también registran un mayor riesgo de comenzar su vida sexual de manera más temprana que aquellas del estrato muy bajo.

Cuadro 6
Factores asociados al riesgo de ocurrencia de la primera
relación sexual obtenidos por el modelo de regresión de Cox

Variable / Categoría	Hombres		Mujeres	
	Razón de riesgo	Sig.	Razón de riesgo	Sig.
Cohorte				
1965-1969	1	-----	1	-----
1975-1979	1.04	0.352	1.06	0.133
1985-1989	1.21	0.000	1.26	0.000
Estrato social de origen				
Muy bajo	1	-----	1	-----
Bajo	1.06	0.195	1.11	0.003
Medio/alto	1.30	0.000	1.18	0.000
Tipo de localidad				
Indígena	1	-----	1	-----
Rural	1.06	0.495	1.08	0.283
Urbana	1.10	0.216	1.16	0.023
Trabajaba				
No	1	-----	1	-----
Sí	1.01	0.000	1.02	0.000
Estudiaba				
No	1	-----	1	-----
Sí	1.00	0.098	0.99	0.002
Corresidencia con padres				
No	1	-----	1	-----
Sí	0.99	0.001	0.98	0.000
Unido/a				
No	1	-----	1	-----
Sí	1.03	0.000	1.08	0.000

Fuente: Elaboración propia con base en la EDER 2017.

Es interesante constatar que, en la cohorte más joven, el riesgo de que las mujeres urbanas tengan su primera relación más temprano que aquellas que residen en localidades indígenas se incrementa significativamente en un 40 por ciento.

La incorporación al mercado de trabajo incrementa en 1% entre los hombres de la cohorte intermedia (1975-1979) y más joven (1985-1989) el riesgo de un debut sexual más temprano respecto a aquellos que no se encontraban trabajando. En el caso de las mujeres este riesgo se incrementa en las tres cohortes estudiadas entre 2 y 1 por ciento.

Cuadro 7
Hombres. Factores asociados al riesgo de ocurrencia
de la primera relación sexual obtenidos por los
modelos de regresión de Cox, por cohorte

Variable / Categoría	1965-1969		1975-1979		1985-1989	
	Razón de riesgo	Sig.	Razón de riesgo	Sig.	Razón de riesgo	Sig.
Estrato social de origen						
Muy bajo	1	-----	1	-----	1	-----
Bajo	0.91	0.277	1.05	0.467	1.18	0.086
Medio/alto	1.34	0.001	1.28	0.001	1.31	0.102
Tipo de localidad						
Indígena	1	-----	1	-----	1	-----
Rural	1.13	0.408	1.04	0.785	1.01	0.136
Urbana	1.14	0.355	1.09	0.474	1.06	0.136
Trabajaba						
No	1	-----	1	-----	1	-----
Sí	1.01	0.222	1.01	0.000	1.01	0.004
Estudiaba						
No	1	-----	1	-----	1	-----
Sí	1.00	0.556	1.00	0.457	1.01	0.004
Corresidencia con padres						
No	1	-----	1	-----	1	-----
Sí	1.00	0.600	0.99	0.001	0.99	0.004
Unido						
No	1	-----	1	-----	1	-----
Sí	1.04	0.000	1.03	0.000	1.02	0.006

Fuente: Elaboración propia con base en la EDER 2017.

Asistir a la escuela entre los hombres de la cohorte más joven incrementa el riesgo de que se inicien sexualmente más temprano en 1% respecto a los que no asistían a la escuela. En contraste, entre las mujeres de las cohortes más antigua e intermedia que se encontraban estudiando, el riesgo de tener la primera relación sexual disminuyó en 3% y 1% respectivamente.

Cuando los hombres de las cohortes intermedia y más joven vivían en casa de sus padres, el riesgo de que se iniciaran sexualmente disminuyó 1%. En el caso de las mujeres de las tres cohortes estudiadas, la coresidencia con sus padres disminuyó en 2% el riesgo de que tuvieran su debut sexual más temprano.

Para los hombres y las mujeres de las tres cohortes en estudio, estar en unión incrementa de manera significativa el riesgo de iniciarse sexualmente. Se observa además que en el caso femenino estos riesgos son siempre mayores que en el caso masculino, al tiempo que se aprecia, en ambos casos, una disminución gradual de estos riesgos a través del tiempo.

Cuadro 8
Mujeres. Factores asociados al riesgo de ocurrencia de la primera relación sexual obtenidos por los modelos de regresión de Cox, por cohorte

Variable / Categoría	1965-1969		1975-1979		1985-1989	
	Razón de riesgo	Sig.	Razón de riesgo	Sig.	Razón de riesgo	Sig.
Estrato social de origen						
Muy bajo	1	-----	1	-----	1	-----
Bajo	1.19	0.010	1.17	0.010	1.03	0.613
Medio/alto	1.51	0.000	1.20	0.008	1.02	0.806
Tipo de localidad						
Indígena	1	-----	1	-----	1	-----
Rural	0.96	0.762	0.98	0.883	1.20	0.110
Urbana	1.02	0.882	1.01	0.956	1.40	0.002
Trabajaba						
No	1	-----	1	-----	1	-----
Sí	1.02	0.000	1.02	0.000	1.01	0.000
Estudiaba						
No	1	-----	1	-----	1	-----
Sí	0.97	0.000	0.99	0.001	1.00	0.424
Corresidencia con padres						
No	1	-----	1	-----	1	-----
Sí	0.98	0.000	0.98	0.000	0.98	0.000
Unida						
No	1	-----	1	-----	1	-----
Sí	1.10	0.000	1.08	0.000	1.07	0.000

Fuente: Elaboración propia con base en la EDER 2017.

Discusión y consideraciones finales

Para llevar a cabo este estudio tomamos en cuenta los hallazgos de diversas investigaciones precedentes sobre la iniciación sexual, en

particular aquellos relativos al caso mexicano. Las diversas etapas de análisis y las distintas técnicas estadísticas empleadas en este trabajo nos permitieron observar el fenómeno desde distintas perspectivas.

Con el análisis de las edades medianas a la iniciación sexual por cohortes, obtuvimos resultados consistentes con lo reportado por estudios previos (Gayet y Gutiérrez, 2014; Gayet y Szasz, 2014; Menkes y Suárez, 2003), en el sentido de que entre las jóvenes generaciones de hombres y mujeres se está registrando un ligero adelanto en la edad de iniciación sexual antes de los 20 años, pero no antes de los 16 años. La edad mediana del debut sexual en la cohorte más joven en los hombres es 17 años, en tanto que entre las mujeres es 18 años. Además, advertimos que la brecha entre hombres y mujeres ha ido disminuyendo a través de las cohortes y que los mayores cambios, respecto al rejuvenecimiento de la edad al comienzo de la vida sexual, se han registrado entre las poblaciones masculina y femenina de ámbitos urbanos y de estrato social medio/alto.

Sin embargo, al analizar las diferencias de estas edades entre hombres y mujeres, nuestros hallazgos permiten constatar que en el país persiste todavía un patrón de iniciación sexual fuertemente marcado por el género (Amuchástegui, 2001; De Jesús, 2011; Menkes y Suárez, 2004; Szasz, 1998, 2001). Los varones mexicanos continúan iniciando su actividad sexual de manera más temprana que las mujeres, en todos los grupos sociales considerados. Es importante destacar también que las mujeres de localidades indígenas y rurales de las cohortes más avanzadas (mayor e intermedia) experimentaron un inicio sexual más temprano que las mujeres urbanas, como lo han señalado otros estudios (Amuchástegui, 2001; Szasz, 1997, 2001).

Con respecto a las diferencias por grupos sociales, constatamos que, en las tres cohortes estudiadas, la iniciación sexual en ámbitos urbanos y en el estrato social medio/alto, ocurrió de manera preponderante cuando todavía vivían en el hogar de sus padres, se encontraban estudiando —y alcanzaron niveles de escolaridad de bachillerato o superior—, y no estaban unidos. Sin embargo, al analizar las diferencias por sexo en estos mismos grupos sociales, observamos que los hombres se encontraban solteros en su mayoría cuando se iniciaron sexualmente, en tanto que las mujeres tuvieron esta experiencia, de manera importante, en el marco de su primera unión y cuando se encontraban insertas en el mercado de trabajo.

En contraste, los hombres y mujeres de las tres cohortes estudiadas, de comunidades indígenas y rurales, así como de estratos sociales muy bajo y bajo, en su mayoría tuvieron su debut sexual en el marco de su entrada en unión, cuando ya habían dejado de asistir a la escuela (con niveles de primaria o secundaria) y se encontraban trabajando.

Nuestros resultados confirman, por otro lado, que existe una clara asociación entre mejores condiciones de vida y el uso de métodos anticonceptivos cuando hombres y mujeres de las tres cohortes estudiadas inician su vida sexual. Y, al contrario, pertenecer a estratos sociales empobrecidos se asocia a un menor uso de anticoncepción durante esta experiencia, tal y como diversas investigaciones lo han indicado (Binstock y Gogna, 2015; Menkes, De Jesús y Sosa, 2019; Menkes y Suárez, 2004; Stern y Menkes, 2008).

Observamos a través de las generaciones estudiadas —en todos los tipos de localidad y estratos sociales— una tendencia a la disminución en las proporciones de hombres y mujeres que se inician sexualmente en el marco de su entrada en unión y un incremento de quienes comienzan su vida sexual mientras viven en casa de sus padres y permanecen en el sistema educativo. Estos cambios son más notorios en la cohorte más joven.

En este interesante proceso de cambio, nos parece importante destacar el caso de hombres y mujeres de la cohorte más joven, urbanos y de estrato medio/alto, entre quienes se observa una clara disociación entre la primera relación sexual y el comienzo de la vida en unión, así como un notable incremento en el uso de algún método anticonceptivo durante esta experiencia, al compararlos con las otras cohortes y grupos sociales. Estos hallazgos confirman y actualizan aquellos reportados previamente (Gayet y Szasz, 2014; Menkes y Suárez, 2003, 2004; Solís, Gayet y Juárez, 2008).

Los resultados del análisis de correspondencias múltiples nos permitieron constatar que en las tres cohortes analizadas persisten, a través del tiempo, patrones de iniciación sexual claramente diferenciados por sexo y por estrato social. Destacan en particular, por ubicarse en cuadrantes opuestos en las tres gráficas presentadas, los distintos patrones de iniciación sexual masculina y femenina en el país. El comienzo de la vida sexual entre los hombres sigue teniendo lugar, de manera preponderante, cuando aún son solteros, viven en el hogar de

sus padres, se encuentran estudiando y no se han incorporado al mercado laboral. En contraste, la iniciación sexual femenina continúa fuertemente asociada a su entrada en unión, a su actividad laboral, así como a la salida de la escuela y del hogar de sus padres. Hay que destacar que, en esta experiencia, hombres y mujeres utilizan escasamente anticoncepción. Estas evidencias fortalecen el argumento de que en el país se encuentra fuertemente arraigado, y persistiendo a través de las generaciones, un doble estándar en el comienzo de la vida sexual marcado por el género (Amuchástegui, 1998, 2001; Menkes, De Jesús y Sosa, 2019; Menkes y Suárez, 2003, 2004; Szasz, 1998, 2001, 2008).

El estudio de los riesgos de iniciar la vida sexual con los dos primeros modelos de regresión de Cox nos permitió observar que dichos riesgos se han incrementado significativamente, tanto en el caso masculino como femenino, en la cohorte más joven y en el estrato social medio/alto, al compararlos con la cohorte más antigua y con el estrato muy bajo. Las mujeres urbanas también muestran un incremento significativo en el riesgo de tener su primera relación sexual más temprano que las mujeres de comunidades indígenas. La coresidencia con los padres es un factor protector del inicio sexual para hombres y mujeres, como lo es la asistencia a la escuela, pero solamente para el caso femenino. En cambio, estar en unión o estar trabajando, son importantes predictores del riesgo de iniciarse sexualmente.

Al analizar el comportamiento particular de cada una de las tres cohortes estudiadas, observamos que en la más antigua e intermedia, los hombres y las mujeres del estrato social medio/alto muestran un incremento significativo en el riesgo de iniciarse sexualmente más temprano respecto a las personas del estrato muy bajo. Este hallazgo resulta de particular importancia porque refuerza los planteamientos relativos a la existencia de mayores niveles de libertad entre los jóvenes de estratos sociales más favorecidos (Menkes y Suárez, 2003). Y, por otro lado, pone en cuestionamiento lo planteado por otros estudios que señalan que mejores condiciones de vida se relacionan con un inicio más tardío de la vida sexual (Binstock y Gogna, 2015; Menkes, De Jesús y Sosa, 2019; Nigatu et al., 2018; Solís, Gayet y Juárez, 2008).

Llama la atención, por otro lado, el caso particular de las mujeres urbanas de la cohorte más joven, entre quienes se observa un riesgo 40 % mayor de tener su primera relación sexual respecto a las mujeres de localidades indígenas. También constatamos que la coresidencia

con los padres es un factor que se relaciona con un inicio más tardío de la vida sexual en las cohortes masculinas intermedia y más joven, así como en las tres cohortes femeninas. Otro factor protector es la asistencia a la escuela, pero solamente para las mujeres de las cohortes más antigua e intermedia. En contraste, en la cohorte masculina más joven, la permanencia en el sistema escolar es un factor que incrementa el riesgo de iniciarse sexualmente.

Son factores fuertemente predictivos para la iniciación sexual en las tres cohortes estudiadas de hombres y mujeres, haberse incorporado al mercado de trabajo y, sobre todo, haber transitado a la primera unión. Sin embargo, es importante señalar que se observa una disminución gradual de estos riesgos a través del tiempo. Con estos hallazgos, ampliamos y actualizamos la información que sobre estos predictores habían reportado otras investigaciones (Binstock y Gogna, 2015; Kassahun et al., 2019; Menkes, De Jesús y Sosa, 2019; Nigatu et al., 2018; Vargas, Martínez y Potter, 2010; Young, Burke y Gabhainn, 2018; Zhu y Bosma, 2019).

Referencias

- Amuchástegui, A. (1998). Saber o no saber sobre sexo: los dilemas de la actividad sexual femenina para jóvenes mexicanos. En I. Szasz y S. Lerner. (Comps.), *Sexualidades en México. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales* (pp. 107-135). México: El Colegio de México. <https://doi.org/10.2307/j.ctvhnobgv.8>
- Amuchástegui, A. (2001). *Virginidad e iniciación sexual en México. Experiencias y significados*. México: The Population Council; Edamex.
- Bellato, L. (2001). *Representaciones sociales y prácticas de hombres y mujeres mazahuas sobre la sexualidad y la reproducción* (tesis de maestría en Antropología Social). Ciesas, México.
- Binstock, G. y Gogna, M. (2015). La iniciación sexual entre mujeres de sectores vulnerables en cuatro provincias argentinas. *Sexualidad, Salud y Sociedad*, (20), 113-140. <https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2015.20.09.a>
- Bozon, M. (2003). At what age do women and men have their first sexual intercourse? *Population and Societies*, 391, 1-4.

- Consejo Nacional de Población (Conapo) (2002). *La situación demográfica de México*. México: Conapo.
- Consejo Nacional de Población (Conapo) (2004). *Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2003*. México: Conapo.
- De Jesús, D. (2011). *Adolescencias escindidas: sexualidad y reproducción adolescente en contextos urbano-marginales de Nuevo León*. Nuevo León, México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Dixon-Mueller, R. (1996). The sexuality connection in reproductive health. En S. Zeidenstein y K. Moore, (Eds.), *Learning about sexuality: A practical beginning* (pp. 137-157). Nueva York: The Population Council; International Women's Health Coalition.
- Ericksen, J. y Steffen, S. (1999). What can we learn from sexual behaviour surveys: The U.S. example. En S. Zeidenstein y K. Moore. (Eds.), *Learning about sexuality: A practical beginning* (pp. 73-85). Nueva York: The Population Council; International Women's Health Coalition.
- Esteinou, R. (2008). *La familia nuclear en México: lecturas de su modernidad. Siglos XVI al XX*. México: Ciesas; Porrúa.
- Gayet, C. y Gutiérrez J. P. (2014). Calendario de inicio sexual en México. Comparación entre encuestas nacionales y tendencias en el tiempo. *Salud Pública de México*, 56(6), 638-647. <https://doi.org/10.21149/spm.v56i6.7391>
- Gayet, C. y Szasz, I. (2014). Sexualidades sin matrimonio. Cambios en la primera relación sexual de las mujeres mexicanas durante la segunda mitad del siglo XX. En C. Rabell. (Coord.), *Los mexicanos. Un balance del cambio demográfico* (pp. 350-386). México: Fondo de Cultura Económica.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2018). *Documento metodológico. Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2017*. México: INEGI.
- Kassahun, E., Gelagay, A., Muche, A., Dessie, A. y Kassie, B. (2019). Factors associated with early sexual initiation among preparatory and high school youths in Woldia town, northeast Ethiopia: A cross-sectional study. *BMC Public Health*, 19(378), 1-8. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6682-8>

- Martes, P. (2015). Análisis de la fecundidad adolescente en Colombia, 2010. *Papeles de Población*, 21(85), 145-176. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11241657006>
- Menkes, C., De Jesús, D. y Sosa, I. (2019). Jóvenes en México: ¿existen diferencias entre hombres y mujeres en su inicio sexual y uso de condón? *Papeles de Población*, 25(100), 183-210. <https://doi.org/10.22185/24487147.2019.100.17>
- Menkes, C. y Suárez, L. (2003). Sexualidad y embarazo adolescente en México. *Papeles de Población*, 9(35), 233-262. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11203511>
- Menkes, C. y Suárez, L. (2004). Prácticas sexuales y reproductivas de las jóvenes mexicanas. En Navarrete, E. L. (Coord.), *Los jóvenes ante el siglo XXI* (pp. 19-43). México: El Colegio Mexiquense.
- Nigatu, D., Seme, A., Fituma, S. y Segni, M. (2018). Sexual initiation and associated factors among young women in West Shoa, Ambo Town, Ethiopia: A community-based cross-sectional study. *BMC Women's Health*, 18(76), 1-11. <https://doi.org/10.1186/s12905-018-0563-7>
- Núñez, G. (2007). Vínculo de pareja y hombría: "atender y mantener" en adultos mayores del Río Sonora, México. En A. Amuchástegui e I. Szasz. (Coords.), *Sucede que me canso de ser hombre... Relatos y reflexiones sobre hombres y masculinidades en México* (pp. 141-184). México: El Colegio de México.
- Rivas, M. (1997). La diversidad en la norma: algunas diferencias en las significaciones de la sexualidad femenina. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 12(1), 129-153. <https://doi.org/10.24201/edu.v12i1.990>
- Solís, P. (2016). De joven a adulto en familia: trayectorias de emancipación familiar en México. En M. L. Coubès, P. Solís y M. E. Zavala. (Coords.), *Generaciones, cursos de vida y desigualdad social en México* (pp. 193-222). México: El Colegio de México; El Colegio de la Frontera Norte.
- Solís, P., Gayet, C. y Juárez, F. (2008). Las transiciones a la vida sexual, a la unión y a la maternidad en México: cambios en el tiempo y estratificación social. En S. Lerner e I. Szasz. (Coords.), *Salud reproductiva y condiciones de vida en México* (pp. 397-428). México: El Colegio de México.

- Stern, C. (1997). El embarazo adolescente como problema público: una visión crítica. *Salud Pública de México*, 39(2), 137-143. <https://doi.org/10.1590/S0036-36341997000200008>
- Stern, C. (2007). Estereotipos de género, relaciones sexuales y embarazo adolescente en las vidas de jóvenes de diferentes contextos socioculturales en México. *Estudios Sociológicos*, 25(73), 105-129. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59807304>
- Stern, C. y Menkes, C. (2008). Embarazo adolescente y estratificación social. En S. Lerner e I. Szasz. (Coords.), *Salud reproductiva y condiciones de vida en México* (pp. 347-395), Tomo I. México: El Colegio de México.
- Szasz, I. (1997). Género y valores sexuales. Un estudio de caso entre un grupo de mujeres mexicanas. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 12(1), 155-176. <https://doi.org/10.24201/edu.v12i1.991>
- Szasz, I. (1998). Sexualidad y género: algunas experiencias de investigación en México. *Debate Feminista*, 9(18), 77-104. <https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1998.18.471>
- Szasz, I. (2001). La investigación sobre sexualidad y el debate sobre los derechos reproductivos en México. En J. Gómez de León y C. Rabell. (Coords.), *La población de México. Tendencias y perspectivas sociodemográficas hacia el siglo XXI* (pp. 365-397). México: Conapo; FCE.
- Szasz, I. (2008). Relaciones de género y desigualdad socioeconómica en la construcción social de las normas sobre la sexualidad en México. En S. Lerner e I. Szasz. (Coords.), *Salud reproductiva y condiciones de vida en México* (pp. 429-475). México: El Colegio de México.
- Vargas, E., Martínez, G. y Potter, J (2010). Religión e iniciación sexual premarital en México. *Revista Latinoamericana de Población*, 4(7), 7-30. <https://doi.org/10.31406/relap2010.v4.i2.n7.6>
- Welti, C. (2005). Inicio de la vida sexual y reproductiva en México. *Papeles de Población*, 11(45), 143-176. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11204507>

- Young, H., Burke, L. y Gabhainn, S. (2018). Sexual intercourse, age of initiation and contraception among adolescents in Ireland: Findings from the Health Behaviour in School-aged Children Ireland study. *BMC Public Health*, 18, 1-29. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5217-z>
- Zhu, G. y Bosma, A. (2019). Early sexual initiation in Europe and its relationship with legislative change: A systematic review. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 57, 70-82. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019.03.001>

La sobreeducación en México: ¿promotora o inhibidora de la exclusión laboral?

Overeducation in Mexico: Promoter or Inhibitor of Exclusion from Work?

Ana Ruth Escoto Castillo

Orcid: 0000-0001-7259-0001

ana.escoto@politicas.unam.mx

*Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México*

María Clara Márquez Scotti

Orcid: 0000-0003-2014-7344

clara.marquez@cienciassociales.edu.uy

*Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,
Uruguay*

Victoria Prieto Rosas

Orcid: 0000-0003-2573-9023

victoria.prieto@cienciassociales.edu.uy

*Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,
Uruguay*

Resumen

La gran expansión educativa de la población mexicana ha estado acompañada por el incremento en la incidencia de la sobreeducación y de muy bajas tasas de creación de empleo protegido. En este artículo analizamos el perfil de las/os trabajadoras sobreeducados y de qué modo este tipo de desajuste educativo interviene en el proceso de exclusión del empleo productivo, protegido y adecuadamente remunerado en el mercado laboral mexicano. Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2019, estimamos modelos logísticos secuenciales sobre la probabilidad de actividad, ocupación, sobreeducación y precariedad. Los resultados identifican los perfiles de población asociados

Palabras clave

Mercado laboral
Sobreeducación
Exclusión laboral
México

a la sobreeducación y dentro de esta a la precariedad. Además, se constata que la sobreeducación funciona para determinados grupos como promotor de la precariedad, pero en ningún caso la inhibe.

Abstract

The great educational expansion of the Mexican population has been accompanied by the increase in the prevalence of overeducation among its workers and very low rates of creation for protected employment. In this article, we examine the profile of overeducated workers and how it intervenes in the process of exclusion from productive, protected and adequately paid employment in the Mexican labor market. Based on data from the National Survey on Occupation and Employment (ENOE) from the third quarter of 2019, we estimate sequential logit models on the probability of activity, occupation, overeducation and precariousness. The findings identify population profiles associated with overeducation and within it, precariousness. It is also noted that overeducation works for certain groups as a promoter of precariousness, but in no case as an inhibitor.

Keywords

Labor market
Overeducation
Labor exclusion
Mexico

Recibido: 01/03/2020
Aceptado: 17/05/2020

Introducción

La educación es valorada como un fin en sí mismo en nuestras sociedades, pero también, y cada vez más, como un activo estratégico para ubicarse mejor en el mercado de trabajo; por ello, incrementar el acceso a la educación y mejorar su oferta son objeto de múltiples políticas públicas. Sin embargo, en mercados laborales signados por la escasez en la generación de puestos de trabajo —como el mexicano—, el logro educativo no siempre es recompensado. Una de las expresiones de este fenómeno es la sobreeducación, objeto de este trabajo de investigación. Como el término lo indica, se refiere al desajuste entre la ocupación o tareas de un puesto de trabajo y las credenciales educativas que superan lo que el trabajador requiere para la correcta realización de la tarea.

Los problemas de inadecuación entre formación y demandas del mercado de trabajo han crecido sustantivamente a nivel mundial

desde 2002, lo que ha afectado particularmente a mujeres, jóvenes e inmigrantes (Handel, 2017; ILO, 2013b; Palmer, 2017). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaba que uno de los principales responsables había sido la crisis económica global de 2008-2009, que generó un contexto de destrucción y reestructuración de empleos e incremento de los niveles de logro educativo de los trabajadores (ILO, 2014). Para la OIT esto muestra un importante desaprovechamiento de la productividad de la fuerza de trabajo, con costos para los trabajadores, las empresas y la sociedad en su conjunto. También, deja al descubierto que la formación de trabajadores no es suficiente para mejorar sus desempeños en el mercado de trabajo si esas competencias no se adecuan a las demandadas por los empleos disponibles.

La literatura sobre el mercado de trabajo de países de bajo y mediano ingreso no ha discutido suficientemente el caso particular de México, pero recientemente se han analizado los perfiles asociados a los desajustes educativos y sus consecuencias sobre el salario para algunos países latinoamericanos. Esta literatura identifica una mayor prevalencia de la sobreeducación en los países más pobres y la correlación significativa entre la informalidad el desempleo juvenil y la incidencia de este desajuste educativo por exceso (Handel, 2017; Palmer, 2017). Al mismo tiempo, subraya que el impacto negativo de la sobreeducación sobre el salario es más pronunciado entre las mujeres, los jóvenes y los trabajadores independientes (Kupets, 2019).

Según estimaciones realizadas para México, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019), la población ocupada pasó de 8.5 años de escolaridad promedio en 2005, a 10 en 2019 (trimestre III), lo que coincide con la obligatoriedad de la educación secundaria superior que tiene lugar en este país desde 2012. No obstante, las condiciones del mercado de trabajo local siguen siendo preocupantes en un país donde coexisten bajos niveles de desempleo abierto con muy altos niveles de población sin cobertura de seguridad social, una elevada proporción de personas desalentadas de la búsqueda del empleo (Márquez Scotti, 2015), y los niveles más altos de incidencia de sobreeducación de la región (ILO, 2013a), que son particularmente preocupantes entre los profesionistas (Burgos, 2008; Hernández Laos, 2004; Muñoz Izquierdo, 2006).

En este contexto, donde el proceso de expansión educativa convive con la alta prevalencia de condiciones laborales deficientes, conviene analizar el fenómeno de la sobreeducación desde la perspectiva de la exclusión laboral, analizando sus consecuencias en el nivel salarial y en el acceso a la seguridad social al tiempo que tenemos en cuenta los procesos de selección en la participación económica y en la ocupación. Esta investigación pretende describir los perfiles sociodemográficos individuales de las personas ocupadas en México, así como las condiciones del hogar que inciden en estos procesos, y analizar de qué modo la inadecuación educativa interviene en ellos. Esto es particularmente relevante en este caso, donde el desajuste educativo en la inserción laboral viene precedido y es sucedido por otros procesos de selección; existe un proceso de exclusión de la fuerza de trabajo, del empleo y de un empleo en condiciones no precarias.

La contribución de este artículo es analizar qué rol ocupa la sobreeducación en las dinámicas de inclusión y exclusión laboral; es decir, se considerará a la sobreeducación como un proceso que media entre la exclusión del empleo y la exclusión del empleo productivo, protegido y adecuadamente remunerado¹. Con este propósito se estima el riesgo de estar sobreeducado en la ocupación y recibir un salario inferior a la media de la ocupación mediante modelos logísticos secuenciales, con base en datos de la ENOE del tercer trimestre de 2019. La estrategia del análisis secuencial permite controlar la heterogeneidad no observada, al tiempo que muestra de forma detallada el proceso de exclusión y da cuenta del riesgo que los individuos enfrentan para salir de la inactividad, entrar al mercado de trabajo, desempeñarse en una ocupación para la que tienen una formación superior a la exigida por las tareas desempeñadas, recibir por ello una remuneración insuficiente y, finalmente, no realizar aportes a la seguridad social. Vale la pena notar que los estudios más recientes sobre este campo (Handel, 2017; Kupets, 2019; Palmer, 2017) no tienen en cuenta estos procesos de selección que tratamos de captar desde la perspectiva conceptual de la exclusión laboral ni recurren a la metodología que aquí empleamos.

Este artículo se organiza en cinco secciones. Primero, se introducen los principales conceptos utilizados y una breve revisión de antecedentes. Segundo, se especifican las implicaciones del nexo entre la sobreeducación y el proceso de inserción del mercado de trabajo. Tercero, se

1 Se trata de la propuesta de *exclusivo* de Weller (2009, 2011), que se explica en detalle en el siguiente apartado.

describen las fuentes y datos utilizados. Cuarto, se presentan los resultados bivariados y multivariados. Finalmente, se resumen las principales conclusiones y se ensaya una discusión de resultados.

La sobreeducación en las dinámicas de inclusión/exclusión laboral

El desajuste educativo por sobreeducación

En este estudio nos concentraremos en el análisis de uno de los factores que estructuran la desigualdad en el mercado de trabajo: la concordancia entre el nivel de educación de la fuerza de trabajo y la demanda laboral. En términos generales, el mercado de trabajo demanda ciertas cantidades de mano de obra con determinadas credenciales educativas. A partir de esta demanda diferencial², ciertos contingentes de la población —cuya oferta laboral es alta, pero la demanda es limitada o insuficiente— sufrirán procesos de exclusión, mientras que otros, donde la oferta es más baja y la demanda es alta, participarán de procesos de inclusión laboral (Weller, 2001). Ahora bien, podría pensarse que el desajuste entre la formación solicitada por la demanda y ofrecida por la oferta está dado por una insuficiente calificación. Aquí proponemos concentrarnos en el caso en que este desajuste está dado por una calificación excesiva para el puesto que se ocupa.

Dentro de los desajustes entre ocupación y calificación, la sobreeducación se define como el desajuste vertical³ entre la educación adquirida y la esperada para la ocupación en la que se desempeña una persona. Existen cuatro posibles definiciones de inadecuación entre calificación real y esperada: (i) según un estándar normativo que define el nivel educativo teórico necesario para la realización de las tareas de la ocupación; (ii) según una medida subjetiva basada en la percepción del trabajador; (iii) según una medida empírica construida con base en el nivel de escolaridad promedio observado en las ocupación, y iv) salarial, en cuyo caso se define inadecuación a partir de la comparación entre salario real y salario potencial que corresponde a

2 Esta demanda diferencial se compone de otras características, como el sexo, la edad, la experiencia, entre otras.

3 Hay dos tipos de desajustes. El vertical, cuando el nivel de educación o calificación es menor o mayor de lo requerido. Mientras que el horizontal se produce cuando el tipo o campo de educación o habilidades es inapropiado para el trabajo (ILO, 2013a; Johansen y Gatelli, 2012).

la formación de la persona y el criterio rector es el de la maximización del retorno de la inversión educativa en el ingreso salarial (Arias Ortiz y Ñopo, 2015; Bauer, 2002; Hartog, 2000; ILO, 2013a, 2014; Mendes de Oliveira, Santos y Kiker, 2000; Verdugo y Verdugo, 1989). En este trabajo utilizaremos la primera de estas definiciones⁴.

A partir del estudio seminal de Duncan y Hoffman (1981) acerca del efecto de la sobreeducación en el salario de los norteamericanos, se inicia una tradición de estudios acerca de este fenómeno. Leuven y Oosterbeek (2011) encuentran que la incidencia de este fenómeno es considerable y que el excedente educativo tiene un valor económico, ya que cada año adicional de educación se asocia con mayores ingresos. Sin embargo, el retorno de la sobreeducación es menor que el de los años requeridos.

Para América Latina en general es escasa la literatura dedicada al estudio de la sobreeducación y sus factores asociados, salvo algunas excepciones para el caso uruguayo y colombiano (Espino 2011; Herrera, López-Bazo y Motellón, 2013). Recientemente se ha reactivado el estudio de los factores asociados y las consecuencias de la sobreeducación para un conjunto de países con ingresos medios y bajos que incluye parcialmente a la región, aunque dejan fuera el caso mexicano (Handel, 2017; Kupets, 2019). Para otros países de la región, como Brasil, Colombia, El Salvador, Perú y República Dominicana, se ha corroborado cierta asociación entre la sobreeducación de la población activa, la informalidad en el empleo —entendida como falta de un contrato escrito y/o carencia seguridad social— y el desempleo juvenil (Kupets, 2019; Handel, 2017; Palmer, 2017). Específicamente, Kupets (2019) encuentra que la sobreeducación se traduce en una penalización sobre el ingreso y mayores niveles de insatisfacción con la vida en general en países de mediano y bajo ingreso en un estudio que incluye a Perú, Ecuador y Argentina, entre otros países del mundo. Handel (2017) corrobora una relación similar para Colombia y ninguna asociación en el caso de Bolivia. Además, hay evidencia que apunta a la informalidad —como expresión de ambos, ausencia de un contrato

4 El indicador de sobreeducación asociado a la segunda definición no se puede calcular a partir de la fuente utilizada, y además el componente subjetivo excede los objetivos del presente estudio. La tercera de estas definiciones no permite estudiar los cambios de sobreeducación en una sociedad que ha ampliado al mismo tiempo su nivel educativo, como la mexicana. Finalmente, la cuarta definición incluye las condiciones laborales que se quieren estudiar por separado y como parte del proceso de exclusión-inclusión laboral.

escrito y del registro en el sistema de seguridad social— como un factor que predice significativamente la sobreeducación (Handel, 2017; Palmer, 2017). De hecho, la evidencia para los países de bajo y mediano ingreso permite concluir que la calidad de los empleos disponibles, en contraposición a las características de los trabajadores, influye mucho en la prevalencia del desajuste (Handel, 2017).

Específicamente en el caso de México, Arias Ortiz y Ñopo (2015) encuentran que los niveles de desajuste educativo superan los valores medios observados en Europa, y que en el conjunto de los países en desarrollo, los cuales ascienden a 31% y 23%, respectivamente. En este país, el desajuste educativo se divide entre un 22% de sobreeducados y un 9% de subeducados. Encuentran mayor incidencia de sobreeducación entre las mujeres, independientemente de si cuentan con contratos de medio tiempo o de tiempo completo, lo que debe a su mayor participación en el sistema educativo. También muestran que los jóvenes se ven más afectados por este fenómeno, lo que puede ser interpretado desde la teoría de la búsqueda de empleo como algo propio del inicio de las carreras laborales, pues al trabajador le lleva un tiempo ascender o encontrar un empleo acorde a su formación. También Quinn y Rubb (2006) analizan la sobreeducación en México —siguiendo la tradición de estudios iniciada por Duncan y Hoffman (1981)—, y sus hallazgos son similares a los encontrados para los países en desarrollo; el rendimiento sobre el salario de los años adicionales de educación es menor para los sobreeducados que para los correctamente ajustados.

Adicionalmente, algunas investigaciones han analizado específicamente la sobreeducación entre los profesionistas ocupados dentro de este mercado laboral (Burgos, 2008; Hernández-Laos, 2004; Muñoz Izquierdo, 2006). En este caso, los autores corroboran la saturación del mercado laboral mexicano, que no tendría la capacidad de absorber el número de profesionistas disponibles⁵. A esto se ha asociado a una

5 Los resultados del análisis realizado por Mehta, Felipe, Quising y Camingue (2011) acerca de la sobreeducación en México y otros tres países en desarrollo (Filipinas, India y Tailandia) van en un sentido divergente. Estos autores analizan la sobreeducación a partir del ajuste entre los retornos educativos y la calificación requerida en el empleo. Observan que en México, entre 1990 y 2000, se incrementan los retornos de la educación y los niveles de ocupación de los trabajadores educados (nivel secundario y terciario). Desde su perspectiva, la sobreeducación no estaría asociada a una abundancia de trabajadores educados, sino a una escasez de calidad educativa.

disminución de sus salarios (Burgos, 2008; Hernández-Laos, 2004), una incorporación laboral de peor calidad y el desplazamiento de algunos trabajadores con menor nivel educativo (Hernández Laos, 2004).

Procesos de inclusión y exclusión en el mercado laboral

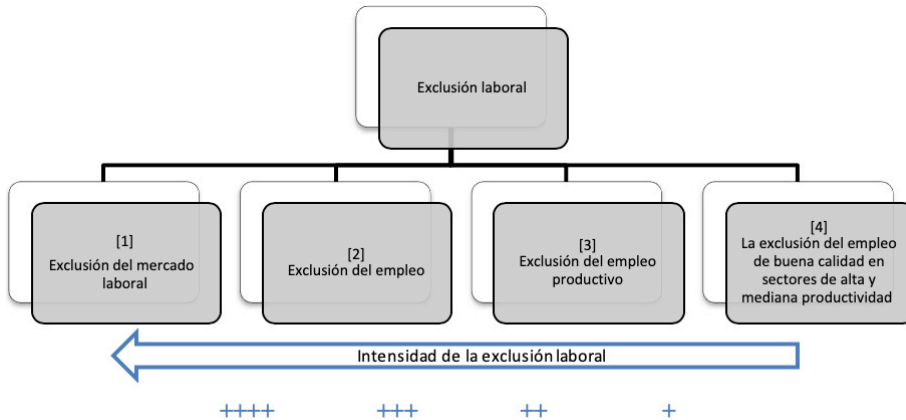
El histórico problema de absorción del excedente de fuerza laboral propio de la región ha conformado mercados de trabajo con importantes dinámicas de inclusión y exclusión laboral (Cardoso, 1970; Nun, 2001; Sanhueza, Friz Carrillo, y Quintriqueo Millán, 2014; Tokman, 2004). Como consecuencia, el mercado laboral es un ámbito insoslayable de reproducción de las desigualdades sociales.

Como una forma de ordenar los distintos modos de exclusión laboral, seguiremos la taxonomía planteada por Weller (2009, 2011). De acuerdo al autor, es posible identificar distintas gradaciones o formas de exclusión laboral que deben ser superadas para contar con un empleo en condiciones laborales adecuadas: la exclusión del mercado laboral (tipo 1); la exclusión del empleo (tipo 2); la exclusión del empleo productivo (tipo 3), y la exclusión del empleo de buena calidad en sectores de alta y mediana productividad (tipo 4; véase Figura 1).

La exclusión del mercado laboral (tipo 1) se refiere a las personas que por razones ajenas a su voluntad no logran insertarse en la población económicamente activa (PEA). Los individuos afectados por esta condición son expulsados del mercado de trabajo. La exclusión del empleo (tipo 2) se refiere al desempleo abierto, es decir, a quienes buscan empleo y no lo encuentran. Los dos últimos tipos de exclusión aluden a trabajadores que logran insertarse laboralmente, pero introducen distintos gradientes del proceso de exclusión de empleos de calidad. La exclusión del empleo productivo (tipo 3) se refiere a los puestos de trabajo generados en sectores de baja productividad que, típicamente, son además empleos de baja calidad. Por último, la exclusión del empleo de buena calidad en sectores de alta y mediana productividad (tipo 4) se refiere a los puestos de trabajo en sectores productivos que no perciben los beneficios normalmente asociados a este sector. Como se observa en la Figura 1 estas exclusiones pueden ser vistas jerárquicamente: la de mayor exclusión es la del tipo 1 y la de menor exclusión es la de tipo 4.

En este análisis nos centraremos en los dos últimos tipos de exclusión que señalan dos inserciones laborales problemáticas diferenciadas en cuanto a su origen: el tipo 3, el cual surge en un contexto económico y productivo adverso a la generación de empleos productivos y, por ende, de calidad y el tipo 4, que se genera por una institucionalidad laboral débil que desestimula el empleo de buena calidad.

Figura 1
Taxonomía de la exclusión laboral según Weller

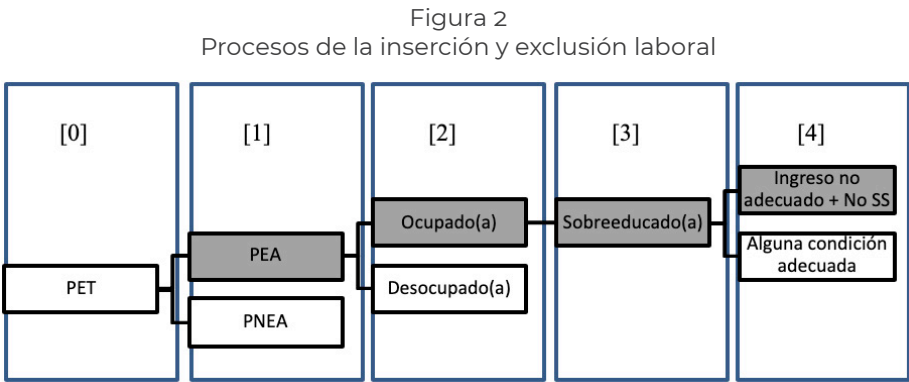


Fuente: Elaboración propia, basado en Weller (2009).

El mercado de trabajo mexicano actual presenta las condiciones para que se desarrollen ampliamente ambos tipos de exclusión. Desde hace tres décadas y media, el país muestra un crecimiento económico exiguo, con una baja expansión de la actividad observable en la profundización del desequilibrio estructural del mercado laboral, atribuible a un crecimiento de la PEA que es sistemáticamente mayor a la tasa de creación de empleos protegidos (García, 2012; Murayama, 2010). Adicionalmente, las instituciones laborales garantizan de modo insuficiente los derechos de los trabajadores. En buena medida, esto se explica por el alto costo que tiene el cumplimiento de la normativa laboral y el bajo costo de su incumplimiento que se traduce en una de las brechas más importantes entre las normas y los hechos de la región (Bensusán, 2014). Finalmente, hay un importante desbalance de poder entre dos de los actores principales del mercado laboral, el capital y el trabajo (De la Garza Toledo, 1993). Como ya ha sido ampliamente documentado, en este contexto predominan las inserciones precarias, en empleos de baja productividad y con bajos salarios (Guadarrama, Hualde y López, 2016).

La sobreeducación en el proceso de inclusión/exclusión laboral

En este estudio retomamos el proceso de exclusión en el mercado de trabajo y el rol que desempeña la sobreeducación en el mismo. Combinando los indicadores clásicos del mercado de trabajo con el esquema de exclusión propuesto por Weller (Figura 1), establecimos como hipótesis que la sobreeducación podría situarse entre la inserción y las condiciones laborales que dan cuenta de la precariedad del empleo (Figura 2).



Fuente: Elaboración propia, con base en las mediciones de la inserción laboral y la Figura 1.

La Figura 2 muestra el proceso de la inserción y deja ver cómo nos acercaremos al análisis de las diferentes formas de la exclusión laboral. Las personas en edad de trabajar (PET) pueden ser parte de la PEA o no (sección 1). Las personas que integran la PEA pueden ocuparse o no (sección 2). Estas dos primeras transiciones estarían relacionadas con la exclusión del mercado laboral y la exclusión del empleo, aunque en sentido estricto estamos modelando su sentido contrario, la inclusión. En la tercera transición, introducimos el elemento central de nuestro análisis, la sobreeducación, como forma particular de inserción dentro de la ocupación (sección 3). A partir de ella, queremos explorar cómo esta precede a la exclusión del empleo de calidad, al conducir a un empleo de remuneración inadecuada y a la ausencia de cobertura del sistema.

En síntesis, este esquema traduce nuestra pregunta de trabajo: ¿es la sobreeducación un inhibidor de la exclusión en el empleo o, por el contrario, incrementa el riesgo de percibir un bajo salario y no contar con seguridad social? Nuestra hipótesis es que la sobreeducación también coincide con otras formas de exclusión dentro de la ocupación, por lo que se asocia con la mala remuneración y la falta de seguridad social.

Es importante señalar que, si bien proponemos analizar la exclusión como proceso siguiendo el esquema anterior, admitimos que lo que hemos definido como etapas o secciones de dicho esquema ocurren de manera simultánea. Por ejemplo, se ingresa al empleo y la inserción lleva consigo y al instante unas determinadas condiciones laborales. Sin embargo, este es solo un ejercicio de aproximación donde únicamente se analizarán asociaciones sin pretensiones de establecer causalidad.

Dado que la población mexicana no es homogénea, es importante establecer diferencias en el proceso según perfiles sociodemográficos. Por ejemplo, para explicar las diferencias entre varones y mujeres en un esquema de exclusión/inclusión laboral es necesario incorporar las cargas de trabajo doméstico, la estructura del hogar y la posición en el hogar de los individuos, que como sabemos varían por sexo y se cristalizan en desigualdades de género (Abramo y Valenzuela, 2005; Castro, García y Badillo, 2011; Coen-Pirani, León y Lugauer, 2010; García y Pacheco, 2000; Orozco Rocha, 2015; Rendón, 2003).

Datos y métodos

El presente estudio se aplica al caso del mercado laboral mexicano y la fuente de datos utilizada es la ENOE del tercer trimestre del año 2019. La amplitud de esta fuente permite estudiar a la población en todo el proceso de inclusión/exclusión descrito en el apartado anterior, así como las diferentes subpoblaciones de interés y su composición. Para nuestro análisis incluimos a todas las personas en edad a trabajar de 25 a 64 años. Este recorte poblacional incluye a las personas que teóricamente ya salieron del sistema educativo, y excluye a la población adulta mayor cuya salida del mercado laboral podría estar más determinada por el retiro que por las condiciones de mercado. Al excluir a la población más envejecida y perteneciente a generaciones en promedio menos educadas se evita subestimar las probabilidades de sobreeducación.

Para definir la escolaridad esperada en una determinada ocupación se recurrió a la clasificación normativa propuesta por la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo a la cual se definen tres grandes grupos según la calificación esperada (ILO, 2013a, 2014). El primero es el grupo de alta calificación no manual, que reúne a las ocupaciones que

exigen haber completado la educación terciaria y está integrado por: (1) directores y gerentes; (2) profesionales científicos e intelectuales; y (3) técnicos y profesionales de nivel medio. El segundo grupo es el más amplio y corresponde a aquellas ocupaciones que demandan un nivel de educación intermedio. Dentro de él se encuentran las ocupaciones de baja calificación no manuales y las manuales calificadas. Las primeras incluyen (4) al personal de apoyo administrativo, y (5) los trabajadores de los servicios, vendedores de comercios y mercados. Las últimas remiten a (6) agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros; (7) oficiales, operarios y artesanos de artes mecánica y otros oficios, y (8) operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores. Finalmente, el tercer grupo de ocupaciones que demandan una calificación elemental —haber asistido a la educación primaria— aglutina a las (9) ocupaciones elementales.

Una vez definida la calificación teórica de las ocupaciones, se identificaron las situaciones de adecuación e inadecuación respecto a la escolaridad real de los individuos. A partir de ello, se definieron las siguientes categorías de la población ocupada: i) subeducada, que realiza tareas que demandan un grado de escolaridad mayor al alcanzado; ii) sobreeducada, que realiza tareas que demandan un grado de escolaridad menor al alcanzado, y iii) en inserción adecuada, que corresponde a quienes realizan tareas acordes a su educación. En este estudio se da prioridad al segundo grupo, donde el desajuste implica que las personas realizan tareas por debajo de su nivel educativo.

Para medir la remuneración no adecuada, establecimos como criterio la mediana del gran grupo ocupacional, es decir que la remuneración se considera en términos de las tareas que se realiza y no de su perfil. Si un trabajador reporta un salario menor a este valor, consideramos que su remuneración no es adecuada. En el caso del acceso a la seguridad social, consideramos como contribuyentes a aquellos que declaran estar adscritos a las instituciones mexicanas encargadas de dar seguridad en salud.

La estrategia de análisis incluye un estudio preliminar descriptivo de algunas relaciones bivariadas que dan cuenta de los perfiles diferenciados en cada grupo del proceso de inserción definido en la Figura 2. Es decir, observaremos los perfiles de sexo, lugar de residencia, parentesco, asistencia escolar y situación conyugal de las personas

(i) económicamente activas; (ii) ocupadas; (iii) sobreeducadas en la ocupación principal, y (iv) sobreeducadas y sin condiciones laborales adecuadas.

En el análisis multivariado se ajustaron modelos logísticos secuenciales, primero, para la población en general y, luego, para las poblaciones específicas de varones y mujeres⁶. Modelamos cuatro estados: (i) que una persona en edad de trabajar sea parte de la población económicamente activa; (ii) que una persona económicamente activa esté ocupada; (iii) que una persona ocupada esté sobreeducada según su rama de ocupación, y (iv) que una persona sobreeducada tenga un salario por debajo de la media de su rama y esté desprotegida en términos de su seguridad social. En estos modelos incluimos la mayoría de las variables individuales y de hogar utilizadas en el análisis bivariado.

Este tipo de modelo estima el efecto de las variables independientes sobre las probabilidades de experimentar alguno de los cuatro estados mencionados (Buis, 2013). De esta forma es posible usar un árbol de decisión como el representado en la Figura 2, siempre y cuando pueda alcanzarse cada nivel de la variable dependiente a través de una y solo una secuencia de estados. Este tipo de estimaciones multivariadas va ajustando una serie de modelos logísticos binomiales con relación a la población en riesgo en cada etapa del proceso. No obstante, la ventaja de modelar toda la secuencia es que permite establecer hipótesis sobre los efectos de las variables independientes a lo largo de cada estado y permite establecer análisis de sensibilidad sobre la presencia de la heterogeneidad no observada a lo largo de las transiciones (selectividad; Buis, 2011).

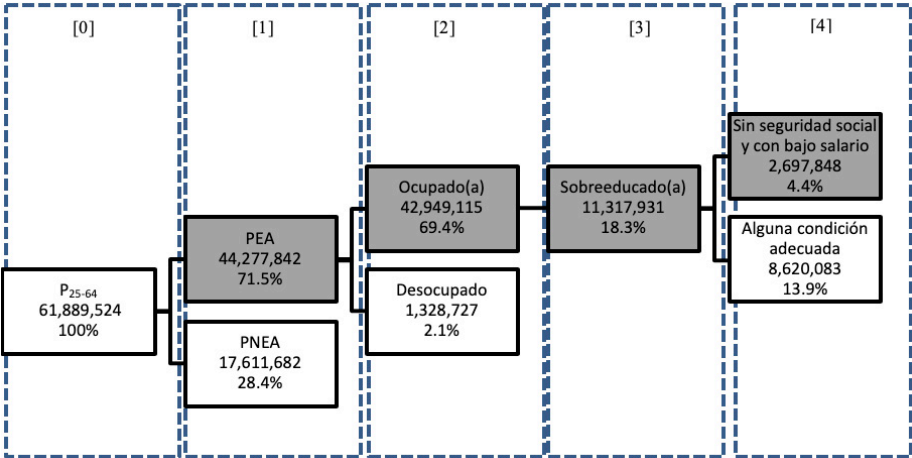
Si bien las distintas condiciones del proceso de exclusión/inclusión laboral que se presenta ocurren en un mismo momento, la idea de mostrar este proceso separándolo por estados permite observarlo de modo completo, y señalar si las características sociodemográficas asociadas a este se mantienen o se van modificando a lo largo del mismo.

6 Cabe señalar que estos modelos fueron estimados también en tres escenarios diferentes asumiendo diferentes niveles constantes de heterogeneidad no observada a lo largo de las transiciones. Ningún modelo estima parámetros sustancialmente diferentes a los del escenario sin asunciones sobre la heterogeneidad, por lo que se presentan modelos sin supuestos sobre la heterogeneidad no observada.

Resultados

La Figura 3 muestra cómo se va distribuyendo o disgregando la población de 25 a 64 años (P25-64) expuesta al riesgo a lo largo de los estados definidos. No obstante, es también necesario notar que al cabo de cada secuencia se cuenta con una nueva población expuesta al riesgo —siempre menor a la población expuesta al riesgo anterior—. Como se puede observar, la PEA corresponde a más de dos terceras partes de la PET. Mientras, gran parte de esta población logra insertarse en la ocupación: los ocupados representan el 97.0% de la PEA y los desempleados abiertos apenas el 3%. Por otro lado, las personas sobreeducadas representan el 18.3% de la (P25-64), es decir, un 26.4% de la población ocupada. La población sobreeducada que recibe una remuneración por debajo de la mediana de su grupo ocupacional y no tiene acceso a la seguridad social representan un 4.4% de la (P25-64), pero son el 23.8% de quienes están sobreeducados.

Figura 3
Población de 25-64 años a lo largo del proceso
de inserción laboral. México, 2019



Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2019 - III trimestre y la Figura 2. El 100% corresponde a la población de entre 25-64 años.

Los resultados descriptivos para las tasas de actividad y ocupación muestran algunos rasgos propios del mercado de trabajo mexicano como la baja participación femenina y las diferencias mínimas entre sexos en el nivel de ocupación dentro de los activos.

Tabla 1
Prevalencia de actividad, ocupación y condiciones de precariedad
en el empleo por sexo, lugar
de residencia, asistencia escolar, parentesco y situación
conyugal. México, 2019 (en porcentajes)

	PEA	PEA +Ocupado	PEA +Ocupado +Sobreeducado	PEA +Ocupado +Sobreeducado + Ingreso inadecuado y sin seguridad social
Total	71.5	97.0	26.4	23.8
Sexo				
Varones	91.0	96.9	27.8	22.1
Mujeres	54.3	97.1	24.3	26.8
Residencia				
Urbano	73.4	96.7	27.5	20.5
Rural	64.6	98.2	21.5	42.0
Asistencia escuela				
No asiste	71.6	97.0	26.3	23.9
Asiste	67.5	96.1	27.8	20.4
Parentesco				
Jefe	85.5	97.8	25.5	21.2
Cónyuge	47.8	97.9	23.7	28.9
Hijo	80.0	94.7	30.4	25.9
Otro	69.6	95.3	29.5	22.8
Sit. conyugal				
No unido	78.6	95.6	27.0	23.7
Unido	68.6	97.7	26.0	23.9
Tipo de hogar				
No familiar	80.7	97.2	23.4	22.4
Nuclear	71.7	97.2	26.5	23.4
Extensos	69.9	96.5	26.6	24.9
Observaciones	196,734	139,239	38,205	8,160
Población	61,889,524	42,949,115	11,317,931	2,620,083

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2019 - III trimestre.

Sin embargo, la elevada prevalencia del empleo sobreeducado que afecta ligeramente más a los varones que a las mujeres (Tabla 1), contraviene la literatura antecedente que señala a las mujeres como uno de los grupos demográficos con mayor riesgo de sobreeducación.⁷ También se aprecia que uno de los principales ejes de la desigualdad en el empleo es el lugar de residencia. En este sentido, el empleo en el ámbito urbano se asocia con mayores niveles de sobreeducación, pero, en el área rural, la mala remuneración y la falta de cobertura de la seguridad social son más extendidas, incluso entre los trabajadores en condiciones de sobreeducación.

La sobreeducación es levemente superior entre quienes asisten al sistema educativo y las personas no unidas y está sobrerrepresentada entre los hijos de los jefes/as de hogar y quienes residen en estructuras de hogares familiares nucleares o extendidas.

La triple combinación de formas de exclusión del empleo productivo entre los trabajadores mexicanos, a saber, 1) sobreeducación, 2) remuneración por debajo de la mediana de la rama de ocupación, y 3) ausencia de aportes a la Seguridad Social, es una condición más común entre las mujeres, los habitantes de las áreas rurales, las personas que no asisten a la escuela y quienes tienen estatus de cónyuges de los jefes/as de hogar.

Finalmente, en la Tabla 2 mostramos algunos promedios de las variables cuantitativas a analizar. La población sobreeducada es ligeramente más joven y, obviamente, acumula más años de escolaridad, con una diferencia de un año de escolaridad promedio, que es estadísticamente significativa. Aunque la proporción que mantiene condiciones precarias tiene escolaridad ligeramente más baja, prevalece el desajuste.⁸ Por otro lado, la población tiene similares cargas de trabajo no remunerado en el hogar; mientras que todos los grupos tienen similares relaciones de dependencia al interior del hogar.

7 Cuando se utiliza una clasificación no normativa y a la población en general, Linthon Delgado (2018) encuentra prevalencias similares, aunque en su caso encuentra ligeramente una prevalencia superior en las mujeres que en los varones.

8 En datos no mostrados en los cuadros, los sobreeducados con ambas condiciones inadecuadas tienen un intervalo promedio al 95% de confianza de [10.85,11.04], mientras que los que tienen alguna condición adecuada, un promedio entre [11.50,11.62].

Tabla 2
Promedios de edad, relación de dependencia y horas
de trabajo no remunerado dentro de los hogares
según inserción/exclusión laboral. México, 2019

	PEA	PEA PO	PEA +Ocupado +Sobreeducado	PEA +Ocupado +Sobreeducado + Ingreso inadecuado y sin seguridad social
Edad (promedio)	41.7	41.8	39.8	39.9
Años de escolaridad (promedio)	10.3	10.3	11.4	10.9
Relación de dependencia (promedio)	0.5	0.5	0.52	0.5
Horas de trabajo no remunerado (promedio)	14.9	14.7	14.6	13.9
Observaciones	196,734	139,239	38,205	8,160
Población	61,889,524	42,949,115	11,317,931	2,620,083

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2019 - III trimestre.

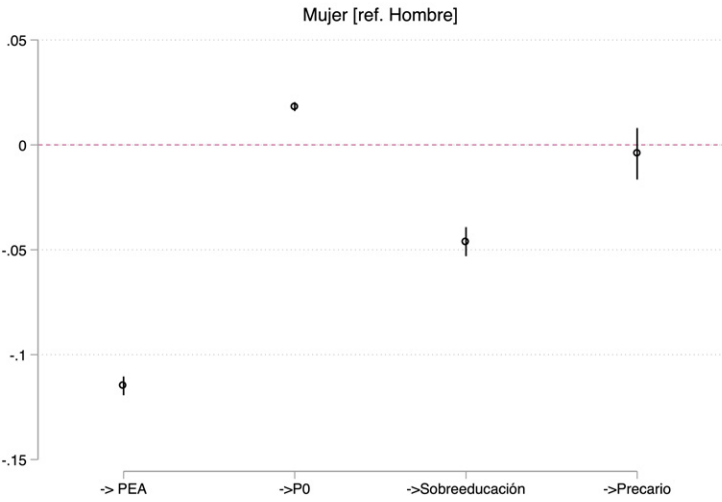
Antes de dar paso al análisis multivariado, cabe recordar que las dos primeras condiciones modeladas abordan el proceso en términos de la inclusión en el mercado laboral y el empleo. Luego se analizan las probabilidades de sobreeducación respecto a la subeducación y el ajuste educativo como una forma específica de inserción, para finalmente identificar los principales rasgos de quienes además son excluidos del empleo de calidad.

Para simplificar la interpretación, aquí presentamos los efectos marginales promedio de las variables incorporadas en los modelos. Estas estimaciones asumen que las variables están en sus condiciones medias y solo evalúan los cambios promedios de un cambio de unidad (para las variables cuantitativas) o de cualidad (para las nominales) en las probabilidades de estar en alguno de los estados o condiciones del modelo. Las tablas completas de resultados pueden consultarse en los Anexos (Tablas 3, 4 y 5).

En la Gráfica 1 mostramos los resultados que en promedio tiene el ser mujer en los distintos estados seleccionados de un modelo global que

controla además por el resto de variables plasmadas en la Tabla 1. De esta manera, podemos ver las diferencias de los procesos de inserción/exclusión laboral entre varones y mujeres.

Gráfica 1
Efectos marginales del efecto de ser mujer, en las probabilidades condicionadas de transición en el proceso de inserción laboral. México, 2019, tercer trimestre

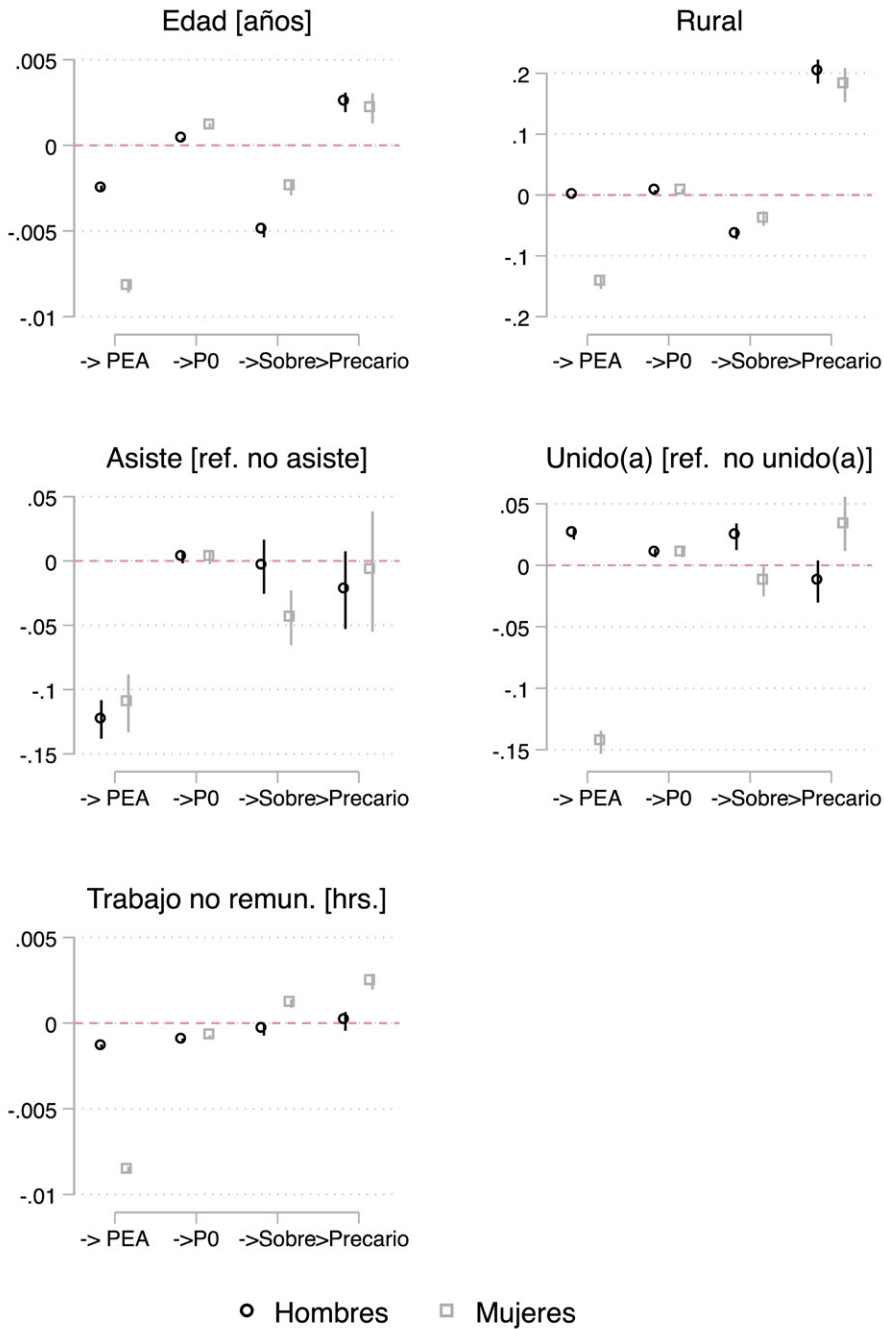


Intervalos de confianza al 95 por ciento.
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de Tabla 3, en Anexos.

Como se observa en la Gráfica 1, las mujeres (con respecto a los varones) tienen menores probabilidades de entrar a la PEA, incluso controlando por el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al interior de los hogares. En el caso de la ocupación, manteniendo las condiciones medias de la PEA, las mujeres tendrían una probabilidad algo mayor de ocuparse. En el caso de la sobreeducación, los resultados multivariados reafirman lo encontrado en los descriptivos posicionando a México como un caso excepcional en el concierto internacional (ILO, 2013b), ya que en este caso las mujeres no forman parte de los grupos demográficos más vulnerables a la sobreeducación. Si observamos las probabilidades de la doble condición de sobreeducación y precariedad en el mercado mexicano, no se identifican efectos significativos por sexo. Esto señala que la diferencia encontrada en el análisis bivariado (Tabla 1), no se sostiene cuando se consideran los otros atributivos aquí modelados.

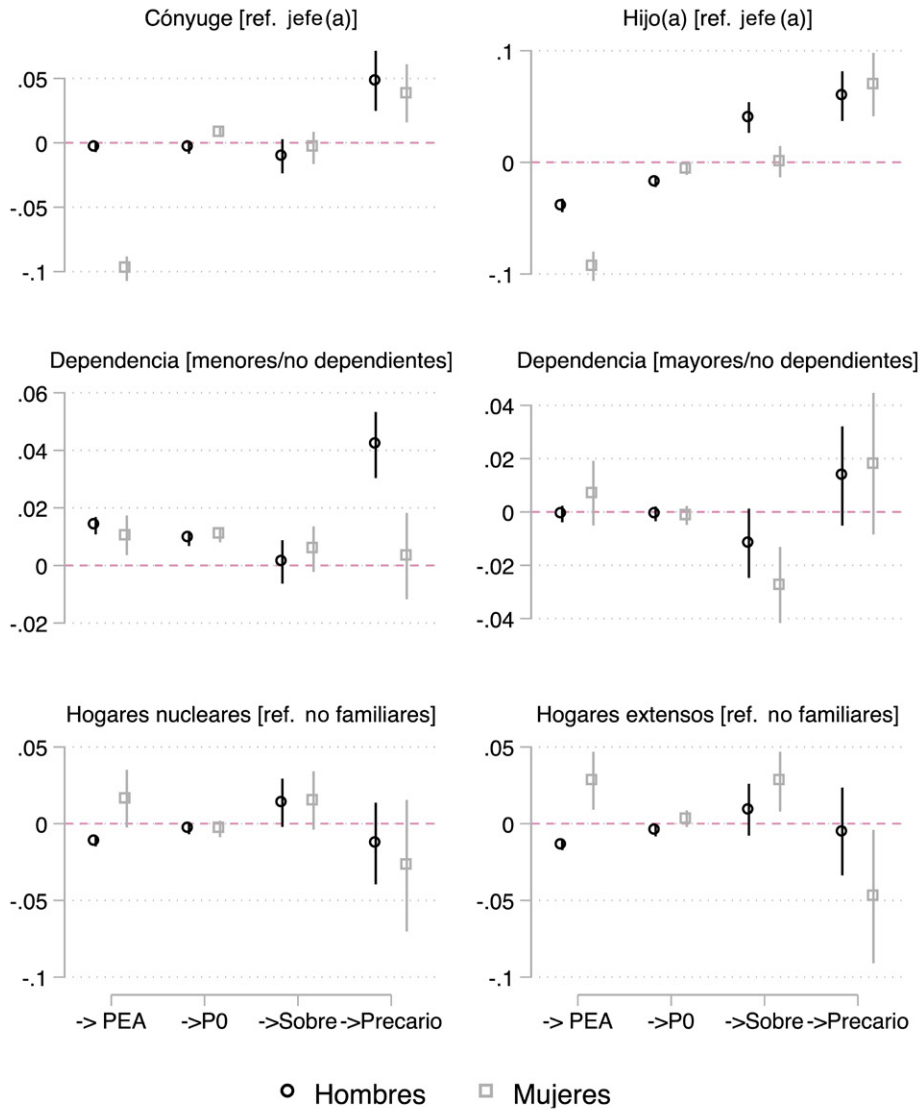
Gráfica 2

Efectos marginales promedio de las variables de individuo y residencia en las probabilidades condicionadas de transición en el proceso de inserción laboral. México, 2019, tercer trimestre



Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de las Tablas 4 y 5, en Anexos.

Gráfica 3
Efectos marginales promedio de las variables de hogar en las probabilidades condicionadas de transición en el proceso de inserción laboral. México, 2019, tercer trimestre



Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de las Tablas 4 y 5, en Anexos.

Dado que los determinantes de la actividad, ocupación y sobreeducación difieren entre varones y mujeres, a continuación hacemos un análisis separado por sexo. Asimismo, presentamos los resultados distinguiendo entre los efectos de las características individuales, incluyendo el lugar de residencia (Gráfica 2) y las características del hogar (Gráfica 3).

Las probabilidades de entrar en la actividad y la ocupación por edad varían significativamente y de modo contrario⁹. Para el ingreso a la actividad, un incremento de la edad se traduce en un decremento no lineal de las probabilidades de estar en actividad para ambos sexos. En cambio, en ambos sexos un incremento de la edad se traduce en un crecimiento no lineal de las probabilidades de ocupación. Cuando se analizan las probabilidades de sobreeducación entre los ocupados, vemos que para ambos sexos el efecto neto es negativo, es decir, que la sobreeducación tiende a corregirse conforme avanza la edad. Por último, la precariedad en la población sobreeducada no se corrige con la edad, por el contrario, su riesgo se incrementa en varones y mujeres.

En concordancia con estudios previos, nuestros datos muestran que en el medio rural, las mujeres tienen menores probabilidades de entrar al mercado de trabajo frente a los espacios urbanos (Escoto, Márquez y Prieto, 2017), mientras que esta distinción no es significativa para los varones. Tanto mujeres como varones en el medio rural están expuestos a niveles de ocupación apenas superiores a los de quienes residen en las ciudades. También están expuestos a menores niveles de sobreeducación que sus pares del ámbito urbano, pero el riesgo de estar ocupados en trabajos precarios es mayor. La asistencia escolar limita la entrada al mercado de trabajo y para las mujeres se asocia negativamente con la sobreeducación. En el resto de las transiciones, sus efectos no son diferentes de cero.

Como es esperable, la condición de estar en una unión conyugal, implica una mayor actividad en los varones y menor probabilidad de ser parte de la PEA para las mujeres. Estar en unión, en cambio, incrementa las probabilidades de ocupación en ambos sexos, pero tiene un efecto divergente cuando se analiza las probabilidades de estar sobreeducado. Estar unido incrementa el riesgo de desajuste entre varones ocupados,

9 Las siguientes descripciones asumen que cuando se habla del efecto de una variable el resto se mantiene en sus valores medio, es decir *ceteris paribus*.

pero no hay un efecto significativo para la precariedad. En cambio, para las mujeres ocurre lo inverso: los vínculos de pareja parecen funcionar como inhibidor de la sobreeducación, pero son un promotor de la precariedad.

Con respecto al trabajo no remunerado dentro del hogar, como lo señalan estudios previos, las cargas domésticas afectan la inserción a la actividad y la ocupación en las mujeres, efecto que también puede encontrarse entre los varones, pero con menores magnitudes. También encontramos efectos opuestos entre varones y mujeres cuando analizamos las condiciones de sobreeducación y precariedad. Por un lado, la carga horaria de trabajo no remunerado incrementa el riesgo de sobreeducación y precariedad entre las mujeres. Esto puede indicar que la mayor carga doméstica restringe las opciones laborales y puede llevar a tomar empleos no acordes a la calificación educativa. Por el otro lado, para los varones, el trabajo no remunerado tiene un efecto negativo y leve sobre el riesgo de sobreeducación y no tiene ningún efecto en la precariedad. Ello establece que existen procesos muy diferenciados por sexo ya no solo en el acceso al mercado de trabajo, sino también en el grado de ajuste educativo y en las condiciones laborales. Las cargas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado dentro del hogar perjudican en mayor medida la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo.

Además de las características individuales, hemos considerado estudiar la unidad doméstica. Si tomamos en cuenta las características del hogar (Gráfica 3), se aprecian también diferencias en sus efectos entre los diferentes estados del proceso de inclusión/exclusión laboral por sexo.

Con respecto a la posición en el hogar, el ser cónyuge (con referencia al jefe) en las condiciones medias de ambos sexos, tiene un efecto negativo en la inserción en la PEA, siendo este efecto mayor para las mujeres. Aquellas que son económicamente activas, al ser cónyuges tienen mayores oportunidades de ocuparse que los jefes y jefas de su hogar, mientras que los cónyuges varones tienen probabilidades levemente menores de ocuparse. El ser cónyuge no tiene efectos para las probabilidades de insertarse de manera sobreeducada, pero tiene efectos positivos para predecir condiciones laborales no adecuadas en ambos sexos.

Algo semejante ocurre entre hijos e hijas (con referencia a quien ocupa la jefatura del hogar), que tienen menores probabilidades de entrar en actividad y de estar ocupados. No obstante, en condiciones medias, los hijos varones ocupados tienen mayores probabilidades —respecto al jefe/jefa— de estar sobreeducados, mientras que para las hijas no se observa un efecto marginal estadísticamente significativo respecto al grupo de referencia. Si se consideran las probabilidades de entrar al último estado, vemos que efectivamente el riesgo de estar en condiciones precarias es muy superior para hijos e hijas sobreeducados.

El resto de las variables relativas a la composición del hogar, que recogen *las tasas de dependencia de personas mayores y menores*, así como *las configuraciones familiares* (nucleares y no nucleares) tienen resultados ambiguos y sus efectos son débiles estadísticamente en comparación con los observados para los atributos individuales. Por ejemplo, las tasas de dependencia de personas menores de edad incrementan las probabilidades de actividad económica y ocupación en ambos sexos, pero solo en los varones tienen cierto efecto sobre el riesgo de precariedad entre los sobreeducados. Los varones que residen en hogares familiares tienen un menor riesgo de estar en actividad y en ocupación, y no se aprecian efectos significativos para las transiciones ulteriores. Entre las mujeres que residen en hogares familiares encontramos cierto efecto positivo para la entrada en actividad, no se corroboran efectos sobre la ocupación, y un riesgo levemente superior de sobreeducación entre las que residen en hogares extensos. La precariedad, en cambio, se asocia negativamente y de modo moderado a los tipos de hogares extensos entre las trabajadoras del sexo femenino.

Consideraciones finales

El fenómeno de la sobreeducación suele estudiarse desde la óptica del uso ineficiente de recursos, pero aquí preferimos considerar a la sobreeducación como un punto intermedio en el proceso de inclusión y exclusión laboral. Para esto hemos elegido un caso como el mexicano, donde se conjugan un proceso de expansión educativa intergeneracional y un mercado laboral precarizado. La expansión educativa en México es una buena noticia, pero sería aún mejor si fuese acompañada de un mercado laboral capaz de emplear a una población más escolarizada.

Nuestra hipótesis de partida enunciaba que la sobreeducación podría preceder a la exclusión del empleo de calidad, al conducir a una remuneración inadecuada y a la ausencia de cobertura del sistema de seguridad social. Sin embargo, los resultados indican un panorama más complejo y menos lineal, donde la sobreeducación se asocia a la precariedad, pero solo en algunos perfiles poblacionales. Específicamente la precariedad se asocia con la sobreeducación ante un incremento de la edad, la residencia rural, la posición en el hogar de cónyuges e hijos, las mujeres que viven en unión, las mujeres con trabajo no remunerado, y los varones que viven en hogares con mayores tasas de dependencia. Para el resto de grupos no se aprecia una asociación significativa entre sobreeducación y precariedad. Por otra parte, para ninguno de los atributos considerados se verifica una asociación entre sobreeducación y ausencia de precariedad. En otras palabras, la sobreeducación funciona para determinados grupos como promotor de la precariedad, pero en ningún caso funciona como inhibidor.

La principal contribución de este trabajo exploratorio sobre las implicancias de la sobreeducación en la exclusión laboral es haber identificado una serie de perfiles poblacionales en lógica de proceso. Los estudios acerca de la sobreeducación para países con bajo y mediano ingreso han utilizado a la informalidad como antecedente o predictor y no como uno de los estados asociados a la sobreeducación, como sí se hace en este caso. Conceptualmente la principal contribución de este estudio es entender a la sobreeducación como promotor de las malas condiciones laborales. De este modo, quedan de manifiesto los límites de la expansión educativa sin un correlato de la expansión de la capacidad de absorción de los mercados de trabajo.

Esto plantea un doble desafío para las políticas públicas. Por un lado, son necesarias políticas orientadas a la creación de empleos que permitan ocupar a una población crecientemente educada. La absorción ajustada de la mano de obra debería tener en cuenta a la población joven, residente en áreas urbanas y a las mujeres con cargas de cuidados no remunerados que coincide con el perfil de sobreeducación. Por otro lado, deben pensarse estrategias de absorción que mejoren las condiciones laborales particularmente precarias de quienes sufren la triple

condición de sobreeducación, mala remuneración y desafiliación a la seguridad social. Estas estrategias deberán de dirigirse al perfil de trabajadores sobreeducados y en precariedad que aquí identificamos.

En adelante, se plantea una necesidad de profundizar en este análisis por los sectores de actividad para introducir un nivel más de distinción a las formas en que se tejen los procesos de sobreeducación y exclusión laboral. También sería deseable analizar las posibles interacciones entre estas dinámicas y los ciclos económicos de expansión y contracción. Por último, sería también deseable analizar el desajuste educativo por subeducación y su asociación con la exclusión laboral.

Anexos

Tabla 3
Modelo logístico secuencial de las probabilidades de transición en el proceso de inserción laboral. Personas mayores de 25-64 años. México, 2019, tercer trimestre

	[1= Sobreeducación]			
	[1] Pr(PEA=1) e ^β	[2] Pr(ocupado=1) e ^β	[3] Pr(Sobre=1) e ^β	[4] Pr(condiciones=1) e ^β
Varones	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Mujer	0.4015*** (0.007)	2.1510*** (0.091)	0.7935*** (0.014)	0.9747 (0.037)
Edad	1.2302*** (0.006)	1.0896*** (0.014)	1.0146** (0.005)	0.9279*** (0.010)
Edad2	0.9971*** (0.000)	0.9993*** (0.000)	0.9996*** (0.000)	1.0011*** (0.000)
Urbano	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Rural	0.6262*** (0.011)	1.3594*** (0.074)	0.7538*** (0.015)	2.7974*** (0.101)
Jefe	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Cónyuge	0.4618*** (0.009)	1.1595** (0.064)	0.9861 (0.020)	1.4182*** (0.059)
Hijo	0.4835*** (0.012)	0.6196*** (0.034)	1.0850*** (0.026)	1.5307*** (0.076)

(continúa)

Tabla 3 (continuación)

	[1= Sobreeducación]			
	[1] Pr(PEA=1) e ^β	[2] Pr(ocupado=1) e ^β	[3] Pr(Sobre=1) e ^β	[4] Pr(condiciones=1) e ^β
Otro	0.4000*** (0.011)	0.6201*** (0.040)	1.0799** (0.030)	1.2777*** (0.074)
Asiste a la escuela	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
No asiste	0.4117*** (0.015)	1.1402 (0.102)	0.8826** (0.035)	0.8909 (0.078)
No unido	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Unido	0.7562*** (0.015)	1.5561*** (0.071)	0.9858 (0.019)	1.0661 (0.042)
Tasa dependencia menores	1.1046*** (0.016)	1.5340*** (0.061)	1.0157 (0.014)	1.1575*** (0.033)
Tasa dependencia mayores	0.9805 (0.023)	0.9562 (0.048)	0.9042*** (0.022)	1.0938* (0.053)
Hogar no familiar	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Nuclear	1.0802** (0.035)	0.8260** (0.062)	1.1434*** (0.035)	0.8878* (0.060)
Hogares extensos	1.1715*** (0.039)	0.9305 (0.074)	1.1650*** (0.038)	0.8669** (0.062)
Horas trabajo no remunerado	0.9606*** (0.000)	0.9630*** (0.001)	1.0035*** (0.001)	1.0090*** (0.001)
Observaciones	196734			
Log-likelihood	-204550.3			

Coeficientes exponenciados. Errores estándares en paréntesis.

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.001$.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2019 – III trimestre.

Tabla 4
Modelos logísticos secuenciales de las probabilidades
de transición en el proceso de inserción laboral. Varones
de 25-64 años. México, 2019, tercer trimestre

[1= Sobreeducación]				
	[1] Pr(PEA=1) e^{β}	[2] Pr(ocupado=1) e^{β}	[3] Pr(Sobre=1) e^{β}	[4] Pr(condiciones=1) e^{β}
Edad	1.2517*** (0.012)	1.0917*** (0.018)	0.9882* (0.006)	0.9211*** (0.013)
Edad ²	0.9966*** (0.000)	0.9991*** (0.000)	0.9998** (0.000)	1.0012*** (0.000)
Urbano	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Rural	0.9679 (0.036)	1.3140*** (0.090)	0.7160*** (0.017)	3.0264*** (0.136)
Jefe	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Cónyuge	0.9048* (0.051)	0.8150** (0.080)	0.9483 (0.033)	1.3735*** (0.100)
Hijo	0.4434*** (0.023)	0.5121*** (0.039)	1.2131*** (0.040)	1.4666*** (0.101)
Otro	0.5227*** (0.027)	0.5906*** (0.050)	1.0715* (0.038)	1.1007 (0.085)
Asiste a la escuela	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
No asiste	0.2096*** (0.012)	1.1427 (0.138)	0.9780 (0.052)	0.8490 (0.100)
No unido	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Unido	1.7572*** (0.071)	1.5008*** (0.095)	1.1225*** (0.031)	0.9144 (0.053)
Tasa dependencia menores	1.4261*** (0.057)	1.5262*** (0.090)	1.0062 (0.019)	1.3321*** (0.054)
Tasa dependencia mayores	0.9801 (0.040)	0.9681 (0.062)	0.9436* (0.031)	1.0970 (0.072)
Hogar no familiar	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

(continúa)

Tabla 4 (continuación)

[1= Sobreeducación]				
	[1] Pr(PEA=1) e^{β}	[2] Pr(ocupado=1) e^{β}	[3] Pr(Sobre=1) e^{β}	[4] Pr(condiciones=1) e^{β}
Nuclear	0.7088*** (0.040)	0.8486* (0.081)	1.0701* (0.043)	0.9162 (0.082)
Hogares extensos	0.6734*** (0.040)	0.8123** (0.083)	1.0463 (0.045)	0.9667 (0.093)
Horas trabajo no remunerado	0.9665*** (0.001)	0.9568*** (0.002)	0.9981** (0.001)	1.0007 (0.002)
Observaciones	92206			
Log-likelihood	-93651.0			

Coeficientes exponenciados. Errores estándares en paréntesis.

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.001$.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2019 – III trimestre.

Tabla 5
Modelo logístico secuencial de las probabilidades de
transición en el proceso de inserción laboral. Mujeres
de 25-64 años. México, 2019, tercer trimestre

[1= Sobreeducación]				
	[1] Pr(PEA=1) e^{β}	[2] Pr(ocupado=1) e^{β}	[3] Pr(Sobre=1) e^{β}	[4] Pr(condiciones=1) e^{β}
Edad	1.1920*** (0.007)	1.0575** (0.023)	1.0541*** (0.009)	0.9367*** (0.015)
Edad ²	0.9975*** (0.000)	0.9999 (0.000)	0.9992*** (0.000)	1.0009*** (0.000)
Urbano	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Rural	0.5433*** (0.011)	1.4171*** (0.130)	0.8170*** (0.027)	2.3669*** (0.144)
Jefe	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Cónyuge	0.6317*** (0.015)	1.4669*** (0.126)	0.9802 (0.032)	1.2471*** (0.083)
Hijo	0.6448*** (0.020)	0.8004** (0.068)	1.0031 (0.036)	1.4671*** (0.112)

(continúa)

Tabla 5 (continuación)

	[1= Sobreeducación]			
	[1] Pr(PEA=1) e^{β}	[2] Pr(ocupado=1) e^{β}	[3] Pr(Sobre=1) e^{β}	[4] Pr(condiciones=1) e^{β}
Otro	0.4443*** (0.015)	0.7113** (0.076)	1.1188** (0.049)	1.4448*** (0.131)
Asiste a la escuela	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
No asiste	0.6271*** (0.029)	1.1418 (0.153)	0.7902*** (0.049)	0.9560 (0.128)
No unido	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Unido	0.5118*** (0.012)	1.5440*** (0.117)	0.9358** (0.029)	1.2050** (0.077)
Tasa dependencia menores	1.0478** (0.016)	1.6064*** (0.089)	1.0289 (0.021)	1.0180 (0.042)
Tasa dependencia mayores	1.0319 (0.028)	0.9430 (0.077)	0.8709*** (0.032)	1.1039 (0.082)
Hogar no familiar	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Nuclear	1.0742* (0.045)	0.8618 (0.109)	1.0818 (0.055)	0.8679 (0.095)
Hogares extensos	1.1314** (0.048)	1.1732 (0.155)	1.1503** (0.060)	0.7765** (0.087)
Horas trabajo no remunerado	0.9626*** (0.000)	0.9657*** (0.001)	1.0057*** (0.001)	1.0133*** (0.001)
Observaciones	104528			
Log-likelihood	-109075.5			

Coeficientes exponenciados. Errores estándares en paréntesis.

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.001$.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2019 - III trimestre.

Referencias

- Abramo, L. y Valenzuela, M. E. (2005). Women's labour force participation rates in Latin America. *International Labour Review*, 144(4), 369–400. <https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2005.tb00574.x>
- Arias Ortiz, E. y Ñopo, H. (2015). *When supply fails to meet demand. Quantifying the skill mismatch in Mexico 2012-2013*. Working paper. Recuperado de <http://lacer.lacea.org/handle/123456789/53175>
- Bauer, T. K. (2002). Educational mismatch and wages: A panel analysis. *Economics of Education Review*, 21(3), 221–229. doi: 10.1016/S0272-7757(01)00004-8
- Bensusán, G. (2014). Legislación laboral en América Latina: La brecha entre el diseño y la realidad. En T. Teklè (Ed.), *Derecho del trabajo y protección de los trabajadores en países en desarrollo* (pp. 157–204). Pozuelo de Alarcón, Madrid; Ginebra: Plaza y Valdés; Oficina Internacional del Trabajo.
- Buis, M. L. (2011). The consequences of unobserved heterogeneity in a sequential logit model. *Research in Social Stratification and Mobility*, 29(3), 247–262. doi: 10.1016/j.rssm.2010.12.006
- Buis, M. L. (2013). *seqlogit: Stata module to fit a sequential logit model*. Sitio web. Recuperado de <http://econpapers.repec.org/software/bocbocode/S456843.htm>
- Burgos Flores, B. (2008). Sobreeducación y desfase de conocimientos en el mercado laboral de profesionistas. *Revista de la Educación Superior*, 37(148), 57-68.
- Cardoso, F. (1970). Comentario sobre los conceptos de sobrepoblación relativa y marginalidad. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales*, 1(2). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4646987&pid=S1405-7425200600010000400005&lng=es
- Castro, E., García, G. y Badillo, E. (2011). La participación laboral de la mujer casada y su cónyuge en Colombia: un enfoque de decisiones relacionadas. *Lecturas de Economía*, (74), 171–201. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1552/155222746007>
- Coen-Pirani, D., León, A. y Lugauer, S. (2010). The effect of household appliances on female labor force participation: Evidence from microdata. *Labour Economics*, 17(3), 503–513. doi: 10.1016/j.labeco.2009.04.008

- De la Garza Toledo, E. (1993). *Reestructuración productiva y respuesta sindical en México*. México: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Recuperado de <http://ru.iiec.unam.mx/1572/1/ReestructuracionProductivaYResSindical.pdf>
- Duncan, G. J. y Hoffman, S. D. (1981). The incidence and wage effects of overeducation. *Economics of Education Review*, 1(1), 75-86. Recuperado de <https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:ecoedu:v:1:y:1981:i:1:p:75-86>
- Escoto, A., Márquez, C. y Prieto, V. (2017). Desempleo abierto y desalentado en tres mercados de trabajo latinoamericanos. En S. Ochoa y P. Reyes. (Eds.), *Población y mercados de trabajo en América Latina: temas emergentes*. (pp. 81-119). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Espino, A. (2011). Evaluación de los desajustes entre oferta y demanda laboral por calificaciones en el mercado laboral de Uruguay. *Revista de Economía del Rosario*, 14(2), 99-133. Recuperado de https://www.urosario.edu.co/urosario_files/7f/7ff5d9e0-932b-42ed-9918-ac7b51a037df.pdf
- García, B. (2012). La precarización laboral y el desempleo en México (2000-2009). En E. de la Garza. (Coord.), *La situación del trabajo en México*. México: Universidad Autónoma Metropolitana; Plaza y Valdéz. Recuperado de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3538/10.pdf>
- García, B., Pacheco, E. (2000). Esposas, hijos e hijas en el mercado de trabajo de la Ciudad de México en 1995. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 15(1), 35-63. doi: 10.24201/edu.v15i1.1066
- Guadarrama, R., Hualde, A. y López, S. (2016). *La precariedad laboral en México: dimensiones, dinámicas y significados*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Handel, M. (2017). Predictors and consequences of mismatch in developing countries: Results from the World Bank STEP survey. En P. Comyn y O. Strietska-Ilina. (Eds.), *Skills and jobs mismatches in low and middle income countries* (pp. 63-87). Ginebra: ILO. Recuperado de https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_554331/lang--en/index.htm
- Hartog, J. (2000). Over-education and earnings: Where are we, where should we go? *Economics of Education Review*, 19(2), 131-147. doi: 10.1016/S0272-7757(99)00050-3

- Hernández-Laos, E. (2004). *Panorama del mercado laboral de profesionistas en México*. *Economía UNAM*, 1(2), 98-109. Recuperado de <http://ref.scielo.org/hw7ttz>
- Herrera, P., López-Bazo, E. y Motellón, E. (2013). Informality and overeducation in the labor market of a developing country. *AQR Working Papers*, (201303). Recuperado de http://www.ub.edu/irea/working_papers/2013/201305.pdf
- ILO (International Labour Office) (2013a). *A generation at risk*. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212423.pdf
- ILO (International Labour Office) (2013b). *Global employment trends: Recovering from a second jobs dip*. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202326.pdf
- ILO (International Labour Office) (2014). *Skills mismatch in Europe: Statistics brief*. Ginebra: ILO. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_315623.pdf
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2019). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), trimestre III*. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/>
- Johansen, J. y Gatelli, D. (2012). *Measuring mismatch in ETF partner countries: A methodological note*. Recuperado de http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Measuring_mismatch_methodological_note
- Kupets, O. (2019). Educational mismatch among young workers in low—and middle—income countries: Analysis of the SWTS data. En P. Comyn y O. Strietska-Illina. (Eds.), *Skills and jobs mismatches in low and middle income countries* (pp. 89–121). Ginebra: ILO. Recuperado de https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_726816/lang--en/index.htm
- Leuven, E. y Oosterbeek, H. (2011). *Overeducation and mismatch in the labor market*. Discussion paper, (5523). Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA). Recuperado de <https://www.iza.org/publications/dp/5523/overeducation-and-mismatch-in-the-labor-market>

- Linthon Delgado, D. E. (2018). *Desajuste educativo en un mercado laboral segmentado. El caso de México, 2005-2015*. Tesis de doctorado en Ciencias Económicas, Universidad Autónoma Metropolitana. http://bindani.izt.uam.mx:3000/concern/file_sets/8623hx730?locale=es
- Márquez Scotti, M. C. (2015). *Buscadores, desalentados y rechazados: las dinámicas de inclusión y exclusión laboral enraizadas en la desocupación*. México: El Colegio de México.
- Mehta, A. S., Felipe, J., Quising, P. y Camingue, S. (2011). Overeducation in developing economies: how can we test for it, and what does it mean? *Economics of Education Review*, 30(6), 1334–1347. doi: 10.2139/ssrn.1658474
- Mendes de Oliveira, M., Santos, M. C. y Kiker, B. F. (2000). The role of human capital and technological change in overeducation. *Economics of Education Review*, 19(2), 199–206. doi: 10.1016/S0272-7757(99)00020-5
- Muñoz Izquierdo, C. (2006). Determinantes de la empleabilidad de los jóvenes universitarios y alternativas para promoverla. *Papeles de Población*, 12(49), 75–89. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11204903>
- Murayama, C. (2010). Juventud y crisis: ¿hacia una generación perdida? *Economía UNAM*, 7(20), 71–78. doi: 10.22201/fe.24488143e.2010.20.169
- Nun, J. (2001). *Marginalidad y exclusión social*. Vol. 591. México: Fondo de Cultura Económica.
- Orozco Rocha, K. (2015). Participación femenina en trabajos asalariados: ¿una doble selectividad? *Carta Económica Regional*, (116), 88–111. doi: 10.32870/cer.voi116.6142
- Palmer, R. (2017). *Jobs and skills mismatch informal economy*. Ginebra: OIT. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_629018.pdf
- Quinn, M. A. y Rubb, S. (2006). Mexico's labor market: The importance of education-occupation matching on wages and productivity in developing countries. *Economics of Education Review*, 25(2), 147–156. Recuperado de <https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:ecoedu:v:25:y:2006:i:2:p:147-156>
- Rendón, T. (2003). Empleo, segregación y salarios por género. En E. de la Garza y C. Salas. (Coords.), *La situación del trabajo en México*, (pp. 129–150). México: Universidad Autónoma Metropolitana.

- Sanhueza, S. V., Friz Carrillo, M. C. y Quintriqueo Millán, S. (2014). Estudio exploratorio sobre las actitudes y comportamiento del profesorado de Chile en contextos de escolarización de alumnado inmigrante. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 16(3), 148-162. Recuperado de <http://redie.uabc.mx/vol16no3/contenido-sanhueza-friz-.html>
- Tokman, V. (2004). *Una voz en el camino. Empleo y equidad en América Latina: 40 años de búsqueda*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Verdugo, R. R. y Verdugo, N. T. (1989). The impact of surplus schooling on earnings: Some additional findings. *The Journal of Human Resources*, 24(4), 629-643. doi: 10.2307/145998
- Weller, J. (2001). *Procesos de exclusión e inclusión laboral: la expansión del empleo en el sector terciario*. Cepal. ONU: LC/L.1649-P. Recuperado de <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/5449>
- Weller, J. (2009). *El fomento de la inserción laboral de grupos vulnerables. Consideraciones a partir de cinco estudios de caso nacionales*. Recuperado de <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/3738>
- Weller, J. (2011). Panorama de las condiciones de trabajo en América Latina. *Nueva Sociedad*, (232), 32-49. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/321275093_Panorama_de_las_condiciones_de_trabajo_en_America_Latina

Juventudes invisibilizadas en Argentina: la relevancia de los trabajos no remunerados y la validez de la categoría nini

Invisibilized Youth in Argentina: The Relevance of Unpaid Work and the Validity of the NEET Category

María Marta Santillán Pizarro

Orcid: 0000-0001-5191-9234

mm_santillan@yahoo.com.ar

Eduardo Javier Pereyra

Orcid: 0000-0003-4778-7288

eduardopereyra_24@hotmail.com

*Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad,
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
y Universidad Católica de Córdoba, Argentina*

Resumen

Esta investigación se inscribe en la corriente de estudios que adopta el enfoque de derechos para el análisis de la cuestión juvenil. Desde este paradigma, se sostiene que la construcción de la categoría generación nini homogeneiza irreflexivamente la realidad de las juventudes que no estudian ni trabajan. El artículo tiene como objetivo revelar la importante presencia de los trabajos no remunerados en la población juvenil, poniendo en discusión la relevancia teórica y empírica de la categoría nini. Además, el trabajo pone en evidencia cómo ciertos factores clave como el género, la edad, el nivel educativo, el nivel de ingresos del hogar y la presencia de niños en el hogar, influyen en las trayectorias juveniles. Se utiliza la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina en el año

Palabras clave

Jóvenes ninis
Trabajos no remunerados
Inactividad
Políticas de cuidado
Enfoque de derechos
Perspectiva generacional

2013. Los resultados contribuyen a repensar el enfoque sobre la inactividad de las personas jóvenes y establecer nuevos lineamientos de las políticas públicas para abordar la cuestión juvenil.

Abstract

This work is framed within the rights approach for studying youth. From this point of view or paradigm, we claim that the NEET category thoughtlessly homogenizes youths that neither study nor work. The aim of this paper is to question the theoretical and empirical relevance of the NEET concept, by revealing the importance of unpaid labor in the youth population. Furthermore, this work shows how gender, age, educational level, household income and children at home can influence youth trajectories. In order to support our findings, we have used the Unpaid Work and Time Use Survey, collected by National Institute of Statistics and Censuses of Argentina in 2013. This finding contributes to make us rethink the way in which the inactivity of young people has been studied until now, as well as to establish new guidelines for public policies which address the youth issue.

Keywords

NEET youth
Unpaid work
Inactivity
Care policies
Rights approach
Generational perspective

Recibido: 08/04/2020
Aceptado: 18/05/2020

Introducción

En Latinoamérica, a partir de la década de los ochenta, en pleno contexto de recuperación democrática, los Estados nacionales comenzaron a observar con atención que las juventudes eran el principal grupo poblacional que sufría las consecuencias más crudas de las crisis político-económicas del continente. Es entonces cuando la cuestión juvenil ingresa en la agenda estatal y comienza a ser abordada desde distintas perspectivas: políticas públicas e institucionalidad especializada en la materia; promulgación de leyes específicas hacia este sector e, incluso, con reformas en el sistema judicial.

Entre los procesos más relevantes, empezó a divisarse que mientras las y los jóvenes más educados y de mayores ingresos iban postergando los “roles adultos”, un amplio conjunto de jóvenes atravesaba una creciente desafiliación institucional en sus trayectorias de vida, es decir, sufrían una exclusión tanto del sistema educativo como del mercado laboral. Tal fue la magnitud de este fenómeno que la población juvenil quedó sobrerrepresentada en la población pobre e indigente (Rossel y Filgueira, 2015).

A finales de los noventa, las estadísticas sociales de Inglaterra adoptaron el concepto de generación nini (*not in employment, education or training*-NEET, por su idioma original), con el objetivo de caracterizar la realidad de un amplio conjunto de jóvenes que no trabajaban ni estudiaban. Este concepto se popularizó y su uso fue adoptado por organismos internacionales, los Estados nacionales, los medios de comunicación y un vasto sector del campo académico (Feijóo, 2015). Representa, aún hoy, un paradigma muy vigente al momento de diseñar e implementar políticas públicas.

A pesar de su amplia difusión, se considera que el concepto se posiciona desde una perspectiva que homogeneiza y estigmatiza a este sector poblacional que atraviesa una serie de situaciones que la categoría nini desconoce. En este contexto, se ha consolidado una corriente de trabajos que adoptan el “enfoque de derechos” para el análisis de la cuestión juvenil y el diseño de políticas públicas. Desde este paradigma, se propicia el abandono de los prejuicios negativizantes hacia este sector poblacional y se propone incluir nuevas variables para analizar las condiciones de actividad de quienes no estudian ni trabajan. Esto ha permitido discutir la magnitud y gravedad del fenómeno y, fundamentalmente, demostrar que los supuestos jóvenes ninis, lejos de “hacer nada” y convertirse en un potencial riesgo para la seguridad y el orden social, se encuentran realizando trabajos no remunerados que son clave para la reproducción del sistema productivo actual.

Inscrito en esta corriente, el presente estudio tiene como objetivo revelar la importante presencia de los trabajos no remunerados en la población juvenil, poniendo en discusión la relevancia teórica y empírica de la categoría nini. Además, este estudio muestra cómo ciertos factores clave, como el género, edad, nivel educativo, nivel de ingresos del hogar, presencia de niños en el hogar, influyen en las trayectorias juveniles. Se utiliza la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (ETNRYUT), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC) en el año 2013.

El artículo se organiza de la siguiente manera. En el primer apartado se reflexiona acerca de las interpretaciones sobre las juventudes detrás de la categoría generación nini y se exhiben algunos resultados de trabajos

1 De acuerdo con Abramovich (2006), este marco normativo surgido a mediados de los noventa entiende a las personas como sujetos titulares de derechos a determinadas prestaciones que deben ser garantizadas por el Estado a través de políticas públicas.

que, desde un enfoque de derecho, han logrado poner en discusión la conceptualización y operativización de las mediciones en torno a las y los jóvenes nini. El segundo punto describe la fuente de información y las características principales de la base de datos que fue utilizada como principal herramienta metodológica para el análisis. El tercer apartado presenta los principales resultados obtenidos que permiten elaborar una sólida evidencia empírica que rebate la magnitud del fenómeno nini en Argentina y objeta la utilidad de la etiqueta como una manera de describir adecuadamente la realidad de las juventudes. Por último, se exponen las conclusiones y se proponen lineamientos estratégicos para repensar las políticas públicas hacia la población juvenil.

La juventud como generación nini y las evidencias empíricas que la contradicen

El término juventud, al igual que el de niñez o el de vejez, está fuertemente asociado a una determinada edad de las personas. En este sentido, las clasificaciones etarias (como las de sexo o clase) son formas de imponer límites en pos de producir y sostener un orden social determinado, y constituyen un dato biológico socialmente manipulado y manipulable (Bourdieu, 2002)². En el ámbito internacional, no existe un consenso unánime sobre el grupo de edad que abarca el concepto de juventudes y los criterios adoptados varían de acuerdo con cada país o región, y oscilan en un amplio rango que va de los 12 a los 35 años³. En Argentina, si bien no existe una ley nacional integral de juventud que establezca normativamente su definición, desde fines de los noventa, tanto los organismos especializados en la materia, como el INDEC, los ubica como aquellas personas entre 15 y 29 años de edad (Borzese, Botinelli y Luro, 2009)⁴.

-
- 2 Conviene aclarar que este estudio, siguiendo la concepción de Margulis (2001), fue elaborado bajo la premisa de que la juventud es una categoría compleja. Debe ser entendida como un concepto histórico que adquiere su especificidad según la construcción social que se da en los diferentes momentos de cada sociedad. Por ello, ya no puede hablarse a través de un concepto monolítico y uniforme de juventud, sino que es necesario entender e interpretar las diversidades existentes en función del plano histórico, social, económico y cultural, porque de ese modo se encuentran diferentes juventudes conviviendo en la misma realidad social.
 - 3 Las Naciones Unidas distinguen etariamente la adolescencia (grupo que va de 10 a 19 años), de la juventud (personas entre los 15 y 24 años). Como puede observarse, los grupos se superponen y también abarcan parte de la niñez, ya que de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, esta se extiende hasta los 18 años.
 - 4 En Argentina también se produce una superposición entre las definiciones etarias. La ley nacional 26.061 de "Protección integral de la niñez y adolescencia" estableció que todas las personas menores de 18 años se encuadran en estas categorías, mientras que, como ya se señaló, dependencias nacionales como el Instituto Nacional de Juventudes comprende a las y los jóvenes como el grupo que va entre los 15 y 29 años.

De igual manera, el término generación “es performativo —expresiones que crean una entidad con solo nombrarla—, una llamada o un grito de guerra para llamar a filas a una comunidad imaginada o más precisamente convocada” (Bauman, 2007, p. 370). De acuerdo con Mannheim (1928), forman parte de una misma generación los jóvenes que experimentan los mismos problemas históricos concretos.

Por ende, cuando refieren a la generación nini, jóvenes ninis o solamente ninis, se trata de una población en riesgo “sujeta a vulneraciones de derechos y, por tanto, potencial sujeto/objeto de políticas públicas que permitan la superación de tales privaciones” (Comari, 2015, p. 19).

Los trabajos que respaldan la utilización de la categoría nini que se citan a continuación, utilizan diferentes subsegmentos etarios en la exposición de evidencia empírica para presentar la realidad de la generación nini, aunque todos ellos están dentro del rango general de jóvenes entre 15 y 29 años. En ellos se puede diferenciar a los que engloban a este sector poblacional a partir de una doble negación (no estudian ni trabajan) en las mediciones estadísticas, de aquellos que parten de una triple negación (no estudian, no trabajan ni buscan trabajo).

Lo que ambas definiciones comparten implícitamente es que los ninis “no hacen nada” (en su mayoría por voluntad propia) y que esta condición se transforma en estructural para estos jóvenes. Por este motivo, se les define como una generación, caracterizada por la falta de oportunidades y el empleo informal (CEPAL, 2012; Tuirán y Ávila, 2012), lo que implicaría que este grupo de jóvenes carece de las habilidades cognitivas y socioemocionales necesarias para enfrentar con éxito su vida adulta (Capello y García Oro, 2013) y posee las mayores dificultades para delinear su trayecto de vida, ya que las y los jóvenes ninis son apáticos, irresponsables, pasivos y desinteresados (Carmona Zúñiga y García Hernández, 2011).

En consecuencia, se define a este sector como una población “en y de riesgo”, con alta propensión a incurrir en conductas peligrosas y desviadas de las “normas” sociales (Feijoó, 2015). Entre ellas, la realización de prácticas delincuenciales y de aislamiento, la propensión a problemas mentales y físicos, así como a adicciones (Credde y Reynolds, 2001; Hammer, 2000). Estas condiciones aumentarían las posibilidades de que las y los jóvenes adopten acciones “vandálicas”, “antisistémicas” o “extremistas” poniendo en vilo la cohesión social, la seguridad y la democracia de la región (Avellaneda y Elizondo, 2015; Székely Pardo, 2012).

Estos riesgos potenciales implican graves consecuencias para las economías nacionales. Por un lado, porque elevan el gasto público a raíz del desempleo de larga duración, la pérdida de capital humano y de ingresos impositivos no generados por este sector y, por el otro, por el aumento de los costos en las políticas sociales y el sistema de salud (Mosquera, García y Cortés, 2018). Las investigaciones previas que promueven la utilización de la categoría *nini* amparan su relevancia con base en el volumen y peso significativo que este segmento representaría en las estadísticas sociales. Observando solo el comportamiento educativo y laboral, se ha calculado que en Latinoamérica alrededor de 9 millones de jóvenes entre 15 y 18 años (un 16% del total) no trabajan ni estudian (Székely Pardo, 2012), cifra que asciende a casi 20% si se aumenta el rango etario, considerando jóvenes entre 15 y 24 años (Comari, 2015).

En Argentina, de acuerdo con el Censo de 2010, eran poco más de medio millón los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que no estudiaban, no trabajaban ni buscaban trabajo. Actualmente, se sostiene que son alrededor de un millón las personas jóvenes en dicha situación y en términos porcentuales representarían un 20% del total de personas jóvenes (Avellaneda y Elizondo, 2015; Capello y García Oro, 2013; Rodríguez, 2011).

De manera crítica-reflexiva, se sostiene que la construcción de esta categoría teórica se ha edificado a partir de connotaciones negativas sobre la juventud y ha servido más para instalar un chivo expiatorio que como noción de un agente social (Comari, 2015), y que, como se verá más adelante, es evidente la ausencia de datos empíricos sólidos que permitan fundamentar el carácter estructural y homogéneo del fenómeno y la consecuente utilización de la idea de “generación”.

Se sostiene que las perspectivas detrás de esta etiqueta responden a concepciones tradicionales, conservadoras, estáticas y positivistas que definen a la juventud como un mero momento en el desarrollo biológico-humano (Margulis, 2001) y conllevan consigo discursos que invisibilizan a las personas jóvenes, “anulando sus visiones, pensamientos y sentimientos y, fundamentalmente, negando su capacidad de acción y participación en la dinámica de la realidad social” (Chaves, 2005, p. 19).

Estas miradas se inscriben en la adopción del enfoque de ciclo de vida para pensar y desarrollar la provisión de bienes y servicios para la producción de bienestar en las sociedades actuales. Este enfoque, desde una sociología de la edad, distingue cuatro etapas básicas en el ciclo

vital de los individuos: infancia, juventud, adultez y vejez. De acuerdo con este sistema de clasificación según la edad de las personas, se atribuyen determinados roles, vínculos y posiciones en relación con el entorno para su diferenciación, que configuran una distribución social del bienestar y el poder a partir de diferentes grupos de edad en la estructura social (Pereyra, 2019).

Este carácter adultocéntrico del enfoque del ciclo vital ha sido fuertemente cuestionado por gran parte de los especialistas en la cuestión juvenil (tanto del campo académico como de la gestión pública). Se critican los componentes evolucionistas y biologicistas del mismo, ya que homogeneiza a la juventud y universaliza un “deber ser” en las trayectorias de vida juveniles impuestas desde las perspectivas socioculturales por el mundo adulto y sus instituciones.

Por tales motivos, se han desarrollado investigaciones que, desde un enfoque generacional y de derechos, entienden a la juventud como un concepto históricamente construido y determinado, y constituye un sector poblacional que construye su identidad en el marco de las relaciones sociales e institucionales de acuerdo con el contexto vigente. En esta concepción, son tres las variables que influyen en el carácter que asume el concepto: la diferenciación social, el género y la generación (Quapper, 2001).

En tal sentido, se impulsa el cambio de concepción de la juventud a las juventudes (Margulis, 2001; Pérez Islas, 2000), lo que hace necesario percibir las particularidades existentes en las juventudes de acuerdo con cada espacio social; advertir la existencia de subgrupos etarios (utilizados para clasificaciones y categorización de las mismas), y apreciar la multiplicidad de lo juvenil a través de una mirada compleja.

Desde estos supuestos y miradas en clave generacional, se ha elaborado evidencia empírica que debate la pertinencia de la categoría generación nini (Comari, 2015; De León, 2017; INDEC, 2014a; Santillán Pizarro y Rabbia, 2016) y, con la incorporación de otras variables en el análisis sobre este sector poblacional, se ha logrado poner en discusión la relevancia del fenómeno, reflexionar críticamente sobre la carga negativa y estigmatizante que se impone sobre los supuestos jóvenes ninis y desmitificar que esta generación “no hace nada”, lo que representa un riesgo para sí misma y para el conjunto de la sociedad.

Algunos de estos trabajos incluyeron el estudio de la temporalidad de la condición nini junto con la diferenciación por sector social y por género. Los niveles de ingresos y la división sexual del trabajo son categorías importantes para comprender las trayectorias juveniles. Dimensiones tales como la discapacidad, fecundidad y nupcialidad de dicho grupo también fueron incorporadas. Los niveles de estudios máximos alcanzados es otra condición considerada, ya que la educación impacta en la inserción en el mercado laboral, la calidad de vida y trayectos de las juventudes. Cabe señalar que se ha detectado que, si bien finalizar el nivel medio de educación es necesario para acceder a empleos de calidad, actualmente se ha vuelto insuficiente como principal mecanismo que garantice su acceso a estos empleos (Filmus, 2001).

Además, desde la economía feminista, se puso énfasis en la relevancia que posee el trabajo no remunerado y la economía del cuidado que realizan principalmente las mujeres en el sistema productivo de los países (Rodríguez Enríquez, 2007), lo que permitió hacer visible la distribución desigual del trabajo no remunerado según género, la discriminación en el mercado de trabajo hacia las mujeres, y su impacto en la participación laboral, social y política de las mujeres (Aguirre y Ferrari, 2014). Estas actividades representan un mecanismo de transferencias gratuitas de servicios (en términos sociales y económicos) que realizan los hogares al mercado y constituyen las bases invisibles del bienestar social (Santillán Pizarro y Rabbia, 2016).

Cuando se hace referencia a la relevancia estadística de trabajos no remunerados, generalmente se considera el impacto en la población juvenil del trabajo doméstico no mercantilizado; el trabajo voluntario o servicio a la comunidad, y los trabajos de cuidado familiares. De manera sintética, se mencionan los principales hallazgos que algunos trabajos a nivel nacional y regional han logrado comprobar empíricamente alrededor del fenómeno generación nini:

1. La situación nini no constituye un fenómeno nuevo ni tampoco existe un crecimiento exponencial de su incidencia. Se ha observado que la cantidad de ninis disminuye entre 1990 y 2000, y también hasta 2010. Incluso, si se compara con la década 1980, la situación actual es muy similar (Comari, 2015).
2. En Argentina (Comari, 2015; INDEC, 2014a), al igual que en América Latina (CEPAL, 2014) y países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE; Leyva y Negrete,

2014), las trayectorias laborales de las y los jóvenes no son lineales ni estables. Se indican altos niveles de rotación entre situaciones de inactividad, ocupación y desocupación juvenil⁵. Mientras que muchos jóvenes dejan esta condición, otros tantos comienzan a atravesarla, por lo que la situación de nini no es estructural y permanente, lo cual desestima la utilización de la categoría generación nini como un “mote” moralizador y normalizante de las trayectorias de vida de las juventudes.

3. Se ha detectado el aumento constante de prevalencia de discapacidades severas. Esto significa que, dentro de la población clasificada como nini, existen personas que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo porque no pueden hacerlo, por los impedimentos que su situación de discapacidad les impone (Comari, 2015).
4. La nupcialidad y la fecundidad aparecen como condicionantes para aquellas personas que lo proyectaron y, más aún, para quienes la maternidad irrumpe sin planificación, lo que genera restricciones en las trayectorias educativas y laborales de las juventudes, especialmente en las mujeres, ya que se abocan tempranamente a tareas de cuidado. Además, se indica que, a mayores niveles de educación, las mujeres tienen menor cantidad de hijos, lo que demuestra el peso de la educación como predictor de la fecundidad (Binstock, 2016; Cabella y Pardo, 2014; Castro-Martín y Juárez, 1995).
5. Cuando se logran medir estadísticamente las incidencias del tiempo que dedican los ninis a los trabajos de cuidado, se demuestra que son erróneos los prejuicios en torno a la ociosidad de este grupo. El INDEC (2014a) logró relevar que 4 de cada 10 jóvenes en el país tiene responsabilidades de cuidado. Los ninis dedican al menos un 50 % más de horas al trabajo doméstico y un 30 % más al cuidado que aquellas personas que no lo son. En Argentina, el 82,1 % de jóvenes ninis dedica más de tres horas

5 Comari (2015) calculó que entre 2010 y 2011, el 38,6% de jóvenes dejó de pertenecer a la llamada condición nini. Específicamente, en el año 2010 el total de jóvenes de 15 a 24 años que estaban inactivos y sin estudiar representaban un 12,7% del total y al año siguiente ese porcentaje disminuyó al 7,8%. Viendo cada periodo (2010-2011) de manera separada, las proporciones de jóvenes en situación nini son similares, lo que sucede es que se trata de diferentes individuos en distintas transiciones.

diarias (en promedio) a quehaceres del hogar. Además, el 70,1% de los ninis dedica, en promedio, 8 horas y media al cuidado de otras personas (Comari, 2015).

6. No se han encontrado evidencias suficientes que permitan relacionar causalmente el ser joven (y particularmente del segmento nini) con el ejercicio de la violencia, la delincuencia y el consumo de drogas⁶ (Comari, 2015).

En función de lo expuesto, la categoría nini presenta serias dificultades y debilidades en tanto que intenta englobar una serie de problemas donde en realidad no los hay (se suele identificar a este segmento como población de riesgo en cuanto a sus potenciales acciones “peligrosas” o “antisistemas”); ignora ciertos problemas que sí pudieran ser relevantes (jóvenes con trabajos precarios que no entran en la clasificación nini; Leyva y Negrete, 2014), y confunde y superpone distintas realidades y problemáticas (desempleo, exclusión educativa o sobreexplotación en trabajos de cuidado no remunerados; Assusa 2019).

A partir de lo señalado, a continuación se exponen las características principales de este análisis que han permitido poner en discusión la pertinencia teórica y empírica de la categoría nini. Se revelan algunas actividades no remuneradas que realizan una gran proporción de jóvenes considerados ninis; además, el trabajo pone en evidencia cómo ciertos factores clave, como el género, edad, nivel educativo, nivel de ingresos del hogar, presencia de niños en el hogar, influyen en las trayectorias juveniles.

Fuente de datos y metodología

El trabajo se basa en la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (ETNRyUT)⁷, realizada en el año 2013 por el Instituto

6 Con relación a esto, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas (2011) contradicen cualquier tipo de asociación de las personas jóvenes con mayores consumos de “drogas” en general. Incluso se observó que las y los jóvenes ninis tienen las menores ratios de prevalencia de consumos de sustancias.

7 Las encuestas de mediciones del uso del tiempo, impulsadas desde los setenta por las Naciones Unidas, son reconocidas como una de las principales herramientas para conocer las diversas formas de trabajos existentes y visibilizar la discriminación y desigualdad social que atraviesan las mujeres, vulnerando sus derechos. Además, existe un amplio consenso en la necesidad de realizar mediciones periódicas y articular sus resultados en el diseño e implementación de políticas públicas. En el caso de Argentina, la ETNRyUT constituye hasta el momento el único registro a nivel nacional sobre la temática. Cabe aclarar que esta encuesta no permite establecer si el tiempo que las personas declaran ocupar en las actividades es simultáneo.

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina⁸. La ETNRYUT agrupa el trabajo no remunerado en dos categorías: *trabajo doméstico no remunerado* y *trabajo voluntario*. Al primero lo define como “todas aquellas actividades realizadas para prestar servicios para uso final propio en el hogar, y por las que las personas no recibieron ningún tipo de remuneración” (INDEC, 2014b, p. 7). En este sentido, el trabajo doméstico no remunerado comprende: los quehaceres domésticos (actividades que producen bienes y servicios para uso de los miembros del hogar)⁹; las actividades de apoyo escolar a los miembros del hogar, y el trabajo de cuidados a niños y niñas, a adultos mayores y a enfermos que se realiza en el hogar.

Al trabajo voluntario, por su parte, lo define como “el conjunto de actividades no remuneradas hechas libremente para el beneficio de personas ajenas a la familia, y que no están organizadas bajo un régimen laboral establecido” (INDEC, 2014b, p. 7). Aquí se incluyen las actividades realizadas en el marco de organizaciones, así como las que se llevan a cabo directamente para otros hogares.

Para ambas categorías registra también el tiempo utilizado. Para el trabajo doméstico no remunerado, indaga sobre el tiempo dedicado a estas actividades en el día anterior a la encuesta. Mientras que para el trabajo voluntario utilizó otra escala: pregunta sobre el tiempo dedicado en la semana anterior a la encuesta. Se considera que una persona participa en una determinada forma de trabajo si la desempeña por lo menos durante una hora en el periodo de referencia pertinente¹⁰.

La Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) se aplica a una muestra representativa de personas de viviendas particulares pertenecientes a localidades de 2.000 y más habitantes de la Argentina. La ETNRYUT, por su parte, se aplica sobre 65.688 personas de 18 años o más de edad. Debido a que las personas que participaron en ambas encuestas son las mismas, es posible vincular la información de sus bases de datos¹¹.

8 Esta encuesta se aplicó como módulo especial de la EAHU durante el tercer trimestre del año 2013.

9 Por ejemplo, quehaceres domésticos como la limpieza de casa, aseo y arreglo de ropa; preparación y cocción de alimentos; compras para el hogar, y reparación y mantenimiento de bienes de uso doméstico.

10 En este sentido, es similar a las mediciones estadísticas nacionales en las que se considera como ocupado a las personas que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia.

11 Las variables usadas para vincular las bases de datos son CODUSU, NRO_HOGAR y COMPONENTE (INDEC, 2014b).

Para el presente trabajo, y de acuerdo con la definición etaria de las juventudes por parte del estado nacional argentino, se seleccionó a las personas entre 18 y 29 años que en la ETNRyUT sumaban un total de 18.560 personas (9.309 mujeres y 9.251 varones).

Se operacionalizaron las definiciones bajo tres modalidades con el objetivo de demostrar cómo se modifican los porcentajes de los supuestos jóvenes ninis cuando se amplía la mirada e incluyen las actividades de trabajo doméstico no remunerado. La primera, acorde a la definición más antigua y conservadora de jóvenes ninis. En ella la variable empírica tiene las siguientes categorías: 1) Trabaja; 2) Estudia; 3) Trabaja y estudia, y 4) No trabaja ni estudia.

La segunda intenta distinguir, dentro del grupo de jóvenes que no trabajan ni estudian, a aquellos que buscan trabajo. Bajo esta modalidad, las categorías son: 1) Trabaja; 2) Estudia; 3) Trabaja y estudia; 4) Busca trabajo (y no estudia), y 5) No trabaja, no estudia, ni busca trabajo.

La tercera modalidad intenta identificar, dentro de la última categoría de la variable anterior, el trabajo doméstico no mercantilizado, el trabajo voluntario o servicio a la comunidad y los trabajos de cuidado familiares. Es así que la variable cuenta con las siguientes categorías: 1) Trabaja; 2) Estudia; 3) Trabaja y estudia; 4) Busca trabajo (y no estudia); 5) Realiza trabajo no remunerado, (que incluye trabajo doméstico no remunerado y trabajo voluntario, según las definiciones de Indec), y 6) Ninguna de las actividades anteriores, que no declara realizar alguna de las actividades contempladas en las categorías anteriores.

Estas variables se analizan en tablas de contingencia por sexo, edad, quintil de ingresos, presencia de niños menores de 5 años en el hogar¹². Los resultados que se presentan gráficamente mostraron diferencias significativas ($p < 0.05$).

Asimismo, cabe recordar que la fuente de datos es una encuesta y que, si bien permite demostrar que las y los supuestos jóvenes ninis se encuentran realizando actividades que son invisibilizadas y

12 Un factor importante a la hora de analizar la actividad de un joven es si el mismo tiene hijos. Lamentablemente, la EAHU no presenta información sobre tenencia de hijos. Lo más aproximado que se puede obtener en esta encuesta es "presencia de niños en el hogar", según las personas con las que el joven conviva. Se construyeron tres variables: presencia de niños menores a 5 años, menores a 10 años y menores a 15 años. La variable que mostró mayor asociación fue la primera, motivo por el que solo se presenta esta variable en los resultados.

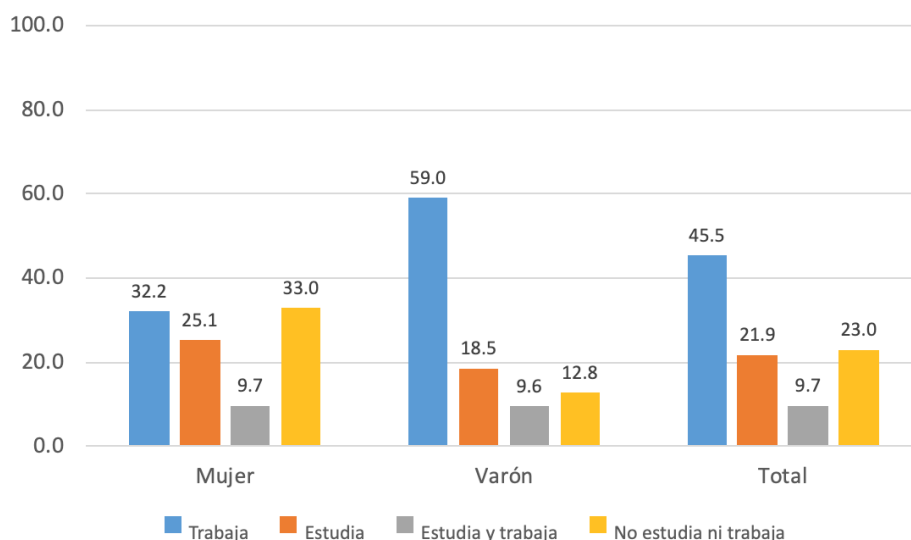
desmercantilizadas, la observación aquí expuesta es de carácter estática, ya que no permite comparar la serie de datos a lo largo de un periodo de tiempo. Esto último permitiría, además, observar la dinámica de las trayectorias de vida de la población juvenil y registrar los niveles de rotación entre situaciones de inactividad, ocupación y desocupación de las personas jóvenes.

Otra de las advertencias refiere que la muestra fue realizada en el año 2013 y constituye la fuente más actualizada al momento, y que, si bien la información no abarca a toda la población juvenil (de 15 a 29 años), puesto que indagaba a personas de 18 años en adelante, sí es representativa a nivel nacional para el grupo etario entre 18 y 29 años.

Resultados y discusiones

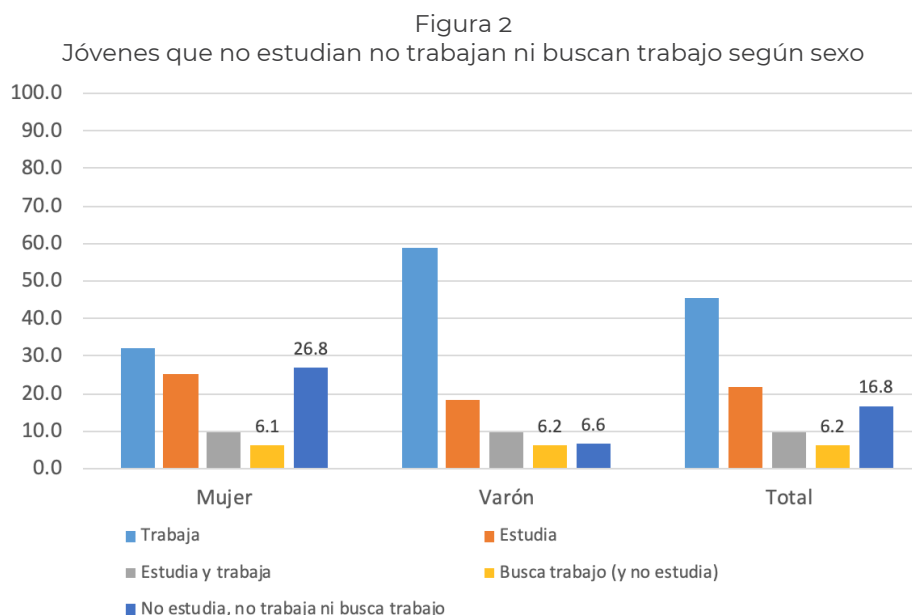
Si se aplica la concepción de jóvenes ninis más conservadora, los datos de la EAHU arrojan, al igual que los estudios a nivel nacional citados anteriormente, que el 23% de jóvenes entre 18 y 29 años en el país no estudian ni trabajan. Si se observa la distribución de esta variable por sexo, para las mujeres la cifra asciende al 33%, y en los varones disminuye al 12,8% (ver Figura 1).

Figura 1
Jóvenes que no estudian ni trabajan según sexo



Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 (ver Anexo, Tabla 1).

Si se adopta la definición de jóvenes nini a partir de una triple negación, se observa que el 23% de la muestra considerada como nini se puede desagregar en un 5,2% de jóvenes que buscan trabajo, y un 16,8% de jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo. En cuanto a la distribución según sexo, el 33% de mujeres consideradas ninis, según la variable original, se puede desagregar en un 6,1% de mujeres que buscan trabajo, y un 26,8% que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo. En el caso de los varones, el 12,8% de jóvenes ninis se pueden desagregar en un 6,2% que buscan trabajo y un 6,6% que no estudia, no trabaja ni busca trabajo (ver Figura 2).

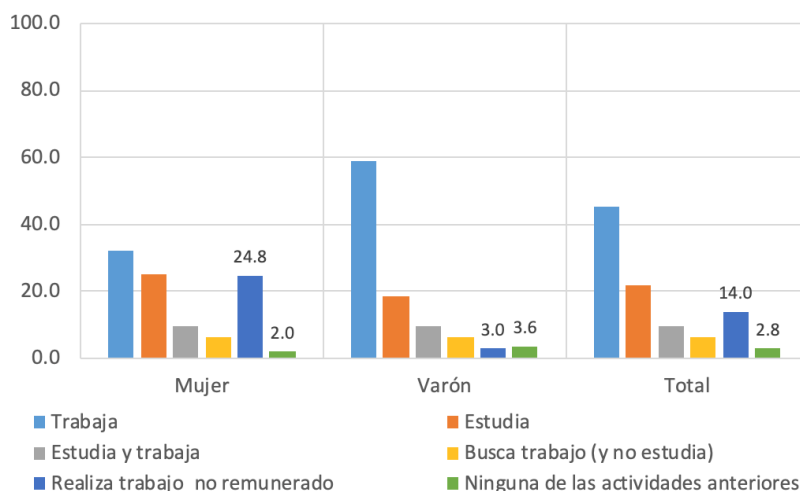


Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 (ver Anexo, Tabla 2).

La riqueza de la ETNRyUT, encuesta que complementa a la EAHU 2013, radica en que hace posible indagar respecto a aquellas actividades en las que las personas utilizan su tiempo. Esto nos permite ahondar al interior del grupo de jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo. Es así que, de las actividades en las que utilizan su tiempo, se encuentra que el 16.8% de jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo se compone de un 14% de jóvenes que realizan trabajo doméstico no mercantilizado; trabajo voluntario o servicio a la comunidad y/o trabajos de cuidado familiares, y solo un 2.8% de jóvenes que no realizan ninguna de las actividades anteriores. Esto demuestra en qué medida el concepto de nini invisibiliza la situación de una alta proporción de jóvenes que se encuentra excluido del sistema educativo y laboral (ver Figura 3).

Asimismo, si se analiza por sexo, se encuentra que, entre las mujeres, el 26,8% que no estudia, no trabaja ni busca trabajo se compone de un 24,8% que realiza trabajos no remunerados, y un 2% que no realiza ninguna actividad. Entre los varones, por su parte, el 6,6% que no estudia, no trabaja ni busca trabajo se compone de un 3% que realiza trabajos no remunerados, y un 3,6% que no realiza ninguna actividad de las indagadas. Esto permite observar cómo las mujeres, que podrían considerarse el grupo de mayor proporción de ninis es, en realidad, una población afectada por tareas domésticas y de cuidado, lo que demuestra el peso que tiene la división de los roles sociales de acuerdo con el género en el país (ver Figura 3).

Figura 3
Jóvenes según actividad y sexo



Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013 (ver Anexo, Tabla 3).

En la Tabla 1 se presentan los principales resultados del tiempo que los jóvenes dedican a tareas domésticas no remuneradas¹³. Se observan diferencias marcadas entre varones y mujeres. Entre las mujeres, las que solo realizan trabajo no remunerado, tienen en promedio 9 horas dedicadas a tareas domésticas (en el día anterior a la encuesta). Se observa en ellas una mediana de 8 h, es decir que la mitad de ellas trabaja 8 h o más. Además, que el 50% central de la distribución oscila entre 4 y 12 h.

13 Es importante tener en cuenta que, dentro de los trabajos no remunerados, se analiza solo el tiempo dedicado a tareas domésticas y no a tareas de voluntariado. Esto se debe a que no pueden sumarse, ya que en la encuesta refieren a periodos de tiempo diferentes: las primeras registran el tiempo dedicado el día anterior a la encuesta y las segundas, el tiempo dedicado en la semana anterior.

Llama la atención cómo en el grupo de mujeres que buscan trabajo, también la cantidad de horas dedicadas a esta actividad son muy altas: en promedio 8 h, con una mediana también de 8 h y un 50% central entre 3 y 13 h. Como es de esperarse, se observa que estas mujeres tienen mayor cantidad de horas dedicadas al trabajo doméstico que las que “trabajan” (media de 5 h), las que estudian (media de 3,5 h) y las que estudian y trabajan (media de 2,7 h). En el caso de los varones, la cantidad de tiempo dedicado a trabajo doméstico es muy inferior: cerca de 2 h, tanto para quienes buscan trabajo como para quienes solo declaran realizar tareas no remuneradas.

Tabla 1
Tiempo dedicado a trabajo doméstico no remunerado.
Medidas descriptivas según actividades de jóvenes y sexo

Tiempo dedicado a trabajo doméstico no remunerado	Trabaja	Estudia	Trabaja y estudia	Busca trabajo y no estudia	Realiza trabajo no remunerado
Mujer					
Media	5,3	3,5	2,7	7,9	9,0
L. inferior (I.C. al 95%)	5,1	3,3	2,4	7,5	8,7
L. superior (I.C. al 95%)	5,4	3,7	2,9	8,4	9,2
Desviación estándar	4,9	4,2	3,7	5,7	5,6
Primer cuartil	2,0	1,0	0,0	3,0	4,0
Segundo cuartil	4,0	2,0	1,5	8,0	8,0
Tercer cuartil	8,5	4,0	3,0	13,0	12,0
Varón					
Media	1,7	1,2	1,2	1,8	2,5
L. inferior (I.C. al 95%)	1,6	1,1	1,0	1,6	2,1
L. superior (I.C. al 95%)	1,8	1,3	1,3	2,1	2,8
Desviación estándar	2,8	1,7	1,8	3,0	2,5
Primer cuartil	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Segundo cuartil	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Tercer cuartil	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0

Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013.

Si se realiza una mirada con mayor profundidad al interior del grupo de personas entre 18 y 29 años, los datos de la ETNRYUT refuerzan la idea de que la categoría nini no es acertada para describir homogéneamente la realidad de esta generación. En este sentido, la edad, la pobreza, el haber concluido los estudios secundarios y la maternidad son factores que afectan de distinta manera sobre la vida de las y los jóvenes y sus actividades, cuestiones que se abordan a continuación.

En cuanto a las trayectorias según la edad, se pueden observar algunas regularidades: a medida que aumenta la edad, disminuye la proporción de jóvenes que estudian para aumentar el grupo de jóvenes que trabajan. Esto se encuentra dentro del patrón de comportamiento esperado, en cuanto el o la joven va dejando el ámbito del estudio para insertarse en el mundo laboral (lo que no implica necesariamente que sea una trayectoria exitosa). Si este comportamiento se compara entre los sexos, se observa que los varones tienen una mayor inserción laboral que las mujeres y, que estas tienen una mayor (aunque no tan marcada) proporción que estudian.

Respecto de las restantes categorías de actividades que los jóvenes desarrollan, no se encuentra una asociación con la edad, pero sí por sexo, ya que se destaca cómo las mujeres dedican mayormente su tiempo a actividades no remuneradas, lo que nuevamente habla de la división de roles sociales según género. Los resultados muestran que la proporción de jóvenes que no realiza ninguna de las actividades anteriores es muy baja. Aun así, los varones duplican o triplican los porcentajes de las mujeres para todo el segmento de edades (ver Figura 4).

Uno de los factores que demuestra la heterogeneidad al interior de las juventudes es el impacto de la condición socioeconómica en sus trayectorias. En este sentido, el análisis de las actividades según quintil de ingresos¹⁴ y sexo (ver Figura 5) permite establecer las siguientes observaciones:

- Como se dijo, el acceso al trabajo en jóvenes varones es claramente superior que el de mujeres. En el caso de los varones, en todos los quintiles la proporción supera el 50 %. Mientras que entre las mujeres se observa que el acceso aumenta a medida

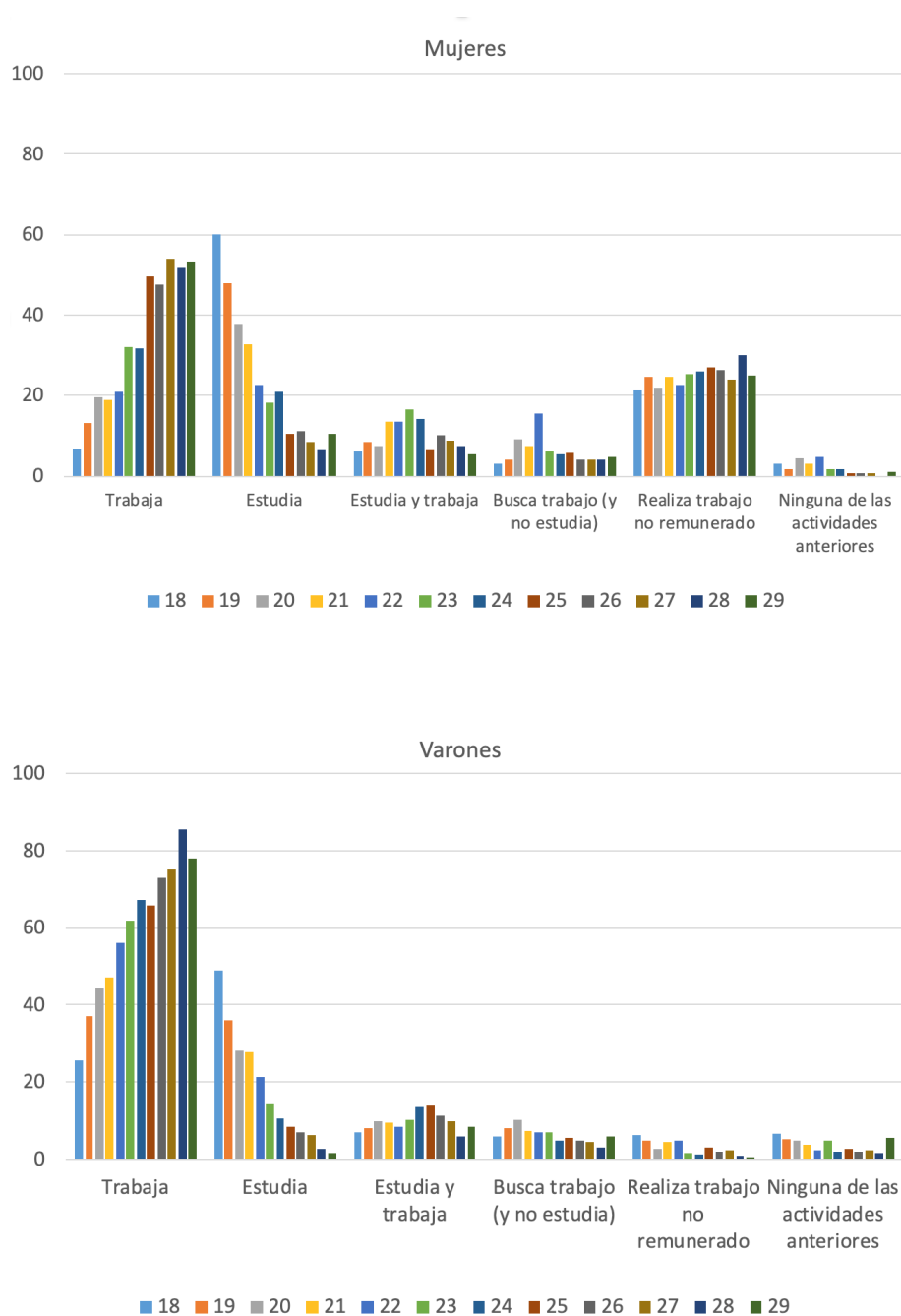
14. Los quintiles se construyen a partir del monto de ingreso per cápita familiar recibido en el mes anterior. Se debe tener en cuenta que es un factor.

que mejora la situación económica, partiendo de un 20 % entre las mujeres del primer quintil de ingresos y llegando solo en el quintil 5 a igualar la situación de los varones.

- La condición de estudiante, como se observó en el gráfico 3, es mayor en mujeres que en varones. Lo que el gráfico 5 muestra es que dicha situación es transversal para todos los quintiles y se potencia en los quintiles 2 y 3.
- La búsqueda de trabajo tiene comportamientos similares entre varones y mujeres: es mayor entre los sectores más pobres.
- Respecto al conjunto de actividades no remuneradas, como ya se señaló en la Figura 3, las diferencias son marcadas entre mujeres y varones. Lo que se observa además es que la condición socioeconómica también impacta fuertemente en las trayectorias juveniles. En términos generales los trabajos no remunerados se concentran en un 24,1 % en el primer quintil, mientras que en el quintil 5 solo impacta a un 2,8 % de las juventudes. Asimismo, las mujeres jóvenes de los quintiles más bajos se dedican a estas tareas entre siete y diez veces más que los varones (Q1: mujeres 40 % - varones 5,2 %; Q2: mujeres 29,3 % - varones 2,8 %; Q3: mujeres 18,5 % - varones 2,9 %). Para los quintiles 4 y 5 los porcentajes de jóvenes que se destinan a estas tareas disminuyen considerablemente, pero la brecha entre mujeres y varones se ubican entre cuatro y seis veces más de las primeras sobre los segundos.
- La proporción de jóvenes que no realiza ninguna de las tareas anteriores son similares en todos los quintiles, pero en los varones es superior que las mujeres. Se divisa que las diferencias son notables en el primer quintil, donde este grupo alcanza a un 7,9 % en varones mientras que en las mujeres es de 2,9 %.

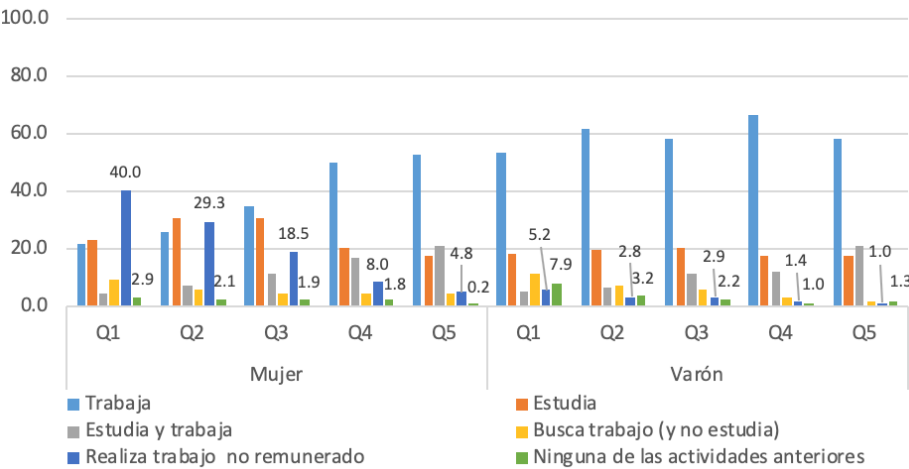
En cuanto a la condición de haber finalizado el nivel medio, la Figura 6 muestra el efecto sobre las actividades de los y las jóvenes. Se observa que es a las mujeres a quienes esta condición reduce significativamente (poco más de la mitad) la proporción de quienes realizan trabajos no remunerados para aumentar la proporción de las que trabaja y/o estudia, dando cuenta que la educación mejora y potencia las posibilidades de la inserción en el mercado laboral. Entre los varones, el efecto pareciera ser el contrario, aunque los resultados no son estadísticamente significativos.

Figura 4
Actividades de los jóvenes según edad y sexo



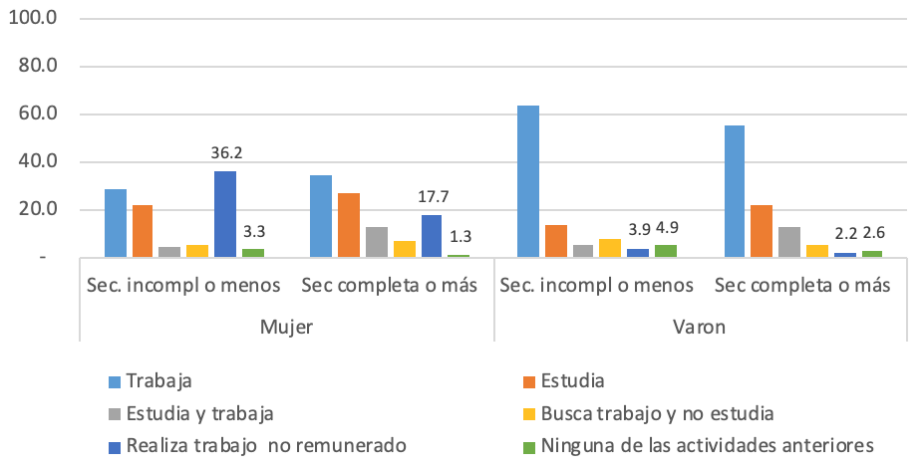
Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013 (ver Anexo, Tabla 4).

Figura 5
Actividades de jóvenes según quintiles de ingreso y sexo



Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013 (ver Anexo, Tabla 5).

Figura 6
Actividades de jóvenes según hayan concluido los estudios secundarios y sexo



Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013 (ver Anexo, Tabla 6).

En cuanto a la presencia de niños en el hogar, como factor que impacta en las trayectorias juveniles, el análisis de la ETNRyUT permite establecer que efectivamente afecta sobre las actividades que realizan, especialmente en las mujeres y el tiempo que destinan a tareas

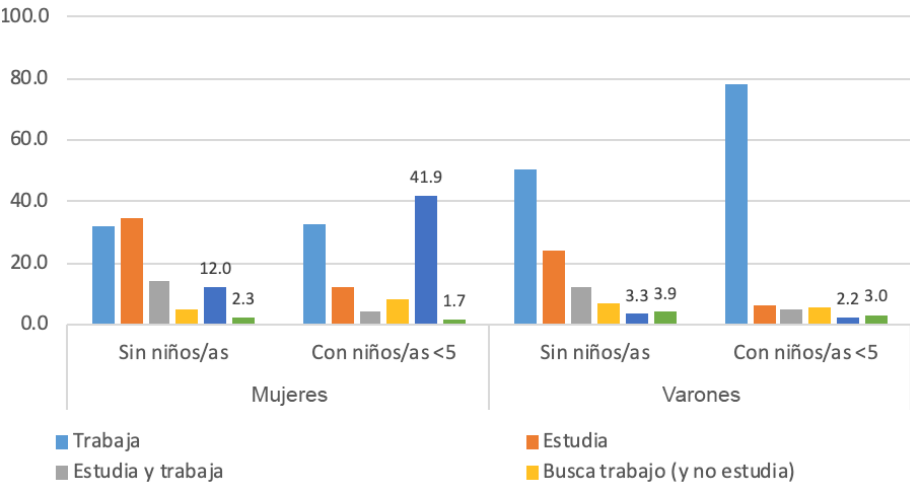
domésticas y de cuidado, no así en los varones, que destinan su tiempo principalmente al mercado laboral. La Figura 6 permite observar las siguientes situaciones:

- La relación entre acceso al trabajo y presencia de niños en el hogar es diferente entre mujeres y varones. Entre las mujeres no hay relación, ya que la proporción de mujeres que trabajan es similar, según haya o no niños en el hogar. En promedio, alcanza alrededor de un 32%. Entre los varones, la situación es muy distinta. La proporción que trabaja es de 50% entre los que no tienen niños en el hogar. Y supera el 78% entre los que tienen niños en el hogar.
- La relación entre acceso al estudio y presencia de niños tiene comportamientos similares entre varones y mujeres. En ambos grupos es mayor la proporción que estudian entre los que no tienen niños, aunque en mayor proporción entre las mujeres.
- La desocupación es un fenómeno que afecta de manera similar según presencia o no de niños. Sin embargo, es un poco mayor entre las mujeres con presencia de niños en el hogar.
- El trabajo no remunerado podría decirse que es casi exclusivo de las mujeres, y tiene una clara relación con la presencia de niños. Entre las mujeres sin niños en el hogar, la proporción que realiza trabajos no remunerados asciende a un 12%, mientras que entre las que tienen niños, llega a un 42 por ciento.
- La proporción de jóvenes que no realizan ninguna de las tareas anteriores es levemente inferior entre los y las jóvenes con presencia de niños.

Por último, se presentan los resultados de a las trayectorias juveniles que arroja la ETNRyUT de acuerdo con la condición de actividad según la presencia de menores de 5 años a cargo, niveles de ingreso y sexo. Ser mujer joven, tener niños en el hogar y bajos ingresos impacta en la distribución de los roles sociales y trayectorias de vida, puesto que ellas están abocadas principalmente a tareas en trabajos no remunerados (Figura 8).

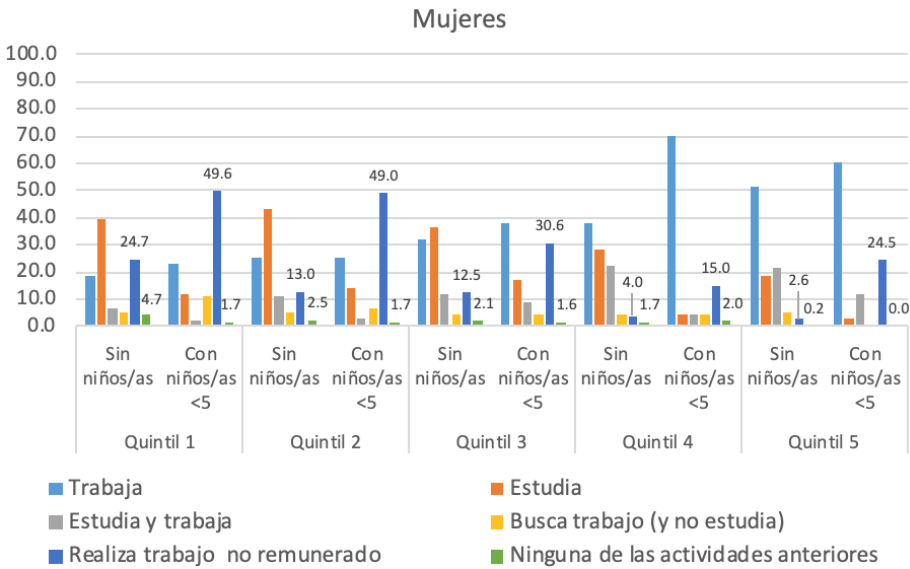
En la Figura 7 se observa cómo impacta la tenencia de niños/as en las condiciones de actividad, principalmente en las tareas no remuneradas en las mujeres. La Figura 8 permite observar, además, que dicho impacto es mayor para las mujeres jóvenes de los dos primeros quintiles de ingreso y disminuye para los tres restantes (aunque sigue teniendo relevancia porcentual) y como contrapartida la inserción en el mercado laboral tiene un peso relativo mayor.

Figura 7
Actividades de jóvenes según presencia de menores de 5 años en el hogar y sexo



Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013 (ver Anexo, Tabla 7).

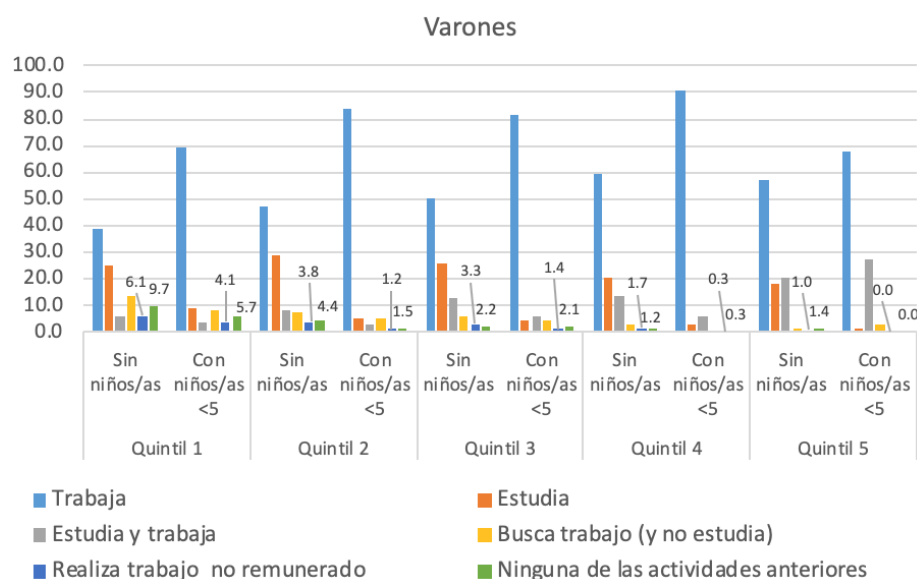
Figura 8
Actividades de mujeres jóvenes según presencia de menores de 5 años en el hogar y quintiles de ingreso



Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013 (Ver Anexo, Tabla 8).

En los varones, se vuelve a observar un bajo porcentaje en la realización de trabajos no remunerados de manera transversal para todos los niveles de ingresos, no obstante, en los tres primeros quintiles la diferencia con los ingresos más alto es notoria. La tenencia de niños/as, a diferencia que en las mujeres, impacta más en la condición de trabajador inserto en el mercado laboral que en el quehacer de tareas domésticas (Figura 9).

Figura 9
Actividades de varones jóvenes según presencia de menores de 5 años en el hogar y quintiles de ingreso



Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013 (ver Anexo, Tabla 9).

Finalmente, conviene señalar que la proporción de jóvenes que no realizan ninguna de las tareas anteriores son bajos si se le compara con aquellos estudios que plantean que en el país hay alrededor de un 20% de jóvenes nini. Sin embargo, las Figuras 7 y 8 permiten observar que en las y los jóvenes sin niños/as en el hogar, la proporción de quienes no realizan ninguna tarea son importantes en el primer quintil, especialmente en jóvenes varones sin niños/as (9,7%) y con niños/as (5,7%).

Reflexiones finales

A partir del análisis presentado, se afirma que la categoría nini ha tendido a homogeneizar irreflexivamente una serie de problemáticas que atraviesan las y los jóvenes a nivel mundial, generando un discurso moralizante, descontextualizado y carente de una perspectiva

generacional. Pareciera que esta etiqueta ha sido más eficaz para construir “alteridades generacionales y de clase sobre las que pesan los peores disvalores morales de las sociedades occidentales contemporáneas: la vagancia, la improductividad, la falta de autonomía y la violencia” (Assusa, 2019, p. 107). El saldo es más negativo, aun, cuando se observa que este enfoque es uno de los principales modelos adoptados en el diseño e implementación de políticas para intervenir sobre la cuestión juvenil por parte de los Estados.

Se puede afirmar entonces, que la concepción de jóvenes ninis no es útil para el proceso de instrumentación de políticas públicas en tanto se transforma en una herramienta poco efectiva para afrontar problemáticas como la precariedad de la actividad laboral y la desocupación juvenil o la participación temprana de muchas mujeres en la vida doméstica y reproductiva (Tuirán y Ávila, 2012). Como señala Ernesto Rodríguez (2013, 2018), aún son pocas las experiencias de gestión que han logrado una mirada integral, transversal, coherente y con enfoque de derechos sobre la temática juvenil. Es decir, instituciones y políticas con enfoque de juventudes y a su vez con una perspectiva generacional.

Para lograr integralidad, continuidad, sistematicidad y estabilidad político-institucional en el tratamiento de la cuestión juvenil es clave un nuevo pacto social que incorpore transversalmente este paradigma generacional, se cuestione la división sexual del trabajo vigente y considere al cuidado y las tareas domésticas no mercantilizadas como dimensiones esenciales para el desarrollo (Santillán Pizarro y Rabbia, 2016).

La evidencia presentada en este artículo ha señalado que determinados sectores encuentran factores que impactan en sus trayectorias de vida. Entre ellos, el sexo, la edad, los niveles de ingresos y la presencia de niños/as en el hogar. Estos factores afectan particularmente a las mujeres, puesto que se dedican, en mayor medida que los varones, a la realización de trabajos no remunerados e invisibilizados, como son las tareas domésticas, de cuidado y de voluntariado. A su vez, se observó que los varones de bajos ingresos son los que presentan las mayores proporciones de jóvenes que no realizan ninguna de las actividades mencionadas.

Los resultados expuestos sugieren que es necesario pensar, de manera específica y creativa, un conjunto de programas destinados a mujeres jóvenes con niños/as para redistribuir y disminuir la carga permanente que poseen en sus hogares, con trabajos domésticos no remunerados y de cuidado, tareas que no les permiten realizar otro tipo de actividades.

En cuanto a la situación de no realizar ninguna actividad, los datos de la ETNRYUT permiten advertir que las acciones deben ser construidas para trabajar principalmente sobre las trayectorias de jóvenes varones con ingresos más bajos.

Finalmente, a la luz de los hallazgos obtenidos, se señala un conjunto de lineamientos estratégicos que los sistemas de protección de los estados nacionales, y en particular en Argentina, debieran considerar para reformular el abordaje de la cuestión juvenil y mejorar la resolución de las problemáticas aquí analizadas.

- a. Políticas educativas y ocupacionales. Como principal estrategia se sugiere sostener y profundizar las políticas de terminalidad educativa existentes, pero atendiendo principalmente a nuevos diseños con ofertas que flexibilicen los procesos de escolarización formal (que son los que ya expulsaron a las y los jóvenes en su momento) así como también programas de formación, orientación, inducción y capacitación laboral con incentivos monetarios. Estos programas deberían evitar realizar propuestas “encasilladoras” de las y los jóvenes de sectores populares, esto es, que asocien la formación de varones, por ejemplo, en oficios como albañilería y plomería y a mujeres con trabajo doméstico y gastronomía. Asimismo, invertir en recursos que promuevan la intermediación laboral con una impronta de desarrollo local-regional.
- b. Políticas de cuidado. Es uno de los aspectos con mayores tareas pendientes por parte de los estados. Entre los principales desafíos, se ubica la modificación sustancial de las prestaciones de cuidado, y lograr el reconocimiento de la distribución injusta de las cargas de cuidado vigentes en la sociedad y la reducción de estas brechas entre mujeres y varones mediante una distribución más equitativa del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados entre géneros (Santillán Pizarro y Rabbia, 2016). Se necesita de una intervención activa del Estado como nuevo formato de los sistemas de protección. Es importante para tales fines la desfamiliarización y desmercantilización de la economía de los cuidados, y en consecuencia su desprivatización, que garantice desde el Estado que quienes cuidan lo hagan en condiciones adecuadas y, a su vez, que las personas dependientes reciban cuidados dignos (Aguirre y Ferrari, 2014). En cuanto a las “políticas de tiempo”, otro aspecto central, se busca modificar el régimen de licencias y su cobertura con una orientación universalista y revertir el sesgo

maternalista. A su vez, para que las familias puedan sostener el cuidado de niños o adultos dependientes, es clave el desarrollo de programas que contemplen transferencias económicas para cubrir estos trabajos¹⁵. Por otra parte, se promueve la universalización de políticas de servicios de cuidado infantil, especialmente en la primera infancia. En Argentina, la infraestructura de este tipo de servicios es escasa y se encuentra muy fragmentada, dispersa y con subsistemas provinciales con distintos grados de cobertura y calidad, si las prestaciones son públicas, privadas o del tercer sector.

- c. Políticas de salud sexual y reproductiva. La fecundidad juvenil en Argentina muestra un patrón de estabilidad y resistencia al descenso. Desde un enfoque de derechos, el embarazo y maternidad en edad temprana, en especial cuando no es ni planificado ni deseado, es una clara manifestación de la vulnerabilidad de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y jóvenes (Binstock, 2016), y a pesar de que en el país el marco normativo sobre la temática es exhaustivo y de avanzada¹⁶, su sistemática y correcta implementación es aún una deuda pendiente ya que varía mucho entre las provincias y entre las escuelas (privadas y públicas) y con una insuficiente incorporación de sus lineamientos en la currícula escolar. Además, se ha detectado que los prejuicios, temores e incumplimientos infundados por parte del personal de salud en la aplicación del marco jurídico en Argentina constituyen las principales barreras al acceso y al ejercicio del derecho a la salud de las y los jóvenes (Binstock, 2016). Se promueve sobre este aspecto, lograr la universalización del acceso a información, métodos anticonceptivos¹⁷ y atención de calidad en el sistema de

15 Se calcula que con el sistema de protección social actual en Argentina, de las y los jóvenes con hijos un 30 % está cubierto por las asignaciones familiares, un 39 % a través de la Asignación Universal por Hijo, apenas otro 0,2 % está cubierto por otras prestaciones (asignación por discapacidad, por ejemplo), mientras que un 9 % de jóvenes con responsabilidades familiares no está cubierto por estar excluido por normativa y 22 % no recibe prestación alguna que contribuya a sostener la crianza de los hijos (De León, 2017).

16 Se destacan la Ley 25.273 (año 2000) de Régimen Especial de Alumnas Embarazadas; Ley 25.584 (año 2002) que protege la continuidad escolar de madres adolescentes; Ley 25.673 (año 2003), que establece el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (e impulsó la creación en 2007 el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia); Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y Ley 26150 (años 2006), que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

17 La canasta de métodos anticonceptivos de distribución gratuita en Argentina se compone por anticoncepción hormonal oral (regular y de lactancia), inyectables, dispositivo intrauterino (DIU), preservativos masculinos, el implante subdérmico, el sistema intrauterino (SIU), anticoncepción de emergencia y anticoncepción quirúrgica (ligadura de trompas y vasectomía) a población mayor de 18 años. Sobre estos dos últimos métodos se han detectado las mayores trabas en su acceso (Binstock, 2016).

salud para las y los jóvenes, como así también avanzar en la legalización plena de la interrupción embarazo y en su cumplimiento efectivo (De León, 2017).

Los programas y normativas de Argentina que se mencionan en los párrafos anteriores apuntan a resolver las dificultades que atraviesan las trayectorias de vida de las y los jóvenes. Existen distintas estrategias de evaluación que estudian cómo impactan en la inserción educativo y laboral. Sin embargo, para conocer el impacto sobre la distribución y redistribución de las tareas no remuneradas sería necesario una nueva encuesta como la de 2013, cuestión que se encuentra pendiente en el país.

Anexo

Tabla 1
Distribución de jóvenes según trabajo y/o estudie. Por sexo.
En porcentajes (número de casos entre paréntesis)

Actividad	Mujeres	Varones	Total
Trabaja	32,2	59,0	45,5
Estudia	25,1	18,5	21,9
Estudia y trabaja	9,7	9,6	9,7
No estudia ni trabaja	33,0	12,8	23,0
Total	100,0 (9078)	100,0 (8914)	100,0 (17992)

Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013.

Tabla 2
Distribución de jóvenes según trabajo, busque trabajo y/o estudie.
Por sexo. En porcentajes (número de casos entre paréntesis)

Actividad	Mujeres	Varones	Total
Trabaja	32,2	59,0	45,5
Estudia	25,1	18,5	21,9
Estudia y trabaja	9,7	9,6	9,7
Busca trabajo (y no estudia)	6,1	6,2	6,2
No estudia, no trabaja ni busca trabajo	26,8	6,6	16,8
Total	100,0 (9078)	100,0 (8914)	100,0 (17992)

Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013.

Tabla 3
Distribución de jóvenes según trabajo, busque trabajo, estudie y/o realice trabajo no remunerado. Por sexo. En porcentajes (número de casos entre paréntesis)

Actividad	Mujeres	Varones	Total
Trabaja	32,2	59,0	45,5
Estudia	25,1	18,5	21,9
Estudia y trabaja	9,7	9,6	9,7
Busca trabajo (y no estudia)	6,1	6,2	6,2
Trabajo doméstico no remunerado	24,8	3,0	14,0
Ninguna de las actividades anteriores	2,0	3,6	2,8
Total	100,0 (9078)	100,0 (8914)	100,0 (17992)

Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013.

Tabla 4
Distribución de jóvenes según actividad, edad y sexo.
En porcentajes (número de casos entre paréntesis)

Edad	Actividad						Total
	Trabaja	Estudia	Estudia y trabaja	Busca trabajo y no estudia	Trabajo no remunerado	Ninguna de las actividades anteriores	
Mujeres							
18	6,7	60,2	5,9	2,9	21,1	3,1	100,0 (861)
19	13,2	48,1	8,3	4,0	24,6	1,8	100,0 (842)
20	19,5	37,8	7,5	9,0	21,8	4,3	100,0 (785)
21	18,8	32,7	13,5	7,4	24,5	3,1	100,0 (837)
22	20,8	22,7	13,6	15,6	22,7	4,6	100,0 (777)
23	32,1	18,2	16,5	6,2	25,3	1,7	100,0 (708)
24	31,7	21,1	14,1	5,5	26,0	1,6	100,0 (669)
25	49,5	10,6	6,6	5,6	27,1	0,7	100,0 (914)
26	47,7	11,2	10,0	4,0	26,4	0,7	100,0 (698)
27	54,0	8,4	8,8	4,1	24,0	0,7	100,0 (704)
28	52,1	6,4	7,4	4,2	29,9	0,0	100,0 (672)
29	53,2	10,5	5,4	4,8	25,0	1,1	100,0 (609)
Total	32,2	25,1	9,8	6,2	24,8	2,0	100,0 (9076)

Continúa

Tabla 4 (continuación)

Edad	Actividad						Total
	Trabaja	Estudia	Estudia y trabaja	Busca trabajo y no estudia	Trabajo no remunerado	Ninguna de las actividades anteriores	
Varones							
18	25,7	49,0	6,9	5,8	6,1	6,5	100,0 (816)
19	37,2	36,2	8,2	8,2	5,0	5,3	100,0 (721)
20	44,2	28,1	9,8	10,2	2,6	5,0	100,0 (803)
21	47,2	27,9	9,3	7,5	4,5	3,6	100,0 (750)
22	56,2	21,2	8,5	6,9	4,7	2,4	100,0 (868)
23	61,8	14,7	10,3	7,0	1,4	4,8	100,0 (846)
24	67,3	10,5	13,9	5,0	1,2	2,0	100,0 (683)
25	66,0	8,4	14,3	5,6	3,1	2,6	100,0 (699)
26	73,1	6,8	11,3	4,8	2,1	1,9	100,0 (628)
27	75,2	6,1	9,8	4,4	2,3	2,1	100,0 (652)
28	85,6	2,8	6,0	3,1	0,8	1,7	100,0 (870)
29	77,9	1,7	8,5	5,9	0,5	5,4	100,0 (575)
Total	59,0	18,5	9,6	6,2	2,9	3,6	100,0 (8911)

Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013.

Tabla 5
Distribución de jóvenes según actividad, quintil de ingresos del hogar y sexo. En porcentajes (número de casos entre paréntesis)

Quintiles de ingresos del hogar	Actividad						Total
	Trabaja	Estudia	Estudia y trabaja	Busca trabajo y no estudia	Trabajo no remunerado	Ninguna de las actividades anteriores	
Mujeres							
Q1	21,3	22,7	4,2	9,0	40,0	2,9	100,0 (2746)
Q2	25,4	30,3	7,2	5,7	29,3	2,1	100,0 (2379)
Q3	34,3	30,1	10,7	4,3	18,5	1,9	100,0 (1526)
Q4	49,5	19,9	16,4	4,4	8,0	1,8	100,0 (1391)
Q5	52,5	17,4	20,8	4,4	4,8	0,2	100,0 (978)
Varones							
Q1	53,2	17,8	4,8	11,1	5,2	7,9	100,0 (2310)
Q2	61,2	19,5	6,5	6,7	2,8	3,2	100,0 (2135)
Q3	58,0	20,1	10,9	5,9	2,9	2,2	100,0 (1646)
Q4	66,2	17,1	11,8	2,5	1,4	1,0	100,0 (1660)
Q5	57,9	17,6	21,0	1,2	1,0	1,3	100,0 (1120)

Fuente: Elaboración propia con base en EAHU 2013 y ETNRyUT 2013.

Tabla 6
Distribución de jóvenes según actividad, finalización
de nivel secundario y sexo. En porcentajes
(número de casos entre paréntesis)

Actividad	Finalización de nivel secundario		Total
	No finalizó nivel secundario	Finalizó nivel secundario	
Mujeres			
Trabaja	28,7	34,2	32,1
Estudia	22,1	26,9	25,1
Estudia y trabaja	4,2	13,1	9,7
Busca trabajo y no estudia	5,3	6,7	6,1
Trabajos no remunerados	36,2	17,7	24,7
Ninguna de las actividades anteriores	3,3	1,3	2,0
Total	100,0	100,0	100,0
	(3439)	(5639)	(9038)
Varones			
Trabaja	63,9	55,0	58,9
Estudia	13,8	22,2	18,5
Estudia y trabaja	5,3	13,0	9,6
Busca trabajo y no estudia	8,0	4,9	6,2
Trabajos no remunerados	3,9	2,2	2,9
Ninguna de las actividades anteriores	4,9	2,6	3,6
Total	100,0	100,0	100,0
	(3943)	(4971)	(8914)

Fuente: Elaboración propia con base en EAHU 2013 y ETNRyUT 2013.

Tabla 7
Distribución de jóvenes según actividad, número
de niños menores de 5 años en el hogar y sexo. En
porcentajes (número de casos entre paréntesis)

Actividad	Niños menores de 5 años en el hogar		Total
	Sin niños/as	Con niños/as	
Mujeres			
Trabaja	31,8	32,5	32,1
Estudia	34,6	12,3	25,1
Estudia y trabaja	14,1	3,8	9,7
Busca trabajo y no estudia	4,9	7,8	6,1
Trabajos no remunerados	12,0	41,9	24,7
Ninguna de las actividades anteriores	2,3	1,7	2,0
Total	100,0	100,0	100,0
	(5225)	(3868)	(9093)

Continúa

Tabla 7 (continuación)

Actividad	Niños menores de 5 años en el hogar		Total
	Sin niños/as	Con niños/as	
Varones			
Trabaja	50,3	78,4	58,9
Estudia	24,0	6,1	18,5
Estudia y trabaja	11,8	4,6	9,6
Busca trabajo y no estudia	6,5	5,6	6,2
Trabajos no remunerados	3,3	2,2	2,9
Ninguna de las actividades anteriores	3,9	3,0	3,6
Total	100,0	100,0	100,0
	(6188)	(2738)	(8926)

Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013.

Tabla 8
Distribución de mujeres jóvenes según actividad, quintil de ingresos del hogar y presencia de niños. En porcentajes (número de casos entre paréntesis)

	Trabaja	Estudia	Estudia y trabaja	Busca trabajo y no estudia	Trabajo no remunerado	Ninguna de las actividades anteriores	Total
Quintil 1							
Sin niños/as	18,9	39,4	7,0	5,4	24,7	4,7	100,0 (1064)
Con niños/as	22,8	12,2	2,4	11,3	49,6	1,7	100,0 (1682)
Quintil 2							
Sin niños/as	25,2	43,6	11,0	4,9	13,0	2,5	100,0 (1304)
Con niños/as	25,7	14,2	2,7	6,7	49,0	1,7	100,0 (1075)
Quintil 3							
Sin niños/as	32,3	36,6	11,8	4,4	12,5	2,1	100,0 (1021)
Con niños/as	38,1	16,9	8,6	4,1	30,6	1,6	100,0 (509)
Quintil 4							
Sin niños/as	38,3	28,2	22,7	4,4	4,0	1,7	100,0 (903)
Con niños/as	69,7	4,5	4,5	4,3	15,0	2,0	100,0 (492)
Quintil 5							
Sin niños/as	51,6	19,0	21,7	4,9	2,6	0,2	100,0 (880)
Con niños/as	60,2	3,1	12,2	0,0	24,5	0,0	100,0 (98)
Total	32,3	24,9	9,8	6,1	24,7	2,0	100,0 (9028)

Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013.

Tabla 9
Distribución de varones jóvenes según actividad,
quintil de ingresos del hogar y presencia de niños. En
porcentajes (número de casos entre paréntesis)

	Trabaja	Estudia	Estudia y trabaja	Busca trabajo y no estudia	Trabajo no remunerado	Ninguna de las actividades anteriores	Total
Quintil 1							
Sin niños/as	39,2	25,4	5,9	13,7	6,1	9,7	100,0 (1242)
Con niños/as	69,6	9,0	3,5	8,1	4,1	5,7	100,0 (1068)
Quintil 2							
Sin niños/as	46,9	28,7	8,6	7,6	3,8	4,4	100,0 (1310)
Con niños/as	84,0	5,0	3,0	5,3	1,2	1,5	100,0 (825)
Quintil 3							
Sin niños/as	50,0	25,6	12,6	6,4	3,3	2,2	100,0 (1221)
Con niños/as	81,4	4,5	5,9	4,5	1,4	2,1	100,0 (424)
Quintil 4							
Sin niños/as	59,7	20,8	13,4	3,1	1,7	1,2	100,0 (1316)
Con niños/as	90,7	2,9	5,8	0,0	0,3	0,3	100,0 (345)
Quintil 5							
Sin niños/as	57,3	18,6	20,4	1,1	1,0	1,4	100,0 (1053)
Con niños/as	68,1	1,4	27,5	2,9	0,0	0,0	100,0 (69)
Total	59,1	18,5	9,7	6,2	2,9	3,6	100,0 (8873)

Fuente: Elaboración propia con base en la EAHU 2013 y ETNRyUT 2013.

Referencias

- Abramovich, V. (2006). Una aproximación al enfoque de derecho en las estrategias y políticas de desarrollo. *Revista de la CEPAL*, (88). doi: 10.18356/a48f3cca-es
- Aguirre, R. y Ferrari, F. (2014). *Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y el Caribe. Caminos recorridos y desafíos hacia el futuro*. Serie Asuntos de Género, (122). Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. LC/L.3678/Rev.1
- Assusa, G. (2019). Ni jóvenes, ni desempleados, ni peligrosos, ni novedosos. Una crítica sociológica del concepto de “jóvenes nini” en torno los casos de España, México y Argentina. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 37(1), 91-111. doi: 10.5209/CRLA.63821
- Avellaneda, D. y Elizondo, N. (2015). *El fenómeno de los jóvenes ni-ni en Chile*. Santiago, Chile: Centro de Estudios del Desarrollo.

- Bauman, Z. (2007). Between us, the generations. En J. Larrosa. (Ed.), *On generations. On coexistence between generations* (pp. 365-376). Barcelona: Fundación Vivir y Convivir.
- Binstock, G. (2016). *Fecundidad y maternidad adolescente en el Cono Sur: apuntes para la construcción de una agenda común*. Panamá: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
- Borzese, D., Botinelli, L. y Luro, V. (2009). *Hacia una ley nacional de juventudes en Argentina. Análisis de experiencias de construcción de leyes de juventud en países de América Latina*. Buenos Aires: Fundación Carolina CeALCI y Fundación SES.
- Bourdieu, P. (2002). *Sociología y cultura*. México: Grijalbo.
- Cabella, W. y Pardo, I. (2014). Hacia un régimen de baja fecundidad en América Latina y el Caribe, 1990-2015. En S. Cavenaghi y W. Cabella. (Orgs.), *Comportamiento reproductivo y fecundidad en América Latina: una agenda inconclusa* (pp. 13-31). Serie Investigaciones, (3). Río de Janeiro: Asociación Latinoamericana de Población.
- Capello, M. y García Oro, G. (2013). El problema de inserción social de los jóvenes a nivel regional en Argentina y en perspectiva internacional. *Monitor Social*, 2(2).
- Carmona Zúñiga, L. y García Hernández, J. (2011). La generación “nini” y el proyecto de vida. *Revista 29nueve*.
- Castro Martín, T. y Juárez, F. (1995). La influencia de la educación de la mujer sobre la fecundidad en América Latina: en busca de explicaciones. *Perspectivas Internacionales en Planificación Familiar*, (número especial), 4-10.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2012). *Informe regional de población en América Latina y el Caribe 2011: invertir en juventud*. Santiago de Chile: CEPAL.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2014). *Panorama social de América Latina*. Santiago de Chile: CEPAL. doi: 10.18356/3360d279-es
- Chaves, M. (2005). Juventud negada y negativizada: representaciones y formaciones discursivas vigentes en la Argentina contemporánea. *Última Década*, 13(23), 9-32. doi: 10.4067/S0718-22362005000200002

- Comari, C. (2015). *Examen de validez teórica y empírica del concepto "jóvenes nini" o "generación nini" en la Argentina del siglo XXI*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Creeds, P. A. y Reynolds, J. (2001). Economic deprivation, experiential deprivation and social loneliness in unemployed and employed youth. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, (11), 167-178. doi: 10.1002/casp.612
- De León, G. (2017). *Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión social*. Documento de trabajo, (158). Buenos Aires: CIPPEC.
- Feijóo, M. C. (2015). Los ni-ni: una visión mitológica de los jóvenes latinoamericanos. *Voces en el Fénix*, (50), 23-32.
- Filmus, D. (2001). La educación media frente al mercado de trabajo: cada vez más necesaria, cada vez más insuficiente. En C. Braslavsky. (Org.), *La educación secundaria: ¿cambio o inmutabilidad? Análisis y debate de procesos europeos y latinoamericanos contemporáneos*. Buenos Aires: Editorial Santillana/IIPE.
- Hammer, T. (2000). Mental health and social exclusion among unemployed youth in Scandinavia. A comparative study. *International Journal of Social Welfare*, 9, 53-63. doi: 10.1111/1468-2397.00108
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos Argentina) (2014a). *Encuesta Nacional de Jóvenes 2014. Principales resultados*. Buenos Aires: INDEC.
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos Argentina) (2014b). *Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo. Informe técnico. Diseño de registro y estructura de la base de microdatos*. Buenos Aires: INDEC.
- Leyva, G. y Negrete, R. (2014). Nini: un término ni pertinente ni útil. *Coyuntura Demográfica*, (5), 15-20.
- Mannheim, K. (1928). El problema de las generaciones. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 62 [1993]. doi: 10.2307/40183643
- Margulis, M. (2001). Juventud: una aproximación conceptual. En S. Donas Burak. (Comp.), *Adolescencia y juventud en América Latina*. Costa Rica: Libro Universitario Regional (EULAC-GTZ).

- Mosquera, A., García, M. y Cortés, J. C. (2018). Jóvenes nini. Nuevas trayectorias hacia la exclusión social. *Comunitania: Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales*, (15), 39-49. doi: 10.5944/comunitania.15.2
- Pereyra, E. J. (2019). *Sistemas de protección social y bienestar juvenil, proyectos de gobierno y actores de la dinámica política local. Análisis comparado de los casos de Jesús María y Villa María, provincia de Córdoba (1999-2017)*. Tesis doctoral, Facultad de CPyRRII, Universidad Católica de Córdoba. Argentina.
- Pérez Islas, J. (2000). Visiones y versiones. Jóvenes, instituciones y políticas de juventud. En J. Martín-Barbero et al. (comp.): *Umbrales. Cambios culturales, desafíos nacionales y juventud*. Medellín: Corporación Región.
- Quapper, K. (2001). ¿Juventud o juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro continente". En S. Donas Burak. (Comp.), *Adolescencia y Juventud en América Latina*. Costa Rica: Libro Universitario Regional (EULAC-GTZ). doi:10.4067/S0718-22362000000200004
- Rodríguez Enríquez, C. (2007). *La organización del cuidado de niños y niñas en Argentina y Uruguay*. Serie Mujer y Desarrollo, (90). Santiago de Chile: CEPAL.
- Rodríguez, E. (2011). Jóvenes que ni estudian ni trabajan en América Latina: entre la estigmatización y la ausencia de políticas públicas. *Umbrales. Revista del Postgrado Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo*, (22), 56-69.
- Rodríguez, E. (2013). Enfoques en políticas públicas de juventud en América Latina y el Caribe: transversalidad, integralidad, sectorialidad. *Reunión de altas autoridades de América Latina y el Caribe sobre políticas públicas para la atención integral de las y los jóvenes: inclusión y equidad desde una visión transversal*. Caracas, Venezuela.
- Rodríguez, E. (2018). Pensar las políticas públicas de juventud desde las narrativas juveniles, en el marco de las miradas neoliberales, neconservadoras y neodesarrollistas sobre las y los jóvenes, vigentes y en disputa en América Latina. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 16(2), 1123-1138.

- Rossel, C., y Filgueira, F. (2015). Adolescencia y juventud. En S. Cecchini, F. Filgueira, R. Martínez y C. Rossel. (Eds.), *Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Santillán Pizarro, M. M. y Rabbia, H. (2016) Desigualdades en el uso del tiempo entre varones y mujeres. Algunas evidencias en Argentina. En J. Martínez Pizarro, E. Rojas Cabrera y M. M. Santillán Pizarro. (Eds.), *El Consenso de Montevideo y la agenda de investigación sobre población y desarrollo: algunos temas seleccionados*. Río de Janeiro: Asociación Latinoamericana de Población. Recuperado de http://www.alapop.org/alap/SerieInvestigaciones/serie18/serie_investigaciones_18_completo.pdf
- Székely Pardo, M. (2012). Jóvenes que ni estudian ni trabajan: un riesgo para la cohesión social en América Latina. En F. Díaz y P. Meller. (Eds.), *Violencia y cohesión social en América Latina*. Santiago de Chile: CIEPLAN.
- Tuirán, R. y Ávila, J. L. (2012). Jóvenes que no estudian ni trabajan: ¿cuántos son?, ¿quiénes son?, ¿qué hacer?". *Este País*, 251(1), 1-15.

Distribución espacial del homicidio juvenil masculino y desigualdad territorial en Ciudad de México y Estado de México (2000-2002 y 2010-2012)

Spatial Distribution of Male Juvenile Homicide and Territorial Inequality in Mexico City and State of Mexico (2000-2002 and 2010-2012)

Ma. Guadalupe Mejía Escamilla

Orcid: 0000-0003-1252-1316

malli_15@hotmail.com

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Jeroen Spijker

Orcid: 0000-0002-3957-9553

jspijker@ced.uab.es

Centre d'Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona, España

Alex Manetta

Orcid: 0000-0002-5558-0845

alexmanetta@hotmail.com

Centro de Estudios de Población, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Resumen

El homicidio juvenil masculino es un fenómeno creciente en las periferias urbanas mexicanas. El objetivo de este artículo es presentar ciertas correlaciones entre la distribución espacial del homicidio masculino y las desigualdades socioeconómicas en delegaciones y municipios mayores a los 100 000 habitantes (Ciudad de México y Estado de México, 2000-2002 y 2010-2012). A través de un análisis

de clústeres, definidos de acuerdo con las características de la población, se obtiene que la intensidad del homicidio masculino (15 a 34 años) es más elevado en las unidades territoriales con peores indicadores. Mientras que las tasas de homicidio disminuyeron donde antes eran más elevadas, estas aumentaron en las unidades con mejores indicadores, pero de modo concentrado entre los individuos de baja escolaridad. Se concluye que el homicidio, al victimizar de manera más intensa a los hombres jóvenes de bajos recursos, profundiza las desigualdades y las desventajas relativas, lo que se corrobora con el triángulo vicioso de la violencia de Galtung (1990).

Abstract

Male youth homicide is a growing phenomenon in Mexican urban suburbs. The aim of this article is to present certain correlations between the spatial distribution of male homicide and socioeconomic inequalities in municipalities with more than 100,000 inhabitants (Mexico City and Mexico State, 2000-2002 and 2010-2012). Through a cluster analysis, defined according to the characteristics of the population, male homicide (15 to 34 years) occurs at a higher rate in clusters with worse socioeconomic indicators. Homicide rates decreased in areas where rates were higher before and increased in the territorial units with better indicators, but the latter in a concentrated way among low- educated individuals. We conclude that since homicide particularly victimizes low income, young men, it deepens the inequalities and the relative disadvantages, which is corroborated with what Galtung (1990) calls the vicious triangle of violence.

Palabras clave

Homicidio juvenil
masculino
Desigualdades
Condiciones
socioeconómicas
Estado de México
Ciudad de México

Keywords

Male youth homicide
Inequalities
Socioeconomic
conditions
Mexico State
Mexico City

Recibido: 30/01/2019
Aceptado: 15/01/2020

Introducción

Durante la década del 2000, Latinoamérica destacó por sus elevadas tasas de muertes violentas, particularmente entre la población juvenil masculina (15 a 29 años; Lussier, Bourbeau y Choinière, 2008). En México, el aumento de este tipo de mortalidad (2005-2015) estuvo fuertemente influenciado por el alza del homicidio (INEGI, 2017a), principalmente a partir del año 2008 (Díaz, 2016), cuando se registró un aumento en la incidencia entre hombres jóvenes residentes de las periferias urbanas (Banco Mundial, 2012).

Las desigualdades sociales, la pobreza y el desempleo son aspectos evaluados como factores predictores de altos índices de criminalidad y de homicidio. Sin embargo, hay controversias con respecto a las causas inmediatas del tipo de violencia juvenil masculina y homicida, predominante hoy en Latinoamérica, ya que las evidencias empíricas disponibles no ofrecen respuestas definitivas a esta hipótesis (Bercovich, Dellasoppa y Arriaga, 1998).

A partir de esta investigación, cuyos primeros resultados fueron presentados por Mejía-Escamilla y Spijker (2018),¹ se pretende corroborar la existencia de relaciones entre la desigualdad territorial y la distribución espacial del homicidio masculino (15 a 34 años), en la mayor concentración urbana de México, compuesta por las delegaciones de la Ciudad de México (CDMX) y los municipios del Estado de México mayores a los 100 000 habitantes (2000-2002 y 2010-2012).

Desigualdades sociales y económicas en México

México es uno de los países con mayor desigualdad económica. A partir de una comparación del coeficiente de Gini (2008 y 2012), el país ocupó el lugar 87 de 113, es decir, se ubicaba entre el 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en los ingresos (Esquivel Hernández, 2015).

Estas desigualdades se deben estudiar no solo desde el ángulo de la disparidad económica, sino también desde la política, la justicia, el acceso a infraestructuras y servicios públicos, entre otros, cuando estas pueden entrecruzarse y tener un efecto multidimensional manifiesto de forma heterogénea en el territorio. Para los menos privilegiados, a lo largo del tiempo, se van estableciendo conexiones entre las diferentes dimensiones, lo que genera un círculo vicioso que tiende a reforzar las desigualdades relativas (CICS, IED y Unesco, 2016).

Las desigualdades económicas y sociales, que se pueden observar fácilmente en zonas urbanas, conllevan a ambientes relativamente desfavorables. En CDMX y el Estado de México, según el Consejo Nacional

1 Los resultados preliminares de esta investigación fueron presentados en el VIII Congreso Latinoamericano de Estudios de Población, organizado por la Asociación Latinoamericana de Población (San Andrés Cholula, México, en 2018), Ma. Guadalupe Mejía-Escamilla y Jeroen Spijker. Trabajo titulado "Diferenciales socioeconómicos de las víctimas de homicidio en la CDMX y Estado de México entre los periodos 2000-2002 y 2010-2012".

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2012), existe un alto porcentaje de población (31.7% y 51.2% respectivamente) que vive en pobreza patrimonial, es decir, que no tiene suficientes ingresos disponibles para comer o gastar en salud, vestido, vivienda, transporte y educación. Tomando como ejemplo la condición de la vivienda, en CDMX los condominios representan una buena opción habitacional para personas de bajo poder adquisitivo, pero el acceso a servicios públicos, como agua y energía, por la informalidad respecto al uso y tenencia de la tierra, comúnmente está comprometida. Los grupos de mejor condición buscan vivienda en fraccionamientos con servicios exclusivos. Según Cordera y colaboradores (2008), estas desigualdades en los procesos de transformación urbana se manifiestan de manera particular, así como sus consecuencias, en especial cuando se refieren a los impactos de las disparidades socioeconómicas en la incidencia del crimen y en la distribución espacial del homicidio juvenil masculino.

Con relación a la juventud, por tratarse de un momento del ciclo de vida cuando se toman decisiones cruciales para la vida adulta, se considera que mientras sus elecciones estén condicionadas por limitaciones socioeconómicas, habrá una tendencia de riesgo elevado de abandono escolar, de adicciones y de reclutamiento por actividades del crimen (CEPAL, 2013). Existen también algunas otras características que aumentan el riesgo de homicidio juvenil masculino, como la existencia de pandillas vinculadas a zonas con problemas estructurales y restrictas oportunidades de integración social y económica (OMS, 2002).

La persistencia de las desigualdades sociales (Szwarcwald et al., 1999), de la pobreza y del desempleo (Hirata, 2001), son aspectos comúnmente evaluados como factores desencadenadores de altos índices de criminalidad que constituyen campos altamente propicios para el desarrollo de la violencia juvenil homicida. Además, la vinculación contemporánea entre las formas predominantes del homicidio juvenil masculino y la dinámica del tráfico de drogas revela conexiones entre circuitos locales y redes ampliadas del crimen (Bevan y Florquin, 2006). Castells (2003) se refiere a la diseminación global de las oportunidades de integración perversa, fenómeno cuya referencia está asociada a las formas de trabajo y de socialización practicadas a través del crimen.

Dowdney (2005) reafirma la idea del crimen como un mercado laboral, por lo que establece una definición de trabajo para jóvenes que actúan en grupos armados de diferentes partes del mundo. Aunque haya

especificidades, en coyunturas con la superposición de desventajas se presentan mayores potenciales de integración perversa. La percepción de la exclusión relativa ante los beneficios del consumo, sumada al reconocimiento de los atributos positivos que la entrada en el crimen pueda ofrecer, son argumentos que favorecen la integración juvenil al crimen.

Este es un fenómeno claramente vinculado a la vigencia de un sistema ideológico que intensifica todos los aspectos del consumo y del individualismo. Dado que cada vez menos personas ignoran lo que el mundo ofrece o promete, tanto como posibilidad de consumo como en materia de la producción, el individuo tiene la intención de consumir, de continuar consumiendo si ya lo hizo, o de empezar a hacerlo si aún no lo ha podido hacer (Wieviorka, 1997).

Una revolución en los modelos comportamentales se habría expandido, acompañada por valores culturales marcados por la carencia de límites morales, cuando se justifica toda resolución de conflictos, comerciales o interpersonales, con la utilización de violencia. El dinero, al convertirse en una especie de medida general, instituyó la competitividad como regla de convivencia entre las personas, empresas y gobiernos, acreditándose el uso de la fuerza y formas perversas de sociabilidad. Los diversos segmentos sociales, en el intento de asegurar su supervivencia inmediata, tienden a lanzarse unos contra otros (Santos, 2000), cuando el albedrío del poder económico tiende a diseminar la violencia en todos los ámbitos de la vida social (Caniato, 2008).

En estas circunstancias, la violencia manifiesta se habría vuelto particularmente relevante como un acto racional e instrumental, con motivaciones egoístas y fines predominantemente económicos (Wieviorka, 1997). En estas condiciones, hombres jóvenes, especialmente los más destituidos, estarían incorporándose a las prácticas delictivas, lo que conlleva al establecimiento de un estado de guerra en muchas localidades, convirtiéndose al mismo tiempo en las mayores víctimas y los mayores perpetradores de homicidio (Zaluar, 2007).

Género y masculinidad

Desde una perspectiva de género, en Latinoamérica son notables las relaciones entre el aumento del homicidio juvenil y la expresión de la masculinidad a través de la integración a pandillas criminales. El crimen, como una actividad predominantemente masculina, se revela tanto a

través del sexo de la mayoría de los involucrados como a partir de las características que definen sus modos de actuar: una actividad socialmente organizada que impone control mediante la fuerza económica y la violencia (De León Escribano, 2008).

El término masculinidad se refiere a un conjunto de ideas socialmente construidas cuya lógica de relaciones permite el control y la explotación de unas personas sobre otras (Connell, 2003), basándose, primeramente, en la supuesta superioridad de lo masculino sobre lo femenino (Scott, 1997). Al representar una forma específica de subjetivación (Roses, 2007), posibilita entender la existencia de sujetos identificados como hombres que se adscriben a modelos hegemónicos de comportamiento, cuyos fines reproducen la búsqueda por estatus social y dinero, utilizándose, no raras veces, la violencia como recurso (Bourdieu, 1999).

Tal construcción se puede entender tanto en una perspectiva estructural, caracterizada por relaciones asimétricas de poder y por su organización colectivamente construida, como a través de particularidades adquiridas en contextos socioculturales específicos (Cruz, 2011). Dentro de esta perspectiva, el que nace con sexo masculino debe ajustarse a roles, valores, intereses y atributos que se le adjudican: autonomía, razón, poder y fuerza (Bonino, 1995). Ejemplo de esto son la incorporación de conductas violentas y temerarias que pueden representar enormes consecuencias a la salud (De Keijzer, 2001).

Para los hombres con mayor carencia material, la violencia se naturaliza de manera más evidente, por lo que tienden a sufrir más elevadas tasas de homicidio (Yanes Pérez, 2014). Aquellos que no logren desarrollar su condición violenta dentro de las relaciones de género, ya sea sobre la mujer u otros hombres, tienden a ser asociados a lo femenino, una puesta en duda de su masculinidad. Al ser discriminados además por diferencias raciales, económicas o de orientación sexual, se van distanciando sus posibilidades de alcanzar el modelo hegemónico que impone su contexto, hecho que los orilla a optar por conductas violentas (González Pagés y Fernández González, 2009), donde el hombre, como factor de riesgo en la socialización masculina, puede generar daño hacia la mujer (incluyendo niñas y niños), hacia sí mismo y entre otros hombres, esto último por medio de accidentes, homicidios y lesiones (De Keijzer, 2001).

Homicidio en México

Los datos del Banco Mundial (2017) reflejan una alta concentración de violencia homicida en el continente americano. En el año 2014, la tasa mundial fue de 5.3 homicidios por cada cien mil habitantes. Para México, el indicador fue de 16 homicidios. Aunque parezca un valor bajo en comparación con las zonas más violentas, la tasa mexicana representa tres veces el nivel mundial de homicidio.

En México, el crecimiento reciente del homicidio impactó de manera particular el segmento juvenil masculino, sobre todo a los residentes de áreas urbanas. Entre los años 1990 y 2007, el perfil del homicidio en las localidades con menos de 500 000 habitantes se presentó de manera concentrada entre las edades adultas y con una elevada proporción de casos relacionados a la violencia doméstica. Ya en las ciudades con más de medio millón de habitantes, se registró un perfil más concentrado entre los hombres jóvenes (Escalante, 2009a).

A partir del año 2007, se registró un incremento del homicidio en México, hecho vinculado tanto a la expansión del crimen organizado como a la reacción violenta por parte del Estado, ya que el aumento de las tasas se observó mayormente en los estados que concentraron los operativos judiciales (Escalante, 2009b). Se estima que, mientras en el año 2006 las organizaciones dedicadas al narcotráfico fueron responsables de 31.9% de todos los homicidios registrados en el país, en el año 2010 pasaron a ser 63.4%. Cerca de uno de cada cuatro mexicanos ejecutados en el marco de la guerra contra el narcotráfico tenía entre 15 a 29 años (Banco Mundial, 2012).

Entre los años 2007 y 2011, se amplió el diferencial del volumen de homicidios por sexo. Por cada mujer asesinada se registraron nueve víctimas hombres. Se duplicó la tasa de homicidios femeninos, mientras que se triplicó la del sexo masculino. De acuerdo con la edad, el homicidio se concentró en hombres de 15 a 44 años. Para el caso de las mujeres, se presentó mayor dispersión entre los grupos de edad² (Yanes Pérez, 2014).

Todos los estados federales de México, salvo Chiapas, perdieron esperanza de vida al nacer entre 2005 y 2010 como consecuencia de la

2 De acuerdo con Beltrão y Dellasoppa (2011), al analizar el crecimiento de los años de vida perdidos (AVP) por causas violentas (1980-2005) en Brasil, destaca que el alza del homicidio está asociada a un aumento de la brecha de género, con crecimiento de la victimización juvenil masculina.

mortalidad por homicidio (Aburto, Beltrán Sánchez, García-Guerrero y Canudas-Romo, 2016). En el año 2000, las entidades federativas con las mayores tasas de homicidio en México eran Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa, con tasas de 18 homicidios por cada cien mil habitantes. Sin embargo, para el año 2010, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Guerrero y Baja California presentaron tasas superiores a 40 homicidios por cada cien mil habitantes (Dávila y Pardo, 2015). Considerando específicamente el homicidio juvenil masculino (10 a 29 años), en el año 2010, cinco entidades: Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Baja California y Guerrero, concentraron el 56.7% de los casos (Banco Mundial, 2012, p. 9), y CDMX y el Estado de México no presentaron alza. Sin embargo, registran anualmente un significativo volumen de asesinatos (15 a 34 años), aunque constituye solo 25.1% de la población nacional masculina en este grupo de edad (INEGI, 2017a).

Respecto a la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual incluye a CDMX y municipios cercanos del Estado de México, entre los años 1993 y 1997, las tasas de homicidio a nivel subestatal variaron entre 60 y 260 homicidios por cada cien mil habitantes. Dentro de las zonas más violentas, tanto en municipios del Estado de México, como Ecatepec, Nicolás Romero, Jaltenco, Cuautitlán Izcalli, Texcoco, Naucalpan y Cuautitlán de Romero Rubio, y en delegaciones de CDMX, como Benito Juárez y Miguel Hidalgo (Arroyo Juárez, 2001).

Desigualdades territoriales y distribución espacial del homicidio juvenil masculino

Al ser el homicidio un fenómeno multicausal, se retoma el tema únicamente desde la desigualdad socioeconómica que experimentan las víctimas del sexo masculino. Ante este escenario, se asume la necesidad de buscar las causas inmediatas que influyen en la integración a la criminalidad violenta, la que disemina el alza del homicidio juvenil masculino (Bercovich et al., 1998), sobre todo con relación a las causas macrosociales (Oliveira de Souza, Arecoll y Da Silveira Filho, 2005). Ortiz (2014) realizó una exploración en la región Norte y Centro-Sur de México, para el grupo de edad de 20 a 29 años, trabajando la variable violencia a partir de los homicidios y el número de delitos. Las variables independientes utilizadas fueron el índice de Gini del ingreso, el promedio de años acumulados de estudio, el grado de urbanización, las tasas de desocupación, el PIB per cápita estatal y la tasa de divorcios por cada cien mil habitantes. Como resultado se encontró una relación positiva entre la tasa de homicidios y las variables de desocupación, urbanización y el coeficiente Gini.

Limberopulos Fernández (2016) buscó una correlación directa entre los mejores niveles de desarrollo social y las menores tasas de homicidios de la población juvenil (15-29 años) de los municipios metropolitanos de México (2010). Como resultado, se encuentra que mayores niveles de escolaridad, mejor acceso a la salud, así como una mayor proporción de empleo formal son condiciones que tienden a disminuir el riesgo de victimización por homicidio. Orozco Alvarado (2012), en el intento de asociar el homicidio con indicadores sociodemográficos y económicos de los municipios mexicanos más poblados (2000 y 2010), confirma la asociación entre desigualdad económica y homicidio, pero no encuentra relación con las variables de educación y empleo.

Enamorado y colaboradores (2016) argumentan que el incremento de la violencia observado en México a partir del año 2007 se originó simultáneamente al aumento de las ganancias obtenidas del delito y por el incremento de las oportunidades ofrecidas por la economía del crimen, sobre todo, en contextos de insuficientes oportunidades laborales y educativas para la población joven. Corona Juárez (2014) sostiene que los altos niveles de actividad criminal y de victimización por homicidio de hombres jóvenes mexicanos suelen asociarse de manera significativa con los bajos niveles de educación y altas tasas de desempleo. Esto resulta aún más claro en las zonas urbanas, donde la concentración espacial de jóvenes con pocas oportunidades de estudiar o trabajar suelen traducirse en mayores niveles de violencia y criminalidad.

Alvarado (2013) plantea cómo conductas agresoras pueden ocurrir en diferentes contextos; no obstante, estas tienden a concentrarse en los espacios más segregados de la pobreza, donde la economía informal va de la mano al crecimiento de los sectores ilegales. La disponibilidad de armas de fuego, la impunidad, el clientelismo, la corrupción, la presencia de pandillas y la inexistencia de políticas públicas de prevención, son factores que incrementan el riesgo de integración al crimen y de victimización por homicidio. En estos barrios, la concentración de desventajas conlleva a la experimentación de rupturas con los marcos normativos y a la exploración de las prácticas criminales como alternativas de inserción económica.

Problema de investigación

Partiendo del intento de aclarar las diferentes expresiones de la violencia y sus interrelaciones, Galtung (1990) define violencia directa como la

realización de actos de agresión verbal o física que ocasionan traumas, lesiones o incluso la muerte. Se refiere a los actos violentos directamente ejercidos entre personas y grupos de personas, siendo el homicidio su expresión extrema. La violencia estructural tiene sus significados relacionados con un orden social cuyo funcionamiento implica oportunidades desiguales para sus miembros. Se expresa por el acceso desigual a oportunidades, a los servicios públicos e infraestructuras urbanas. La violencia cultural se refiere a los aspectos simbólicos de la existencia humana, como la religión, ideologías o la ciencia, cuando son utilizados para justificar o legitimar la perpetración de la violencia directa o estructural.

La idea que expresa esa distinción categórica y su articulación a través de un triángulo vicioso es sencilla: violencia genera violencia. El ciclo vicioso de la violencia se relaciona entre sí de seis maneras diferentes. Partiéndose de uno de los tres vértices, cada cual a su turno, una dada categoría de violencia tendría capacidad para influenciar el alza de las otras dos categorías. Y así sucesivamente. Una forma de interacción se presenta cuando la violencia estructural genera violencia directa (Galtung, 1990).

Ramos de Souza (2005) destaca el rol de las relaciones sociales opresivas y otros sistemas de exploración como expresiones de la violencia estructural, ya que se encuentran estructurados de acuerdo al género y condiciones socioeconómicas, en coyunturas que tienden a presentar relativamente elevadas tasas de homicidio juvenil masculino.

Ante este marco, se asume que la integración al crimen representa un intento de amenizar la incidencia de la violencia estructural. Sin embargo, ello tiende a resultar en el incremento espacialmente concentrado de la violencia directa. Ante esta referencia, se propone buscar correlaciones entre niveles de violencia directa y niveles de violencia estructural en la mayor concentración urbana de México. Las tasas de homicidio masculino son indicadores de violencia directa, mientras que algunas características socioeconómicas de la población residente fungen como indicadores de violencia estructural (2000 y 2010).

Se ha elegido trabajar en el nivel subestatal, en un área comprendida por delegaciones de CDMX y municipios del Estado de México, con una población mayor a los 100 000 habitantes. La elección de trabajar con los municipios mencionados se debe al alza en las tasas de homicidio que un único asesinato ocasional puede propiciar en los municipios de

población pequeña. Esta concentración agrupa algunos elementos necesarios y pertinentes para esta investigación: es la principal zona urbana de la República Mexicana, la cual concentra un considerable volumen de población y niveles de homicidio que, entre 2000 y 2008, sobrepasaron a los niveles nacionales, por lo que corresponden a cantidades significativas de personas, especialmente jóvenes, anualmente asesinadas. Además, presenta elevados niveles de desigualdad económica y socioespacial³.

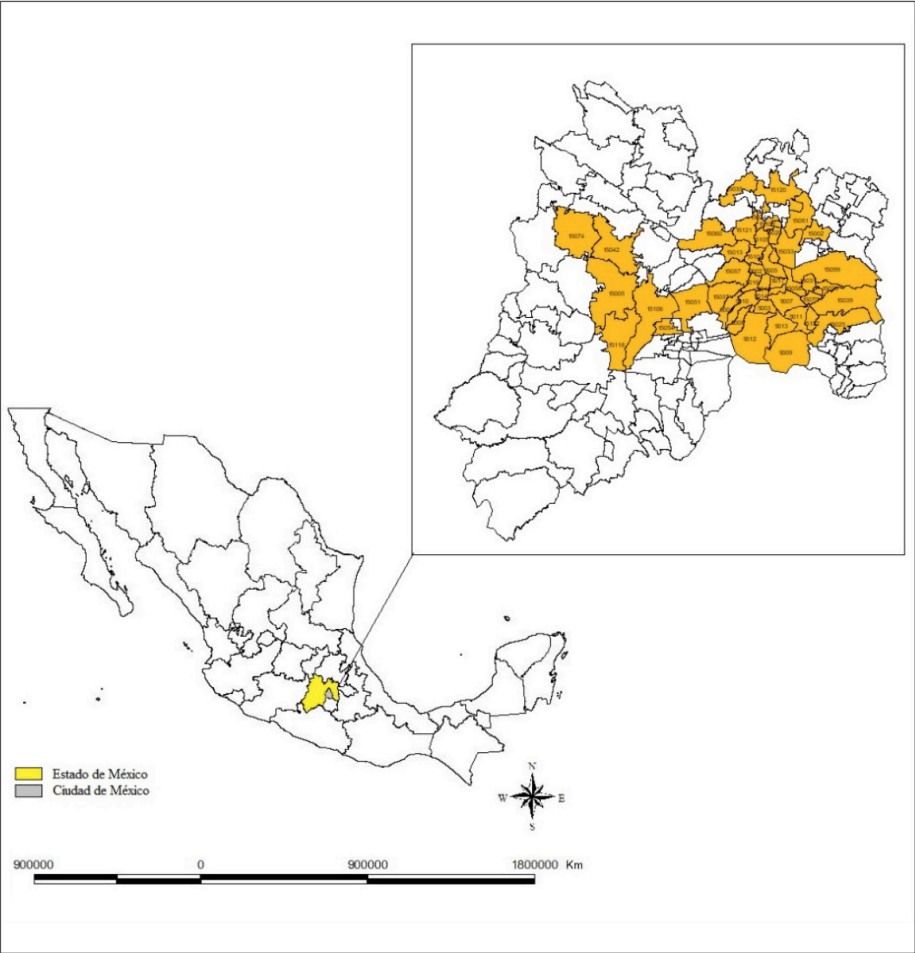
Con el propósito de presentar correlaciones entre la desigualdad territorial y la distribución espacial del homicidio, se realiza un estudio cuantitativo de cuatro etapas, en acuerdo con la metodología propuesta, cuyos objetivos son: 1) calcular el nivel de homicidio juvenil masculino por nivel de educación de la víctima; 2) verificar si hay relación entre la distribución espacial del homicidio y las desigualdades socioeconómicas (nivel municipios/delegaciones); 3) agrupar municipios y delegaciones según características socioeconómicas de la población, y recalculan los niveles de homicidio juvenil masculino verificando si se presentan correlaciones en este nivel espacial, y 4) recalculan el nivel de homicidio juvenil masculino por nivel de educación de la víctima y por clúster.

Metodología

La zona de estudio está conformada por 30 municipios del Estado de México y todas las 16 delegaciones de CDMX, con población mayor a 100 000 habitantes en el año 2010. Respecto al género, se tomó en cuenta únicamente el homicidio masculino. Se considera la incidencia de homicidio masculino total y del grupo de 15 a 34 años. El Mapa 1 representa la localización de la zona estudiada en el territorio nacional mexicano, mientras que el Mapa 2 representa la localización de las unidades espaciales seleccionadas.

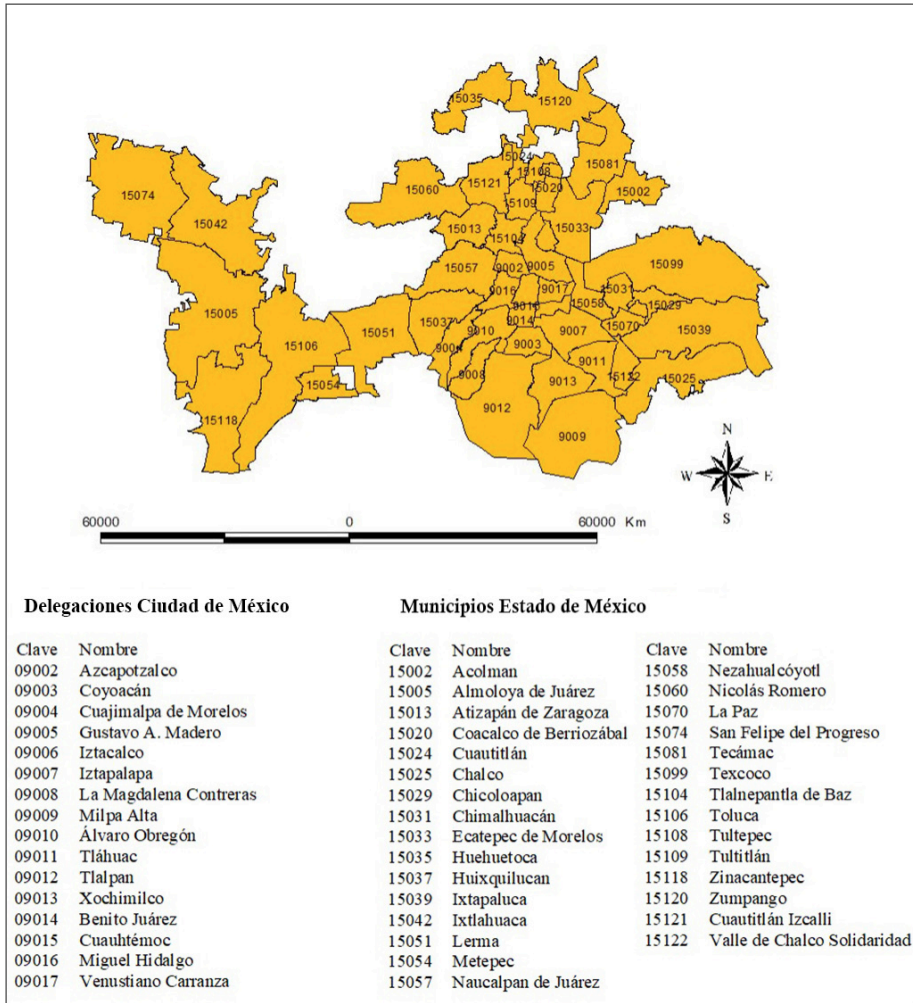
3 El estudio presenta limitaciones debido a que no se toman en cuenta todos los municipios conurbados del Estado de México y CDMX. Sin embargo, cubre la mayor parte de la conurbación (84.6% en 2000, 80.0% en 2000-2, 87.5% en 2010 y 82.4% en 2010-2012), destacando los municipios y delegaciones más pobladas, donde se concentran también los mayores volúmenes de personas y las tasas de homicidio más elevadas. En 0.5, 1.8, 4.3 y 5.6% de los registros de defunciones respectivamente, no se especificó el lugar de residencia.

Mapa 1
Localización geográfica de la zona de
estudio en la República Mexicana



Fuente: Elaboración propia con uso del programa Arcview.

Mapa 2
Localización geográfica de las delegaciones de CDMX
y municipios urbanos de Estado de México, 2010



Fuente: Elaboración propia con uso del programa Arcview.

Variables dependientes

Son las variables que representan niveles de violencia directa:

- Tasas brutas estandarizadas de homicidio masculino (2000/2010) (zona de estudio, a nivel de delegaciones/municipios y por clústeres);
- Tasas de homicidio juvenil masculino estandarizadas por grupos quinquenales de edad (15 a 34 años; 2000/2010) (zona de estudio, a nivel de delegaciones/municipios y por clústeres);
- Tasas de homicidio masculino suavizadas por grupo de edad (2000/2010) (zona de estudio y por clústeres);
- Tasas de homicidio juvenil masculino estandarizadas por grupos quinquenales de edad (15 a 34 años; 2000-2002 y 2010-2012), desglosado por nivel educativo de la víctima (zona de estudio y por clústeres).

Se utilizaron las muertes registradas en las Estadísticas de defunciones generales (INEGI, 2017b)⁴ y se tomó en cuenta la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) en las causadas por agresiones u homicidio (X85-Y09), excluyéndose las muertes por secuelas de agresiones (Y87.1). De manera general, se trabajó con las defunciones ocurridas y registradas en los años 2000 y 2010. Únicamente para las tasas que incluyen poblaciones más específicas, como el caso de tasas por nivel de educación, se usaron datos por trienios de las defunciones ocurridas y registradas en los periodos 2001-2002 y 2010-2012, con el objetivo de contar con mayor número de casos sin alterar la tendencia del estudio. Aparte de los registros que no especifican municipios/delegaciones de residencia, se excluyeron también los pocos casos de la zona de estudio que no presentan información sobre sexo (0.1% de estos en 2000, 2000-2002 y 2010-2012), edad (0.3% en 2000, 0.1% en 2010, 0.2% en 2000-2002 y 2010-2012) y educación (2.8% en 2000-2002 y 2.6% en 2010-2012) sin limitar los resultados del estudio.

4 El insumo para la recolección de datos de las muertes violentas es el Certificado de Defunción de la Secretaría de Salud y son los agentes del Ministerio Público los encargados de proporcionar esta información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). Los datos del Certificado, cuando se trata de muertes accidentales y/o violentas, entre ellas los homicidios, son llenadas por el médico legista o personal autorizado del Ministerio Público (Secretaría de Salud, 2004). Además, en el procedimiento de recepción de cadáveres y documentos para apertura de expedientes, se estipula que el personal de la unidad correspondiente del Servicio Médico Forense requisita con los datos que proporciona el familiar del difunto el Certificado de Defunción de la Secretaría de Salud (Semefo, 2011). Algunos datos que se consideran en el Certificado son la escolaridad, situación conyugal, ocupación del difunto, entre otros, además del nombre y parentesco del familiar que proporcionó los datos, etc. (Secretaría de Salud, 2004).

Se tomó como referencia la residencia habitual del fallecido, con el fin de que exista comparabilidad con las condiciones socioeconómicas de su municipio/delegación de origen. Con relación a la clasificación de la escolaridad⁵ de la víctima, cuando se habla de baja escolaridad, se entiende: 1) sin escolaridad; 2) menos de tres años de primaria/preescolar; 3) de 3 a 5 años de primaria/primaria incompleta, y (4) primaria completa (2000-2002 y 2010-2012). Cuando se habla de escolaridad media/alta, para el año 2000, se entiende: 5) secundaria o equivalente; 6) preparatoria o equivalente, y 7) profesional. Para el año 2010, se considera: 5) secundaria incompleta; 6) secundaria completa; 7) bachillerato o preparatoria incompleto; 8) bachillerato o preparatoria completo; 9) profesional, y 10) posgrado. Los casos de homicidio masculino (15-34 años), en las categorías de educación, son demasiados reducidos en ambos extremos para poder aumentar el número de agrupaciones, por lo que se eligió apenas dos: escolaridad baja y media/alta.

La población en riesgo se obtuvo de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y del Conteo de Población y Vivienda 2005, realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A partir de estos datos se estimó la población masculina a través del método de interpolación⁶ (2001-2004 y 2006-2009).

Como las tasas brutas no miden con precisión el nivel general del homicidio al estar afectado por la estructura por edades, tampoco pueden medir adecuadamente sus cambios (Arriaga, 1996), por lo que se realizó un procedimiento de estandarización a partir del método directo, tomándose como población estándar a la de República Mexicana del año 2000.

Variables independientes

Son las variables que representan la violencia estructural, cuantificada por medio de siete variables que muestran algunas de las características de la población en las diferentes unidades que componen la zona de estudio.

5 Las categorías de escolaridad utilizadas (baja y media alta) fueron creadas con base en la información posibilitada por el consecutivo 25, "Nivel de escolaridad del (la) fallecido (a)", de la Estadística de Defunciones Generales (INEGI, 2015).

6 Este trabajo tuvo su origen en una investigación de maestría, por lo que se utilizaron los resultados de una práctica de interpolación para el cálculo de las tasas de homicidio. Como los grupos estimados no se diferenciaron significativamente de las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo, 2005), la tesis se utilizó como base para el cálculo de indicadores de homicidio.

X1. Esperanza de vida al nacer

Representa la duración media de la vida de los individuos que integran una cohorte hipotética de nacimientos, sometidos en todas las edades a los riesgos de mortalidad del periodo en estudio (CEPAL, 2018). Este indicador cuenta con la ventaja de mostrar las condiciones de vida de la población a través de un criterio no económico (Ángeles Uribe, 2016).

Para el cálculo de la esperanza de vida, se utilizó la hoja LTPODTH (Excel) del paquete Population Analysis System (PAS) del United States Census Bureau. Las defunciones se obtuvieron de las Estadísticas de defunciones generales y la población a mitad de año de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 y 2010).

X2. Pobreza patrimonial

Se define como la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. Es una medida construida a partir de los ingresos, donde se determina la capacidad adquisitiva para cubrir las necesidades de una persona para vivir (Coneval, 2007).

Desde la perspectiva conceptual, la privación absoluta se refiere a la ausencia de recursos económicos tan grave que no es posible cubrir las necesidades básicas de subsistencia. El referente empírico de la privación absoluta es la pobreza y esta puede tener una influencia en la generación de conductas criminales (Ramírez de Garay, 2014). Para Galtung (1990) la privación es una forma de violencia. Los estudios de Wilkinson (2005), Pridemore (2008) y Díaz (2016), por ejemplo, han encontrado correlaciones significativas entre indicadores de pobreza y homicidio.

X3. Coeficiente de Gini

La privación relativa o desigualdad se define como un proceso de comparación entre el nivel de acceso a oportunidades económicas que un grupo social tiene en relación con otro. De acuerdo con Ramírez de Garay (2014), se pueden utilizar dos medidas de desigualdad como referentes empíricos: distribución de la riqueza y distribución de los ingresos. Estudios como los de Nadanovsky y Cunha-Cruz (2009), Pickett

y Wilkinson (2015) y Enamorado y colaboradores (2016) han encontrado que mayores grados de privación relativa están acompañados de más elevados niveles de homicidio.

El coeficiente de Gini es una medida relativa de concentración y la más usual para estimar la desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares. En el caso de que el ingreso estuviera distribuido equitativamente entre todos los hogares, el coeficiente de Gini sería igual a cero. En cambio, cuando el coeficiente es igual a uno representa la concentración máxima, es decir, se presenta la desigualdad perfecta (Conapo, 2005, p. 17).

X4. Proporción de hombres de 15 a 34 años que son desempleados (X4M15-34)

Se considera que una persona es desempleada cuando está desocupada, es decir, personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia buscaron trabajo porque no estaban vinculadas a una actividad económica o trabajo (INEGI, 2011a). El argumento de utilizar esta variable radica en el hecho de que el crecimiento del desempleo entre jóvenes induce al crecimiento del crimen (Ortiz Guevara, 2014). Algunos estudios que han relacionado el desempleo con altos índices de homicidio son Briceño-León (2012), Orozco Alvarado (2012) y Morales (2012).

Fórmula (1):

$$(X4M15-34) = \frac{PM15-34 \text{ que buscó trabajo}}{PM15-34 \text{ que buscó trabajo} + PM15-34 \text{ que tenían trabajo y no trabajaron} + PM15-34 \text{ que tenía trabajo y trabajaron}}$$

Donde (PM) es Población Masculina.

X5. Proporción de hombres de 15-34 años que no estudian ni trabajan (X5M15-34)

El indicador está integrado por asistencia escolar y condición laboral, por lo que integra dos conceptos: las personas que no acuden a una institución o programa educativo del Sistema Educativo Nacional independientemente de su modalidad (INEGI, 2011b), y las personas que no trabajan en la semana de referencia del Censo.

Las personas que no estudian y no trabajan son particularmente vulnerables a padecer los costos del crimen y de la violencia, ya sea como víctimas o como autores del delito (Chioda, 2013). El estudio realizado por De Hoyos y Fierros (2017) solo encontró una relación significativa entre las tasas de homicidio y la proporción de personas de 19 a 24 años que no estudian y no trabajan cuando los índices de violencia en México aumentaron entre los años 2007 y 2013.

Fórmula (2):

$$(X5M15-34) = PM15-34 \text{ no estudia y no trabaja} / (PM15-34 \text{ no estudia y no trabaja} + PM15-34 \text{ no estudia y trabaja} + PM15-34 \text{ estudia y no trabaja} + PM15-34 \text{ trabaja y estudia})$$

Donde (PM) es población masculina.

X6. Proporción hombres de 15-34 años que no tienen derecho a los servicios de salud (X6M15-34)

En México, el derecho a la salud es de enorme trascendencia en el contexto de los derechos sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Junto con la educación, la vivienda y el empleo, representa uno de los componentes básicos del bienestar de la población. La derechohabencia a servicios de salud permite identificar el volumen de la población que tiene asegurado el servicio médico, ya sea en alguna institución de seguridad social, mediante el Seguro Popular o por instituciones privadas, de manera que este indicador posibilita la cuantificación de la población que no tiene acceso a este servicio (INEGI, 2011b). Los diferenciales de la mortalidad y supervivencia entre distintos segmentos de la población están condicionados por la salud (Ángeles Uribe, 2016). Se percibe el acceso a los servicios de salud como un factor importante en este análisis.

Fórmula (3):

$$(X6M15-34) = PM15-34 \text{ sin derecho a servicios de salud social} / (PM15-34 \text{ sin derecho a servicios de salud social} + PM15-34 \text{ con derecho a servicios de salud social})$$

Donde (PM) es población masculina.

X7. Proporción de personas que habitan en vecindad, locales no apropiados para vivienda, vivienda móvil o refugio (X7VV)

Las características físicas de la vivienda influyen en las condiciones de vida de las personas. La vivienda es un espacio inmediato de desarrollo individual y familiar que debe ofrecer a sus ocupantes privacidad, protección del ambiente natural y social, espacio suficiente para funciones vitales y actividades domésticas, servicios básicos e instalaciones sanitarias que aseguren su salud, de manera que garanticen el desarrollo humano y la integración social (INEGI, 2011c).

Fórmula (4):

$$(X7VV) = PV \text{ vecindad} / (PV \text{ vecindad} + PV \text{ casa o departamento})$$

Donde (PV) es población en vivienda.

Respecto a las fuentes de datos de los indicadores socioeconómicos, el Censo de Población y Vivienda permitió la construcción de los indicadores específicos de salud, educación, empleo y vivienda, y de la esperanza de vida. La pobreza patrimonial y el coeficiente de Gini para México fueron obtenidos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2012), y los datos se encuentran disponibles en los años 2000 y 2010, desagregados a nivel municipal.

Proceso de investigación

Se divide en cuatro etapas:

Etapas 1. Tasas de homicidio juvenil masculino por nivel educativo

Se estimó la tasa de homicidio para hombres entre 15 y 34 años y la tasa estandarizada de homicidio juvenil masculino por niveles educativos de la víctima. Debido a que se calcularon tasas muy específicas y desagregadas como estrategia del método de análisis, se decidió concentrar las defunciones de homicidio de los años 2000-2002 y 2010-2012. Para las etapas 1 y 4, se excluyen cuatro unidades por falta de información en las bases de metadatos del Censo 2000: los municipios de Cuautitlán Izcalli (15121), Zumpango (15120), Zinacantepec (15118) y Valle de Chalco Solidaridad (15122).

Etapas 2. Correlación entre nivel de homicidio y desigualdad territorial (nivel municipal)

Se calcularon las tasas brutas estandarizadas de homicidio de la población masculina y las tasas estandarizadas homicidio del grupo de 15 a 34 años. Se recolectaron y calcularon los indicadores socioeconómicos (variables independientes) que representan la desigualdad territorial. Finalmente, se asoció el nivel de homicidio masculino general y juvenil con los indicadores socioeconómicos a través de una correlación lineal simple.

El coeficiente de correlación Pearson es una medida de asociación lineal que únicamente mide el nivel de influencia de una variable independiente (X) sobre una variable dependiente (Y). Esta permite conocer el grado de variación conjunta existente entre dos o más variables. Algunos estudios que la han empleado este tipo de análisis y sus resultados han sido significativos para Nadanovsky y Cunha-Cruz (2009) y Pickett y Wilkinson (2015). Sin embargo, también hay estudios que no han logrado comprobar la relación con esta técnica, como Ybáñez y Yanes (2013) y Díaz (2016).

Como en la etapa 2, no se encontraron correlaciones significativas entre niveles de homicidios y distintos indicadores socioeconómicos y se propuso una tercera etapa, que consistió en clasificar los municipios y delegaciones de acuerdo con sus características socioeconómicas mediante el análisis de clústeres.

Etapas 3. Análisis de clúster

El análisis de clúster o conglomerados es una técnica estadística multivariante que busca agrupar variables, tratando de lograr la máxima similitud y la mayor diferencia entre los grupos. Es un método basado en criterios geométricos y se utiliza fundamentalmente como una técnica exploratoria, descriptiva pero no explicativa (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1998). La técnica comprende varios métodos para identificar los grupos y los más usados en las ciencias sociales son las clasificaciones jerárquicas y k-medias. La primera se representa por un diagrama de árbol (dendograma), y en el segundo método, los grupos son divididos de acuerdo con los grupos que el investigador ha requerido.

Nadanovsky y Cunha-Cruz (2009) buscan encontrar la asociación entre homicidio, desigualdad económica e impunidad por medio de

una regresión lineal, si bien en sus resultados preliminares no se logra comprobar la hipótesis. Sin embargo, al hacer una clasificación de los países a través de un modelo binomial negativo, encuentran resultados significativos, como la impunidad y desigualdad predictores de altas tasas de homicidio. Otros estudios han utilizado el análisis de clústeres para el estudio de las correlaciones entre nivel de mortalidad según grandes grupos de causas de muerte y condiciones de vida de la población, por ejemplo Spijker (2004) y Ramírez de Garay (2014).

Como resultado de esta etapa, se agruparon los 30 municipios y 16 delegaciones en 4 clústeres, a partir de indicadores sociodemográficos utilizados en la etapa 2. La técnica empleada fue el k-medias y como resultado se obtuvieron cuatro grupos de municipios en función a los siete indicadores del 2000 y 2010. Finalmente, se calcularon las tasas de homicidio masculino general y del grupo de 15 a 34 años por clúster.

Etapas 4. Tasas de homicidio juvenil masculino por nivel educativo y por clúster

A partir de la clasificación del territorio planteada en el análisis de clúster, se procedió a calcular las tasas específicas de homicidio masculino del grupo joven (15-34 años) según la escolaridad de la víctima.

Resultados

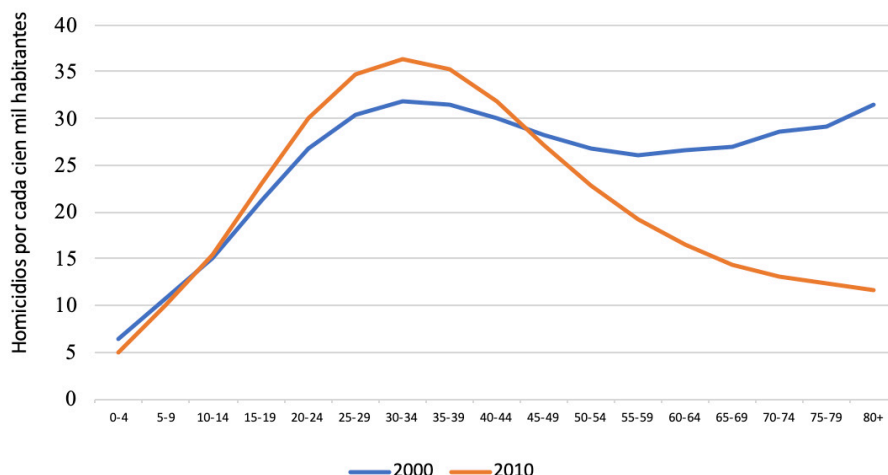
En el Estado de México y CDMX, en los años 2000 y 2010, la intensidad de homicidio masculino se mantuvo sobre los 21 homicidios por cada cien mil habitantes. Sin embargo, en este mismo periodo, se registró un incremento del homicidio juvenil masculino (15-34 años), pasando de los 34.7 a los 39.5 (Tabla 1). Las tasas suavizadas de homicidio por grupos de edad corroboran este cambio en la distribución del homicidio por edad, ya que para el año 2010, las mayores tasas se presentaron para grupos más jóvenes, comparativamente al año 2000 (Gráfica 1).

Tabla 1
Nivel de homicidio masculino de la zona estudiada (2000 y 2010)

Nivel	2000	2010
Tasa bruta estandarizada homicidio masculino (todas las edades)	21.7	21.9
Tasa estandarizada homicidio masculino (15-34 años)	34.7	39.5

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de defunciones generales y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Gráfica 1
Tasas suavizadas de homicidio masculino por grupos de edad, zona estudiada (2000 y 2010)



Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de defunciones generales y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Con relación a la etapa 1, cuando se obtuvieron las tasas de homicidio masculino por nivel educativo (2000-2002 y 2010-2012), se utilizaron dos categorías: educación baja y educación media/alta. Entre los periodos estudiados (2000-2002 y 2010-2012), el homicidio juvenil masculino (15-34 años) creció alrededor del 28%, ya que pasó de 34.4 a 44.4 homicidios para cada cien mil personas. Ya la tasa para víctimas de baja escolaridad creció cerca de 188%, de 51.1 a 148.0 homicidios, mientras que la tasa de homicidio de víctimas con escolaridad media/alta aumentó de 29.3 a 32.4 (incremento de 10%). De manera más específica, para los de baja escolaridad con edades entre 15-19 años se registraron tasas de 22.8 (2000-2002) y 152.8 (2010-2012); mientras que para los de 20-24, se registraron tasas de 54.3 y 163.6. Los jóvenes con edades entre 25 y 29 años alcanzaron a los 66.0 y 155.6; los de 30-34 presentaron tasas de 64.7 y 115.2. Aunque los hombres jóvenes de baja escolaridad presentan tasas de homicidio más elevadas, los de escolaridad media/alta (15-34 años) presentaron alza, pasando de 29.3 al 32.4 homicidios (2000-2002 y 2010-2012). De manera particular, el subgrupo con edades entre 15-19 años registró un decremento, pasando de 27.8 a 16.7 homicidios. Sin embargo, los otros grupos presentaron un alza: los hombres con edades entre 20-24 años obtuvieron 33.3 y 35.6; los de 25-29 registraron 29.2 y 41.7, y los de 30-34 alcanzaron a los 26.6 y 37.1 homicidios por cada cien mil habitantes, respectivamente (2000-2002 y 2010-2012; Tabla 2).

Tabla 2
Tasas de homicidio juvenil masculino por grupos de edades
y nivel educativo, zona estudiada (2000-2002 y 2010-2012)

Tasa* Edad/condición	15-19	20-24	25-29	30-34	15-34***
Años 2000-2001-2002					
Educación					
Baja	22.8	54.3	66.0	64.7	51.1
Media/alta	27.8	33.3	29.2	26.6	29.3
Total general**	25.7	39.9	37.6	34.3	34.4
Años 2010-2011-2012					
Educación					
Baja	152.8	163.6	155.6	115.2	148.0
Media/alta	16.7	35.6	41.7	37.1	32.4
Total general**	26.2	47.2	55.9	49.8	44.4

* Por cada cien mil habitantes.

** Se incluyeron no especificados.

***Tasa estandarizada.

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Estadísticas de defunciones generales, 2000-2002 y 2010-2012, y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

A través del análisis de correlación entre el homicidio juvenil masculino y las características sociodemográficas de la población (nivel municipios/delegaciones; etapa 2), se encuentra que en el periodo 2000, las tasas de homicidio masculino presentan relación positiva con la pobreza patrimonial, pero de manera moderada. Para el periodo 2010, esta relación no es significativa. El nivel de homicidio tampoco presenta relación significativa con la esperanza de vida en 2000. Sin embargo, para 2010 existe relación moderada e inversa con nivel de significancia 0.01. El coeficiente de Gini y las tasas de homicidio mantienen una relación moderada y negativa en ambos periodos. La relación con los indicadores de desempleo, no estudian y no trabajan, derecho a la salud y vecindad, tampoco es significativa. La excepción es la relación moderada que existe entre el indicador no estudia y no trabaja (2000) y sin derecho a salud (2010), respecto a la tasa bruta de homicidio masculino (Tabla 3).

Tabla 3
Correlaciones entre nivel de homicidio masculino e indicadores socioeconómicos de los municipios y delegaciones (2000 y 2010)

Indicadores socioeconómicos del territorio	Tasa bruta estandarizada homicidio masculino			
	2000		2010	
	Todas las edades	15-34 años	Todas las edades	15-34 años
Esperanza de vida	-0.178	-0.128	-0.469**	-0.473**
Pobreza patrimonial	0.518**	0.494**	0.288	0.169
Coefficiente Gini	-0.369*	-0.422**	-0.456**	-0.427**
Proporción de hombres de 15-34 años que son desempleados	0.127	0.087	0.096	0.065
Proporción de hombres de 15-34 años que no estudian y no trabajan	0.295*	0.127	0.158	0.089
Proporción de hombres de 15-34 años que no tienen derecho a los servicios de salud	0.238	0.235	0.329*	0.277
Proporción de personas que habitan en vecindad, locales no apropiados para vivienda, vivienda móvil o refugio	-0.268	0.011	0.172	0.264

* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas).

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia con uso del programa SPSS, a partir de INEGI, Estadísticas de defunciones generales y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010; Coneval (2012).

Considerando los resultados obtenidos en las etapas 1 y 2, donde se observa que existe una correlación entre el nivel educativo y nivel de homicidio juvenil masculino, y en el nivel municipal apenas se encuentran pocas correlaciones entre homicidio de hombres jóvenes y características socioeconómicas (esperanza de vida, coeficiente de Gini y pobreza patrimonial), se realizaron las etapas 3 y 4. En la etapa 3, para obtener agrupaciones de municipios y delegaciones, se categorizaron de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la población (valores de los indicadores contextuales y específicos a nivel municipal), de modo que se obtuvieron cuatro clústeres. Para su identificación se asignaron colores, donde el rojo (clúster 4) concentra la mayor proporción de personas en peores condiciones; posteriormente, el naranja (clúster 3) y el amarillo (clúster 2) van mejorando hasta llegar al color verde (clúster 1), de mejores condiciones, pero también de mayor desigualdad de ingreso.

De acuerdo con los valores de las variables socioeconómicas de cada municipio y delegación, se arrojó la clasificación de pertenencia de cada clústeres. A partir de esto, en la Tabla 5 se explican las condiciones socioeconómicas y se muestran los municipios de pertenencia de los cuatro clústeres arrojados. De acuerdo a la técnica empleada, se nota una tendencia de contigüidad entre las unidades pertenecientes a un mismo clúster, con excepción del clúster 4, integrado por apenas 2 unidades (Mapa 3).

Tabla 4
Valores de las variables socioeconómicas de las unidades político-administrativas, según clústeres

Variable socioeconómica	Clúster 2000			
	1	2	3	4
Esperanza de vida (años)	74.27	74.62	74.10	71.67
Pobreza patrimonial (%)	20.55	32.38	53.87	77.50
Coefficiente de Gini	0.48	0.47	0.43	0.42
Proporción de hombres de 15-34 años que son desempleados	0.03	0.03	0.02	0.02
Proporción de hombres de 15-34 años que no estudian y no trabajan	0.07	0.09	0.10	0.15
Proporción de hombres de 15-34 años que no tienen derecho a los servicios de salud	0.47	0.51	0.61	0.81
Proporción de personas que habitan en vecindad, locales no apropiados para vivienda, vivienda móvil o refugio	0.15	0.08	0.05	0.03
Variable socioeconómica	Clúster 2010			
	1	2	3	4
Esperanza de vida (años)	75.66	75.87	75.47	74.00
Pobreza patrimonial (%)	24.04	39.68	55.15	78.20
Coefficiente de Gini	0.42	0.42	0.40	0.36
Proporción de hombres de 15-34 años que son desempleados	0.07	0.07	0.08	0.07
Proporción de hombres de 15-34 años que no estudian y no trabajan	0.10	0.11	0.12	0.14
Proporción de hombres de 15-34 años que no tienen derecho a los servicios de salud	0.36	0.42	0.49	0.51
Proporción de personas que habitan en vecindad, locales no apropiados para vivienda, vivienda móvil o refugio	0.07	0.04	0.01	0.01

Fuente: Elaboración propia con del programa SPSS, a partir de INEGI, Estadísticas de defunciones generales y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010; Coneval (2012).

Tabla 5
Interpretación de clústeres según condiciones socioeconómicas
y pertenencia territorial de las unidades político-administrativas

Predominio	Clúster	Pertenencia
Clúster 4	Son dos municipios con la mayor concentración de pobreza patrimonial, menor esperanza de vida, mayor proporción de hombres jóvenes que no estudian y no trabajan y que no cuentan con el derecho a la salud. En contraste, hay menor desigualdad, menor concentración de hombres jóvenes que están buscando trabajo o son desempleados y tienen menor concentración de viviendas en vecindad o no apropiadas. Se repite el patrón en ambos años.	15031 Chimalhuacán 15074 San Felipe del Progreso
Clúster 3	Son 14 municipios, segundo valor con mayor concentración de pobres patrimoniales, menor esperanza de vida, mayor proporción de hombres jóvenes que no estudian y no trabajan y que no cuentan con el derecho a la salud. Es el segundo lugar con menor desigualdad y concentración de viviendas en vecindad o no apropiadas para vivir. El patrón se repite en seis indicadores para ambos años, a excepción del desempleo: en el año 2000 ocupó es el segundo lugar con mayor proporción de jóvenes desempleados y en 2010 ocupó el primer lugar.	15002 Acolman 15005 Almoloya de Juárez 15025 Chalco 15029 Chicoloapan 15033 Ecatepec de Morelos 15039 Ixtapaluca 15042 Ixtlahuaca 15060 Nicolás Romero 15070 La Paz 15081 Tecámac 15108 Tultepec 15118 Zinacantepec 15120 Zumpango 15122 Valle de Chalco Solidaridad
Clúster 2	Son 22 municipios que tienen la mejor esperanza de vida, segundo valor con menor concentración de pobres patrimoniales, hombres jóvenes que no estudian y no trabajan y que no tienen derecho a los servicios de salud. Ocupa el segundo lugar con mayor desigualdad y proporción de viviendas en vecindad y no apropiadas. El patrón se repite en ambos años, excepto en la mayor concentración de hombres jóvenes desempleados, que para el año 2000 ocupaba el primer lugar y en el año 2010, el segundo lugar en este indicador.	15013 Atizapán de Zaragoza 15020 Coacalco de Berriozábal 15024 Cuautitlán 15035 Huehuetoca 15037 Huixquilucan 15051 Lerma 15054 Metepec 15057 Naucalpan de Juárez 15058 Nezahualcóyotl 15099 Texcoco 15104 Tlalnepantla de Baz 15106 Toluca 15109 Tultitlán 15121 Cuautitlán Izcalli 09004 Cuajimalpa de Morelos 09005 Gustavo A. Madero 09007 Iztapalapa 09008 La Magdalena Contreras 09009 Milpa Alta 09010 Álvaro Obregón 09011 Tláhuac 09013 Xochimilco

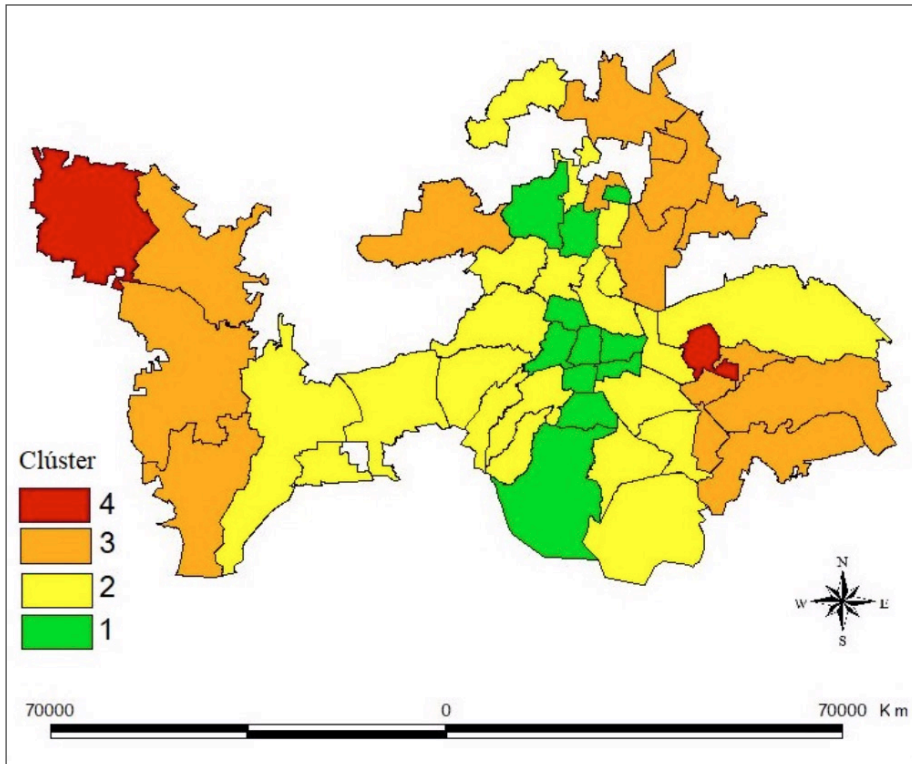
Continúa

Tabla 5 (continuación)

Predominio	Clúster	Pertenencia
Clúster 1	Son ocho municipios con menor concentración de tres indicadores: pobreza patrimonial, hombres jóvenes que no estudian y no trabajan y que no tienen derecho a servicios de salud. Segundo lugar con mejor esperanza de vida. Mayor desigualdad en ingresos. El patrón se repite para todos los indicadores en ambos años, excepto en el desempleo, que para el 2000 ocupó el segundo lugar con mayor desempleo y en el año 2010, ocupó el tercero.	09002 Azcapotzalco 09003 Coyoacán 09006 Iztacalco 09012 Tlalpan 09014 Benito Juárez 09015 Cuauhtémoc 09016 Miguel Hidalgo 09017 Venustiano Carranza

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 4.

Mapa 3
Distribución geográfica por clúster, zona estudiada (2000 y 2010)

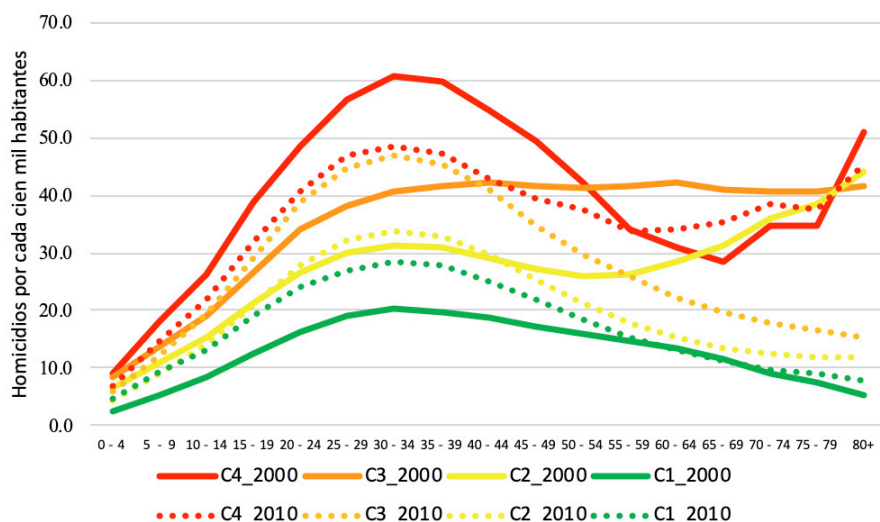


Fuente: Elaboración propia con el programa SPSS, a partir de INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Posteriormente a la agrupación de los municipios y delegaciones, se calculó las tasas suavizadas de homicidio masculino por grupos de edad, la tasa estandarizada por edad de homicidio masculino total y

para el grupo de 15-34 años, para cada uno de los clústeres. En la Gráfica 2 se observa que, en concentraciones de población más pobre, con menor esperanza de vida y poco acceso a oportunidades de empleo, educación y salud, las tasas de homicidio masculino son más altas. Dicha condición impacta principalmente los grupos con edades de 15 a 34 años. Respectivamente, como van mejorando las condiciones socio-económicas de la población, se observa una disminución de las tasas de homicidio en cada edad (excepto para los mayores de 50 años en 2000) y también una mayor dispersión de las tasas entre los diferentes grupos de edad. De acuerdo con el diferencial de tiempo entre 2000 y 2010, se observa una disminución de las tasas de homicidio para el clúster 4, lo de mayores tasas, sin embargo, para los otros tres clústeres las tasas aumentaron y concentraron más en la población joven y de mediana edad.

Gráfica 2
Tasas suavizadas de homicidio masculino
por edad y clúster (2000 y 2010)

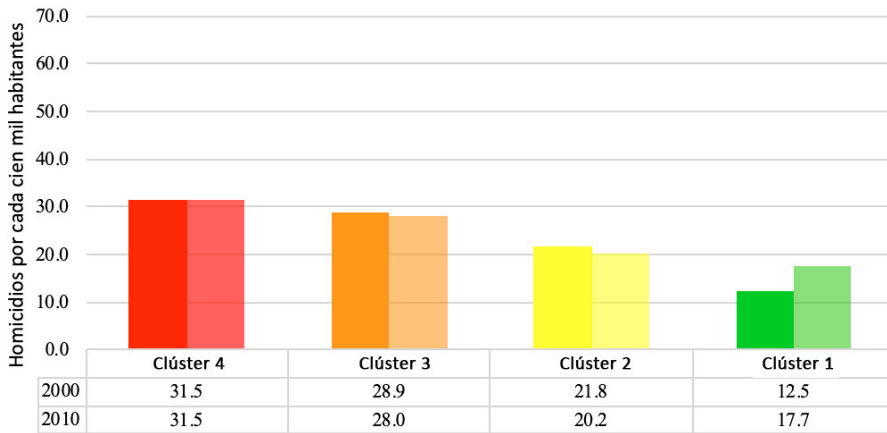


Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de defunciones generales y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

La Gráfica 3 demuestra que la tasa estandarizada de homicidio masculino se mantuvo en un nivel similar entre los años 2000 y 2010 para el clúster rojo (4) (31.5). Para los clústeres anaranjado (3) y amarillo (2), se registró una caída de 28.9 a 28.0 y de 21.8 a 20.2 homicidios para cada cien mil habitantes, respectivamente. El clúster verde (1) registró un incremento, pasando de 12.5 a 17.7 homicidios. Respecto a las tasas de homicidio de

hombres jóvenes, disminuyó para el clúster 4, el de peores condiciones, pasando de 64.9 a 54.8 homicidios. Simultáneamente, la tasa aumentó para los otros tres clústeres, sobre todo para el clúster 1, el de mejores condiciones, pasando de 21.7 a 31.8 homicidios (Gráfica 4).

Gráfica 3
Tasa bruta estandarizada de homicidio
masculino por clúster (2000 y 2010)



Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de defunciones generales y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Gráfica 4
Tasa estandarizada de homicidio juvenil
masculino por clúster (2000 y 2010)

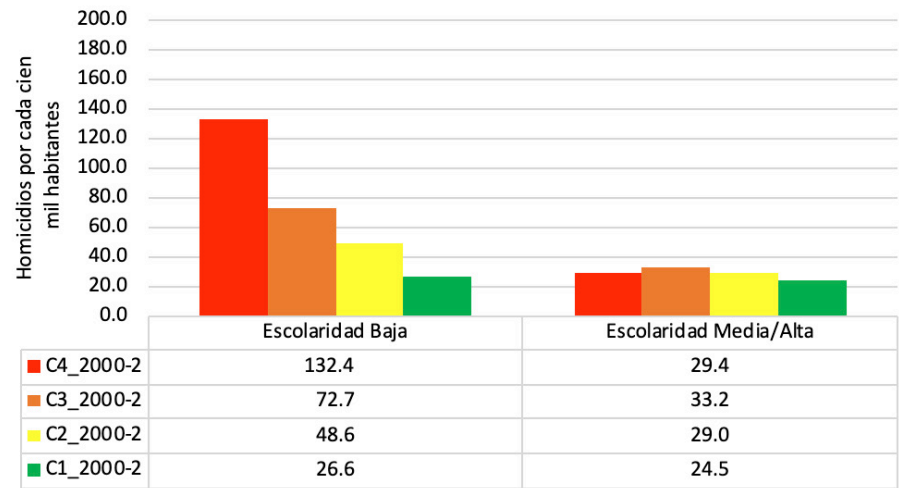


Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de defunciones generales y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Respecto a la etapa 4, en el primero evaluado (2000-2002), se encuentra que el nivel de homicidio juvenil masculino baja cuando sube la escolaridad. En casi todos los clústeres analizados la tasa de homicidio de jóvenes con escolaridad baja es claramente más elevada que la tasa

para jóvenes de escolaridad media/alta, con excepción del clúster 1, donde los niveles para los dos grupos son casi similares (26.6 para los de baja escolaridad y 24.5 para los de escolaridad media/alta). La diferencia entre las tasas de estos dos grupos de jóvenes, en cada clúster, aumenta cuando empeoran las condiciones socioeconómicas de la población. En este sentido, el clúster 4 presenta las mayores disparidades internas, al registrar una tasa de 132.4 homicidios para los de escolaridad baja, y de 29.4 para los de escolaridad media/alta. Además, se nota que la tasa de homicidio juvenil masculino, para los jóvenes de escolaridad baja, aumenta cuando empeoran las condiciones de la población, de manera que se presenta más elevada para el clúster 4 (132.4) y va disminuyendo hasta llegar al clúster 1 (26.6). Las tasas de homicidio de hombres jóvenes de escolaridad media/alta no presentan una variación notable, llegando a los 29.4 para el clúster 4 y 24.5 para el clúster 1 (Gráfica 5).

Gráfica 5
Tasa estandarizada de homicidio juvenil masculino
por clúster y educación (2000-2002)

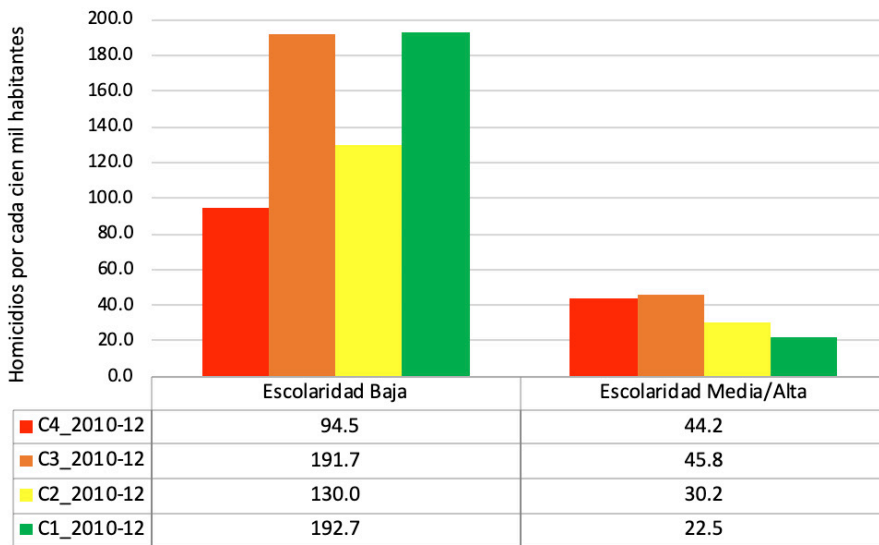


Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Estadísticas de defunciones generales, 2000-2002 y 2010-2012, y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Para el periodo 2010-2012, se presenta un incremento importante en las tasas de homicidio de víctimas con baja escolaridad, con excepción del clúster 4, el de peores condiciones, que pasó de 132.4 a los 94.5 homicidios. El alza de las tasas de homicidio se dio de manera más intensa en los municipios y delegaciones del clúster 1, el de mejores condiciones socioeconómicas, pero mayor desigualdad económica, pasando de los 26.6 a los 94.5 homicidios para cada cien mil habitantes. En referencia al

homicidio de víctimas con escolaridad media/alta, se nota un aumento de las diferencias entre los diferentes clústeres, portándose según un patrón donde las unidades de mejores condiciones tienden a presentar menor intensidad de homicidios (Gráficas 5 y 6).

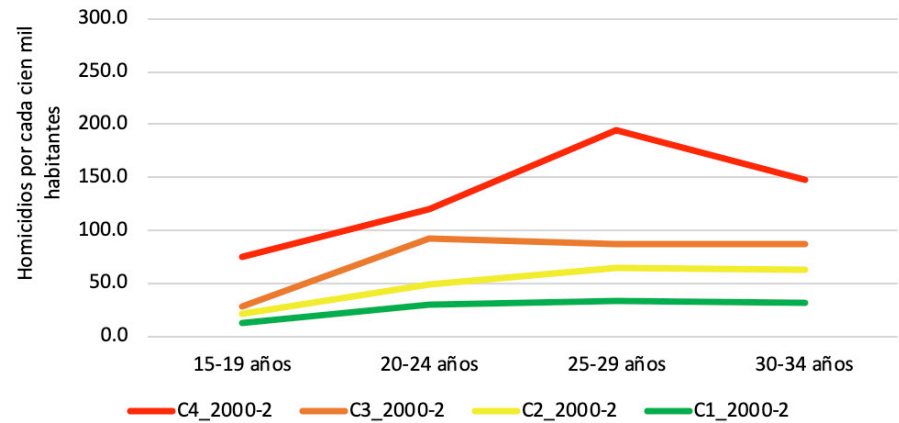
Gráfica 6
Tasa estandarizada de homicidio juvenil masculino
por clúster y educación (2010-2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Estadísticas de defunciones generales, 2000-2002 y 2010-2012, y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

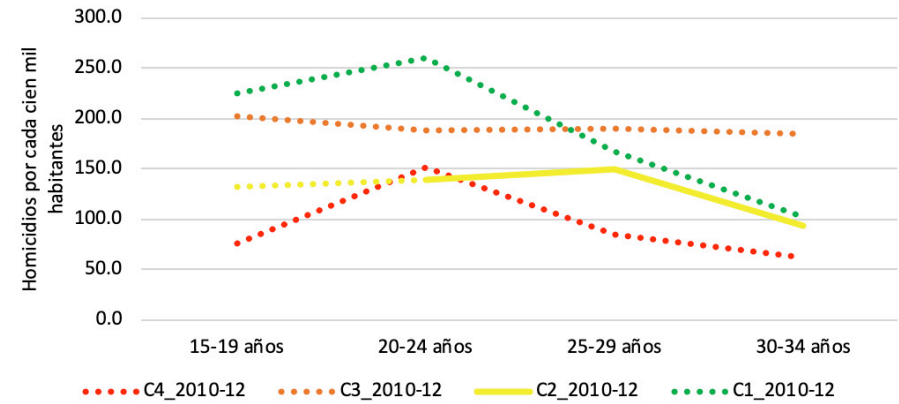
Con relación al nivel del homicidio masculino por grupos de edad, se nota un incremento importante y un cambio en los patrones en víctimas con baja escolaridad. Mientras que en el primer periodo se morían mayormente los hombres con edades entre 25 y 34 años, para el segundo periodo se presentan más elevadas tasas, principalmente entre los hombres jóvenes de 15 a 24 años del clúster de mejores condiciones y mayor desigualdad económica. En referencia a los clústeres 1 y 2 se presenta un incremento en el homicidio, principalmente en las edades de 15 a 24 años (2000-2002 y 2010-2012), mientras que en los clústeres 3 y 4 se nota también un rejuvenecimiento de las tasas de homicidio (Gráficas 7 y 8). Respecto al homicidio de víctimas con escolaridad media/alta, los clústeres de mejores condiciones socioeconómicas presentaron un ligero incremento en las tasas por edad. Los cambios más representativos se mostraron en los clústeres 4 y 3, donde se incrementaron principalmente los grupos de 25 a 34 años (2000-2002 y 2010-2012; Gráficas 9 y 10).

Gráfica 7
Tasa estandarizada de homicidio juvenil masculino
con baja escolaridad por clúster (2000-2002)



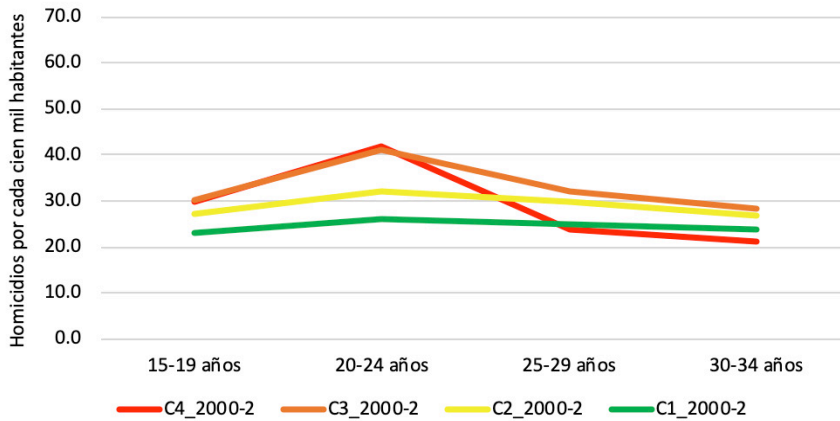
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Estadísticas de defunciones generales, 2000-2002 y 2010-2012, y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Gráfica 8
Tasa estandarizada de homicidio juvenil masculino
con baja escolaridad por clúster (2010-2012)



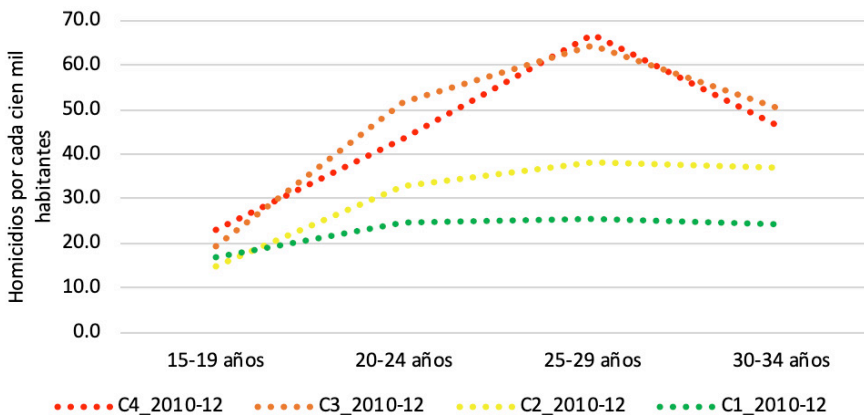
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Estadísticas de defunciones generales, 2000-2002 y 2010-2012, y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Gráfica 9
Tasa estandarizada de homicidio juvenil masculino con
media/alta escolaridad por clúster (2000-2002)



Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Estadísticas de defunciones generales, 2000-2002 y 2010-2012, y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Gráfica 10
Tasa estandarizada de homicidio juvenil masculino con
media/alta escolaridad por clúster (2010-2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Estadísticas de defunciones generales, 2000-2002 y 2010-2012, y Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Entre los hombres de baja escolaridad, la mayor intensidad del homicidio se presentaba para los jóvenes con edades entre 25 y 29 años (2000-2002) del clúster rojo; mientras que en el periodo 2010-2012, se presentó para los de edades entre 20 y 24 años del clúster verde, de manera que hubo un rejuvenecimiento y una redistribución espacial del homicidio. Para las víctimas con escolaridad media/alta, la mayor intensidad del

homicidio pasa de las edades entre 20 y 24, a los de 25 a 29 años de los clústeres rojo y naranja (delegaciones, 2010-2012), lo que corresponde a un envejecimiento del homicidio.

En resumen, los resultados revelan que en la zona de estudio las tasas estandarizadas de homicidio masculino se mantuvieron. En el primer periodo se observa mayor concentración del homicidio entre edades adultas, mientras que en el segundo se observa un crecimiento en las tasas de hombres jóvenes (15-34 años; 2000-2002 y 2010-2012).

Al realizar un análisis de clústeres con conjuntos de municipios/delegaciones, los resultados revelan que la intensidad del homicidio juvenil masculino presenta una relación con características socioeconómicas de la población estudiada, por lo que se demuestra la existencia de una asociación entre el nivel de homicidio y la desigualdad territorial. Sin embargo, aunque en ambos periodos las tasas se mantuvieron más elevadas en unidades con peores indicadores, el crecimiento del homicidio se concentró en las unidades territoriales con mejores condiciones (sobre todo en el clúster 1). Este crecimiento, a su vez, se concentró entre hombres jóvenes con escolaridad baja, hecho que afectó principalmente a los grupos de 15 a 24 años. Así que, al igual que en las zonas de mejores condiciones, el crecimiento del homicidio afectó de manera particular a los jóvenes que enfrentan problemas estructurales. Es decir, en 2010-2012, vivir en un buen entorno socioeconómico no conllevaba más un factor protector contra el homicidio para jóvenes con un bajo nivel de escolaridad, como sí lo hacía una década antes (2000-2002).

Conclusiones

En un periodo marcado por el alza del homicidio juvenil masculino y por su distribución desigual en el territorio, no se pueden dejar de vislumbrar interfaces entre las características socioeconómicas y las condiciones de mortalidad de los diversos segmentos que componen la población. Respecto a los municipios del Estado de México y las delegaciones de CDMX mayores a los 100 000 habitantes, el intento de establecer correlaciones lineales entre el nivel del homicidio juvenil masculino y las condiciones socioeconómicas de la población, al presentar inconsistencias en ambos periodos, demandó un reajuste metodológico.

A través de un análisis de clústeres, definidos de acuerdo a las características de la población, se pudieron corroborar las relaciones entre la intensidad del homicidio y las características socioeconómicas de la

población, ya que a las unidades con peores indicadores correspondieron las más elevadas tasas de homicidio masculino, y viceversa. Aunque el crecimiento más intenso del homicidio juvenil masculino se dio en el clúster 1, con mejores condiciones socioeconómicas, en cuanto al bajo nivel de pobreza patrimonial de jóvenes sin acceso a salud y que no estudian o trabajan (aunque con mayor desigualdad económica), este incremento estuvo concentrado entre los jóvenes de baja escolaridad (2000-2002 y 2010-2012).

Se concluye que el efecto vicioso del triángulo de la violencia, específicamente respecto a la interacción entre la incidencia de la violencia estructural y la elevación en la violencia directa, se manifiesta tanto en las más elevadas tasas de homicidio de las unidades territoriales de peores condiciones, como en las mayores tasas para los hombres de escolaridad baja. Tal coyuntura tiende a acentuar las desventajas relativas y, como consecuencia, las desigualdades socioespaciales. Esta dinámica revela la necesidad de mayores atenciones a la juventud, sobre todo a los más destituidos, para que se puedan reducir las desigualdades, especialmente respecto a las oportunidades de inserción social y económica. La búsqueda de medios capaces de reducir el homicidio emerge como un inmenso desafío, no solamente para los gestores públicos y académicos dedicados al tema, sino para toda la sociedad civil y, sobre todo, para los hombres y mujeres jóvenes que buscan mejores condiciones de sobrevivencia para sí mismos/as y sus familias.

De cara a futuras líneas de investigación, hemos sugerido utilizar el método de análisis espacial a nivel de municipios según el nivel educativo de las víctimas para comprobar la existencia de autocorrelación espacial en los homicidios (México Evalúa, 2018). Podría ser interesante profundizar en las diferencias educativas, puesto que los resultados de este estudio apenas mostraron diferencias entre clústeres en los niveles de homicidio, cuando la escolaridad era media/alta, pero había diferencias destacadas para los de escolaridad baja. No obstante, en un primer análisis, el valor del índice I de Moran global no era significativo en ambos casos en 2000-2002, pero sí en 2010-2012. Esto quiere decir que el nivel de mortalidad por homicidios estaba poco influido por los patrones de homicidio de los municipios circundantes en 2000, pero sí lo estaría diez años más tarde. Un análisis de regresión espacial permitiría ver qué variables podrían estar detrás de este patrón cambiante.

Referencias

- Aburto, J. M., Beltrán-Sánchez, H., García-Guerrero, V. M. y Canudas-Romo, V. (2016). Homicides in Mexico reversed life expectancy gains for men and slowed them for women, 2000-10. *Health Affairs*, 35(1), 88-95. doi: 10.1377/hlthaff.2015.0068
- Alvarado, A. (2013). La violencia juvenil en América Latina. *Estudios Sociológicos*, 31(91), 229-258. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59830136009>
- Ángeles Uribe, E. (2016). *El efecto de la desigualdad social en el nivel de la mortalidad*. Tesis de maestría. Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México. Recuperado de https://colmex.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/52COLMEX_INST/1270171710002716
- Arriaga, E. (1996). Los años de vida perdidos: su utilización para medir el nivel y cambio de la mortalidad. *Notas de Población*, 24(63), 7-38. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12508/NP63-01_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Arroyo Juárez, M. (2001). Características y situación del homicidio en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 1993-1997. *Papeles de Población*, 7(30), 233-245. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-742520010004000010&lng=es&nrm=iso
- Banco Mundial (2012). *La violencia juvenil en México: Reporte de la situación, el marco legal y los programas gubernamentales*. Washington, D. C.: Banco Mundial. Recuperado de <http://documentos.bancomundial.org/curated/es/277681468155375869/La-violencia-juvenil-en-Mexico-report-de-la-situacion-el-marco-legal-y-los-programas-gubernamentales>
- Banco Mundial (2017). *Homicidios intencionales (por cada cien mil habitantes)*. Recuperado de <https://datos.bancomundial.org/indicador/vc.ihr.psrc.p5>
- Beltrão, K. I. y Dellasoppa, E. E. (2011). El diseño de los hombres. Años de vida perdidos en Brasil y en sus grandes regiones, 1980 a 2005. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 26(2), 299-343. doi: 10.24201/edu.v26i2.1385

- Bercovich, A., Dellasoppa, E. y Arriaga, E. (1998). J'adjunte, mais je ne corrige pas: jovens, violência e demografia no Brasil. Algumas reflexões a partir dos indicadores de violência. En E. Berquó. (Ed.), *Jovens acontecendo na trilha das políticas públicas* (pp. 293-363). Brasília: IPEA/CNPQ.
- Bevan, J. y Florquin, N. (2006). Sin más opción que las armas: jóvenes iracundos. En J. Bevan y N. Florquin. (Eds.), *Small arms survey: Unfinished business* (pp. 122-143). Ginebra, Suiza: Instituto de Estudios Internacionales de Postgrado.
- Bonino Méndez, L. (1995). Develando los micromachismos en la vida conyugal. En J. Corsi. (Ed.), *Violencia masculina en la pareja: una aproximación al diagnóstico y a los modelos de intervención* (pp. 191-208). Argentina: Paidós.
- Bourdieu, P. (1999). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.
- Briceño-León, R. (2012). La comprensión de los homicidios en América Latina: ¿pobreza o institucionalidad? *Ciencia & Saude Coletiva*, 17(12), 3159-3170. doi: 10.1590/S1413-81232012001200002
- Caniato, A. M. P. (2008). Violências e subjetividades: o indivíduo contemporâneo. *Psicologia & Sociedade*, 20(1), 16-32. doi: 10.1590/s0102-71822008000100003
- Castells, M. (2003). *A era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol. 3, O fim do milênio*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. doi: 10.17231/comsoc.5(2004).1256
- Chioda, L. (2013). Crime and violence prevention over the lifecycle in Latin America and the Caribbean. *LCRCE Regional Study*. doi: 10.1596/978-1-4648-0664-3_ch2
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2013). *Propuesta de la agenda regional de población y desarrollo para América Latina y el Caribe después de 2014*. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3122/S2013416.pdf?sequence=1>
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2018). *Definición de algunos indicadores demográficos*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Connell, R. W. (2003). *Masculinidades*. Ciudad de México: Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM.

- CICS, IED y Unesco (Consejo Internacional de Ciencias Sociales, Instituto de Estudios del Desarrollo y Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura) (2016). *Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016. Afrontar el reto de las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo*. Recuperado de <https://es.unesco.org/wssr2016>
- Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social) (junio de 2007). *Pobreza por ingresos y alimentación*. México. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/3489.pdf
- Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) (2012). *Evolución de la pobreza por ingresos estatal y municipal 2012*. Recuperado de <https://www.coneval.org.mx/Medicion/EDP/Paginas/Medicion-por-ingresos-1990-2012.aspx>
- Conapo (Consejo Nacional de Población) (2005). *La desigualdad en la distribución del ingreso monetario en México*. Mexico: Conapo. Recuperado de http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/desigualdad_monetaria_conapo.pdf
- Cordera, R., Ramírez Kuri, P. y Ziccardi, A. (Eds.). (2008). Pobreza urbana, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI: una introducción. En *Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI* (pp. 23-48). México: Siglo XXI. doi: 10.1017/S0022216X13001387
- Corona Juárez, N. (2014). *La economía del crimen en México. (Essays on the economics of crime in Mexico)*. Tesis de doctorado. Heidelberg University. Recuperado de <http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/15180>
- Cruz, S. (2011). Homicidio masculino en Ciudad Juárez: costos de las masculinidades subordinadas. *Frontera Norte*, 23(46), 239-262. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722011000200009&lng=es&tlng=es
- Dávila, C. y Pardo, A. M. (2015). Análisis de la tendencia de mortalidad por homicidios en Colombia entre 2000 y 2010. *Gerencia y Políticas de Salud*, 14(28), 63-77. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54540401005>

- De Hoyos, R. y Fierros, C. G. (2017). Ninis en México: atrapados entre la guerra contra el narcotráfico y la crisis económica. En A. Ríos Piter y G. Esquivel. (Eds.), *Vida en movimiento: problemas y políticas públicas* (pp. 37-65). Ciudad de México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.
- De Keijzer, B. (2001), *Hasta donde el cuerpo aguante: género, cuerpo y salud masculina*. Mimeo. Ponencia presentada en el VI Congreso de Ciencias Sociales y Salud, Lima, Perú.
- De León Escribano, C. R. (2008). Violencia y género en América Latina. *Pensamiento Iberoamericano*, 1(2), 71-91. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2873321>
- Díaz, M. P. (2016). El dilema eterno: ¿pobreza o desigualdad en la explicación del homicidio? Hallazgos inesperados y propuesta para superar el dilema. *Acta Sociológica*, (70), 197-221. doi: 10.1016/j.acso.2017.01.009
- Dowdney, L. (2005). *Nem guerra nem paz: comparações internacionais de crianças e jovens em violência armada organizada*. Río de Janeiro, Brasil: COAVE/Viva Rio/ISER/IANSA.
- Enamorado, T., López-Calva, L. F., Rodríguez-Castelán, C. y Winkler, H. (2016). Income inequality and violent crime: Evidence from Mexico's drug war. *Journal of Development Economics*, (120), 128-143. doi: 10.1016/j.jdeveco.2015.12.004
- Escalante, F. (2009a). *El homicidio en México entre 1990 y 2007: aproximación estadística*. Ciudad de México: El Colegio de Mexico; Secretaría de Seguridad Pública Federal. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252010000100009&lng=es&nrm=iso
- Escalante, F. (2009b). Homicidios 1990-2007. *Nexos*, 31(381). Recuperado de <https://www.nexos.com.mx/?p=13270>
- Esquivel Hernández, G. (2015). *Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político*. Ciudad de México: Oxfam. Recuperado de <https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=4045>
- Galtung, J. (1990). Cultural violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305. doi: 10.1177/0022343390027003005

- González Pagés, J. C. y Fernández González, D. (2009). Masculinidad y violencia: aproximaciones desde el universo del deporte. *Educar em Revista*, 25(35), 123-136. doi: 10.1590/s0104-40602009000300010
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. y Black, W. C. (1998). *Multivariate data analysis*. 1998. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hirata, H. (2001). Salariado, precariedade, exclusão. Trabalho e relações sociais de sexo-gênero: uma perspectiva internacional. En M. L. Oliveira. (Ed.), *Demografia da exclusão social* (pp. 105-118). Campinas: Editora da Unicamp/Nepo.
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2001). *Censo General de Población y Vivienda 2000*. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2000/>
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2005). *II Conteo de Población y Vivienda 2005*. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2005/>
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2010). *Censo de Población y Vivienda 2010*. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/>
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2011a). *Diseño de la muestra censal 2010, México*. Recuperado de https://celade.cepal.org/censosinfo/manuales/MX_DisenioMuestraCensal_2010.pdf
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2011b). *Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010*. Recuperado de http://centro.paot.org.mx/documentos/inegi/marco_conceptual_cpv2010.pdf
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2011c). *Síntesis metodológica y conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010*. Recuperado de https://celade.cepal.org/censosinfo/manuales/MX_MetodologiaConceptual_2010.pdf
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2015). *Estadística de defunciones generales. Descripción de la base de datos nacional*. Recuperado de <http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/178/download/5323>

- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2017a). *Estadística de defunciones generales. Mortalidad, conjunto de datos: muertes por homicidio para los Estados de México y Ciudad de México para los periodos 2005-2015*. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/mortalidad/MortalidadGeneral.asp>
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2017b). *Estadística de defunciones generales. Mortalidad, microdatos: muertes por homicidio en Ciudad y Estado de México para los periodos 2000-2002 y 2010-2012*. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/default.html#Microdatos>
- Limberopulos Fernández, Y. (2016). *Homicidio juvenil y desarrollo social en zonas metropolitanas de México en 2010*. Ciudad de México: El Colegio de México.
- Lussier, M. H., Bourbeau, R. y Choinière, R. (2008). Does the recent evolution of Canadian mortality agree with the epidemiologic transition theory? *Demographic Research*, (18), 531-568. doi: 10.4054/DemRes.2008.18.19
- México Evalúa (2018). *5013 Homicidios CDMX*. Recuperado de <https://www.mexicoevalua.org/5013-homicidios-cdmx/>
- Morales, M. (2012). *La lucha por la seguridad en México. Operativos, homicidios y crimen organizado entre 2007 y 2010*. Tesis de maestría. Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México. Recuperado de https://colmex.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/52COLMEX_INST/1264995420002716
- Nadanovsky, P. y Cunha-Cruz, J. (2009). The relative contribution of income inequality and imprisonment to the variation in homicide rates among developed (OECD), South and Central American countries. *Social Science & Medicine*, 69(9), 1343-1350. doi: 10.1016/S9999-9994(09)20421-1
- Oliveira de Souza, D. P., Arecoll, K. N. y Da Silveira Filho, D. X. (2005). Álcool e alcoolismo entre adolescentes da rede estadual de ensino de Cuiabá, Mato Grosso. *Revista de Saúde Pública*, 39(4), 585-592. doi: 10.1590/S0034-89102005000400011
- OMS (Organización Mundial de la Salud) (2002). *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Washington, D. C.: OMS. Recuperado de <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/725/9275315884.pdf>

- Orozco Alvarado, A. S. (2012). *Factores sociodemográficos asociados a la tasa de homicidios en áreas urbanas, 2000-2010*. Tesis de maestría. El Colegio de la Frontera Norte. Recuperado de <https://colef.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1014/466/1/TESIS%20-%20Orozco%20Alvarado%20Andrea%20Susana.pdf>
- Ortiz Guevara, H. (2014). *Control económico del crimen variables para México*. Tesis de maestría. Universidad Iberoamericana. Recuperado de <http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/015740/015740.pdf>
- Pickett, K. E. y Wilkinson, R. G. (2015). Income inequality and health: A causal review. *Social Science & Medicine*, (128), 316-326. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.12.031
- Pridemore, W. A. (2008). A methodological addition to the cross-national empirical literature on social structure and homicide: A first test of the poverty-homicide thesis. *Criminology*, 46 (1), 133-154. doi: 10.1111/j.1745-9125.2008.00106.x
- Ramírez de Garay, L. D. (2014). Crimen y economía: una revisión crítica de las explicaciones económicas del crimen. *Argumentos*, 27 (74), 261-290. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952014000100010&lng=es&nrm=iso
- Ramos de Souza, E. (2005). Masculinidade e violência no Brasil: contribuições para a reflexão no campo da saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, 10, 59-70. doi: 10.1590/S1413-81232005000100012
- Roses, R. P. (2007). *Panópticos y laberintos: subjetivación, deseo, y corporalidad en una cárcel de hombres*. Ciudad de México: El Colegio de México.
- Santos, M. (2000). *Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal*. Río de Janeiro: Record. doi: 10.4067/S0250-716120010008100008
- Scott, J. (1997). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas. (Ed.), *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual* (pp. 37-65). Ciudad de México: Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM; Porrúa.
- Secretaría de Salud (2004). *Guía para el llenado del Certificado de Defunción y el Certificado de Muerte Fetal*. Recuperado de <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7761.pdf>

- Semefo (Servicio Médico Forense) (2011). Descripción de procedimientos. En *Manual de Procedimientos del Servicio Médico Forense* (pp. V.1-V.212). Ciudad de México: Semefo. Recuperado de www.poderjudicialcdmx.gob.mx/otros/descarga.php?arv=121/fr1/2016-To2/MP_13.pdf
- Spijker, J. (2004). *Socioeconomic determinants of regional mortality differences in Europe*. Tesis de doctorado. Departamento de Ciencias Espaciales, University of Groningen. Recuperado de <http://hdl.handle.net/11370/870ce8c2-6f4f-4f19-a608-e364b1248841>
- Szwarcwald, C. L., Bastos, F. I., Esteves, M. A. P., Andrade, C. L. T., Paez, M. S., Medici, E. V. y Derrico, M. (1999). Desigualdade de renda e situação de saúde: o caso do Rio de Janeiro. *Cadernos de Saúde Pública*, 15(1), 15–28. doi: 10.1590/S0102-311X1999000100003
- Wieviorka, M. (1997). The new paradigm of violence. *Tempo Social*, 9 (1), 5-41. doi: 10.1590/S0103-20701997000100002
- Wilkinson, R. G. (2005). *The impact of inequality: How to make sick societies healthier*. Abingdon: Routledge. doi: 10.1111/j.1467-9566.2007.1004_4.x
- Yanes Pérez, M. (2014). *Estudio de homicidio en México durante la primera década del siglo XXI, desde la perspectiva de género: una profundización en el caso de Tabasco*. Tesis de doctorado. Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México. Recuperado de https://colmex.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/52COLMEX_INST/1264995420002716
- Ybáñez Zepeda, E. y Yanes Pérez, M. (2013). Homicidio y marginación en los municipios urbanos de los estados más violentos de México, 2000-2005. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 28(2), 291-322. doi: 10.24201/edu.v28i2.1430
- Zaluar, A. (2007). Democratização inacabada: fracasso da segurança pública. *Estudos Avançados*, 21(61), 31-49. doi: 10.1590/S0103-40142007000300003

Acumulación de desventajas en América Latina: aportes y desafíos para el estudio de la desigualdad

Cumulative Disadvantages in Latin America: Contributions and Challenges for Studying Inequality

Gonzalo A. Saraví

Orcid: 0000-0002-2753-9802

gsaravi@ciesas.edu.mx

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México

Resumen

La acumulación de ventajas y desventajas representa un planteamiento teórico que no ha sido suficientemente explotado en nuestra región para el análisis de la desigualdad social. Sin embargo, resulta clave para explorar sus expresiones cotidianas, algunos de los mecanismos que la generan, y repensar un estado de bienestar que pretenda su disminución. Con este propósito, se rastrean los orígenes y fundamentos teóricos de este concepto, se identifican y analizan diversos procesos y modalidades de acumulación, y se sistematizan críticamente los principales estudios realizados en nuestra región. En las conclusiones se realiza una evaluación del camino recorrido, y se desarrollan algunas líneas potenciales de investigación futura a partir de esta perspectiva. El artículo intenta ser una contribución a la consolidación teórica y empírica de la producción latinoamericana sobre este tema.

Palabras clave

Desigualdad
Exclusión social
Curso de vida
Discriminación
América Latina
Acumulación de ventajas
Acumulación de desventajas

Abstract

The theory of cumulative advantages and disadvantages (CAD) has rarely been used in the study of social inequality in Latin America. However, it is a key concept for understanding their everyday expressions, some of their causal

mechanisms, and the needed policies to reduce it. With this goal in mind, the author explores the theoretical roots of this concept, identifies and analyzes different cumulative processes, and critically systematizes the Latin American literature on this subject. The conclusion makes an evaluation of this journey and develops some potential lines of future research from this perspective. The article is a contribution to the theoretical and empirical academic production on this topic in Latin América.

Keywords

Social inequality
Social exclusion
Life course
Discrimination
Latin America
Cumulative advantage
Cumulative disadvantages

Recibido: 30/03/2020
Aceptado: 15/06/2020

Introducción

La originalidad es una cualidad valorada en el ámbito científico en la medida que nos abre nuevas miradas, sugiere estrategias metodológicas novedosas, y sacude la comodidad de la repetición interpretativa. En ocasiones, sin embargo, esto puede conducir a un “consumismo” conceptual con consecuencias no deseadas. Entre ellas, por ejemplo, que se abandonen ciertos conceptos antes de haber explorado críticamente todas sus potencialidades analíticas, o que los más recientes se incorporen rápidamente al discurso académico para cumplir con “la tendencia”, pero sin una clara y rigurosa reflexión de sus implicaciones analíticas.

Este artículo está motivado por la impresión de que algo de esto le ha sucedido al concepto de *acumulación de des/ventajas* en el contexto latinoamericano. En los estudios sobre exclusión social y desigualdad desarrollados en nuestra región, las referencias a la acumulación de des/ventajas fueron y son numerosas, pero mayoritariamente con cierto grado de superficialidad y en muchos casos empleándolo en su sentido más coloquial. La discusión sobre estos temas dio por descontada su definición sin detenerse lo suficiente en su densidad teórica ni en sus variantes conceptuales. Abandonada en esta atmósfera un tanto borrosa, la acumulación de des/ventajas pasó a tener menos presencia analítica y ser, al mismo tiempo, una expresión muy usada pero de forma más bien descriptiva, casi como sinónimo de exclusión o desigualdad, o directamente equiparándola a una simple sumatoria de desventajas.

En este contexto, el análisis que se presenta a continuación pretende ser un “alto en el camino” para mirar hacia atrás y hacia adelante. Dicho en otros términos, el propósito es evaluar críticamente los estudios

latinoamericanos sobre desigualdad y exclusión en los que se hace cierto uso analítico de la teoría o del concepto de acumulación de des/ventajas. De esta revisión me interesa específicamente identificar y sistematizar las contribuciones al entendimiento de los procesos de exclusión o desigualdad logrados a partir de la aplicación de la acumulación de des/ventajas, pero también reconocer los vacíos, los temas pendientes, y las potencialidades de este marco conceptual para nuevas investigaciones. Cumplir con este objetivo exige otro preliminar: detenernos en el análisis de los fundamentos y matices teóricos de este concepto. En cierta medida, haber obviado esta reflexión ha sido una de las consecuencias no deseadas de la premura por la originalidad conceptual a la que me refería más arriba. A partir de este planteamiento, la estructura del artículo será entonces la siguiente.

Primero, distinguiré y analizaré dos grandes perspectivas desde las cuales se han tematizado los procesos de acumulación de des/ventajas. Los estudios sobre la exclusión social, por un lado, y sobre el curso de vida, por otro, son dos planteamientos en los cuales puede rastrearse el origen de un uso sistemático de este concepto. Sin embargo, aunque el término empleado es el mismo, existen entre ambos enfoques matices e implicaciones diferentes que no siempre son distinguidas en la literatura más reciente. En un apartado posterior, profundizaré en el contenido de este concepto con la intención de sistematizar las distintas formas que puede asumir y los diferentes mecanismos a través de los cuales puede operar.

Luego de estos dos apartados más conceptuales, en el siguiente reviso críticamente los enfoques, usos y aportes de la acumulación de desventajas específicamente en la literatura latinoamericana. La revisión bibliográfica se restringió a los estudios (publicados) que hacen un uso explícito de este concepto, y se seleccionaron para su análisis aquellos que no solo lo mencionan, sino que hacen un uso analítico de él. No obstante, seguramente han quedado fuera algunos estudios no por ser menos relevantes, sino porque una revisión exhaustiva está mucho más allá de los alcances individuales del autor; aun así, confío en que se ofrece un buen panorama de los lineamientos generales que ha seguido el análisis de este tema en América Latina. Finalmente, a modo de conclusión, planteo a partir del análisis previo una evaluación del concepto. El principal objetivo de estas reflexiones consiste en identificar y sistematizar nuevos temas, dimensiones y áreas de investigación relacionadas con los procesos de acumulación de desventajas.

Dos enfoques y un concepto

Existe un consenso bastante generalizado en la literatura especializada en atribuir el planteamiento o idea general que dio lugar al concepto de acumulación de des/ventajas y sus derivaciones posteriores, a un trabajo de Robert K. Merton sobre la comunidad académica. En dicho artículo, muy conciso por cierto, Merton (1968) identifica un proceso de asignación diferencial de recompensas a la labor científica que da por resultado una creciente desigualdad en las trayectorias profesionales.

El argumento es sencillo: científicos que ya gozan de cierto prestigio reciben mayor reconocimiento que otros menos conocidos por contribuciones similares o de igual relevancia. Más reconocimiento significa a su vez más recursos para investigar y/o mejores lugares de trabajo, que redundan a su vez en más productividad, y nuevamente en más prestigio, lo cual reinicia este círculo virtuoso; el mismo proceso opera en sentido inverso en quienes no tuvieron este mismo reconocimiento. La consecuencia es que una desigualdad inicial más o menos importante, se amplía cada vez más a medida que transcurren las trayectorias de los científicos de una misma cohorte profesional. En la breve descripción y sistematización de este proceso, quedaron inscritas varias de las claves más importantes que darían lugar al concepto teórico de la acumulación de des/ventajas, y algunas otras que, en mi opinión, no han sido tenidas tan presentes.

Entre las primeras está que *the Matthew effect* es un rasgo o atributo del sistema, no de los individuos, y que consiste básicamente en un mecanismo de asignación diferencial de retribuciones o recompensas que se acumulan en el tiempo. Como veremos, estos dos aspectos son definitorios. Entre las segundas, es decir entre las características aún menos retomadas por los estudios posteriores, hay dos aspectos particularmente relevantes. El más simple y evidente al leer el texto es que no solo los individuos pueden experimentar este proceso; Merton hace referencia explícita a la dimensión institucional de la acumulación de ventajas, y lo ejemplifica con las universidades, las cuales a mayor prestigio, reciben mayores recursos, mejores alumnos, y en última instancia mayor prestigio —y en sentido inverso, las de menor prestigio, menos recursos y peores alumnos—. El otro aspecto es que Merton encuentra detrás de este mecanismo un interjuego entre la estructura de estatus y la estructura de clases de la comunidad científica: el prestigio científico (estatus) da lugar a oportunidades y recursos de producción científica (clases).

En términos generales, todos estos aportes y el redescubrimiento mismo del llamado *Matthew effect* dieron lugar y nutrieron el concepto de acumulación de ventajas y desventajas desde el enfoque del curso de vida. Especialmente desde la sociodemografía se rescataron estas ideas iniciales de Merton para ir dando lugar a un concepto mucho más sólido y sistemático que permitiera dar cuenta de la desigualdad interindividual que se despliega con el paso del tiempo. La creciente disparidad desarrollada a lo largo de las trayectorias científicas sirvió como ejemplo disparador para, expandiendo sus alcances, darle un giro sociológico al análisis de la heterogeneidad y desigualdad intracohorte que se desarrolla a lo largo del curso de vida y que se manifiesta más claramente en la vejez. Tanto Dannefer (1987, 2003) como O'Rand (1996), precursores de este giro sociológico, coinciden en identificar un par de elementos esenciales de la acumulación de ventajas y desventajas como teoría de alcance medio: a) su carácter sistémico, en el sentido que resulta de un conjunto de factores estructurales e institucionales de asignación diferencial de recursos, y b) la vinculación o interacción de estos factores sociales con la dimensión temporal individual, es decir, con el proceso de envejecimiento (*aging*).

En el contexto del curso de vida, entonces, la acumulación de ventajas y desventajas hace referencia al proceso por el cual se incrementa la desigualdad entre individuos de una misma cohorte respecto a determinada característica, como puede ser el ingreso, la salud, las condiciones laborales o la riqueza. El efecto de los procesos sistémicos de asignación diferencial de retribuciones no permanece constante, sino que tienen un efecto acumulativo —en las personas— con el paso del tiempo. Desde este enfoque, al cual Dewilde (2003) ha denominado la economía política del curso de vida, el análisis prioriza la identificación e interpretación de esos mecanismos sociales de asignación diferencial, localizados principalmente en el Estado y el mercado de trabajo, pero también en el sistema educativo, en la familia y en otras instituciones, en interacción con las trayectorias vitales.

Esta mirada más sociológica, estructural e institucional de la acumulación de desventajas difiere de otros estudios mucho más demográficos y cuantitativos, que se sucedieron y que también exploran este proceso desde el curso de vida. En estos últimos el énfasis está puesto en identificar los efectos directos e indirectos de factores externos (una desigualdad inicial) o de la exposición a ciertas situaciones (favorables o desfavorables) sobre un aumento de las ventajas o desventajas en el curso de vida de los individuos (DiPrete y Eirich, 2006). Se trata de análisis

mucho más técnicos y precisos, donde se le da prioridad a la identificación de asociaciones (efectos) entre ventajas o desventajas a lo largo del curso de vida; a la determinación del tipo de esa asociación (directa o indirecta) y a la elaboración de los mejores modelos estadísticos para poder captarlos. Muchos de estos estudios se enfocan en temas de salud y en la relación entre condiciones en la niñez y en la adultez.

En este sentido, es posible establecer una primera distinción entre una perspectiva más institucional y otra más individual dentro del enfoque del curso de vida. La primera poniendo énfasis en los mecanismos sistémicos que en interacción con el curso de vida producen un proceso de acumulación de ventajas “y” desventajas; la segunda, más centrada en la asociación entre distintas ventajas “o” desventajas a lo largo del curso de vida de los individuos. Mientras estos últimos establecen cadenas (de uno o varios eslabones) de ventajas o desventajas mucho más específicas, al mismo tiempo tienen mucho menos capacidad para brindar interpretaciones de los mecanismos y/o procesos por los cuales operan estas asociaciones.

Este, sin embargo, no es el único derrotero seguido por el concepto de acumulación de des/ventajas. Si este primer camino fue conducido por la sociodemografía norteamericana, el segundo le corresponde a la sociología de la Europa continental, más específicamente a los estudios sobre exclusión social allí gestados. En esta literatura no encontraremos ninguna referencia al *Matthew effect* ni a Merton; se trata de un desarrollo completamente diferente que coincide con un sentido también diferente del concepto, más cercano a lo que coloquialmente puede entenderse por acumulación de desventajas.

La discusión y análisis de la exclusión social emerge a inicios de los años noventa del siglo pasado como respuesta a las reestructuraciones de las economías nacionales y los estados de bienestar, y sus consecuencias sobre las condiciones de vida de la población, especialmente de los sectores populares. En términos generales, la exclusión social es conceptualizada como la “nueva cuestión social” correspondiente al capitalismo contemporáneo emergente de la globalización y las reformas neoliberales iniciadas en los años ochenta. Se refiere a la creciente fragilización del lazo social, es decir de los vínculos entre individuo y sociedad, que se observa como el principal resultado de ese proceso (Saraví, 2007). Murard (2002) explica que el origen francés de esta problemática puede atribuirse al carácter intermedio o transicional, tanto geográfico como

social, del país: Francia sufre el debilitamiento de los lazos primarios (familiares, vecinales, etcétera) que aún son fuertes en el sur del continente, y también de los lazos secundarios (sindicales, organizaciones civiles, etcétera) que permanecen sólidos en los países del norte. ¿Cuál es la causa de este debilitamiento de los lazos sociales?

Previamente, esta fractura del lazo social era un fenómeno mucho menos común, atribuible a ciertas personas (casi casos aislados), y explicado a partir de fallas y/o patologías individuales. Pero la nueva ola de estudios privilegió las explicaciones netamente sociológicas, discutiendo los diferentes factores estructurales e institucionales detrás de este proceso. El análisis se focalizó en diferentes esferas: el mercado, el Estado o el trabajo, y a partir de allí se interpretó a la exclusión como un resultado de la pobreza, o de la ausencia y restricciones a la ciudadanía, o de la precariedad laboral y el desempleo, respectivamente. Estas tres perspectivas coincidían en que el debilitamiento del lazo social era producto de la acumulación sucesiva de desventajas; la discrepancia residía simplemente en cuál era su desencadenante inicial. Finalmente, los problemas en el mercado de trabajo, especialmente el desempleo y la precarización, ganaron consenso como el disparador inicial de este proceso. Más allá de esta discusión específica, la exclusión social se asumió como un fenómeno esencialmente multidimensional (Bhalla y Lapeyre, 1999; Estivill, 2003).

A través de este derrotero los estudios sobre exclusión social llegan al concepto de acumulación de desventajas. En efecto, el debilitamiento y quiebre del lazo social —i.e. la exclusión— es el resultado de un encadenamiento y concentración de desventajas de naturaleza relativamente distinta (Estivill, 2003), que se despliegan en diferentes esferas sociales e incluyen dimensiones sociales, económicas, políticas e incluso culturales. Gallie, Paugam y Jacobs (2003, p. 2), señalan explícitamente que “el concepto de exclusión social implica que hay una espiral descendente en el que la precariedad en el mercado de trabajo conduce a la pobreza y al aislamiento social, los cuales a su vez refuerzan el riesgo de un desempleo de largo plazo”; poco más adelante añaden que estas dimensiones que se refuerzan mutuamente “generan un círculo vicioso que conduce a un progresivo deterioro de la situación social de la gente” (2003, p. 3). Dicho en otros términos, finalmente la exclusión social termina siendo operacionalizada como un fenómeno de acumulación de desventajas.

Este planteamiento de la acumulación de des/ventajas difiere en aspectos sustantivos respecto al del enfoque del curso de vida. Me interesa resaltar tres de estos aspectos. En primer lugar, el análisis no está puesto en la desigualdad, sino en la exclusión, es decir, en los círculos viciosos. Si el enfoque del curso de vida, especialmente en su perspectiva más institucional, puso énfasis en la retribución diferencial que da lugar a la acumulación de ventajas (y desventajas), el enfoque de la exclusión social ignoró la ventajas y solo se concentró en la acumulación de desventajas. En segundo lugar, la dimensión temporal no tiene la misma centralidad que en el enfoque del curso de vida. Los encadenamientos de desventajas no ocurren a lo largo de trayectorias vitales, sino que ocurren por fuera del curso de vida; más bien, podría decirse que son los individuos los que circulan por ellos. No obstante, cabe señalar que estudios posteriores retoman aportes de la teoría del curso de vida para introducir en sus análisis una dimensión más biográfica (Chamberlyne, Rustin y Wengraf, 2002; Esping-Andersen, 2002). Estos estudios de la exclusión social desde un enfoque biográfico y los estudios de la desigualdad intracohorte desde el enfoque más institucional del curso de vida, siguiendo derroteros distintos, se acercan notablemente y terminan compartiendo un análisis de la acumulación de des/ventajas muy similar. Finalmente, en tercer lugar, por sobre la dimensión individual e institucional, los estudios de la exclusión social aportaron una mirada más estructural y política de los procesos de acumulación de desventajas. El énfasis y uso de este concepto se situó en el contexto de reformas estructurales (especialmente en el mercado de trabajo, los mercados y el Estado) que alteraron los regímenes de bienestar incrementando los niveles de vulnerabilidad de determinados sectores de la población.

¿Acumulación de qué, cómo y dónde?

Matices del concepto

En el análisis previo presenté al concepto de acumulación de des/ventajas como un planteamiento teórico de alcance medio que brinda una interpretación de los mecanismos por los cuales opera la desigualdad, por un lado, y la exclusión social, por otro. No es una cualidad menor. Sin embargo, esta interpretación puede significar cosas distintas o, mejor dicho, puede hacer referencia a diferentes procesos acumulativos. No se trata de procesos contradictorios o incompatibles entre sí, los cuales tampoco denotan una debilidad del concepto en sí mismo; al contrario, esto indica que la acumulación puede asumir diferentes contenidos, formas, y sujetos, lo que habla de su riqueza.

Esta amplitud puede atribuirse a que se trata de un concepto cuya enunciación inicial fue rebasada por los estudios empíricos que le sucedieron y lo aplicaron a diversas problemáticas. Las complicaciones y debilidades, en cambio, residen en la relativa ausencia de una reflexión crítica sobre estos diferentes usos y mecanismos posibles de acumulación. Si bien existen algunos análisis de este tipo (Bask y Bask, 2010; DiPrete y Eirich, 2006), especialmente en el campo de la reflexión demográfica y con especial preocupación por la formalización de diferentes variantes de acumulación, la ausencia es notoria cuando se intenta hacer dialogar a los enfoques del curso de vida y la exclusión social, y contrastar y complementar sus aportes. Es precisamente allí donde se sitúa esta reflexión, y desde donde me detendré a identificar, sistematizar y precisar diferentes procesos a los que se hace referencia con este mismo concepto.

a) *Incremento o encadenamiento*. Comenzando por algo muy simple y que ya se anunciaba en la formulación de Merton, la acumulación puede significar que una des/ventaja se acreciente o bien que una des/ventaja desencadene otra. Ventajas o desventajas de ingresos, salud, o prestigio, por ejemplo, pueden acumularse en el primer sentido¹; un embarazo temprano o padecer pobreza en la niñez no pueden incrementarse, sino desencadenar otras desventajas o, lo que es lo mismo, tener un *efecto cascada* (Schafer, Ferraro y Mustillo, 2011). Lo relevante de esta distinción es poder reconocer, y evitar confundir, des/ventajas de naturaleza distinta, en tanto que cada tipo puede implicar diferentes mecanismos y factores asociados, y exigir interpretaciones diferentes.

Esta distinción, indirectamente, hace notar también que los disparadores iniciales pueden ser cualitativamente diferentes: las des/ventajas pueden derivar de una desigualdad inicial en términos de magnitud o cantidad de algo (e.g. dinero), de una exposición diferencial a algo (e.g. desempleo), o de pertenecer a diferentes categorías de adscripción o clasificación social (e.g. género) (volveré sobre este aspecto en el punto c) de este apartado). Resulta evidente que los tres pueden desencadenar otras des/ventajas, mientras que solo los del primer tipo pueden incrementar las disparidades. Sin embargo, esta distinción nos invita a tener presente y explorar la posible confluencia de procesos de incremento y

1 También pueden actuar en el segundo sentido, atrayendo o desencadenando otras desventajas; simplemente no lo menciono porque lo que me interesa es marcar el contraste entre dos mecanismos diferentes. En algunos tipos de des/ventajas pueden actuar ambos, en otros solo uno.

encadenamiento, cuya identificación y distinción resulta relevante a la hora de interpretar y/o analizar los mecanismos sistémicos de la exclusión y la desigualdad.

b) Diacrónica o sincrónica. La acumulación de des/ventajas también puede diferir según la dimensión temporal en la que se despliegue. En su sentido más clásico y fiel al planteamiento original (y seguido por el enfoque del curso de vida), la acumulación es siempre un proceso diacrónico, es decir que se desarrolla en el transcurso del tiempo e incluso en interacción con las trayectorias vitales. Determinadas experiencias en la niñez, por ejemplo, pueden repercutir en diferentes aspectos de la vida en la adolescencia, la juventud o la adultez; ingresar en distintos segmentos del mercado de trabajo puede dar lugar a trayectorias laborales muy desiguales aun cuando las credenciales educativas fuesen las mismas. En ambos ejemplos, la variable tiempo es parte del proceso acumulativo; sin el tiempo tal acumulación no se produciría. En algunos casos, el tiempo puede representar un momento de latencia, es decir un período intermedio (sin manifestaciones) entre la des/ventaja inicial y la futura, como en el primer ejemplo que mencioné. Otras veces, en cambio, la acumulación se despliega en el tiempo de manera casi continua, como en el segundo ejemplo. DiPrete y Eirich (2006) se refieren a este último modelo como *path dependent* identificándolo además como el que mejor refleja el planteamiento original de Merton y su *Matthew effect*.

En este contexto, una acumulación sincrónica puede parecer inicialmente un contrasentido; sin embargo, algunos encadenamientos de des/ventajas ocurren de manera casi inmediata o en un muy corto plazo. Un divorcio, por ejemplo, puede disparar la mudanza residencial, y esto a su vez mayores gastos familiares, y por ende un desmejoramiento del nivel de vida. Es cierto que esta modalidad no se corresponde con el planteamiento inicial de Merton ni con las versiones más elaboradas de la sociodemografía; incluso desde esta disciplina no se le considera a este modelo un proceso de acumulación de des/ventajas en sentido estricto (Ferraro, Schafer y Wilkinson, 2016). Pero si cambiamos la perspectiva, podemos ver que se trata del modelo de acumulación que predomina en el enfoque de la exclusión social; reemplacemos el divorcio por el desempleo, por ejemplo, y el esquema que nos queda resulta prácticamente el mismo. La acumulación sincrónica supone la presencia de un conjunto de des/ventajas atadas entre sí, y se refiere específicamente al proceso por el cual a partir de una de ellas —que actúa como disparador

inicial— se desatan todas las demás de manera más o menos simultánea. Ferraro, Schafer y Wilkinson (2016) también identifican este uso del concepto en la literatura más reciente, y se refieren a él como desventajas que se *apilan* unas sobre otras (*pile up effect*).

c) *Desventaja acumulativa o acumulación de desventajas*. He señalado que en sus versiones originales, ya sea del curso de vida o de la exclusión social, la acumulación de desventajas puede ocurrir a través del incremento o del encadenamiento. Existe, sin embargo, otra modalidad cuyo origen puede rastrearse en estudios norteamericanos sobre estratificación social, y en particular en el trabajo de Blau y Duncan (1967), y que tiene más que ver con la discriminación que con el curso de vida o la exclusión. En este caso el desencadenante inicial no es ni una magnitud ni una exposición, sino una condición que puede generar múltiples desventajas diferentes (e independientes) en distintos momentos y circunstancias. Esta condición es la que tiene un carácter acumulativo. La adscripción a ciertas categorías (como la raza o el género) o la estigmatización pueden tener este carácter. Los estigmas territoriales, por ejemplo, pueden generar una acumulación de desventajas (dificultades para encontrar trabajo, y esto, bajos ingresos, y de ahí endeudamiento), pero es además una desventaja acumulativa porque puede generar dificultades para encontrar trabajo, rechazo en ciertos espacios públicos e instituciones, persecución de la policía, etcétera; es decir, desventajas que no están entrelazadas entre sí (no forman una cadena ni un círculo), pero que tienen un mismo disparador que actúa de manera directa en distintos momentos en el tiempo. Lo mismo puede suceder en sentido inverso, a partir del prestigio o valoración social atribuido a ciertos grupos, instituciones o espacios. Algunos autores señalan que, en términos estrictos, este último tampoco es un proceso de acumulación de desventajas porque no se trata de diferencias intragrupales, sino entre-grupos (negros y blancos o residentes de enclaves de pobreza y colonias exclusivas) y porque una nueva desventaja no depende de las desventajas acumuladas previamente (DiPrete y Eirich, 2006). Una desventaja acumulativa es una condición que convoca múltiples desventajas no encadenadas ni necesariamente relacionadas entre sí

Acumulación o concentración. Hasta aquí, todas las variantes identificadas corresponden a una misma familia. Más allá de los matices, el denominador común que las emparenta es que en todos los casos hay una asociación entre la desventaja inicial y el incremento posterior de esa desventaja o la emergencia de una nueva desventaja. Este es el

sentido que habitualmente se le da al concepto de acumulación de des/ventajas. Cuando hablamos de círculos viciosos, pero también de *pile up*, *cascade*, o *path dependence* pensamos en este tipo de asociación (acumulativa) entre des/ventajas. Sin embargo, también pueden darse procesos que no corresponden estrictamente con esta forma de asociación pero que igualmente hacen referencia a una superposición o concentración de des/ventajas. La diferencia es que en este caso las des/ventajas no necesariamente están encadenadas entre sí, lo cual no significa que no tengan algún otro tipo de asociación entre ellas o que en su origen se encuentre una *desventaja acumulativa*. De hecho, analizar si las ventajas o desventajas que confluyen se retroalimentan o potencian recíprocamente o en una dirección, resulta relevante para avanzar en una perspectiva sistémica sobre los canales que explican la desigualdad y/o la exclusión.

Una colonia periférica de una gran ciudad, por ejemplo, puede verse aquejada por altos índices de violencia, aislamiento con respecto a centros de trabajo y consumo, una infraestructura urbana muy precaria y tierras bajas inundables; o una niña puede haber padecido bajo peso al nacer, vivir en una aldea rural aislada y crecer en un hogar monoparental porque su padre migró o falleció tempranamente. Las tierras inundables no desencadenan la violencia local ni la migración del padre el bajo peso al nacer de su hija, pero estas desventajas tienden a coincidir en un mismo espacio o sujeto. Esta coincidencia no es un dato menor. Los procesos de *concentración de desventajas*, también denominados por otros autores como agrupamiento (*clustering*) o amontonamiento (*stack*) de desventajas (Nurius, Prince, y Rocha, 2015; Seabrook y Avison, 2012) han sido estudiados especialmente en el ámbito de la salud a nivel individual y de la exclusión a nivel territorial. En ambos casos, la concentración tiene un efecto aditivo o adicional, ya sea sobre la salud o sobre la exclusión. Una sola de las desventajas no puede considerarse como *proxy* de todas las demás ni la coincidencia de todas ellas es equivalente a la sumatoria de cada una considerada individualmente; la concentración misma tiene un efecto propio, ya sea sobre el bienestar de la persona o la comunidad. Se trata de un efecto acumulativo en un sentido diferente, pero igualmente relevante.

Individuos, instituciones o espacios. Esta última distinción fue quedando ya en evidencia a través de los ejemplos previos, y si bien no se trata de modalidades diferentes, debemos considerar que el dónde operen los procesos de acumulación de des/ventajas puede dar lugar a formas

y especificidades propias. Individuos, instituciones y espacios es una forma abreviada de hacer referencia a que distintas unidades pueden experimentar un proceso de acumulación de des/ventajas. En su sentido original, este proceso hacía referencia a la desigualdad interindividual, e incluso se asociaba con los procesos de diferenciación intragrupal, es decir, entre individuos de una misma cohorte o incluso categoría. Pero también se aplicó para interpretar procesos de desigualdad entre grupos, por ejemplo, de ciertas minorías, clases ocupacionales, género u otros.

No solo las personas, individual o grupalmente, pueden padecer la acumulación de des/ventajas. Si recordamos, el propio Merton identificaba una dimensión institucional de la acumulación de des/ventajas para referirse especialmente a lo que sucedía con las universidades. En efecto, el sistema educativo, y en particular las escuelas, representan un ejemplo paradigmático de la posibilidad de que una institución experimente un proceso de acumulación de des/ventajas en cualquiera de las modalidades que hemos visto; pensemos simplemente en la estigmatización o prestigio de una escuela y las desventajas y ventajas que pueden desprenderse de allí, respectivamente. Pero un proceso similar puede ocurrir también con hospitales, empresas de un mismo sector u otras instituciones. Los espacios afectados también pueden ser territorios específicos; de hecho, la dimensión territorial estuvo presente desde el inicio en el enfoque de la exclusión social que dedicó un lugar central al análisis de la segregación urbana y los “barrios sensibles”. Periferias urbanas o guetos centrales y colonias o áreas residenciales pueden experimentar la acumulación de desventajas y ventajas, respectivamente, que acentúen la desigualdad socioespacial de la ciudad o consoliden espacios de exclusión. La acumulación de des/ventajas en otras entidades no personales y a diferentes escalas es un campo abierto para la investigación.

Acumulación de des/ventajas en América Latina

En América Latina la incorporación y uso analítico de la acumulación de des/ventajas puede rastrearse desde los primeros años del nuevo milenio y mayoritariamente en el contexto de los estudios sobre la pobreza y la vulnerabilidad derivadas de las profundas reformas estructurales de los años previos. Este marco temático explica que la conceptualización predominante siguiera, en términos generales, los planteamientos del enfoque de la exclusión social, imprimiéndole un carácter que perduró

en los estudios posteriores. Entre otros aspectos que iremos viendo a lo largo de la siguiente revisión, esta impronta se tradujo en un interés preponderante por los procesos de acumulación de desventajas más que en la desigualdad, y por los análisis estructurales más que biográficos.

Siguiendo esta línea, los primeros estudios con referencias aún indirectas a la acumulación de desventajas se interesaron en los efectos y consecuencias de los cambios en los mercados de trabajo, especialmente de la precariedad laboral y el desempleo. Luego de una primera ola de estudios más estructurales sobre las transformaciones en los regímenes de bienestar (ver Kaztman y Wormald, 2002), los análisis se focalizaron específicamente sobre los encadenamientos de desventajas en las experiencias individuales y familiares. En México, por ejemplo, González de la Rocha (2001) analizó cómo la precariedad laboral y la falta de trabajo podían bloquear y desgastar otros recursos y estrategias de sobrevivencia esenciales para los sectores populares de la región. Al no contar con ingresos del trabajo, estos hogares se ven imposibilitados de financiar otras actividades de autogeneración de ingresos, y a su vez (o simultáneamente) de participar en redes de intercambio y reciprocidad por las que circulan bienes y servicios. Estas espirales de desventajas derivadas del desempleo no solo afectan a los sectores más pobres y que tradicionalmente han transitado por la informalidad. En un contexto de mayor formalidad como es Argentina, Bayón (2003) identificó otro tipo de desventajas desencadenadas a partir del desempleo, pero entre sectores de clase media que tradicionalmente mantuvieron una relación salarial formal y estable. En estos hogares el desempleo condujo a un paulatino agotamiento o evaporación de bienes y capitales previamente acumulados, la pérdida de prestaciones sociales (amarradas a la relación salarial), el inicio de una trayectoria laboral inestable y un proceso general de movilidad descendente, al que otros autores se refirieron como empobrecimiento de las clases medias (Minujin y Kessler, 1995). Más recientemente, en una exploración sobre lo que podríamos denominar las heridas del desempleo (*scarring effect*) en Argentina, Beccaría y colegas (2016) parecen confirmar estos efectos diferenciados por sector social. Basándose en el análisis de una encuesta panel de un año, los autores encuentran que el desempleo tiene un mayor impacto sobre las condiciones laborales posteriores (en nivel de ingresos y calidad del puesto) para quienes tenían previamente un empleo formal.

Los trabajos iniciales que hacen un uso explícito, pero aún muy incipiente, de la acumulación de desventajas se concentran especialmente en una dimensión *sincrónica* y en desventajas principalmente situadas en el

mismo espacio laboral. Este planteamiento tuvo un mayor desarrollo y primer intento de sistematización en un trabajo posterior de Saraví (2007), el cual reunió además un conjunto de estudios sobre la exclusión social en diferentes países de América Latina que pretendían explotar un poco más la capacidad analítica del concepto. Allí se plantea la necesidad de profundizar el análisis de la acumulación de desventajas, pero tomando en consideración su carácter multidimensional e incorporando la dimensión temporal, especialmente biográfica. En parte como resultado de la influencia de la perspectiva de la exclusión social, pero también como una derivación natural de la reconocida tradición latinoamericana en estudios urbanos sobre marginalidad y periferias, esta multidimensionalidad comenzó a explorarse en los territorios. En efecto, diversos estudios se interesaron por la concentración de desventajas en espacios locales específicos como barrios y colonias pobres de las periferias urbanas (Aguilar y López, 2016; Bayón, 2015; Bayón y Saraví, 2007; Kaztman y Retamoso, 2007).

Por un lado, se hizo notar la consolidación de espacios de exclusión caracterizados por la superposición de desventajas correspondientes a distintos niveles (micro, meso y macro) y esferas (sociales, económicas y simbólicas). Muchas de estas desventajas no solo coinciden en un mismo espacio, sino que están asociadas entre sí conformando circuitos por los cuales se retroalimentan o potencian recíprocamente. Estudios como los de Bayón (2015) o Castillo (2017) permitieron entender cómo desventajas de la población que reside en estas colonias o barrios (como la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral o los bajos niveles educativos) se entrelazan con otras desventajas del espacio público local (como la inseguridad, la desconfianza entre vecinos, el escaso capital social), de la estructura urbana (como el aislamiento social, las dificultades de movilidad, la segregación) y/o de las condiciones de la infraestructura urbana (como carencia de servicios básicos, precariedad y hacinamiento de las viviendas), entre otras. Bayón (2015) plantea que esta concentración y el entrapamiento potencial en círculos de desventajas puede estar dando lugar a la conformación de espacios de inclusión en la exclusión. En una línea similar, pero menos explorada, Pantano (2015) focaliza aún más el análisis, al centrar su interés en un grupo específico de residentes de estos espacios de exclusión: los hogares con miembros discapacitados. A partir de un análisis de datos sociodemográficos descriptivo de barrios carenciados (villas de emergencia) de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, la autora encuentra que los hogares con discapacidad presentan consistentemente una mayor *concentración de desventajas*

que el resto de la población, en rubros tan dispares como abandono escolar, precariedad de las viviendas, carencia de servicios básicos, pobreza e indigencia, e incluso problemas de adicciones y violencia intrafamiliar. Pantano sugiere algunos posibles encadenamientos entre estas desventajas (como el estrés ocasionado por la discapacidad y los problemas de adicción y violencia en el hogar, o las necesidades y gastos de cuidados que ocasiona la discapacidad, las dificultades laborales de sus miembros y los mayores niveles de pobreza), a los cuales denomina *efectos rebote* (acumulación de desventajas) y que requerirían el complemento de estudios cualitativo que pudieran confirmarlas.

Por otro lado, también se avanzó en el análisis de la relación de esta concentración espacial de desventajas con las experiencias individuales o biográficas de sus residentes a través de métodos cuantitativos, especialmente de regresión lineal. Solís y Puga (2011), por ejemplo, exploran este tema en una ciudad del norte de México, encontrando que la composición socioeconómica del área de residencia se asocia con diferentes desventajas a lo largo del curso de vida como son el logro educativo (en años de escolaridad y abandono), el ingreso temprano al mercado de trabajo y el desempeño en ocupaciones manuales de baja calidad. El efecto directo de las condiciones desfavorables del lugar de residencia es, según los autores, particularmente significativo en la niñez y juventud, pero tiende a atenuarse paulatinamente y desaparecer a edades adultas. Estudios similares en otros países también han establecido un efecto directo independiente, aunque limitado, de las condiciones socio-económicas del barrio sobre la deserción (Brenes Camacho, 2019) y el desempeño escolar (ver Queiroz Ribeiro y Kaztman, 2008). Pero el estudio de Solís y Puga es interesante por su carácter longitudinal y por la identificación de cierto encadenamiento entre desventajas. Se introduce una *acumulación diacrónica* entre desventajas donde el nivel socioeconómico del lugar de residencia es el eslabón inicial: el bajo nivel socioeconómico del barrio se asocia con un pobre logro educativo, y este con una precaria inserción laboral, lo cual a su vez limita las posibilidades de movilidad laboral ascendente. Cuál es la naturaleza de estas asociaciones, y cuáles los procesos por los cuales se entrelazan desventajas de nivel espacial e individual, son preguntas que están más allá de los alcances de esta metodología. Es precisamente aquí donde nuevamente la complementariedad de los estudios cualitativos sobre este mismo tema (como los mencionados en el párrafo anterior) se torna relevante tanto para identificar las desventajas que confluyen y se engloban bajo

“condiciones socioeconómicas desfavorables”, como para desentrañar los procesos (o conexiones de sentido) que vinculan esas desventajas espaciales entre sí y con otras en las trayectorias de sus residentes.

A cierta distancia de la perspectiva sobre la exclusión social y más cerca de la preocupación por la discriminación, otra línea de estudios también ha utilizado el concepto de acumulación de desventajas. Estos trabajos introducen lo que previamente he denominado *desventajas acumulativas*, es decir, una desventaja que tiene la potencialidad de desencadenar muchas otras independientes entre sí. En este caso la desventaja inicial no deriva de una primera desigualdad, sino de una condición socialmente construida a partir de la pertenencia a una determinada categoría y de las relaciones de poder que la atraviesan. Me refiero principalmente (pero no únicamente) a estudios sobre la condición racial y sus efectos en términos de desigualdad y estratificación social.

En años recientes, diversos estudios mostraron el efecto de la raza (Costa Ribeiro 2006), el origen étnico (Dalle, 2014), o el color de la piel (Viáfara, 2017) sobre las posibilidades de movilidad social de estas minorías; en todos estos casos, los hallazgos sugieren que los negros en Brasil, los mestizos con ascendencia indígena en Argentina y las personas con piel de color más oscuro en Colombia tienen menores oportunidades de experimentar una movilidad ascendente y, en particular, de acceder a las clases de mayor prestigio. Sin embargo, más allá del aporte de estos estudios más ligados al análisis de la estratificación y la movilidad social, me interesa detenerme en dos trabajos que explícitamente se refieren a la pertenencia racial en relación con la acumulación de desventajas.

Para el caso de Colombia, Viáfara y Urrea (2006) muestran que la condición afrodescendiente tiene un efecto sobre los logros educativos y socio-ocupacionales. La posición desfavorable en la estructura social que ocupan negros y mulatos, y en especial las mujeres, no solo se explica por sus orígenes sociales y niveles educativos inferiores, dicen estos autores, sino también por un proceso de obstáculos o desventajas acumulativas que pueden ser interpretadas como discriminación (Viáfara y Urrea, 2006). También en Brasil, los afrodescendientes padecen una serie de desventajas que se acumulan a lo largo de sus vidas como resultado de la pertenencia racial y una estructura de discriminación institucionalizada. Lovell y Wood (1998) mostraron que ser afrobrasileño incrementa las probabilidades de mortalidad infantil, de abandonar temprano la escuela, de obtener ocupaciones de bajo estatus, y de recibir menores ingresos

ya en la vida adulta. Las profundas disparidades entre negros y blancos son “el producto acumulativo de insultos (sic) asociados al color de la piel, que no pueden reducirse solo a la condición de clase”, concluyen Lovell y Wood (1998, p. 91).

Estos análisis proveen una explicación de la asociación entre la condición racial o étnica y las menores oportunidades de movilidad social que confirman los estudios sobre estratificación social. Esa explicación consiste básicamente en la identificación de dos tipos diferentes de acumulación de desventajas. Por un lado, un proceso de *acumulación diacrónica* de desventajas desencadenado por la pertenencia a una categoría racial: ser negro o mulato se asocia con bajos niveles educativos, que a su vez repercuten más adelante en una inserción precaria al mercado de trabajo, y esto a su vez en un status ocupacional bajo. Viáfara y Urrea (2006) incluso sugieren un eslabón más en esta cadena de desventajas: el bajo estatus ocupacional de los negros adultos puede generar en el más largo plazo que los adolescentes negros pierdan sus expectativas en la educación y por ende abandonen la escuela prematuramente con bajos niveles educativos, dando inicio nuevamente a un círculo intergeneracional de desventajas.

Por otro lado, ambos estudios se refieren también al carácter acumulativo de la condición racial. Lo que los autores mencionados muestran, tanto para Brasil como para Colombia, es que la condición afrodescendiente, independientemente de la condición socioeconómica de origen o del nivel educativo que se alcance, genera diferentes desventajas puntuales a lo largo de la vida producto de la recurrente discriminación y la exposición permanente a un orden jerárquico racial institucionalizado. Es decir, el color de piel no solo genera una cadena de desventajas por el bajo nivel educativo y los demás aspectos que de allí se desprenden, sino porque se trata de una *desventaja acumulativa* que en diferentes momentos del curso de vida genera nuevas y diferentes desventajas.

Este doble efecto acumulativo derivado de la condición racial o de género es similar a la forma en que operan los estigmas (Link y Phelan, 2001), y en particular los estigmas territoriales. La concentración de desventajas en enclaves de pobreza se asocia con estigmas territoriales que a su vez pueden generar otras desventajas para la propia comunidad y/o para sus residentes en diferentes momentos y situaciones de sus vidas (Bayón, 2015). Se trata de uno de los aportes más relevantes y recientes de los estudios cualitativos sobre concentración espacial de desventajas

a los que me referí algunos párrafos más arriba. La criminalización de estos espacios, pero también las valoraciones y juicios morales que se construyen socialmente sobre sus residentes, afectan, según lo muestran diferentes estudios, sus oportunidades laborales, sus trayectorias educativas, el acceso a diferentes servicios, así como el uso de la ciudad y de sus espacios públicos; en ocasiones, estas estigmatizaciones permean incluso al interior de los propios barrios y colonias contribuyendo al debilitamiento de la vida comunitaria y al repliegue de sus residentes (Bayón 2015; Castillo, 2017; Freidín, Ballesteros, Krause y Wilner, 2020; Kessler, 2012). Tal como señalan Freidín y colegas (2020) en un estudio muy reciente sobre los estigmas territoriales y la salud de los habitantes de una villa de emergencia del Gran Buenos Aires en Argentina, “el estigma territorial potencia la acumulación de desventajas”.

El análisis de los estigmas —no solo territoriales— como disparador de *acumulaciones sincrónicas y/o diacrónicas* de desventajas, y como una *desventaja acumulativa* representa un área de investigación aún poco explorada. Kessler (2012, p. 173) ha señalado que “no alcanza con centrarse en una sola consecuencia del estigma sino que de lo que se trata es de captar el conjunto de desventajas que provoca”, lo cual deja abierto un amplio campo de investigación en relación con la desigualdad que afecta a grupos, instituciones y espacios estigmatizados y socialmente desvalorizados. Pero además, este tema introduce, en la discusión sobre la acumulación de desventajas, la dimensión simbólica, o más específicamente, la importancia de considerar las desventajas simbólicas (y no solo las materiales), lo cual, aunque luego se haya diluido en los análisis posteriores, estaba ya presente en la formulación original de Merton a través del prestigio.

La impronta del enfoque de la exclusión social, especialmente en lo que se refiere a la preocupación casi excluyente por la acumulación de desventajas, perdura en un conjunto más reducido de estudios que merecen destacarse porque introducen de manera más explícita y sistemática aportes del curso de vida para desarrollar una perspectiva biográfica de la exclusión. En todos ellos el análisis está focalizado en la *acumulación diacrónica* de desventajas en relación con diferentes transiciones y trayectorias del curso de vida, principalmente durante la juventud, pero también, aunque en menor medida, en la niñez y la vejez (sobre el enfoque del curso de vida en nuestra región ver Blanco, 2011).

Estudios cualitativos sobre los procesos de transición a la adultez en jóvenes de sectores populares de contextos urbanos identificaron diferentes riesgos y desventajas que se encadenan entre sí. Sabemos que las transiciones tempranas, por ejemplo, suelen desencadenar otras desventajas en las trayectorias educativas (abandono temprano), laborales (precariedad y bajos ingresos) y familiares (inestabilidad, alta natalidad), y que a su vez ellas se entrecruzan y potencian recíprocamente. Análisis cualitativos en base a narrativas e historias de vida demostraron también que estos patrones desfavorables de transición a la vida adulta no son azarosos, sino que están asociados con otras desventajas previas a nivel de sus hogares (pobreza, conflictos y violencia, abandono emocional, deficiencias habitacionales) y de sus comunidades (segregación, carencias de servicios, inseguridad, hostigamiento policial) (Mora Salas y Oliveira, 2014; Saraví, 2004, 2009). A partir de un estudio con jóvenes de sectores vulnerables, Saraví (2009) sugiere que un elemento recurrente en aquellos jóvenes que experimentan una sucesiva acumulación de desventajas a lo largo de sus vidas es la fragilidad de sus vínculos y contenciones sociales desde edad muy temprana y en diferentes niveles (familiar, de amistad, comunitarios, institucionales y con el Estado). Mora y Oliveira (2014) y Bayón (2017) parecen arribar a conclusiones semejantes al identificar la centralidad de las redes sociales, los contextos familiares y apoyos institucionales, e incluso de la presencia de “otros significativos” en momentos críticos, para determinar rutas de acumulación de desventajas en el tránsito a la vida adulta.

Menos frecuentes han sido las referencias o análisis explícitos de procesos de acumulación de desventajas en otras etapas del curso de vida. En particular, es notable la ausencia de estudios longitudinales que exploren los efectos y procesos por los cuales desventajas en la niñez pueden repercutir o encadenarse con desventajas en otras etapas del curso de vida, como la juventud, la adultez o la vejez. Monteverde y colegas (2009, 2020) han asumido esta perspectiva para demostrar la asociación entre condiciones desfavorables de salud y socioeconómicas en la niñez y las probabilidades de experimentar diversos problemas de salud incapacitantes en la vejez. Si bien estos autores establecen un claro patrón de acumulación de desventajas, este es fundamentalmente de tipo biológico entre diferentes patologías o exposiciones a enfermedades en la niñez (particularmente infecciosas) y sucesivos problemas de salud a lo largo de la vida. Los aportes son sumamente interesantes, y al mismo tiempo abren nuevas áreas de investigación aún poco exploradas, como la necesidad de profundizar en las desventajas que se engloban

genéricamente como un estatus socioeconómico bajo en la niñez y su relación con las desventajas en la salud o identificar el entrelazamiento entre desventajas sociales y biológicas, o explorar factores y procesos socioculturales y económicos que intervienen en estos encadenamientos. Es precisamente en este contexto que Díaz y colegas (2017) han explorado en Perú la relación entre las condiciones de pobreza en la niñez y el desarrollo cognitivo y físico de los niños. Estos autores establecen una clara asociación entre esas condiciones socioeconómicas desfavorables y el retraso o dificultad en la adquisición de capacidades funcionales claves para la vida desde edades muy tempranas. Advierten, sin embargo, que aún están muy poco claros los mecanismos y procesos por los cuales la pobreza se vincula con estas desventajas en el desarrollo de niños y adolescentes, lo que nuevamente resalta la necesidad de profundizar en esta línea de análisis.

Finalmente, una segunda o nueva ola de estudios sobre movilidad social intergeneracional en América Latina también mantiene cierta afinidad con la perspectiva de la acumulación de desventajas aunque sin referencias explícitas a ella. Los estudios sobre movilidad relativa, también conocida como fluidez social, basándose en modelos lineales */log* han explorado las posibilidades de personas de diferentes orígenes sociales de alcanzar en su edad adulta determinadas posiciones (orígenes y destinos definidos en términos de clases ocupacionales; Poy y Salvia, 2019; Solís y Boado, 2016; Torche, 2014). Otros estudios, basados en métodos econométricos de elasticidad, evalúan en cambio la movilidad en términos de ingresos (Dunn, 2007; Núñez y Miranda, 2011). Todos los resultados obtenidos conducen hacia un mismo panorama para la región: una elevada movilidad social en términos ocupacionales (similar a la de países altamente industrializados), lo cual resulta paradójico en una de las regiones más desiguales del mundo. La elevada movilidad o fluidez social en un contexto de persistente y alta desigualdad ha sido interpretada como un patrón jerarquizado de movilidad (e.g. cambios entre clases ocupacionales medias y bajas, y cerramiento de las altas; Torche, 2014) o bien como resultado de una profunda desigualdad de posiciones (siguiendo la definición de Dubet) que permanece inmune a los niveles de movilidad relativa (Poy y Salvia, 2019).

La pertinencia de estos estudios en el contexto de nuestra discusión es doble. Por un lado, introducen el tema de la desigualdad, que había permanecido relativamente ausente. En segundo lugar, la influencia de la condición de origen sobre el destino se conecta con la preocupación por las condiciones de ventaja o desventaja inicial y el encadenamiento

posterior de ventajas y desventajas. Pero la afinidad termina en ese punto. En las conclusiones a una obra colectiva que indaga sobre la movilidad en varios países de América Latina, Solís (2016, p. 495) señala que estos estudios deben ser el punto de arranque para nuevas investigaciones que determinen “de manera más clara cuáles son los procesos y mecanismos de reproducción intergeneracional de la desigualdad social”. Las tablas de movilidad “poco nos dicen sobre cómo se da esta reproducción en ámbitos más específicos como la familia, la escuela, los entornos barriales y residenciales, y los lugares de trabajo”, concluye Solís (2016, p. 496), y añade: “tampoco nos hablan de la forma en que las desigualdades se acumulan a lo largo del curso de vida”. Es decir, los estudios sobre movilidad social se concentran en los desplazamientos entre un punto de origen y otro de destino, pero no en cómo se producen esos desplazamientos ni las desigualdades entre ellos. Es en este punto, precisamente, en el que el análisis de los procesos de acumulación de desventajas se torna particularmente relevante.

A modo de cierre: una evaluación y una agenda

En el transcurso de las últimas dos décadas diversos estudios en América Latina retomaron el concepto de acumulación de des/ventajas y exploraron estos procesos en diferentes contextos y situaciones específicas. Como resultado, hoy tenemos un buen corpus de conocimiento, especialmente sobre procesos de acumulación de desventajas entre los sectores más desfavorecidos de la población. El enfoque de la exclusión social impuso desde el inicio una perspectiva particular que priorizó el análisis de procesos de acumulación sincrónica y de concentración de desventajas; paulatinamente se ha ido incorporando el interés por procesos diacrónicos a lo largo del curso de vida y por el efecto acumulativo de ciertas categorías de adscripción o la estigmatización de ciertos grupos y espacios. Pero al mismo tiempo, estos estudios dejan imaginar nuevos temas, dimensiones, y áreas de investigación prometedoras y necesarios para una mejor comprensión de la desigualdad y la exclusión en nuestra región. Como reflexión final de este análisis me referiré a algunos de ellos.

Dos tipos de temas parecen estar subrepresentados en la investigación sobre la acumulación de desventajas. Por un lado, tanto en lo que respecta a la acumulación sincrónica o diacrónica como a la concentración, las desventajas sobre las que se ha focalizado el análisis

tienden a referirse mayoritariamente a cuestiones laborales, educativas, o ligadas a la pobreza, ya sea de ingresos o de condiciones de infraestructura, servicios, y segregación urbana. En lo que respecta a los procesos acumulativos a lo largo del curso de vida, sería relevante prestar atención a otras desventajas menos exploradas, asociadas, por ejemplo, con la salud, la violencia, el crimen, el endeudamiento o la migración forzada, por mencionar algunos. Algo similar ocurre en el caso de la concentración territorial, en el que se ha prestado aún poca atención a otras desventajas en el plano político, social y cultural, como aquellas ligadas a la ciudadanía, la participación y la vida comunitaria, la salud, el delito y la inseguridad o el consumo. En este caso, es notoria además la ausencia de estudios sobre la acumulación diacrónica de desventajas, es decir, el seguimiento en el tiempo de la acumulación de desventajas en ciertas comunidades. Y también lo es la carencia de investigaciones que exploren la concentración de desventajas, pero no en territorios sino en grupos vulnerables específicos. Por otro lado, y en relación con esto último, las personas jóvenes y la transición a la adultez han recibido particular interés, descuidando el análisis de todos estos procesos acumulativos tomando como referencia otras etapas de la vida como la niñez y la vejez. En especial, necesitamos profundizar en el análisis de las desventajas de diferente índole en las etapas más tempranas de la vida y su incidencia y encadenamiento con otras a lo largo del curso de vida.

En cuanto a nuevas dimensiones de análisis me parece especialmente relevante la incorporación de una dimensión simbólica que permita reconocer ventajas y desventajas que emergen en este plano, así como su encadenamiento con otras en el ámbito social y económico e incluso biológico. Es decir, reactualizar el análisis de la acumulación de desventajas a partir de lo que recientemente se identifica como un “giro cultural” en el análisis social, en este caso aplicado a la comprensión de la desigualdad y la exclusión social. Muchos de los textos más recientes sobre discriminación y estigmas apuntan en esta dirección, al igual que otros sobre los procesos de clasificación y valuación social.

Finalmente, el análisis y la revisión previa sugieren dos áreas de investigación poco o nada exploradas. La primera tiene que ver, paradójicamente, con la desigualdad, y más específicamente con los procesos de acumulación de ventajas. La influencia del enfoque de la exclusión llevó a priorizar casi exclusivamente las desventajas, descuidando lo que podríamos denominar los circuitos del privilegio. Sabemos muy poco sobre los mecanismos de concentración y acumulación de ventajas entre

sectores privilegiados de la población. Pero además, sería pertinente explorar los procesos sistémicos de distribución diferencial o desigual de recompensas, y no solo la acumulación de ventajas y desventajas como procesos independientes y separados. Esto último puede informarnos sobre la exclusión o la exclusividad, pero no necesariamente sobre los mecanismos de producción de desigualdades.

La otra área de investigación surge de la complementariedad de estrategias metodológicas. De manera recurrente a lo largo de toda la revisión previa hemos visto numerosas contribuciones de análisis cuantitativos que establecen asociaciones precisas entre diferentes des/ventajas, ya sea entre diferentes etapas de la vida, entre las condiciones del hogar de origen y el destino en la adultez, o entre las comunidades de residencia y las trayectorias biográficas, por mencionar algunas. Pero estos estudios resultan incapaces de explicar los mecanismos, procesos y dinámicas de estas asociaciones. Los estudios cualitativos, en cambio, han logrado aportar numerosas interpretaciones y conexiones de sentido entre todas estas desventajas, dando cuenta precisamente de los procesos socioculturales y económicos por los que unas conducen a otras. Sin embargo, han tenido mayores dificultades para sistematizar esos circuitos. Resulta evidente que la complementariedad metodológica, que con frecuencia significa el diálogo y la cooperación interdisciplinaria (en las que habría que incluir a las ciencias de la salud), constituiría un campo de investigación sumamente promisorio sobre los procesos de acumulación de ventajas y desventajas. Saldar esta deuda, sin duda representaría un aporte trascendental para entender y poder disminuir la persistente desigualdad de nuestros países.

Referencias

- Aguilar, A. G. y López, F. (2016). Espacios de pobreza en la periferia urbana y suburbios interiores de la Ciudad de México. Las desventajas acumuladas. *EURE*, 42(125), 5-29. doi:10.4067/s0250-71612016000100001
- Bask, M. y Bask, M. (2010). *Inequality generating processes and measurement of the Matthews effect. Working Paper*, (19). Department of Economics, Uppsala University.
- Bayón, M. C. (2003). La erosión de las certezas previas: significados, percepciones e impactos del desempleo en la experiencia argentina. *Perfiles Latinoamericanos*, (22), 51 -77.

- Bayón, M. C. (2015). *La integración excluyente*. México: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM; Bonilla Artigas. doi: 10.1080/10875549.2016.1141385
- Bayón, M. C. (2017). Accumulating disadvantages, multiplying inequalities. Biographies of poverty in Mexico City. *Journal of Poverty*, 21(2), 97-119.
- Bayón, M. C. y Saraví, G. (2007). De la acumulación de desventajas a la fractura social. Nueva pobreza estructural en Buenos Aires. En G. Saraví. (Ed.), *De la pobreza a la exclusión: continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina* (pp. 55-95). Buenos Aires: Prometeo.
- Beccaría, L., Maurizio, R., Trombetta, M. y Vázquez, M. (2016). Una evaluación del efecto *scarring* en Argentina. *Revista Desarrollo y Sociedad*, (77), 263-304. doi: 10.13043/dys.77.7
- Bhalla, A. S. y Lapeyre, F. (2004). *Poverty and exclusion in a global world*. Nueva York: Palgrave MacMillan.
- Blanco, M. (2011). El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo. *Revista Latinoamericana de Población*, 5(8), 5-31. doi: 10.31406/relap2011.v5.i1.n8.1
- Blau, P. y Duncan, O. (1967). *The American occupational structure*. Nueva York: Wiley. doi: 10.24201/edu.v2i01.68
- Brenes Camacho, G. (2019). El peso de los factores contextuales en la asistencia a la secundaria entre los adolescentes constarricenses según la información censal. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 34(2), 395-425. doi: 10.24201/edu.v34i2.1636
- Castillo, A. del (2017). Experiencias laborales de jóvenes en contextos de pobreza crítica en Gran San Miguel de Tucumán, Argentina, en los inicios del siglo XXI. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 32(2), 355-378. doi: 10.24201/edu.v32i2.1619
- Chamberlayne, P., Rustin, M. y Wengraf, T. (Eds.). (2002). *Biography and social exclusion in Europe: Experiences and life journeys*. Bristol: The Policy Press.
- Costa Ribeiro, C. (2006). Classe, raça e mobilidade social no Brasil. *Dados, Revista Ciências Sociais*, 49(4), 833-873.

- Dalle, P. (2014). Aproximación al origen étnico y movilidad social intergeneracional en Argentina. *Boletín Científico Sapiens Research*, 4(1), 32-39.
- Dannefer, D. (1987). Aging as intracohort differentiation: Accentuation, the Matthew effect, and the life course. *Sociological Forum*, 2(2), 211-236. doi: 10.1007/bf01124164
- Dannefer, D. (2003). Cumulative advantage/disadvantage and the life course: Cross-fertilizing age and social science theory. *Journal of Gerontology*, 58(6), 327-337. doi: 10.1093/geronb/58.6.S327
- Dewilde, C. (2003). A life course perspective on social exclusion and poverty. *British Journal of Sociology*, 54(1), 109-128. doi: 10.1080/0007131032000045923
- Díaz, A. A., Bacallao Gallestey, J., Vargas-Machuca, R. y Aguilar Velarde, R. (2017). Desarrollo infantil en zonas pobres de Perú. *Revista Panamericana de Salud Pública*, (41), e71.
- DiPrete, T. y Eirich, G. (2006). Cumulative advantage as a mechanism for inequality. A review of theoretical and empirical developments. *Annual Review of Sociology*, (32), 271-297. doi: 10.1146/annurev.soc.32.061604.123127
- Dunn, C. (2007). The intergenerational transmission of lifetime earnings: Evidence from Brazil. *The BE Journal of Economic Analysis & Policy*, 7(2), 1-42.
- Esping-Andersen, G. (2002). *Why we need a new welfare state*. Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1093/0199256438.001.0001
- Estivill, J. (2003). *Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias*. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
- Ferraro, K., Schafer, M. y Wilkinson, L. (2016). Childhood disadvantage and health problems in middle and later life: Early imprints on physical health? *American Sociological Review*, 81(1), 107-133. doi: 10.1177/0003122415619617
- Freidín, B., Ballesteros, M., Krause, M. y Wilner, A. (2020). Estigmatización territorial y salud: experiencias de desigualdad social en la periferia de Buenos Aires. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 35(1), 153-183. doi: 10.24201/edu.v35i1.1857

- Gallie, D., Paugam, S. y Jacobs, S. (2003). Unemployment, poverty and social isolation: Is there a vicious circle of social exclusion? *European Societies*, 5(1), 1-32. doi: 10.1080/1461669032000057668
- González de la Rocha, M. (2001). From the resources of poverty to the poverty of resources? The erosion of a survival model. *Latin American Perspectives*, 28 (4), 72-100. doi: 10.1177/0094582X0102800405
- Kaztman, R. y Retamoso, A. (2007). Transformaciones recientes en las características de los barrios pobres de Montevideo. En G. Saraví. (Ed.), *De la pobreza a la exclusión: continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina* (pp. 167-197). Buenos Aires: Prometeo.
- Kaztman, R. y Wormald, G. (2002) (eds.). *Trabajo y ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina*. Montevideo: CEBRA.
- Kessler, G. (2012). Las consecuencias de la estigmatización territorial. Reflexiones a partir de un caso particular. *Espacios en Blanco. Revista de Educación*, (22), 165-198.
- Link, B. y Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual Review of Sociology*, (27), 363-385. doi: 10.1146/annurev.soc.27.1.363
- Lovell, P. y Wood, Ch. (1998). Skin color, race identity, and life chances in Brazil. *Latin American Perspectives*, 25(3), 90-109. doi: 10.1177/0094582X9802500305
- Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science. *Science*, (158), 56-63. doi: 10.1126/science.159.3810.56
- Minujin, A. y Kessler, G. (1995). *La nueva pobreza en la Argentina*. Buenos Aires: Planeta.
- Monteverde, M., Noronha, K. y Palloni, A. (2009). Effect of early conditions on disability among the early in Latin America and the Caribbean. *Population Studies*, 63(1), 21-35. doi: 10.1080/00324720802621583
- Monteverde, M., Palloni, A., Guillen, M. y Tomas, S. (2020). Early poverty and future life expectancy with disability among the elderly in Argentina. *Revista Latinoamericana de Población*, 14(26), 5-22. doi: 10.31406/relap2020.v14.i1.n26.1

- Mora Salas, M. y Oliveira, O. de (2014). Los caminos de la vida: acumulación, reproducción o superación de las desventajas sociales en México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 59(220), 81-116.
- Murard, N. (2002). Guilty victims: Social exclusion in contemporary France. En P. Chamberlayne, M. Rustin y T. Wengraf. (Eds.), *Biography and social exclusion in Europe. Experiences and life journeys* (pp. 41-60). Bristol: The Policy Press. doi: 10.2307/j.ctt1t8982m.8
- Núñez, J. y Miranda, L. (2011). Intergenerational income and educational mobility in urban Chile. *Estudios de Economía*, 38(1), 195-221. doi: 10.4067/S0718-52862011000100008
- Nurius, P., Prince D. y Rocha, A. (2015). Cumulative disadvantage and youth well-being a multi-domain examination with life course implications. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 32(6), 567-576. doi: 10.1007/s10560-015-0396-2
- O'Rand, A. (1996). The precious and the precocious: Understanding cumulative disadvantage and cumulative advantage over the life course. *The Gerontological Society of America*, 36(2), 230-238. doi: 10.1093/geront/36.2.230
- Pantano, L. (2015). Discapacidad y pobreza en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Reflexiones a partir de algunos datos cuantitativos. *Revista de la Facultad de Medicina*, 63 (1), 51-60. doi: 10.15446/revfacmed.v63n3sup.49344
- Poy, S. y Salvia. A. (Coords.). (2019). *Estratificación social, movilidad intergeneracional y distribución de resultados de bienestar en la Argentina*. Buenos Aires: Educa.
- Queiroz Ribeiro, de L. C. y Kaztman, R. (2008). *A cidade contra a escola?* Río de Janeiro: Letra Capital. doi: 10.4067/S0250-71612010000200009
- Saraví, G. (2004). Juventud y violencia en América Latina. Reflexiones sobre exclusión social y crisis urbana. *Desacatos*, (14), 127-142. doi: 10.29340/14.1090
- Saraví, G. (2006). Biografías de exclusión: desventajas y juventud en Argentina. *Perfiles Latinoamericanos*, 13(28), 83-116.
- Saraví, G. (Ed.). (2007). *De la pobreza a la exclusión. Continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

- Saraví, G. (2009). *Transiciones vulnerables: juventud, desigualdad y exclusión en México*. México: Publicaciones de la Casa Chata; CIESAS.
- Schafer, M., Ferraro, K. y Mustillo, S. (2011). Children of misfortune. Early adversity and cumulative inequality in perceived life trajectories. *American Journal of Sociology*, 116(4), 1053-1091. doi: 10.1086/655760
- Seabrook, J. y Avison, W. (2012). Socioeconomic status and cumulative disadvantage processes across the life course: Implications for health outcomes. *Canadian Review of Sociology*, 49(1), 50-68. doi: 10.1111/j.1755-618x.2011.01280.x
- Solís, P. (2016). Algunos rasgos distintivos de la estratificación y movilidad de clase en América Latina: síntesis y tareas pendientes. En P. Solís y M. Boado. (Coords.), *Y sin embargo se mueve: estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina*. México: El Colegio de México; Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A. C.
- Solís, P. y Boado, M. (Coords). (2016). *Y sin embargo se mueve: estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina*. México: El Colegio de México; Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A. C.
- Solís, P. y Puga, I. (2011). Efectos del nivel socioeconómico de la zona de residencia sobre el proceso de estratificación social en Monterrey. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 26 (2), pp. 233-265. doi: 10.24201/edu.v26i2.1383
- Torche, F. (2014). Intergenerational mobility and inequality: The Latin American case. *Annual Review of Sociology*, (40), 619-642. doi: 10.1146/annurev-soc-071811-145521
- Viáfara López, C. (2017). Movilidad social intergeneracional de acuerdo al color de la piel en Colombia. *Sociedad y Economía*, (33), 263-287. doi: 10.25100/sye.v0i33.5632
- Viáfara López, C. y Urrea Giraldo, F. (2006). Efectos de la raza y el género en el logro educativo y estatus socioocupacional para tres ciudades colombianas. *Desarrollo y Sociedad*, (58), 115-163. doi: 10.13043/dys.58.4

Sincronicidades entre la transición sanitaria y la segunda transición demográfica en Argentina durante la primera década del siglo XXI

Synchronicities between the Health Transition and the Second Demographic Transition in Argentina during the First Decade of the 21st Century

Javiera Fanta

Orcid: 0000-0001-6176-1776

javiera.fanta@gmail.com

Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

Natalia Tumas

Orcid: 0000-0003-4730-6624

natalia.tumas@unc.edu.ar

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, Argentina.

Resumen

Este trabajo analiza los procesos de la transición sanitaria (TS) y de la segunda transición demográfica (STD) en Argentina durante la primera década del milenio actual. A partir de la revisión de literatura especializada y utilizando bases de datos oficiales, se proponen indicadores empíricos para su evaluación y se examinan las articulaciones entre ambos procesos. En total, se seleccionaron y describieron 31 indicadores considerados *proxy* de estos procesos, para las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posteriormente se realizó un análisis de clúster jerárquico y aglomerativo, siguiendo el método de Ward. Se identificaron cuatro clústeres de jurisdicciones

Palabras clave

Segunda transición demográfica
Transición sanitaria
Sociodemografía
Determinantes sociales
Clústeres
Argentina

argentinas, cuya distribución fue valorada espacialmente. Los clústeres presentaron diferentes grados de avance en ambas transiciones. Los hallazgos muestran que en el país existe un gradiente socioeconómico en la conformación de los clústeres, y que la sincronidad entre la STD y la TS se expresa a escala espacial y social.

Abstract

This work analyzes the health transition (HT) and the second demographic transition (SDT) processes in Argentina during the first decade of the current millennium. On the basis of specialized literature and official databases, this article proposes empirical indicators for the assessment of both transitions and examines the underlying links between them. Overall, 31 *proxy* indicators were selected and described for the 23 Argentine provinces and the Autonomous City of Buenos Aires. A hierarchical cluster analysis was developed, following the Ward method. Four clusters of Argentine jurisdictions were identified, and their distribution was spatially analyzed. The clusters presented different levels of progression in both transitions. The findings show that there is a socioeconomic gradient in the configuration of the clusters and that the synchronicity between the SDT and the HT is expressed at the social and space scale.

Keywords

Second demographic transition
Health transition
Social demography
Social determinants
Clusters
Argentina

Recibido: 31/03/2020
Aceptado: 18/06/2020

Introducción

En el ámbito de la demografía, la producción teórica ha estado fundamentalmente acotada al desarrollo de la teoría de la transición demográfica (Zaidi y Morgan, 2017). Tan solo en las últimas décadas del siglo XX, la literatura especializada comenzó a ofrecer nuevos marcos explicativos para dar cuenta de los cambios ocurridos en los componentes poblacionales. En este sentido, la segunda transición demográfica (STD) constituye en la actualidad un enfoque teórico de referencia para el análisis del comportamiento de la fecundidad, la nupcialidad y los arreglos familiares en contextos diversos, incluidos los países de la región de América Latina y el Caribe (ALyC) (Esteve, Lesthaeghe y López-Gay, 2012; Laplante, Castro-Martín, Cortina y Martín García, 2015; Liu, Esteve y Treviño, 2017; Quilodrán, 2008).

El desarrollo conceptual relativo a las transformaciones en los patrones de mortalidad y morbilidad, en cambio, ha sido menos profuso dentro de la disciplina sociodemográfica. La transición de estos componentes en los últimos veinte años ha sido abordada principalmente a partir de la teoría de la transición sanitaria (TS), perspectiva que conjuga el estudio de las transformaciones del sistema de salud y de los riesgos a los que están expuestas las poblaciones (Bernabeu Mestre y Robles González, 2000).

En el período reciente, Argentina ha experimentado importantes transformaciones demográficas y de salud, que pueden interpretarse a la luz de las teorías de la STD y TS. Durante la primera década del siglo XXI, este país se encontraba en una etapa de envejecimiento avanzado con relación a los países de ALyC. En efecto, hacia 2010 las personas de 65 años y más representaban 10,2% de la población total, mientras que en la región el promedio se ubicaba en 6,9% (CEPAL, 2019). Los niveles de fecundidad, en tanto, expresaban una alta heterogeneidad interna, con promedios jurisdiccionales que oscilaban en el orden de 1,9 a 2,8 hijos por mujer en 2010 (INDEC, 2013). Simultáneamente, en el marco del proceso de TS, se fue modificando la oferta de servicios de salud e infraestructura sanitaria, a través de la inclusión progresiva de tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y el refuerzo de la estrategia de atención primaria de la salud (Ballesteros, 2017; Cendali y Pozo, 2008). Además, fue transformándose la exposición poblacional a riesgos, mediante el incremento de sedentarismo y de obesidad, y la mayor exposición a plaguicidas, entre otros aspectos (Lepori, Mitre y Nassetta, 2013; Tafani, Chiesa, Caminati y Gaspio, 2013).

Celton y Arriaga (1995) dan cuenta de ciertas articulaciones entre los procesos sociodemográficos y sanitarios, al señalar que tanto el envejecimiento poblacional como los avances en la medicina fueron factores subyacentes a la reducción de la mortalidad por enfermedades infecciosas en torno a 1940. Más específicamente, la difusión de normas higiénicas, la introducción de sulfamida y penicilina, la provisión de agua corriente y la implementación de cloacas fueron importantes factores involucrados en este decrecimiento. Posteriormente, el descenso de la mortalidad por estas causas estuvo ligado más a los procesos de urbanización y desarrollo socioeconómico. En efecto, a partir de 1960 comienzan a predominar causas de muerte provocadas por enfermedades no transmisibles (ENT, principalmente enfermedades cardiovasculares y cáncer) y a partir de 1980, los accidentes y causas violentas ganan protagonismo entre las causas de muerte. La mortalidad por estas causas se vincula a

ciertos riesgos relacionados tanto a las condiciones del entorno de las personas (las condiciones de trabajo, la contaminación ambiental y el aumento de tráfico) como a los riesgos que surgen de comportamientos individuales (el hábito de fumar, el consumo de alcohol y hábitos alimentarios poco saludables).

La literatura científica reporta ciertos indicadores de estas transiciones, algunos de los cuales son transversales a ambos procesos (Bernabeu Mestre y Robles González, 2000; Lesthaeghe y Neidert, 2006; Sobotka, 2008). Sin embargo, estos suelen remitir a contextos de países con mayor desarrollo relativo, lo que impide dar debida cuenta de la dinámica de estas transiciones en el contexto regional, y particularmente en el argentino. A su vez, si bien se reconoce que la STD y la TS operan simultáneamente, poco se ha indagado respecto de sus articulaciones a nivel subnacional desde una mirada integral.

Ante esto, cabe preguntarse: ¿cuáles son los principales indicadores empíricos de estos procesos en la población argentina? ¿Cómo se articulan la TS y STD en el país durante el período reciente y qué características subyacen a las interacciones entre ambos procesos? En este marco, el siguiente artículo tiene como objetivos: (i) identificar indicadores empíricos para la valoración de la TS y la STD disponibles en las fuentes de datos oficiales, y (ii) examinar cómo se articulan ambos procesos en Argentina en el período reciente (2005-2013).

Antecedentes teóricos

Segunda transición demográfica

El concepto de STD fue introducido por Lesthaeghe y Van de Kaa en la década de 1980, tras reconocer una serie de cambios en los patrones de nupcialidad, vinculados con la caída de la fecundidad en los países del norte de Europa desde la década de 1970. Entre las transformaciones más notables, los autores registraron la tendencia a alcanzar niveles de fecundidad por debajo del umbral de reemplazo (establecido convencionalmente en 2,1 hijos por mujer) y aumentos en la edad a la primera unión, la tasa de divorcio, la nuliparidad voluntaria y las uniones consensuales como alternativa al matrimonio (Lesthaeghe, 2014; Sobotka, 2008). Existe consenso en que el uso de métodos anticonceptivos modernos, en particular de la píldora anticonceptiva y el dispositivo intrauterino

(DIU), contribuyó sustancialmente a generar estos cambios a través de la postergación y disminución de la fecundidad dentro de uniones ya establecidas (Lesthaeghe, 2014).

En ALyC, la modalidad adoptada por la STD difiere respecto de la señalada, entre otras cosas debido a la coexistencia, desde la época colonial, del matrimonio con las uniones de hecho; además, el ingreso a la primera unión conserva, en términos globales, un calendario temprano, con uniones caracterizadas por su gran estabilidad temporal (Quilodrán, 2008). Junto con esto, la abrupta caída promedio en los niveles de fecundidad registrada desde mediados de 1960 no estuvo asociada con el retraso en la edad al primer/a hijo/a ni con la desuniversalización de la maternidad (Esteve y Flórez-Paredes, 2014; Rosero-Bixby, Castro-Martín y Martín-García, 2009). Solo recientemente la bibliografía especializada ha documentado la existencia de nuevas pautas de nupcialidad y formación familiar, con patrones más tardíos, menos estables y mayor proporción de uniones consensuales (Esteve, Lesthaegue y López-Gay, 2012), junto con una postergación en el calendario de la maternidad y un porcentaje incremental de mujeres nulíparas, respectivamente (Cavenaghi y Alves, 2013).

En el contexto argentino, específicamente, se han evidenciado transformaciones en las últimas décadas en torno a las pautas de nupcialidad y formación de las familias, acompañadas por una disminución generalizada de la fecundidad. Al respecto, Binstock et al. (2016) reconocen un patrón de postergación en la entrada a la primera unión. Sin embargo, el cambio más importante se refiere a la modalidad de las uniones y, en menor medida, al *tempo* de su formación. El ingreso a la vida conyugal a través del matrimonio constituye una excepción tanto para varones como para mujeres de generaciones más jóvenes, característica que se manifiesta expresamente en la Ciudad de Buenos Aires. Así, la unión libre ha comenzado a asentarse como principal modalidad vincular, lo que a su vez podría asociarse con el retraso en la edad al matrimonio (Binstock y Cabella, 2011). Se debe advertir, no obstante, que esta postergación no se da de manera generalizada en la población, sino que principalmente en mujeres con nivel educativo elevado (Binstock, Cabella, Salinas y López-Colás, 2016). En este sentido, Argentina no es ajena al contexto regional y, como tal, la cohabitación puede ser percibida como el equivalente al matrimonio en los sectores populares. Es por ello que no sería correcto afirmar que estas transformaciones se asocian con una tendencia

incremental a la secularización de las uniones, como sí ocurre en los países de Europa.

También ha sido documentada la postergación del calendario reproductivo de las mujeres argentinas (Binstock, 2010). En línea con lo anterior, el cambio más notable respecto de la transición a la maternidad no es el retraso de la edad al primer/a hijo/a, sino el contexto conyugal en que se produce. A partir de datos muestrales correspondientes a aglomerados urbanos¹, Binstock (2010) advierte que la mayoría de las mujeres (87%) nacidas antes de la década de 1960 tuvo a su primer hijo dentro de un matrimonio legal, y solo 1 de cada 10 dentro de una unión consensual. Como contrapartida, de las mujeres nacidas en las décadas de 1960 y 1970 solo la mitad estaba casada al tener al primer hijo, 1 de cada 3 cohabitaba con su pareja y 15% mantenía una relación de noviazgo sin unión.

Existe consenso en que estas transformaciones, aunque heterogéneas, se asocian con factores sociales y culturales y con el propio avance de la STD. Así, la creciente heterogeneidad en las formas familiares responde a una modernización de los vínculos sociales, relacionada con la expansión educativa y la participación creciente de las mujeres en el mercado de trabajo. En efecto, a escala nacional se registró un alza sostenida de la población económicamente activa (PEA) femenina desde 1960 hasta los inicios del actual milenio, vinculada a la ampliación del sector de servicios, especialmente en las grandes ciudades (Otero, 2006). Sin embargo, no se debe desconocer que estos cambios también son el resultado de las crisis y los elevados niveles de desigualdad que persisten en el país y en la región al día de hoy (Cerrutti y Binstock, 2009). En este sentido, el aumento en las tasas de actividad femenina puede ser interpretado como indicador de autonomía en determinados escenarios, mientras que en otros —como es el caso de muchos procesos migratorios encabezados por mujeres— responde a estrategias familiares de supervivencia (Sassen, 2003). Asimismo, existen antecedentes (Batthyány, Genta y Perrotta, 2015; Domínguez Amorós, Muñiz y Rubilar Donoso, 2019) que muestran que el incremento de la participación de las mujeres en el mercado profundiza procesos de desigualdad en otros ámbitos, específicamente con relación a la distribución del uso del tiempo dentro de la unidad familiar, las obligaciones de cuidado de personas dependientes y otras tareas que sustentan la reproducción de la vida.

1 Encuesta Actitudes familiares e ideario del desarrollo 2008. Ver Binstock (2010).

Transición sanitaria

En el marco de la teoría de la TS, las causas de enfermedad o muerte son entendidas como el producto de distintos acontecimientos biológicos, socioeconómicos, culturales, ambientales y políticos, relacionados con los determinantes del proceso de salud, enfermedad y atención de las poblaciones (Bernabeu Mestre, Robles González y Benavides, 1996; Caldwell, 1990).

El concepto de TS podría considerarse, según algunos autores (Bernabeu Mestre y Robles González, 2000), como una ampliación del concepto de transición epidemiológica. Esto es porque la transición epidemiológica describe las modificaciones en los patrones de mortalidad de las poblaciones, mientras que la TS explica las transformaciones comportamentales y de organización del sistema sanitario que acontecen en forma simultánea a los cambios en la mortalidad (Bernabeu Mestre y Robles González, 2000; Caldwell, 1990; Frenk, Bobadilla, Stern, Frejka y Lozano, 1991). Además, la TS considera que el estado de salud de las poblaciones está influenciado tanto por la posición social y los comportamientos de las personas, como por determinantes más amplios como el desarrollo social y la equidad (Caldwell, 1990).

Bernabeu Mestre y Robles González (2000) han contribuido de manera significativa a desarrollar la teoría de la TS. De acuerdo a estos autores, la TS debe concebirse como un marco conceptual global y dinámico, en el que pueden describirse y contextualizarse los efectos de los cambios en las condiciones de salud de las poblaciones. Para estos autores, la teoría de la TS incluye dos grandes procesos: la transición de riesgos y la transición de la atención sanitaria, según se plantea a continuación.

En el marco de la *transición de riesgos* se describen los cambios producidos desde una situación inicial de riesgos “tradicionales” (tales como el agua contaminada) a riesgos “modernos” (tales como la contaminación ambiental y la modificación de estilos de vida), aspectos que se enmarcan en el contexto de los procesos de urbanización e industrialización (Smith, 1997). Conforme lo señalan Kjellström y Rosentock (1990), mientras que en los países desarrollados los denominados riesgos tradicionales son reemplazados por los riesgos modernos, en los países en desarrollo estos se superponen.

En el eje de la *transición de la atención sanitaria* se describe el proceso de transformación de la respuesta colectiva e individual ante las

problemáticas de salud. Más específicamente, describe las modificaciones en la organización del sistema de salud para el suministro de servicios (Frenk et al., 1991). Esta transición se encuentra, entonces, estrechamente vinculada al desarrollo social, tecnológico y económico.

Se ha señalado que la operacionalización del concepto de transición de la atención sanitaria presenta algunos problemas, dada la falta de consenso sobre ciertas definiciones y medidas (Bernabeu Mestre y Robles González, 2000). No obstante, la mortalidad infantil ha sido destacada como indicador válido, puesto que además de ser fácil de medir, su comportamiento está relacionado tanto a exposición a riesgos, como a factores del sistema de salud y a condiciones socioeconómicas. La estatura es otra variable que ha sido propuesta como indicador de TS, dado que brinda información sobre el estado nutricional en la infancia y es marcador de algunas enfermedades en la adultez, y a su vez se relaciona a factores ambientales y sociales (Bernabeu Mestre y Robles González, 2000).

Sumado a lo anterior, se ha señalado que las mejoras en el saneamiento y la nutrición favorecieron la reducción del riesgo tradicional, y que los cambios en los estilos de vida tendrían un papel fundamental en los denominados riesgos modernos (Smith, 1997, Caldwell, 1990). Además, la transición de la atención sanitaria implica transformaciones en el sistema de salud, incluyendo la adopción de nuevas tecnologías y cambios en la configuración de la oferta y demanda de servicios, cuestiones estas estrechamente ligadas a las condiciones socioeconómicas. Así, indicadores que involucran estos aspectos podrían dar cuenta también de la TS.

Articulaciones entre la segunda transición demográfica y la transición sanitaria

En términos procedimentales, tanto la STD como la TS están supeditadas al desarrollo de factores contextuales y coadyuvan a su mutuo desenvolvimiento, en la medida que las condiciones del sistema sanitario, así como el estado de salud de una población, influyen su reproducción. Si bien esta relación no es lineal, las interrelaciones entre ambos procesos pueden describirse como sigue.

Al inicio, la disminución de la mortalidad en una determinada población se da a expensas, principalmente, de la reducción de las causas infecciosas. Esto deriva en una mayor sobrevivencia que, a su vez, incrementa la exposición a factores de riesgo de enfermedades no transmisibles

(ENT) y lesiones, con el consecuente aumento de la contribución relativa de la morbilidad por ENT. El descenso en la mortalidad, conjugado con la disminución de la fecundidad, afecta la estructura por edad y repercute en el perfil demográfico. A su vez, esto impacta en el perfil de morbilidad, dado que la mayor proporción de población en edades avanzadas incrementa la prevalencia de las patologías no transmisibles (Frenk et al., 1991).

Por otro lado, un aspecto sanitario como la irrupción de los métodos anticonceptivos modernos —fenómeno que en los países de ALyC se produjo en la década de 1960—, dio lugar al control de la reproducción y, por extensión, a la disminución en los niveles promedio de la fecundidad, característica clave en el desarrollo de la STD. Lo anterior devino en nuevas pautas de comportamiento sexual y nupcial, entre las que destacan: el ejercicio de la sexualidad desvinculada del matrimonio (Bozón, 2003); una secularización creciente de las uniones —característica más evidente en los países europeos que latinoamericanos, aunque no exclusiva de estos— (Esteve, Lesthaeghe y López-Gay, 2012); y el debilitamiento del vínculo temporal, tradicionalmente simultáneo, entre la formación de las uniones y la llegada de los hijos (Van de Kaa, 1987). Estos aspectos, al articularse con un aumento relativo en la calidad y la prolongación de vida como resultado de las mejoras en las condiciones de salud, permitieron configurar un escenario propicio para la generación de cambios ideacionales en la población (Van de Kaa, 2002; Lesthaeghe, 2014). Entre estas transformaciones, destaca la tendencia de los individuos a priorizar la autonomía individual y la autorrealización, características que a su vez determinan nuevos patrones de nupcialidad y formación de las familias, y que constituyen ámbitos de incumbencia de la teoría de la STD.

Metodología

A fin de establecer indicadores empíricos para la valoración de la TS y la STD, se examinaron antecedentes a partir de: (i) publicaciones científicas arbitradas e indexadas, utilizando términos clave en los sistemas de información en línea SCOPUS y SciELO; y (ii) bases de microdatos y estimaciones publicadas por organismos oficiales, correspondientes al período de estudio (2005-2013). El lapso temporal seleccionado obedece a la disponibilidad de fuentes estadísticas destinadas a medir los componentes involucrados en la STD y TS.

Dentro de las fuentes de datos examinadas se encuentran el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (2011-2012), la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2005), la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (INDEC, 2009, 2013a), estimaciones y proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2013b), Estadísticas Vitales 2010 (Ministerio de Salud, 2011) e índices ambientales propuestos por Velázquez y Celemín (2013) en su trabajo “La calidad ambiental en la Argentina. Análisis regional y departamental”.

La revisión bibliográfica y el análisis de bases de datos condujo a seleccionar 31 indicadores para el estudio y valoración de las correspondientes transiciones, cuya definición, operacionalización y fuentes se detallan en el Anexo 1. La selección de los indicadores se realizó en base a los criterios de disponibilidad de fuentes de información oficial, accesibilidad a micro-datos y posibilidad de desagregación a escala provincial.

Puesto que, según advierte la literatura científica, existen factores convergentes a ambas transiciones, se determinó un grupo de indicadores transversales a ambos procesos. Así, los indicadores resultantes fueron distribuidos en tres grandes dimensiones, según se señala a continuación, y descritos para las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): (1) indicadores sociodemográficos (convergentes a ambas transiciones), (2) indicadores de STD e (3) indicadores de TS.

Con relación al segundo objetivo de investigación, se realizó como primer paso un análisis descriptivo que involucró el cálculo de medidas resumen para los indicadores seleccionados. Luego, fue explorada y graficada la distribución de los indicadores seleccionados de STD y TS, según terciles de indicadores sociodemográficos seleccionados.

Posteriormente, se realizó un análisis de clúster ($n=24$, 23 provincias y CABA) de tipo jerárquico y aglomerativo, siguiendo el método de Ward. El método de Ward, o método de mínima varianza, agrupa las unidades de observación con la mínima variabilidad intraclústeres, creando así grupos relativamente homogéneos. Dada la naturaleza del método, y a fin de unificar las unidades de medida, las variables fueron estandarizadas en el análisis de clústeres efectuado.

El número de aglomerados se estableció en virtud del análisis de dendograma, la similitud de los indicadores considerados y los antecedentes

bibliográficos en esta materia. Para determinar si los indicadores de STD y TS diferían de manera significativa entre los clústeres establecidos, se realizó un análisis de la varianza (ANOVA).

Adicionalmente, se ilustró la distribución espacial de los clústeres identificados y del tamaño poblacional de las jurisdicciones en un mapa temático a escala provincial. Para ello se empleó la aplicación ArcMap del software ArcGIS 10.5.

Resultados

La Tabla 1 presenta los indicadores sociodemográficos, de STD y de TS seleccionados, con sus correspondientes medidas resumen (media, desviación estándar, valores mínimos y máximos). Con relación al primer grupo de indicadores, derivados de la última ronda censal, se observa que 11,4% ($\pm 4,6$) de los hogares del país vivía en 2010 en condiciones de pobreza, determinada por la presencia de al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). Este indicador se refiere a los hogares que no logran reunir en forma relativamente estable los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Por otro lado, 84,9% ($\pm 7,4$) del total de hogares del país se ubicaba en áreas urbanas (>2000 habitantes).

Además, el 16,2% ($\pm 3,7$) de las mujeres y 10,7% ($\pm 4,2$) de los varones de 25 años y más completaron estudios superiores (terciarios o universitarios). La tasa de empleo masculina promedio fue de 72,4% (± 4), en tanto que la tasa femenina fue considerablemente menor, 48,4% ($\pm 6,4$), aspecto que expresa la persistente brecha de género con relación a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo (Tabla 1).

En cuanto a los indicadores de STD, el porcentaje de mujeres sin hijos al término de su período fértil (40-49 años) fue de 8,8% ($\pm 2,9$). De acuerdo a los antecedentes disponibles (Fanta y Sacco, 2018), Argentina presenta uno de los niveles más elevados de nuliparidad a escala regional, aspecto que responde a una tendencia incremental de este componente, cuyo aumento es consistente con características propias del avance de la STD (Esteve, Lesthaeghe, López-Gay y García-Román, 2016). Por su parte, el porcentaje de uniones consensuales se ubicó alrededor de 40%, tanto en varones como mujeres, mientras que el porcentaje de divorcios entre las personas de 18 años y más fue de 5,6% ($\pm 1,4$) en la población masculina y 6,4% ($\pm 1,6$) en la femenina. La diferencia por sexo en cuanto

a los resultados de este último indicador podría explicarse a partir de la mayor tendencia que tienen los varones a formar nuevas uniones tras la disolución de un matrimonio anterior (Tabla 1; Binstock, 2010).

La mayoría de la población femenina en edad fértil (15-49 años) reportó la utilización de métodos anticonceptivos modernos (53,8%, $\pm 8,9$). La heterogeneidad interjurisdiccional de este indicador provee evidencia sobre la desigualdad de acceso a insumos para garantizar la planificación familiar en el conjunto de la población. En relación con la reproducción adolescente, el promedio de las mujeres entre 15 y 19 años que han tenido hijos/as nacidos/as vivos/as se ubicó en 13,6% ($\pm 2,4$) a escala nacional (Tabla 1). Este resultado es coincidente con otros hallazgos que destacan el elevado porcentaje de madres adolescentes en el país con respecto a otros países de la región; en efecto, Binstock (2016) muestra que Argentina es, dentro de la subregión del Cono Sur, el país con la cifra más alta de este indicador. Este resultado, además, se enmarca en la paradoja que caracteriza a ALyC, referente a la rápida y abrupta caída de la fecundidad global, pero a la resistente baja de la fecundidad adolescente (Rodríguez Vignoli, 2014).

En relación con los indicadores de envejecimiento poblacional, el promedio de personas de 80 años o más se ubicó en 1,9% ($\pm 0,9$) en 2010. Por otro lado, el índice de dependencia potencial de padres expresa que por cada 100 personas de 50 a 64 años (potenciales hijos/as), existen aproximadamente 14 personas de 80 años o más (potenciales padres/madres). Este indicador resulta útil para evaluar la heterogeneidad en el nivel de envejecimiento de la población. En efecto, los resultados de la Tabla 1 muestran que los valores de esta variable oscilan en el orden de 5 a 30,4 por cien.

Con referencia a los indicadores de TS, la tasa de mortalidad infantil fue de 11,9 ($\pm 2,7$) defunciones cada mil nacidos/as vivos/as en 2010. Además, se destaca que para el año 2010 39,6% ($\pm 11,2$) de la población masculina y 36,3% ($\pm 10,8$) de la población femenina no contaban con cobertura de salud, en tanto que 20,9% ($\pm 4,5$) de los adultos/as declaró tener una salud general regular o mala. En cuanto a los controles de salud, entre 70% y 80% de la población general reportó haber tenido algún control de presión arterial, colesterol o glucemia. Por su parte, 20,4% ($\pm 7,8$) de la población se realizó algún estudio de rastreo de cáncer de colon, en tanto que 56,7% ($\pm 11,5$) y un 66,4 ($\pm 9,1$) de las mujeres indicó haberse realizado mamografías y Papanicolau, respectivamente (Tabla 1).

Tabla 1
Medidas resumen de indicadores sociodemográficos, de
segunda transición demográfica y transición sanitaria
seleccionados. Argentina (total país), 2005-2013

Indicadores	Media	Desvío estándar	Mínimo	Máximo
Sociodemográficos				
Hogares con NBI (%)	11,4	4,6	3,8	19,7
Población urbana (%)	84,9	7,4	71,9	100,0
Población masculina con estudios superiores completos (%)	10,7	4,2	6,8	29,1
Población femenina con estudios superiores completos (%)	16,2	3,7	12,5	31,5
Tasa de empleo, varones (%)	72,4	4,0	65,2	80,0
Tasa de empleo, mujeres (%)	48,4	6,4	40,2	62,6
Segunda transición demográfica				
Tasa global de fecundidad	2,4	0,2	1,9	2,8
Nuliparidad al término de la vida fértil (%)	8,8	2,9	5,9	21,3
Edad media al primer hijo/a (años)	22,3	0,8	21,5	25,3
Uniones consensuales, varones (%)	40,7	6,4	28,3	54,0
Uniones consensuales, mujeres (%)	41,3	6,5	28,7	54,8
Divorcio en población de 18 años y más, varones (%)	5,6	1,4	3,5	8,3
Divorcio en población de 18 años y más, mujeres (%)	6,4	1,6	4,1	9,8
Reproducción en la adolescencia (%)	13,6	2,4	5,9	18,2
Uso de métodos anticonceptivos modernos (%)	53,8	8,9	38,8	70,9
Índice de dependencia potencial de padres	14,3	4,9	5,0	30,4
Población de 80 y más años (%)	1,9	0,9	0,7	5,1
Transición sanitaria				
Tasa de mortalidad infantil (%)	11,9	2,7	7,0	17,8
Acortamiento en niños/as (%)	8,0	1,9	4,6	11,2
Varones sin cobertura de salud (%)	39,6	11,2	18,2	60,1
Mujeres sin cobertura de salud (%)	36,3	10,8	15,7	55,8
Control de la presión arterial de adultos/as (%)	79,9	3,7	72,6	88,4

Continúa

Tabla 1 (continuación)

Indicadores	Media	Desvío estándar	Mínimo	Máximo
Control de colesterol de adultos/as (%)	73,7	6,3	60,9	87,9
Control de glucemia de adultos/as (%)	72,2	6,8	61,5	83,5
Realización de mamografías (%)	56,7	11,5	39,6	79,8
Realización de Papanicolaou (%)	66,4	9,1	48,1	83,1
Realización de algún estudio de rastreo de cáncer de colon (%)	20,4	7,7	10,2	47,5
Salud autopercebida como regular o mala en adultos/as (%)	20,9	4,5	13,9	28,9
Acceso a red cloacal (%)	56,6	20,8	19,7	99,0
Acceso a agua de red (%)	88,7	7,8	71,9	99,6
Índice de contaminación por plaguicidas (valor absoluto, en una escala de 0 a 10)	1,8	1,4	0,0	5,0
Índice de contaminación ambiental (valor absoluto, en una escala de 0 a 10)	6,6	0,5	5,4	7,4
Obesidad en adultos/as (%)	19,8	2,5	14,8	24,5
Nivel de actividad física bajo en adultos/as (%)	55,1	7,8	35,4	72,5
Consumo de alcohol regular de riesgo en adultos/as (%)	7,1	1,5	4,9	10,4
Consumo adecuado de frutas/verduras al día en adultos/as (%)	4,2	1,3	1,7	6,7
Consumo de tabaco en adultos/as (%)	25,8	3,0	20,3	31,0

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010; Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2011-2012; Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2005; Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (INDEC, 2009, 2013a); Estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2013b), Estadísticas Vitales 2010; Velázquez y Celemin (2013).

Sumado a lo anterior, para el año 2010 en Argentina un 88,7% ($\pm 7,8$) de los hogares presentaba agua de red, mientras que el 56,6% ($\pm 20,8$) tenía desagüe del inodoro conectado a la red pública cloacal. En cuanto a la contaminación ambiental, el índice nacional presentó un promedio de 6,6 ($\pm 0,5$) y, específicamente, la contaminación por plaguicidas un índice medio de 1,8 ($\pm 1,4$) (en una escala de 0 a 10, para ambos indicadores). Al considerar los indicadores del estilo de vida, se destaca que 19,8% ($\pm 2,5$) de la población adulta presentó obesidad y la mayoría nivel de

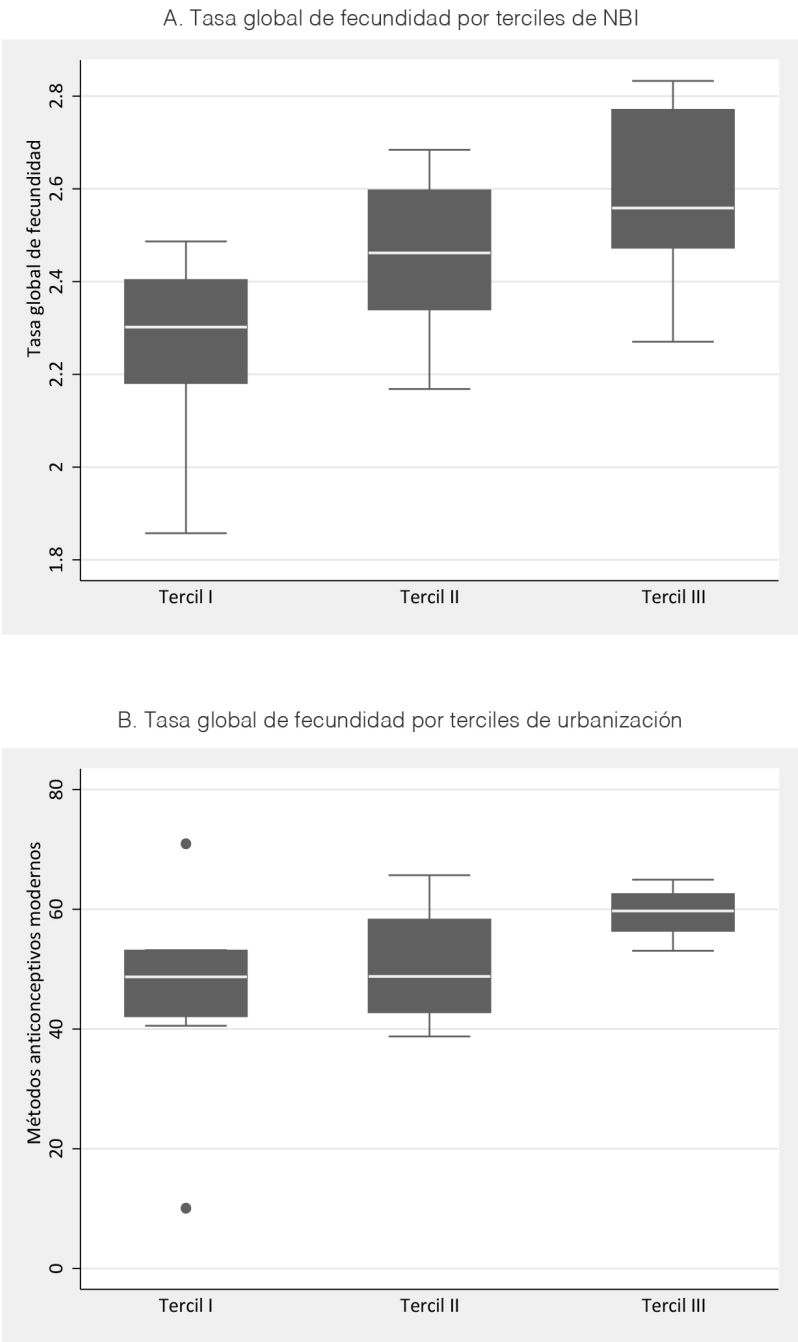
actividad física bajo (55,1%, $\pm 7,8$). Por último, 25,8% (± 3) de la población adulta consume o ha consumido tabaco, 7,1 % ($\pm 1,5$) presentó consumo de alcohol de riesgo y 4,2% ($\pm 1,3$) tuvo un consumo de frutas y verduras adecuado (Tabla 1).

Con el propósito de explorar la distribución socioeconómica de los procesos de STD y TS en la población, se construyeron diagramas de cajas según terciles de la proporción de hogares con NBI y de la proporción de hogares en áreas urbanas, presentados en las Figuras 1 y 2.

Al analizar la distribución de indicadores seleccionados de STD, puede observarse que la tasa global de fecundidad (TGF) sigue un gradiente social, con los valores más bajos correspondientes a las jurisdicciones con menores niveles relativos de pobreza (tercil inferior de NBI) y los valores más elevados en el conjunto de provincias más desfavorecidas socioeconómicamente (tercil superior de NBI; Figura 1A). Si examinamos la distribución de la TGF en torno al nivel de urbanización, se aprecia que las provincias con mayores porcentajes de hogares en áreas urbanas (tercil III) presentan las menores tasas, al tiempo que expresan el mayor grado de heterogeneidad (Figura 1B). Esto obedece a que el tercer tercil reúne a jurisdicciones que han alcanzado niveles bajos y muy bajos de fecundidad; entre estas últimas, destaca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya TGF fue de 1,9 en 2010, resultado que se aleja notablemente del resto de las provincias. En efecto, la provincia que le sigue en menor nivel de fecundidad global es Santa Fe, con un promedio de 2,1 hijos por mujer.

Por su parte, los resultados muestran que en las jurisdicciones con porcentajes más elevados de NBI (tercil III), el índice de dependencia potencial de padres es comparativamente menor al exhibido en aquellas provincias con menores niveles de pobreza (tercil I; Figura 1C). Se observa, además, que en las jurisdicciones con mayor grado de urbanización (tercil III) aumenta la variabilidad de este indicador, y expresa resultados más homogéneos en los conjuntos de provincias menos urbanizadas (Figura 1D). Por último, en relación con la distribución del uso de métodos anticonceptivos modernos, se observa que su prevalencia disminuye a medida que aumenta el nivel de pobreza (Figura 1E), y que aumenta a medida que se incrementa la proporción de hogares urbanos (Figura 1F).

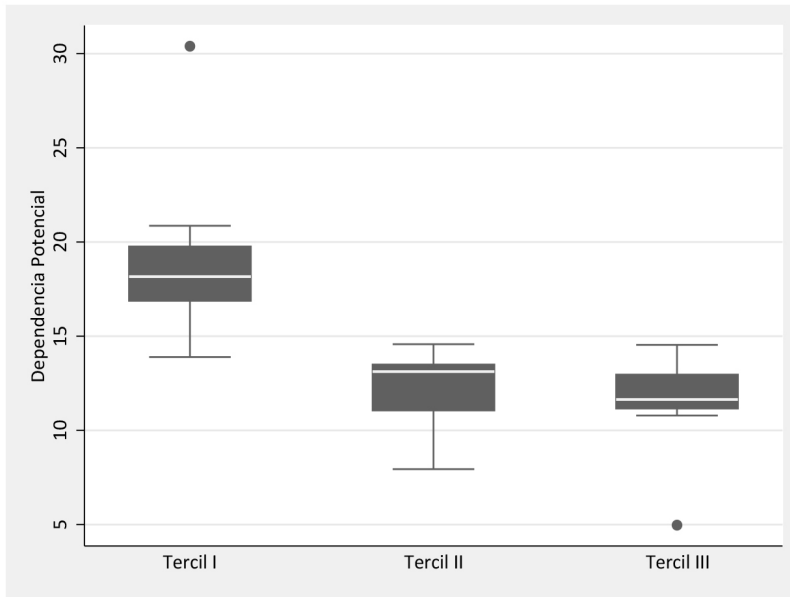
Figura 1
Distribución de indicadores seleccionados de segunda
transición demográfica según necesidades básicas
insatisfechas (NBI) y urbanización. Argentina, 2010-2012



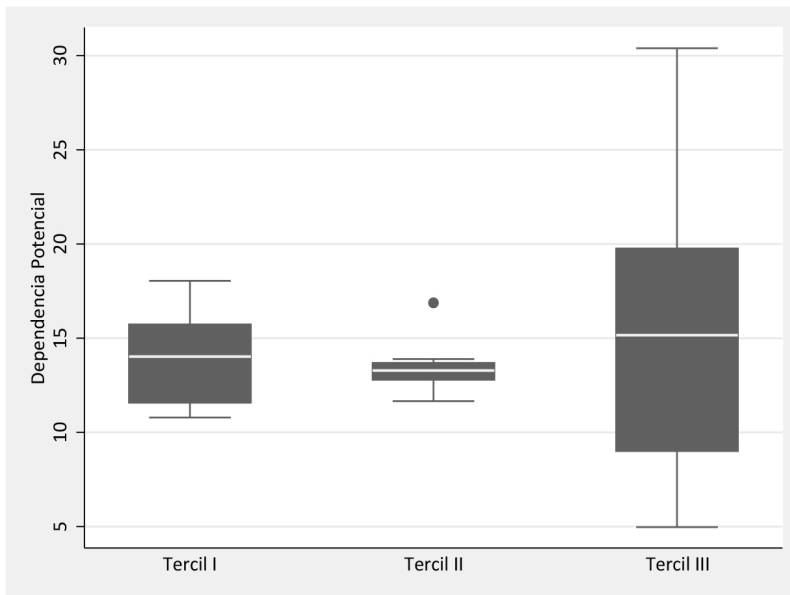
Continúa

Figura 1 (continuación)

C. Índice de dependencia potencial de padres por terciles de NBI



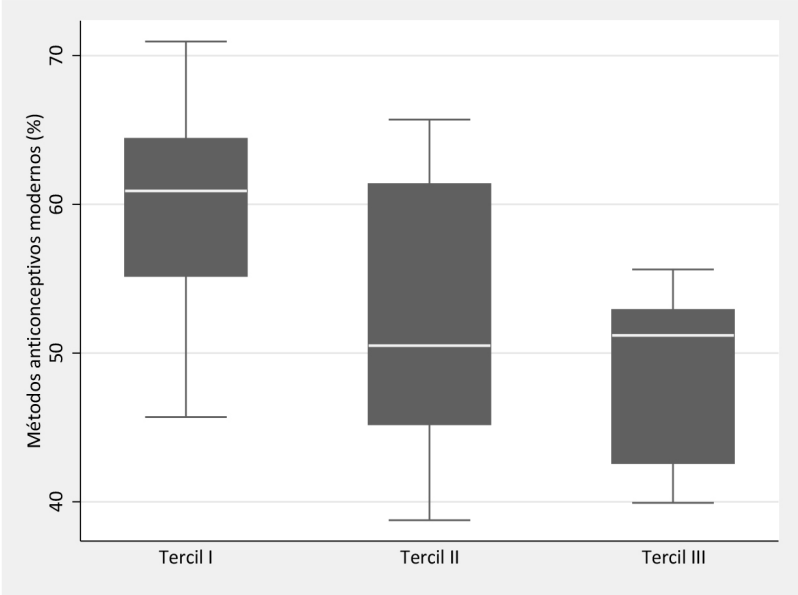
D. Índice de dependencia potencial de padres por terciles de urbanización



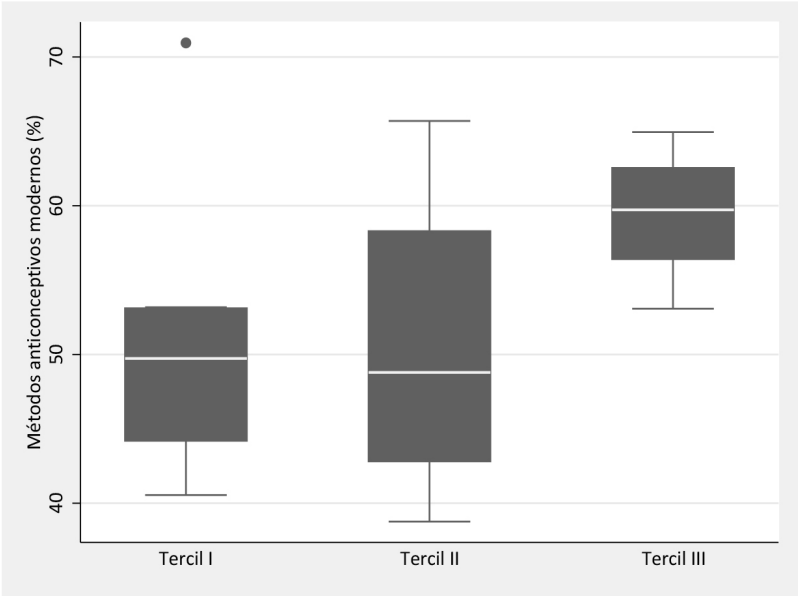
Continúa

Figura 1 (continuación)

E. Uso de métodos anticonceptivos modernos por terciles de NBI



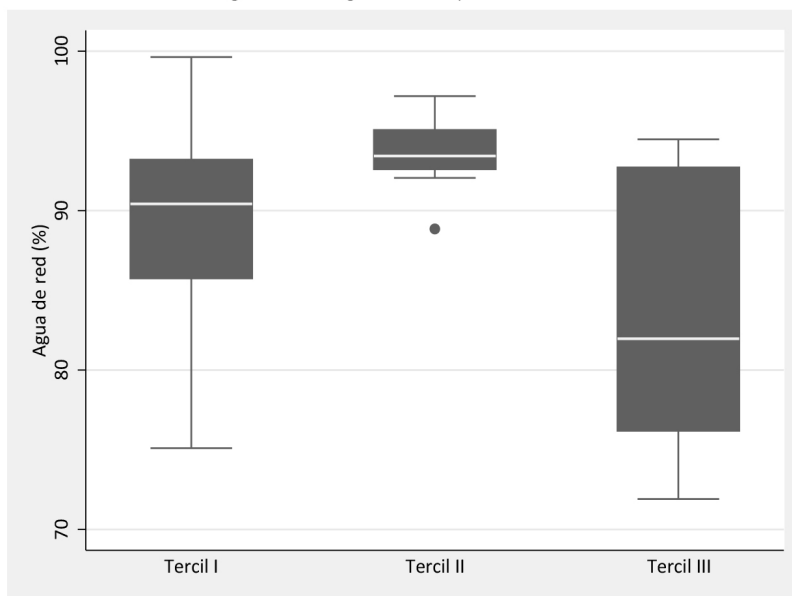
F. Uso de métodos anticonceptivos modernos por terciles de urbanización



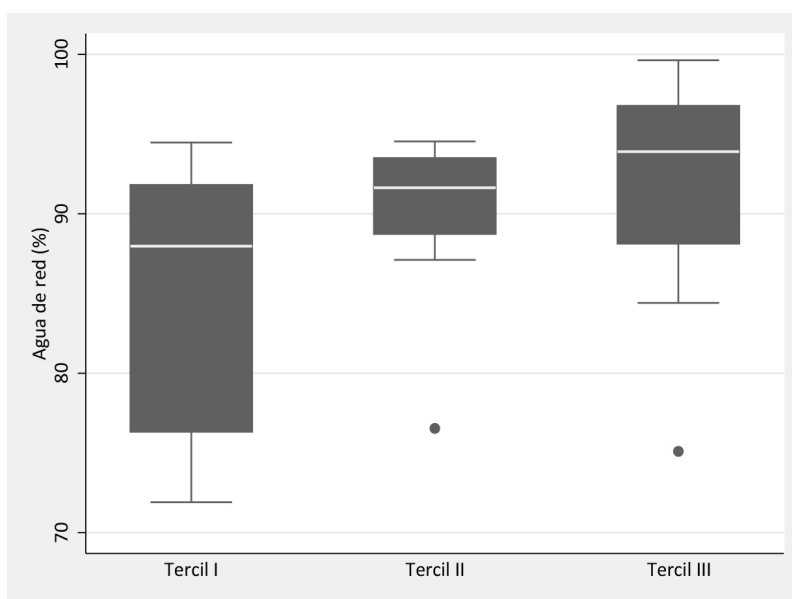
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010; Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2011-2012; Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (INDEC, 2009, 2013a); Estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2013b); Velázquez y Celemin (2013).

Figura 2
Distribución de indicadores seleccionados de transición
sanitaria, según necesidades básicas insatisfechas
(NBI) y urbanización. Argentina, 2009-2013

A. Hogares con agua de red por terciles de NBI



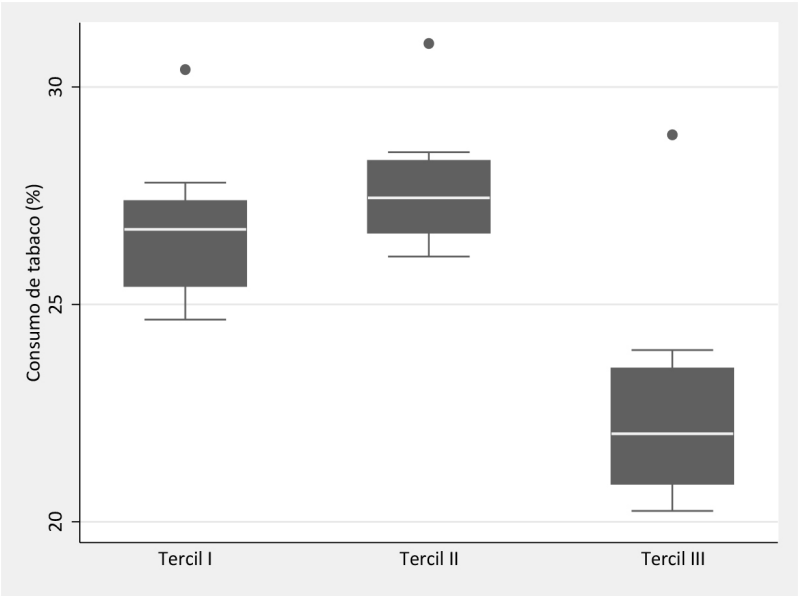
B. Hogares con agua de red por terciles de urbanización



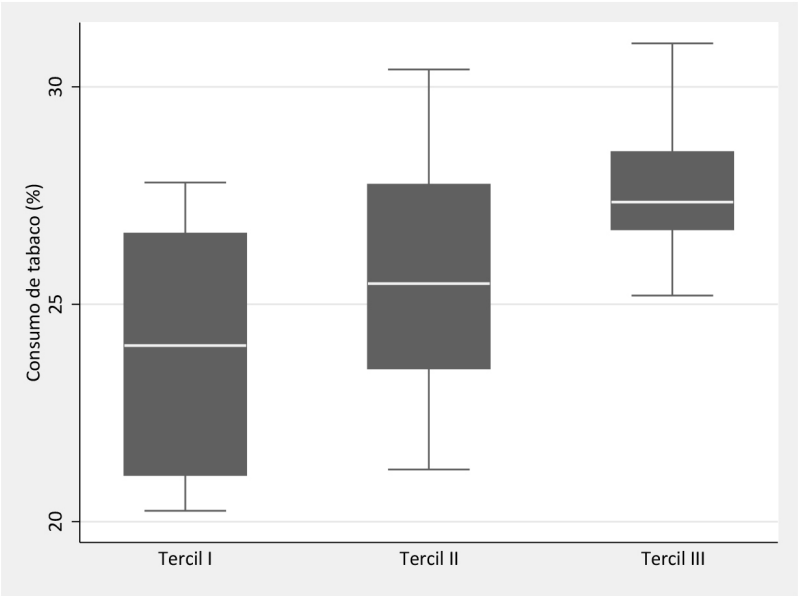
Continúa

Figura 2 (continuación)

C. Consumo de tabaco por terciles de NBI



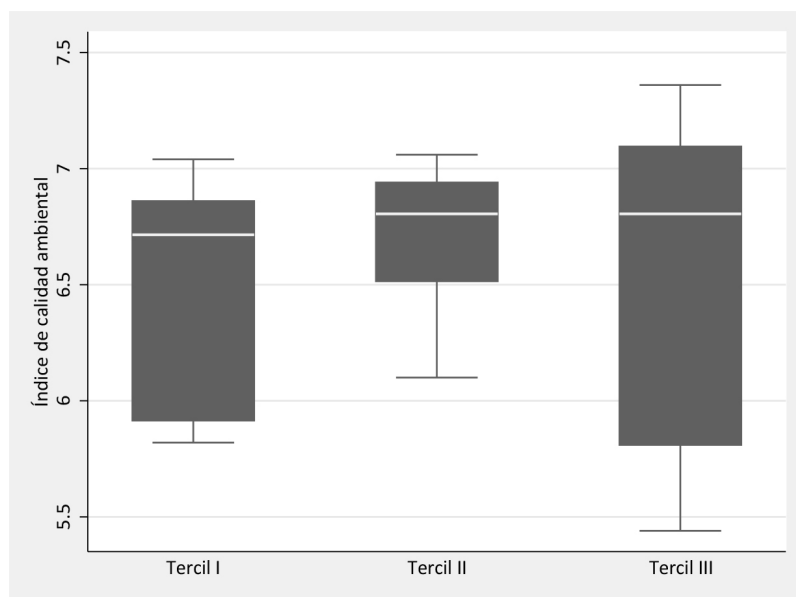
D. Consumo de tabaco por terciles de urbanización



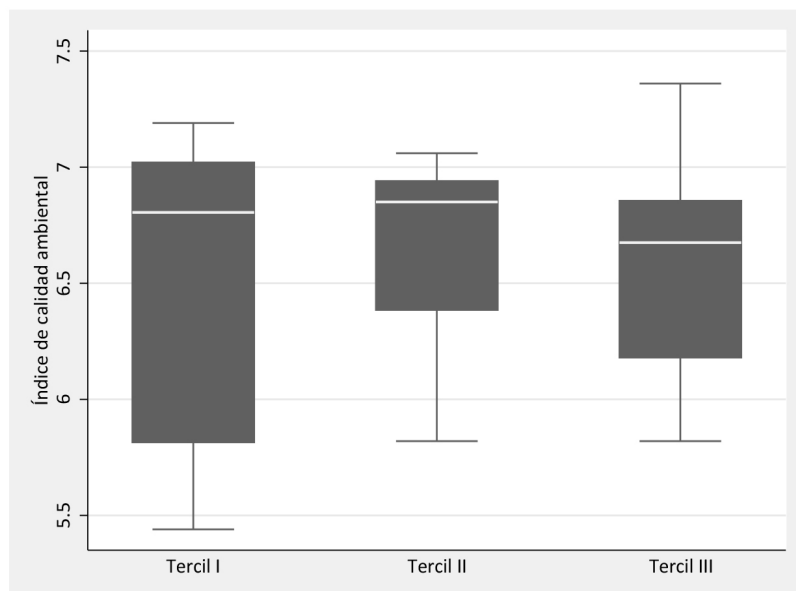
Continúa

Figura 2 (continuación)

E. Índice de calidad ambiental por terciles de NBI



F. Índice de calidad ambiental por terciles de urbanización



Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010; Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2011-2012; Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (INDEC, 2009, 2013a); Estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2013b); Velázquez y Celemin (2013).

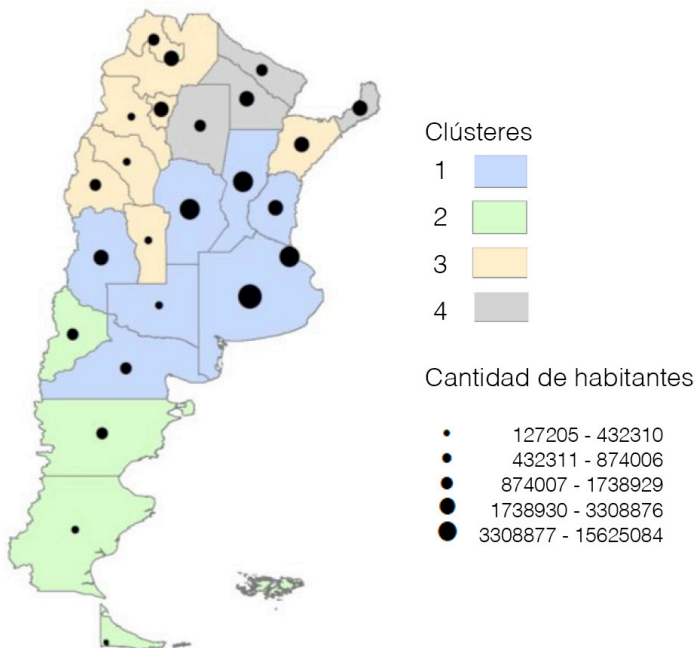
Con referencia a la distribución de los indicadores seleccionados de TS, se observa que la frecuencia de hogares con agua de red es menor, a la vez que muy variable, en el grupo de provincias con mayor nivel de pobreza relativa (tercil superior de NBI) y con menor grado de urbanización (tercil inferior; Figuras 2A y 2B, respectivamente). El consumo de tabaco, en tanto, es notoriamente menos prevalente en aquellas provincias más desfavorecidas socioeconómicamente (tercil III de NBI; Figura 2C), y relativamente menos prevalente en las provincias menos urbanizadas (tercil I de hogares en áreas urbanas; Figura 2D). Por último, la distribución del índice de calidad ambiental se muestra relativamente uniforme en torno a los indicadores sociodemográficos considerados; no obstante, se advierte una mayor variabilidad en el grupo de provincias con mayores niveles de NBI (tercil III) y menor proporción de hogares urbanos (tercil I; Figuras 2E y 2F, respectivamente).

Como puede advertirse en el mapa expuesto en la Figura 3, se identificaron un total de cuatro clústeres o agrupamientos de provincias argentinas. El primer agrupamiento (clúster 1) incluyó a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Río Negro y Santa Fe. En este clúster se ubica la jurisdicción con mayor volumen poblacional en la Argentina, la Provincia de Buenos Aires, al tiempo que incluye provincias con menor cantidad de habitantes (como las provincias de Entre Ríos y Río Negro). El clúster 2 comprende a la CABA, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En tanto capital del país, el tamaño poblacional de la CABA es notablemente mayor al que poseen las provincias de este clúster ubicadas en la zona sur del país. Por su parte, el tercer agrupamiento (clúster 3) incluye a Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán; mientras que el cuarto (clúster 4), a las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Santiago del Estero. El volumen de población que poseen las jurisdicciones incluidas en estos dos últimos clústeres es, en general, relativamente bajo y no supera 1 millón 800 mil habitantes por provincia.

Al analizar la distribución espacial de los clústeres de STD y TS derivados del análisis (Figura 3), es posible advertir que los aglomerados identificados se configuran en general, aunque no exclusivamente, de acuerdo a las grandes regiones del país. Así, el primer clúster (1) reúne a la mayoría de las provincias que conforman la denominada región Pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa), además de Mendoza (perteneciente a la Región Cuyo) y Río Negro (ubicada al norte de la región Patagónica). El clúster 2 aglutina a las provincias con mejor

desempeño relativo promedio en los indicadores de STD y TS seleccionados. En este aglomerado se encuentran la CABA y cuatro de las cinco provincias comprendidas por la región Patagónica (Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego). El clúster 3, en tanto, incluye al mayor número de jurisdicciones (8) y es algo más heterogéneo en su conformación espacial. Aquí están comprendidas cinco de las seis provincias de la región Noroeste argentino (NOA; Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja) y dos de las tres provincias que componen la región Cuyo (San Juan y San Luis), además la provincia de Corrientes, ubicada en la región del Noreste argentino (NEA). Finalmente, el clúster 4 abarca tres de las cuatro provincias del NEA (Formosa, Misiones, Chaco), junto con Santiago del Estero, perteneciente a la región NOA.

Figura 3
Distribución espacial de los clústeres de segunda transición demográfica y transición sanitaria identificados, y del tamaño poblacional de las jurisdicciones. Argentina, 2005-2013



**La magnitud de los círculos es proporcional al tamaño poblacional de las jurisdicciones. Se representan los quintiles de la distribución proporcionales al tamaño de los círculos.*
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010; Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2011-2012; Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2005; Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (INDEC, 2009, 2013a); Estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2013b), Estadísticas Vitales 2010; Velázquez y Celemin (2013).

Por otro lado, la Tabla 2 presenta los clústeres identificados con sus correspondientes valores medios de indicadores sociales, de STD y TS. Al contrastar los valores medios de los indicadores entre los clústeres identificados, se advierten diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$) para el porcentaje de hogares con NBI, porcentaje de hogares que residen en áreas urbanas y población femenina con estudios superiores completos (Tabla 2).

Tabla 2
Valores promedio de indicadores de transición
sanitaria y segunda transición demográfica, según
clústeres identificados. Argentina, 2005-2013

Indicadores	Clústeres			
	1 (n=7)	2 (n=5)	3 (n=8)	4 (n=4)
Sociodemográficos				
Hogares con NBI (%)*	7,1	9,4	13,1	17,8
Población urbana (%)*	86,0	94,5	81,5	77,9
Población masculina con estudios superiores completos (%)	10,8	14,8	9,5	8,0
Población femenina con estudios superiores completos (%)*	16,5	19,8	15,2	13,2
Tasa de empleo, varones (%)	74,5	77,2	69,9	67,7
Tasa de empleo, mujeres (%)	49,4	57,8	45,1	41,3
Segunda transición demográfica				
Tasa global de fecundidad	2,3	2,3	2,5	2,7
Nuliparidad al término de la vida fértil (%)	8,7	10,3	8,9	7,2
Edad media al primer hijo/a (años)	22,5	22,8	22,0	22,0
Uniones consensuales, varones (%)*	35,7	40,3	41,9	47,5
Uniones consensuales, mujeres (%)*	36,2	40,7	42,6	48,4
Divorcio en población de 18 años y más, varones (%)*	6,4	7,2	4,8	3,9
Divorcio en población de 18 años y más, mujeres (%)*	7,3	8,3	5,3	4,5
Reproducción en la adolescencia (%)*	13,0	11,5	13,7	17,0
Uso de métodos anticonceptivos modernos (%)*	62,7	58,0	44,9	50,8
Índice de dependencia potencial de padres	17,6	13,1	13,2	12,2
Población de 80 y más años (%)	2,3	2,2	1,5	1,7

Continúa

Tabla 2 (continuación)

Indicadores	Clústeres			
	1 (n=7)	2 (n=5)	3 (n=8)	4 (n=4)
Transición sanitaria				
Tasa de mortalidad infantil*	10,4	9,1	13,4	14,9
Acortamiento en niños/as (%)*	7,1	7,0	8,3	10,2
Varones sin cobertura de salud (%)*	36,1	25,0	44,0	55,6
Mujeres sin cobertura de salud (%)*	32,4	22,3	40,7	51,6
Control de la presión arterial de adultos/as (%)*	81,3	82,3	78,8	76,5
Control de colesterol de adultos/as (%)*	77,3	80,1	70,0	67,2
Control de glucemia de adultos/as (%)*	77,1	78,1	68,0	64,7
Realización de mamografía (%)*	62,9	69,5	50,2	42,9
Realización de Papanicolaou (%)*	70,9	76,1	59,8	59,5
Realización de algún estudio de rastreo de cáncer de colon en adultos/as (%)*	22,1	29,1	15,9	15,8
Salud autopercebida como regular o mala en adultos/as (%)*	18,0	16,0	24,3	25,2
Acceso a red cloacal (%)*	56,8	85,5	53,5	26,7
Acceso a agua de red (%)*	87,3	96,2	92	75,3
Índice de contaminación por plaguicidas (valor absoluto, en una escala de 0 a 10)	2,8	1,0	1,2	2,4
Índice de contaminación ambiental (valor absoluto, en una escala de 0 a 10)*	6,3	6,8	6,9	6,1
Obesidad en adultos/as (%)	19,3	21,0	20,2	18,8
Nivel de actividad física bajo en adultos/as (%)	56,3	54,5	50,8	62,4
Consumo de alcohol regular de riesgo en adultos/as (%)	8,0	7,2	6,2	7,4
Consumo adecuado de frutas/verduras al día en adultos/as (%)*	4,6	5,3	3,4	3,8
Consumo de tabaco en adultos/as (%)*	26,5	28,2	25,8	21,4

*Diferencias estadísticamente significativas a un $\alpha=0,05$.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010; Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2011-2012; Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2005; Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (INDEC, 2009, 2013a); Estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2013b), Estadísticas Vitales 2010; Velázquez y Celemín (2013).

En cuanto a la STD, los clústeres 1 y 2 presentan características que indican estadios más avanzados en este proceso transicional en comparación a los clústeres 3 y 4. En este sentido, se evidencian diferencias significativas ($p < 0,05$) entre los clústeres para el uso de métodos anticonceptivos modernos, el porcentaje de uniones consensuales de ambos sexos, el porcentaje de divorcio en la población femenina y masculina de 18 años y más, y la reproducción en la adolescencia (Tabla 2).

Numerosos indicadores de transición sanitaria presentaron también diferencias considerables entre clústeres (Tabla 2). La tasa de mortalidad infantil, así como la salud percibida como regular o mala fue notablemente superior en los clústeres 3 y 4 ($p < 0,05$). Por su parte, el porcentaje de población femenina y masculina sin cobertura de salud fue significativamente menor en el clúster 2. También se evidenciaron diferencias significativas ($p < 0,05$) para los indicadores referidos a control de la presión arterial, de colesterol, de glucemia, así como en la realización de mamografías, Papanicolau y estudios de rastreo de cáncer de colon. En términos generales, los resultados de estos últimos indicadores expresaron mayor prevalencia en los clústeres 1 y 2. Además, se evidenciaron diferencias significativas ($p < 0,05$) para los indicadores de acceso a red cloacal y acceso a agua de red (en ambos casos, mayor prevalencia en clúster 2), acortamiento en niños/as (mayor prevalencia en el clúster 4), índice de contaminación ambiental (mayor prevalencia en clústeres 2 y 3), consumo adecuado de frutas/verduras al día en adultos/as y consumo de tabaco en adultos/as (mayor prevalencia en clústeres 1 y 2, para ambos indicadores; Tabla 2).

Conclusión y consideraciones finales

Los hallazgos de este estudio ponen en evidencia que en la Argentina de la primera década del siglo XXI existe un gradiente socioeconómico en la conformación de perfiles sociodemográficos y sanitarios, a saber: los clústeres 1 y 2 presentan la situación más favorable en materia de indicadores sociales, mientras que los clústeres 3 y 4, presentan condiciones notablemente más adversas. Este gradiente se expresa también en los procesos de STD y TS, al exhibir los clústeres 1 y 2 características más avanzadas de estas transiciones, mientras que los clústeres 3 y 4 revelan escenarios transicionales más rezagados, conforme los indicadores considerados.

El agrupamiento descrito posee, en general, un correlato espacial y es consistente con las heterogeneidades referentes al desarrollo social y económico que se expresan al interior del país. Las jurisdicciones comprendidas en el clúster 1 se distribuyen, en términos globales, en la zona céntrica del país, al tiempo que su desempeño en variables como el porcentaje de empleo registrado, nivel de pobreza y porcentaje de analfabetismo se ubican por encima de los promedios nacionales (CAC, 2019).

Con relación al clúster 2, las provincias comprendidas en este aglomerado tienden a exhibir los indicadores más elevados de desarrollo social y económico del país, entre ellos, los porcentajes más bajos de empleo informal, los niveles de PBI per cápita anual más altos y los mejores resultados de desarrollo humano (CAC, 2019), aspectos que condicionan la estructura social de la población y, por extensión, las condiciones y calidad de vida. Se debe destacar que en la región Patagónica —cuyas provincias se ubican mayormente en este clúster—, se encuentra el polo petrolífero del país, lo que explica el elevado desarrollo comparativo de estas jurisdicciones. Por su parte, la CABA, capital nacional, se ha distinguido históricamente por encabezar los niveles de desarrollo social y económico en Argentina. Además, la literatura advierte sobre el incipiente inicio de la transición demográfica en esta jurisdicción respecto del resto del país (Otero, 2006), característica que sin dudas condiciona el desenvolvimiento de otros procesos transicionales, como es el caso de la STD y la TS.

Las provincias que integran el clúster 3 se distribuyen principalmente en la región NOA y, en segundo término, en la región Cuyo. El NOA tiende a exhibir menores niveles de desarrollo relativo respecto de los promedios nacionales y sus niveles de fecundidad y mortalidad infantil presentan, en general, resultados por sobre la media nacional. La región Cuyo, en tanto, tiende a comportarse en consistencia con los totales nacionales, por ejemplo, en lo que respecta a los niveles promedio de NBI (CAC, 2019).

Por otro lado, es reconocido que las provincias que componen la región NEA —incluidas en su mayoría, aunque no exclusivamente en el clúster 4— son las más rezagadas en términos de desarrollo social y económico. Además, desde el punto de vista sociodemográfico, la fecundidad y mortalidad (incluida la infantil) presentan un descenso más tardío y mantienen niveles por encima de la media nacional (Otero, 2006).

Los hallazgos descritos confirman la existencia de una articulación y sincronía entre la STD y TS, así como también entre estas y ciertas variables socioeconómicas, y la distribución espacial. La coexistencia de procesos transicionales, su simultaneidad y heterogeneidad ha sido también advertida en nuestro país en otros estudios, para el caso de las transiciones demográfica (Otero, 2006; Pantelides, 2006), epidemiológica y nutricional (Nicolau y Pujol, 2011; Tumas, Pou y Díaz, 2019).

En general, las transiciones poblacionales suelen ser analizadas desde una perspectiva diacrónica, siendo menos frecuente una mirada sincrónica de las mismas. Los resultados presentados en este trabajo, proveen antecedentes acerca de la pertinencia de esta perspectiva a la hora de analizar procesos transicionales, siendo las dimensiones social y espacial matrices propicias para su valoración, más allá de la dimensión temporal.

Si bien aún es pronto para sacar conclusiones sobre la reciente pandemia desatada por el COVID-19, se debe reconocer que este fenómeno tendrá impacto en los procesos aquí estudiados y que algunos aspectos de las transiciones examinadas se pondrán en discusión. Por una parte, se trata de una enfermedad transmisible que, hasta el momento de la elaboración de este trabajo, registraba 6.588.761 casos confirmados y 388.416 muertes a nivel global (Dong y Gardner, 2020), con la consecuente contribución al incremento de la morbilidad y mortalidad por estas causas, fundamentalmente entre los grupos poblacionales más envejecidos. Por otro lado, las consecuencias socioeconómicas son múltiples (Nicola et al., 2020) y ejercen mayor impacto en los grupos y contextos sociales más desfavorecidos (Ahmed, Amhed, Pissarides y Stiglitz, 2020). Dada la estrecha relación entre la STD y TS con factores socioeconómicos, es de esperar que ambos procesos se vean influenciados también mediante esta vía, y que incluso algunas sincronías evidenciadas entre estas dimensiones se modifiquen.

Sumado a lo anterior, el COVID-19 afecta con mayor severidad a los grupos poblacionales más envejecidos (aspecto clave en la STD), y ocasiona una profunda crisis en los sistemas de salud y modificaciones en los estilos de vida, aspectos clave en la TS. Por último, debe considerarse el efecto de esta situación inédita en las percepciones y sentimientos de las personas, dado que son eslabones clave en los comportamientos vinculados a la salud. En este sentido Johnson y colaboradores (2020) evidenciaron que la población argentina manifiesta con frecuencia sentimientos

de incertidumbre, miedo y angustia, pero también responsabilidad y cuidado. Las autoras advirtieron también desigualdades sociales y de género en el impacto del COVID-19 en la salud mental en Argentina.

Con relación a las limitaciones de este trabajo, se reconoce que las fuentes de datos utilizadas corresponden a diferentes períodos temporales, y que los indicadores empleados en el análisis son variables *proxy* a las dimensiones de los procesos transicionales. No obstante, se trata de la mejor aproximación factible de lograr, considerando la disponibilidad de fuentes de datos a nivel nacional con desagregación provincial. Además, la carencia de una perspectiva longitudinal que complemente nuestro análisis acota las posibilidades para entender las articulaciones entre STD y TS a través del tiempo.

Finalmente, resulta relevante considerar que los hallazgos de este trabajo referidos a las articulaciones que revisten la sincronidad de procesos sociales, demográficos y sanitarios en Argentina, pueden constituirse insumos valiosos para la definición de políticas poblacionales y de salud. Si bien existe consenso en que no es posible definir un modelo único de STD ni de TS —esto, debido a que varían las condiciones temporoespaciales en las que estas se producen, así como también las prácticas, normas y creencias que enmarcan dichos procesos—, pareciera existir un acuerdo acerca de que los avances en ciertos indicadores de desarrollo (como el nivel educativo, socioeconómico y de urbanización) efectivamente acompañan, sincronizan y, en algunos casos, aceleran el desenvolvimiento de ambos tipos de transición. En consideración de ello, las medidas tendientes a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población argentina con criterios de equidad, deberían tener en cuenta la red de vinculaciones entre estos procesos. Un enfoque intersectorial que articule acciones de sectores diversos (económico, ambiental, social, educativo, sanitario, entre otros) es recomendable a la hora de diseñar respuestas a este tipo de procesos multifactoriales y sincrónicos. En este sentido, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la que Argentina se adhiere puede constituir un marco propicio para articular los subsistemas involucrados en las configuraciones de estos procesos sociales, demográficos y de salud.

Anexo

Anexo 1 Indicadores sociodemográficos, de segunda transición demográfica y de transición sanitaria seleccionados, según definición operacional y fuente de datos analizada

Indicadores	Definición	Fuente
Sociodemográficos		
Hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) (%)	<p>Porcentaje de hogares con al menos una NBI. Las NBI incluyen:</p> <p>-NBI1: Vivienda de tipo inconveniente (vivienda de inquilinato, precaria u otro tipo)</p> <p>-NBI2: Viviendas sin cuarto de baño</p> <p>-NBI3: Hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto)</p> <p>-NBI4: Hogares con niños en edad escolar (6 a 12 años) que no asisten a la escuela</p> <p>-NBI5: Hogares con 4 o más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe de hogar tiene bajo nivel de educación (2 años o menos en el nivel primario)</p>	Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 2010, Cuestionario Básico
Población urbana (%)	Población en localidades de 2.000 o más habitantes	CNPHV 2010, Cuestionario Básico
Población masculina con estudios superiores completos (%)	Porcentaje de personas de 25 años y más que completaron estudios terciarios o universitarios, varones	CNPHV 2010, Cuestionario Básico
Población femenina con estudios superiores completos (%)	Porcentaje de personas de 25 años y más que completaron estudios terciarios o universitarios, mujeres	CNPHV 2010, Cuestionario Básico
Tasa de empleo, varones (%)	Porcentaje de la población ocupada con respecto de la población de 14 años y más, varones	CNPHV 2010, Cuestionario Básico
Tasa de empleo, mujeres (%)	Porcentaje de la población ocupada con respecto de la población de 14 años y más, mujeres	CNPHV 2010, Cuestionario Básico

Continúa

Anexo 1 (continuación)

Indicadores	Definición	Fuente
Segunda transición demográfica		
Tasa global de fecundidad	Número de hijos que en promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas al riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta el término de su período fértil	Proyecciones elaboradas en base a resultados del CNPHV 2010 (INDEC)
Nuliparidad al término de la vida fértil (%)	Porcentaje de mujeres de 40-49 años sin hijos sobre el total de mujeres de esa edad en la población de referencia	CNPHV 2010, Cuestionario Ampliado
Edad media al primer hijo/a (años)	Edad promedio al primer nacimiento de las mujeres que tuvieron hijos nacidos vivos	MICS 2011-12 (UNICEF)
Uniones consensuales, varones (%)	Porcentaje de personas en unión consensual o de hecho respecto del total de uniones/matrimonios, mujeres	CNPHV 2010, Cuestionario Ampliado
Uniones consensuales, mujeres (%)	Porcentaje de personas en unión consensual o de hecho respecto del total de uniones/matrimonios, varones	CNPHV 2010, Cuestionario Ampliado
Divorcio en población de 18 años y más, varones (%)	Porcentaje de personas de 18 años y más divorciadas o separadas legalmente sobre el total de la población de 18 años y más, varones	CNPHV 2010, Cuestionario Ampliado
Divorcio en población de 18 años y más, mujeres (%)	Porcentaje de personas de 18 años y más divorciadas o separadas legalmente sobre el total de la población de 18 años y más, mujeres	CNPHV 2010, Cuestionario Ampliado
Reproducción en la adolescencia (%)	Porcentaje de adolescentes mujeres de 15-19 años que han tenido hijos nacidos vivos	CNPHV 2010, Cuestionario Ampliado
Uso de métodos anticonceptivos modernos (%)	Porcentaje de mujeres en edad fértil (15-49 años) que utilizan métodos anticonceptivos modernos sobre el total de mujeres de esa edad en la población	MICS 2011-12 (UNICEF)
Índice de dependencia potencial de padres	Cantidad de personas de 80 años y más (adultos mayores) por cada 100 personas de 50 a 64 años (potenciales hijos de las personas en edades extremas)	CNPHV 2010, Cuestionario Básico
Población de 80 y más años (%)	Porcentaje de personas de 80 años y más sobre el total de la población. Se establece la edad de 80 años para delimitar a la población en edad muy avanzada	CNPHV 2010, Cuestionario Básico

Continúa

Indicadores	Definición	Fuente
Transición sanitaria		
Tasa de mortalidad infantil (%)	Cociente entre el número de muertes de menores de un año ocurridas en la población de un área geográfica durante un año calendario, y los nacidos vivos en esa área durante el mismo período	Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud (2011). Estadísticas Vitales. Información Básica 2010
Acortamiento en niños/as (%)	Porcentaje de niños/as con estatura menor a -2 desviaciones estándares de la media para su sexo y edad	Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) 2005
Varones sin cobertura de salud (%)	Porcentaje de varones sin cobertura de salud (tenencia de una obra social, un plan de salud privado o mutual o prepaga)	CNPHV 2010, Cuestionario Básico
Mujeres sin cobertura de salud (%)	Porcentaje de mujeres sin cobertura de salud (tenencia de una obra social, un plan de salud privado o mutual o prepaga)	CNPHV 2010, Cuestionario Básico
Control de la presión arterial de adultos/as (%)	Porcentaje de personas adultas que se controlaron la presión arterial en los últimos dos años	Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 2009 y 2013 (promedio)
Control de colesterol de adultos/as (%)	Porcentaje de personas adultas que se controlaron su colesterol alguna vez	ENFR 2009 y 2013 (promedio)
Control de glucemia de adultos/as (%)	Porcentaje de personas adultas que se controlaron su glucemia alguna vez	ENFR 2009 y 2013 (promedio)
Realización de mamografía en mujeres (%)	Porcentaje de mujeres de 50 a 70 años que se realizaron alguna mamografía en los últimos dos años	ENFR 2009 y 2013 (promedio)
Realización de Papanicolaou (%)	Porcentaje de mujeres de 25 a 65 años que se realizaron Papanicolaou en los últimos dos años	ENFR 2009 y 2013 (promedio)
Realización de algún estudio de rastreo de cáncer de colon (%)	Porcentaje de personas adultas de 50 a 75 años que se realizaron algún estudio para la detección de pólipos o cáncer de colon	ENFR 2013
Salud autopercebida como regular o mala, adultos de ambos sexos (%)	Porcentaje de personas adultas que declaran percibir su salud como regular o mala	ENFR 2009 y 2013 (promedio)

Continúa

Anexo 1 (continuación)

Indicadores	Definición	Fuente
Acceso a red cloacal (%)	Porcentaje de hogares con desagüe de inodoro a red pública cloacal	CNPHV 2010, Cuestionario Básico
Acceso a agua de red (%)	Porcentaje de hogares con disponibilidad de agua de red	CNPHV 2010, Cuestionario Básico
Índice de contaminación por plaguicidas (valor absoluto, en una escala de 0 a 10)	Índice obtenido a partir de la reclasificación de indicadores del Mapa de Riesgo Ambiental de la Niñez, presentado en el Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez de Argentina (Defensoría del Pueblo de la Nación, 2009)	Velázquez, G. y Celemín, J. P. (2010). "La calidad ambiental en la Argentina. Análisis regional y departamental"
Índice de contaminación ambiental (valor absoluto, en una escala de 0 a 10)	Índice obtenido a partir de una combinación ponderada de recursos recreativos de base natural (30%), recursos recreativos socialmente construidos (30%) y problemas ambientales (40%)	Velázquez, G. y Celemín, J. P. (2010). "La calidad ambiental en la Argentina. Análisis regional y departamental"
Obesidad en adultos/as (%)	Porcentaje de personas adultas con índice de masa corporal igual o mayor a 30 kg/m ²	ENFR 2009 y 2013 (promedio)
Nivel de actividad física baja en adultos/as (%)	Porcentaje de personas adultas con nivel de actividad física baja (sin actividad reportada o no incluido en niveles moderado o alto)	ENFR 2009 y 2013 (promedio)
Consumo de alcohol regular de riesgo en adultos/as (%)	Porcentaje de varones o mujeres que consumieron más de 2 tragos promedio por día o de 1 trago promedio por día en los últimos 30 días, respectivamente	ENFR 2009 y 2013 (promedio)
Consumo adecuado de frutas/verduras al día en adultos/as (%)	Porcentaje de personas adultas que consumen al menos 5 porciones diarias de frutas y/o verduras en una semana típica	ENFR 2009 y 2013 (promedio)
Consumo de tabaco en adultos/as (%)	Porcentaje de personas adultas que fumaron alguna vez en su vida, independientemente de que hayan continuado fumando o no	ENFR 2009 y 2013 (promedio)

Referencias

- Ahmed, F., Ahmed, N. E., Pissarides, C. y Stiglitz, J. (2020). Why inequality could spread COVID-19. *The Lancet Public Health*, 5(5), e240. doi: 10.1016/s2468-2667(20)30085-2
- Ballesteros, M. S. (2017). El sistema sanitario argentino: un análisis a partir de la evolución de los establecimientos de salud desde mediados del siglo XX a la actualidad. *Millcayac-Revista Digital de Ciencias Sociales*, 4(6), 169-174.
- Batthyány, K., Genta, N. y Perrotta, V. (2015). Uso del tiempo y desigualdades de género en el trabajo no remunerado. Los tiempos del bienestar social. En K. Batthyány. (Ed.), *Género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay* (pp. 45-86). Montevideo: Doble Clic.
- Banco Mundial (2019). *World Bank Open Data*. Recuperado de <https://data.worldbank.org/>
- Bernabeu Mestre, J. B. y Robles González, E. (2000). Demografía y problemas de salud. Unas reflexiones críticas sobre los conceptos de transición demográfica y sanitaria. *Política y Sociedad*, (35), 45-54.
- Bernabeu Mestre, J., Robles González, E. y Benavides, F. G. (1996). La transición sanitaria: una revisión conceptual. *Revista de Demografía Histórica*, 14(1), 117-142.
- Binstock, G. (2010). Tendencias sobre la convivencia, matrimonio y maternidad en áreas urbanas de Argentina. *Revista Latinoamericana de Población*, 4(6), 129-146. doi: 10.31406/relap2010.v4.i1.n6.7
- Binstock, G. (2016). *Fecundidad y maternidad adolescente en el Cono Sur: apuntes para la construcción de una agenda común*. Buenos Aires: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
- Binstock, G. y Cabella, W. (2011). La nupcialidad en el Cono Sur: evolución reciente en la formación de uniones en Argentina, Chile y Uruguay. En G. Binstock y J. Melo Vieira. (Coords.), *Nupcialidad y familia en la América Latina actual* (pp. 35-60). Río de Janeiro: Asociación Latinoamericana de Población. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7133/S1001052_es.pdf

- Binstock, G., Cabella, W., Salinas, V. y López-Colás, J. (2016). The rise of cohabitation in the Southern Cone. En A. Esteve y R. Lesthaeghe. (Eds.), *Cohabitation and marriage in the Americas: Geo-historical legacies and new trends* (pp. 247-268). Berna: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-31442-6
- Bozón, M. (2003). À quel âge les femmes et les hommes commencent-ils leur vie sexuelle? Comparaisons mondiales et évolutions récentes. *Population et Sociétés*, (391).
- CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios) (2019). *Estudio sobre asimetrías regionales en Argentina*. Recuperado de <https://url2.cl/6TVl2>
- Caldwell, J. C. (1990). Introductory thoughts on health transition. *What we know about health transition: The cultural, social and behavioural determinants of health*. Canberra: Australian National University.
- Cavenaghi, S. y Alves, J. E. (2013). *Childlessness in Brazil: Socioeconomic and regional diversity*. Trabajo presentado en la XXVII International Population Conference, International Union for the Scientific Study of Population, Busan, 26 al 30 de agosto. Recuperado de https://iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/ChildlessNessBrazil_Final.pdf
- Celton, D. y Arriaga, E. (1995). *Años de vida perdidos por causas de muerte en la Provincia de Córdoba*. Seminario Evolución Futura de la Mortalidad. Santiago de Chile: Celade. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21337/D-18911.03_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Cendali, F. y Pozo, L. (2008). Políticas de salud pública en Argentina: comparación de dos modelos. V *Jornadas de Sociología de la UNLP 2008. Memoria Académica*. La Plata, Argentina. Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5943/ev.5943.pdf
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2019). *Bases de datos y publicaciones estadísticas*. Recuperado de https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e

- Cerrutti, M. S. y Binstock, G. (2009). *Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Defensoría del Pueblo de la Nación (2009). *Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez de Argentina*. Buenos Aires: OPS, Unicef, OIT, PNUD, Defensoría del Pueblo de la Nación.
- Domínguez Amorós, M., Muñiz, L. y Rubilar Donoso, G. (2019). El trabajo doméstico y de cuidados en las parejas de doble ingreso. Análisis Comparativo entre España, Argentina y Chile. *Papers. Revista de Sociología*, 104(2), 337-374. doi: 10.5565/rev/papers.2576
- Dong, E., Du, H. y Gardner, L. (2020). An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *Lancet Infectious Diseases*, 20(5):533-534. doi: 10.1016/s1473-3099(20)30120-1
- Esteve, A. y Flórez-Paredes, E. (2014). Edad a la primera unión y al primer hijo en América Latina: estabilidad en cohortes más educadas. *Notas de Población*, 41(99), 39-66. doi: 10.18356/84fbd9c-es
- Esteve, A., Lesthaeghe, R. y López-Gay, A. (2012). The Latin American cohabitation boom, 1970-2007. *Population and Development Review*, 38(1), 55-81. doi: 10.1111/j.1728-4457.2012.00472.x
- Esteve, A., Lesthaeghe, R. J., López-Gay, A. y García-Román, J. (2016). The rise of cohabitation in Latin America and the Caribbean, 1970–2011. En A. Esteve y R. Lesthaeghe. (Eds.), *Cohabitation and marriage in the Americas: Geo-historical legacies and new trends* (pp. 25-57). Berna: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-31442-6
- Fanta, J. y Sacco, N. (2018). Tendencias de nuliparidad definitiva en países de América Latina y el Caribe: ¿hacia la desuniversalización de la maternidad? *Coyuntura Demográfica*, (13), 25-31.
- Frenk, J., Bobadilla, J. L., Stern, C., Frejka, T. y Lozano, R. (1991). Elements for a theory of the health transition. *Health Transition Review*, 1(1), 21-38.
- Hosseinpoor, A. R., Bergen, N., Kunst, A., Harper, S., Guthold, R., Rekve, D., Tursan d'Espaignet, E. Naidoo, N. y Chatterji, S. (2012). Socio-economic inequalities in risk factors for non-communicable diseases in low-income and middle-income countries: Results from the World Health Survey. *BMC Public Health*, 12(1), 912. doi: 10.1186/1471-2458-12-912

- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2009). *Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: INDEC. Recuperado de <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-2>
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2010). *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: INDEC. Recuperado de <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-6>
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2013a). *Proyecciones y estimaciones. Indicadores demográficos*. Recuperado de <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-84>
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2013b). *Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo*. Recuperado de <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-2>
- Johnson, M. C., Saletti, L., y Tumas, N. (2020). Emociones, preocupaciones y reflexiones frente a la pandemia del COVID-19 en Argentina. *Ciência & Saúde Coletiva*. doi: 10.1590/1413-81232020256.1.10472020
- Kjellström, T. y Rosenstock, L. (1990). The role of environmental and occupational hazards in the adult health transition. *World Health Statistics Quarterly. Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales*, 43(3), 188-196.
- Lapante, B., Castro-Martín, T., Cortina, C. y Martín-García, T. (2015). Child-bearing within marriage and consensual union in Latin America, 1980–2010. *Population and Development Review*, 41(1), 85-108. doi: 10.1111/j.1728-4457.2015.00027.x
- Lepori, E. C. V., Mitre, G. B. y Nassetta, M. (2013). Situación actual de la contaminación por plaguicidas en Argentina. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 29, 25-43.
- Lesthaeghe, R. (2014). The second demographic transition: A concise overview of its development. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(51), 18112-18115. doi: 10.1073/pnas.1420441111
- Lesthaeghe, R. J. y Neidert, L. (2006). The second demographic transition in the United States: Exception or textbook example? *Population and Development Review*, 32(4), 669-698. doi: 10.1111/j.1728-4457.2006.00146.x

- Liu, C., Esteve, A. y Treviño, R. (2017). Female-headed households and living conditions in Latin America. *World Development*, 90, 311-328. doi: 10.1016/j.worlddev.2016.10.008
- Ministerio de Salud de la Nación (2007). *Primera Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2005. Documento de resultados 2007*. Buenos Aires: Ministerio de Salud. Recuperado de <https://cesni-biblioteca.org/archivos/ennys.pdf>
- Ministerio de Salud de la Nación (2011). *Estadísticas Vitales. Información Básica 2010. Serie, 5* (54). Buenos Aires, Argentina: Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación.
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M. y Agha, R. (2020).The socio-economic implications of the coronavirus and COVID-19 pandemic: A review. *International Journal of Surgery*, 78, 185-193. doi: 10.1016/j.ijssu.2020.04.018
- Nicolau, R. y Pujol, J. (2011). Aspectos políticos y científicos del modelo de la transición nutricional: evaluación crítica y nuevos desarrollos. *Documentos del Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria*. DT-SEHA, (11), 5.
- Otero, H. (2006) *Estadística y nación. Una historia conceptual del pensamiento censal de la Argentina moderna 1869-1914*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Pantelides, E. A. (2006). La transición de la fecundidad en la Argentina 1869-1947. *Cuadernos del Centro de Estudios de Población*, (54). Buenos Aires: Cenep.
- Quilodrán, J. (2008). *Hacia la instalación de un modelo de nupcialidad post transicional en América Latina*. Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, Córdoba, 24-26 de septiembre. Recuperado de http://www.alapop.org/alap/images/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2008_FINAL_168.pdf
- Rodríguez Vignoli, J. (2014). La reproducción en la adolescencia y sus desigualdades en América Latina. Introducción al análisis demográfico, con énfasis en el uso de microdatos censales de la ronda de 2010. *Documentos de Proyectos*, (605). Santiago de Chile: CEPAL /UNFPA.

- Rosero-Bixby, L., Castro-Martín, T. y Martín-García, T. (2009). Is Latin America starting to retreat from early and universal childbearing? *Demographic Research*, 20(9), 169-194. doi: 10.4054/DemRes.2009.20.9
- Sassen, S. (2003). *Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Smith, K. R. (1997). Development, health, and the environmental risk transition. En O. S. Shahi, B. S. Levy, A. Binger, T. Kjellström y R. Lawrence. (Eds.), *International perspectives on environment, development, and health: Towards a sustainable world* (pp. 51-62). Nueva York: Springer.
- Sobotka, T. (2008). The diverse faces of the Second Demographic Transition in Europe. En T. Frejka, J. M. Hoem, T. Sobotka y L. Toulemon. (Eds.), *Childbearing trends and policies in Europe* (pp. 171-224). *Demographic-Research Special Collection*, (7). doi:10.4054/DemRes.2008.19.8
- Tafari, R., Chiesa, G., Caminati, R. y Gaspio, N. (2013). Factores de riesgo y determinantes de la salud. *Revista de Salud Pública*, 17(3), 53-68. doi: 10.31052/1853.1180
- Tumas, N., Pou, S. A. y Díaz, M. D. P. (2017). Inequidades en salud: análisis sociodemográfico y espacial del cáncer de mama en mujeres de Córdoba, Argentina. *Gaceta Sanitaria*, (31), 396-403. doi: 10.1016/j.gaceta.2016.12.011
- Van de Kaa, D. J. (1987). Europe's second demographic transition. *Population Bulletin*, 42(1), 1-59.
- Van de Kaa, D. J. (2002). *The idea of a Second Demographic Transition in industrialized countries*. Documento presentado en el Sixth Welfare Policy Seminar, National Institute of Population and Social Security. Tokio, 29 de enero. Recuperado de http://websv.ipss.go.jp/webj-ad/WebJournal.files/population/2003_4/Kaa.pdf
- Velázquez, G. y Celemín, J. P. (2013). *La calidad ambiental en la Argentina. Análisis regional y departamental (c.2010)*. Tandil: CIG.
- Zaidi, B. y Morgan, S. P. (2017). The second demographic transition theory: A review and appraisal. *Annual Review of Sociology*, (43), 473-492. doi: 0.1146/annurev-soc-060116-053442

Os efeitos das desigualdades: bem-estar, população e ambiente no início do século XXI

**Resenha de Dorling, D. (2017).
*The Equality Effect: Improving
Life for Everyone*. Oxford, United
Kingdom: New Internationalist
Publications Ltd., 240 pp.**

Raphael Villela

Orcid: 0000-0001-6283-9133

raphaelvillela@outlook.com

César Marques

Orcid: 0000-0003-4935-112X

cesar.m.silva@ibge.gov.br

*Escola Nacional de Ciências Estatísticas, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística*

As manifestações sociais ocorridas em junho de 2013 no Brasil e as manifestações em curso no Chile em 2019 foram e continuam sendo explicadas a partir de fenômenos diversos. Insatisfação com serviços públicos, participação massiva de estudantes e centralidade da discussão sobre transporte público são alguns dos elementos em comuns. Adicionalmente, um dos temas que tem sido ressaltado é a persistência da desigualdade nesses países, a despeito dos avanços econômicos ocorridos durante as últimas décadas. Se publicamente a redução das desigualdades é um dos principais desafios contemporâneos, com lugar central em diversas constituições modernas e constituindo um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS-10, em termos gerais, apesar da redução da extrema pobreza no mundo durante o período recente, as desigualdades de renda e de riqueza entre os mais ricos e os mais pobres ainda persistem, tanto em

nações desenvolvidas como nas menos desenvolvidas. Nesse caso, a crise financeira de 2008 inaugurou uma nova era de aumento das desigualdades em algumas das economias mais avançadas, com destaque para os Estados Unidos e o Reino Unido.

Se com Piketty (2014) retomam-se os debates sobre o modo como medimos as desigualdades de renda e sobre suas tendências (aumento, redução ou estagnação), a proposta da obra *The Equality Effect* de Danny Dorling (2017), vai além destas duas questões, propondo analisar as desigualdades de modo mais amplo, ou seja, por meio das suas inter-relações com as demais dimensões da vida social e na sua interação com a relação da população com o ambiente. Através de uma discussão ampla e comparando países (principalmente os desenvolvidos), Dorling instiga os leitores na compreensão dos efeitos de vivermos em uma sociedade economicamente mais igualitária, entendendo como esta contribuiria tanto para o bem-estar geral quanto para a sustentabilidade. Assim, com uma rica discussão empírica, uma visão mais ampla sobre o processo histórico de desenvolvimento econômico, com um diálogo constante com as diversas ciências sociais e com uma marcante presença dos estudos populacionais, a obra contém uma argumentação bastante interessante sobre a importância da diminuição das desigualdades para o conjunto da sociedade, e, inclusive, para a conservação da natureza. Considerando que sua análise é centrada nos países ricos, refletir sobre a pertinência de tais questões para a América Latina é instigante.

No início da obra o autor apresenta a base de sua argumentação, pautando-se nas hipóteses sobre os efeitos positivos da igualdade. Essa discussão (presente no primeiro capítulo, intitulado “The Equality Effect”), parte da constatação de que atualmente, em razão da heterogeneidade existente nos níveis de desigualdade observados entre os países desenvolvidos, nunca foi tão evidente identificar e mensurar — devido ao volume de dados e informações disponíveis — os efeitos positivos da igualdade sobre as condições de vida. O significado do efeito igualdade seria, segundo ele:

The case of greater equality is not just the reverse of the case against income and wealth inequality. Gaining greater equality has a set of positive effects on a society that we can call the equality effect. Greater economic equality makes us all less stupid, more tolerant, less fearful

and more satisfied with life. [...] The equality effect can appear magical. In more equal countries, human beings are generally happier and healthier: there is less crime, more creativity, more productivity, more concern over what is actually being produced, and—overall—higher real educational attainment. (Dorling, 2017, pp. 10-11)

Por outro lado, o principal efeito da desigualdade seria o de provocar a corrosão da coesão social, já que as pessoas que vivem em sociedades desiguais seriam mais propensas a naturalizar as disparidades de renda, incentivando a existência de um sentimento de superioridade entre os mais ricos e de inferioridade entre os mais pobres. Nestas sociedades, o preconceito e os estereótipos tendem a ser reforçados e, consequentemente, a segregação socioespacial seria maior e a mobilidade de renda menor. Além disso, as sociedades mais desiguais tendem a apresentar maiores níveis de corrupção e de criminalidade, em um ambiente com maior recompensa para a prática de atividades ilícitas, sobretudo quando amplamente utilizadas por aqueles que estão no topo da distribuição da renda. Nesse caso, a grande desigualdade dos países latino-americanos e a extensão dos protestos da década de 2010 em diversos países parecem ressaltar a instabilidade política que ocorre sob a influência da desigualdade.

No capítulo 2, denominado “When We Were More Equal”, Dorling dialoga principalmente com a história e geografia para debater a inexistência de uma certa “naturalização” das desigualdades. O autor expõe como desde os modos de produção ditos primitivos, como dos primeiros grupos de caçadores e coletores, estruturas sociais baseadas em relações de igualdade e de cooperação fomentaram a criatividade e as inovações com maior intensidade. Por outro lado, quando as diversas desigualdades atingiram patamares extremos, haveria, com frequência, revoltas e revoluções, sendo também fecundas para o surgimento de novas crenças religiosas e ideologias. Assim o autor cita diversos momentos históricos que evidenciam a existência de uma complexa associação entre o nível de igualdade vigente, dogmas religiosos, condições ambientais, acúmulo de riqueza e produção do conhecimento. Mudanças abruptas nesta relação tendem a resultar em profundas transformações em nossas formas de sentir, pensar e agir, bem como, nos modos como nos comportamos e nos relacionamos uns com os outros. Em toda a história humana, segundo ele, o

crescimento mais abrupto das desigualdades se deu com a Revolução Industrial, exatamente quando a relação descrita acima foi alterada como jamais antes.

Foi durante o século XIX, com a expansão do capitalismo industrial, que as desigualdades atingiram o seu mais elevado patamar na modernidade. Apesar do sucesso econômico inegável, é a partir deste momento que as fontes de energia mais sustentáveis perdem lugar para os combustíveis fósseis, dando a falsa impressão que a capacidade de produção seria ilimitada. Além disso, as condições de vida foram rapidamente degradadas em função das longas jornadas nas fábricas e da precarização da transição urbana daquele momento. Entretanto, ao contrário das previsões mais pessimistas, o capitalismo se reinventou no século XX. Após a crise de 1929, duas guerras mundiais e da ampliação do bloco de países socialistas, todos os países capitalistas avançados experimentaram uma redução sem precedentes das desigualdades, principalmente a partir do Pós-Guerra até meados da década de 1970. Neste período houve a luta pelos direitos civis dos negros nos EUA, pelos direitos das mulheres, a construção do *welfare state* e o ingresso em massa dos jovens no ensino superior. Estes acontecimentos resultaram não apenas em uma revolução comportamental e cultural, como também, tecnológica, sendo que tais sociedades se tornaram mais igualitárias.

Contudo, a partir da década de 1980, uma ofensiva liderada pelos mais ricos, iniciada nos EUA e no Reino Unido, inaugurou uma nova era de crescimento das desigualdades, descolando suas trajetórias a dos demais países desenvolvidos. O autor ressalta que, nesse momento, outras desigualdades seriam ampliadas em derivação das desigualdades “puras” de renda, com reforço das desigualdades de gênero, classe e raça, alimentando uma engrenagem que permite sua perpetuação entre os diferentes grupos e estratos sociais.

A partir do capítulo 3 o autor dialoga mais intensamente com questões diretamente relacionadas à dinâmica populacional. Neste capítulo, intitulado “Why Children Need Greater Equality”, Dorling argumenta que uma das principais evidências de que a humanidade caminhou numa direção mais igualitária ao longo do século XX foi a brutal redução da mortalidade infantil em todo o mundo, primeiro nos países centrais e progressivamente nas nações periféricas, conforme estas iniciavam

seus respectivos processos de modernização e de urbanização. Contudo, apesar da tendência convergente das taxas de mortalidade infantil em todo o mundo, ainda persistem discrepâncias entre as nações, derivadas, em grande medida, das diferenças nos seus níveis de desenvolvimento e de desigualdade.

Para muito além desta relação, o autor argumenta que a principal contribuição da redução das desigualdades para as crianças deriva da construção de uma agenda política mais progressista e que prioriza a provisão de bens e serviços públicos de qualidade. Isso porque seriam justamente as crianças o grupo que mais se beneficiaria destes bens e serviços, como por exemplo o saneamento, a saúde, a educação, a segurança e os espaços públicos para o lazer. Por outro lado, quando as medidas de ajuste fiscal passam a ter centralidade na agenda política, o resultado tem sido a desconstrução de tais iniciativas, afetando particularmente as crianças.

No capítulo 4, denominado “Equality and the Environment”, Dorling discute como a desigualdade afeta negativamente a relação entre população, desenvolvimento e ambiente. Sua hipótese é a de que nos países menos desiguais, onde há provisão de bens e serviços públicos mais eficientes (em média), a demanda por consumo e a produção per-capita seriam menores, com reduzida produção de lixo e emissão de dióxido de carbono (CO_2). Nesse caso, ricos e pobres poluem menos quando a distância que os separa é menor. Ademais, nestas sociedades, a qualidade de vida e do bem-estar tende a ser maior dado que a importância da renda como condicionante do acesso à saúde, educação, moradia digna, mobilidade urbana e ao lazer é menor. Logo, tanto o apelo ao consumo como forma de definição do status-social, quanto à recompensa do crime, seja para os ricos, seja para os pobres, são menores.

Nessa seção Dorling compara vinte e cinco das nações mais desenvolvidas que possuem uma população superior a dois milhões de habitantes, onde reside grande parte do 1% mais rico do mundo. Para tal seleciona onze variáveis: consumo de carne e de água, produção de lixo, emissão de CO_2 , consumo de petróleo, mortes infantis evitáveis, pegada ecológica, viagens aéreas, crimes cometidos (taxa por cem mil habitantes), educação (habilidade matemática) e comportamento saudável (presença de atividades físicas). Em seguida, o autor relacionou

cada uma destas variáveis com a razão $10^+/10^-$, que compara a parcela da massa dos rendimentos recebida pelo décimo superior com a apropriada pelo décimo inferior da distribuição da renda¹.

Dorling faz duas ressalvas em relação à interpretação dos resultados: o de não estabelecer causalidades entre as variáveis e de observar os limites metodológicos e de qualidade dos dados, em razão de diferenças na produção dos indicadores entre os países. Das onze variáveis relacionadas com a razão $10^+/10^-$, apenas três não apresentaram associação significativa: a produção de lixo, a pegada ecológica e os crimes cometidos. Contudo, segundo ele, alguns países menos desiguais podem adotar critérios metodológicos mais rigorosos e que derivam justamente do maior apelo da questão ambiental nestas sociedades; como são os casos da Dinamarca e da Suíça na mensuração da quantidade de lixo produzida. Já em relação à pegada ecológica, sua justificativa é a de que este indicador é influenciado pela densidade populacional, como são os casos dos EUA, Canadá e Austrália, menos densamente povoados. Já os crimes cometidos são influenciados pela própria tipificação do que é considerado ou não como crime em cada país.

O autor conclui que os países menos desiguais, apesar de algumas exceções que podem ser feitas, tendem a ser, portanto, mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, além de apresentarem melhores condições de vida e de bem-estar para a sua população.

No capítulo 5, intitulado “Population, Housing and Migration”, Dorling se propõe a demonstrar como as componentes demográficas (fecundidade, mortalidade e migração) e a desigualdade se relacionam. O autor cita um conjunto diverso de questões afetadas pela desigualdade, mas sua ênfase está em questões centrais à demografia, como no debate sobre desigualdades de gênero e raça, maiores nos países onde a desigualdade de renda também é maior.

Dentre as questões colocadas, a fecundidade tem destaque. Nesse caso, há vasta bibliografia mostrando que, internacionalmente, os países que conjugaram o crescimento econômico com a redução das desigualdades tenderam a apresentar subsequentemente, uma

1 Em Stotesbury e Dorling (2015) é possível obter mais informações sobre o indicador utilizado e suas principais vantagens.

redução da taxa de fecundidade. Além disso, quando as mulheres têm acesso à educação, saúde e ao mercado de trabalho, a fecundidade e as desigualdades diminuem em ritmo mais acelerado. Por sua vez, as migrações podem contribuir para a redução da fecundidade global, já que imigrantes oriundos de países com altas taxas de fecundidade tendem a incorporar (ao menos no médio prazo) o padrão de fecundidade dos países de destino, em geral mais desenvolvidos e com menor desigualdade e, portanto, com reduzidas taxas de fecundidade. Este processo social positivo teria grande importância ambiental, pois, uma população mais estável é no longo prazo mais sustentável do que aquela que cresce indefinidamente.

No que diz respeito à saúde e à mortalidade, Dorling argumenta que os países menos desiguais tendem a destinar uma maior proporção do PIB à saúde pública e à seguridade social. Ademais, esta destinação se dá de modo mais eficiente. Por outro lado, entre os países mais desiguais, o risco de cortes dos gastos públicos com saúde, educação e seguridade social são maiores nos momentos de crise.

Ao final, o autor conclui que nos locais e nos períodos de menor desigualdade, as pessoas têm um maior acesso à moradia digna e os custos com habitação são menores; a desigualdade entre homens e mulheres é menor; as crianças são mais felizes e saudáveis; as pessoas culpam menos os imigrantes pelos seus infortúnios pessoais; a taxa de fecundidade se aproxima do nível de reposição; os idosos gozam de uma vida mais longa, com mais saúde e bem-estar; o estilo-de-vida dos mais ricos não difere tanto do restante da população, fortalecendo a coesão social.

No capítulo 6, denominado “Where Equality Can Be Found”, o autor nos leva a identificar os momentos e as situações cotidianas que nos tornam mais iguais, como durante os finais de semana e os feriados. Para além do cotidiano, Dorling afirma que a igualdade é um atributo que pode ser identificado por meio da comparação, quando observamos países vizinhos ou que apresentam o mesmo nível de riqueza, mas que diferem no nível de igualdade. É também possível encontrarmos, segundo ele, exemplos de maior igualdade no interior de um mesmo país —ou território—, como é o caso da província de Querala, localizada no Sudoeste da Índia.

Se no restante da obra a análise é centrada nos países ricos, nesse momento o autor trata também da região da América Central e Caribe, a partir dos casos de Costa Rica e Cuba. Apesar das diferenças nas trajetórias econômicas e políticas, estes países lideram os indicadores regionais que medem, por exemplo: expectativa de vida; mortalidade materna; participação das mulheres na política e anos de estudo. Ademais, estas duas nações apresentam historicamente uma melhor resposta aos desastres em comparação com os seus vizinhos. A Costa Rica se destaca também pela moderna política de conservação ambiental e pela abolição das forças armadas. Por outro lado, o modelo cubano, em razão do desrespeito aos direitos humanos e da ausência de democracia, demonstra que a busca pela maior igualdade é incompatível com a supressão da liberdade.

O segundo exemplo se baseia na comparação dos indicadores da Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia em relação aos demais países da Europa Ocidental. Estes países nórdicos se destacam pela grande participação feminina no mercado de trabalho, com diferença salarial em relação aos homens relativamente pequena, pelo sistema tributário eficiente, pelo combate à sonegação fiscal; pelos elevados índices educacionais e pelo grande volume de produção científica per-capita, como são os casos dos líderes mundiais Finlândia e Suécia; pela reduzida taxa de criminalidade e de homicídios; pela presença de grandes empresas inovadoras, como a Nokia (Finlândia), Bang and Olufsen e Lego (Dinamarca), IKEA (Suécia) e pelo planejamento estatal de longo prazo. Em resumo, estes países criaram, segundo Dorling (2017, p. 208), as fundações de uma “intentionally redistributive economy”, o que possibilita a manutenção de um estado de bem-estar social e, consequentemente, de uma maior coesão social. Entretanto, pondera o autor, mesmo estas nações não estão totalmente imunes ao avanço de movimentos políticos extremistas e da xenofobia em contextos de aumento, mesmo que sutil, das desigualdades.

Ao final, segundo o autor, é possível identificar, entre os países mais desenvolvidos, um grupo de doze nações que demonstram ser possível conter ou até mesmo reduzir as desigualdades. São elas Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Japão, Alemanha, Suíça, Holanda, Portugal, Espanha, Austrália e Nova Zelândia. Por outro lado, entre as maiores economias do mundo, o autor destaca um grupo em que ainda

persistem grandes desigualdades, porém, sem sinais de reversão. Este grupo é composto por EUA, Índia, China, Brasil, África do Sul e Rússia. Entretanto, seriam os três últimos os mais desiguais.

No capítulo 7, intitulado “Firing Up the Equality Effect”, o autor apresenta as suas conclusões. Seu raciocínio se estrutura em três pontos principais: primeiro, sobre o porquê da urgência da redução das desigualdades no mundo contemporâneo; segundo, em relação às possíveis ações que resultariam na diminuição das disparidades de renda entre as pessoas e; terceiro, sobre o verdadeiro efeito da igualdade.

A redução das desigualdades é primordial para erradicação da pobreza. A concentração de renda e de riqueza em nível mundial atingiu níveis extraordinários nesta década, resultado de um acelerado crescimento ocorrido, sobretudo ao longo dos últimos vinte e cinco anos, sendo impulsionado por um pequeno número de países extremamente desiguais. Não reverter esta tendência significa persistir no combate à pobreza indefinidamente.

Aqueles que pertencem ao 1% mais rico da humanidade se beneficiam enormemente da desregulamentação dos mercados financeiros, da sofisticação dos mecanismos de evasão de divisas e da segurança dos paraísos fiscais. Por conta disso, novas táticas precisariam ser aplicadas para os novos tempos. A renda mínima seria uma delas, como também, a renda máxima, uma ação mais dramática que limitaria os ganhos dos mais ricos. O autor argumenta que a receita para a redistribuição da renda e de riqueza estaria na tributação progressiva, maior taxação sobre grandes heranças e fortunas e na maior punição aos crimes de sonegação fiscal e de evasão de divisas. Algumas nações já discutem a aplicação destas medidas, como os países nórdicos, alguns países da Europa Ocidental, além da Austrália e da Nova Zelândia.

Ainda, ele argumenta que a busca por mais igualdade não seria um fim a ser conquistado exclusivamente por meio da opção entre um dos três modelos teóricos puros de organização da sociedade (anarquismo, socialismo ou capitalismo), mas seria dada “with some form of balance between state control and regulation, individual liberty and market forces, and quite how that balance is achieved can determine how equitable or inequitable your society becomes” (Dorling, 2017, p. 259). Assim a igualdade seria menos um objetivo em si e mais uma direção.

Isso significa que quando buscamos a igualdade, alcançamos uma maior harmonia social, sendo este o verdadeiro resultado quando dispáramos o efeito da igualdade.

A obra de Danny Dorling nos convida a refletir sobre os efeitos positivos de vivermos em uma sociedade mais igual. O livro oferece uma série de questões para os estudos populacionais, pensando propositadamente sobre uma gama ampla de efeitos da igualdade. Em um contexto de ascensão da desigualdade econômica, em que a própria noção de igualdade se confunde com igualitarismo, o autor faz um esforço importante para mostrar que a igualdade reforça a possibilidade da diversidade, mas com paridade. Apesar da maior atenção dada aos países mais desenvolvidos e de não se aprofundar nos efeitos da igualdade para além dos diferentes estratos sociais como, por exemplo, entre gênero, raça e faixa etária (embora reconheça que em situações de desigualdade as diferenças e a discriminação são acentuadas), o livro *The Equality Effect* é uma leitura indispensável para os estudiosos das desigualdades. No caso da América Latina, a difusão desse debate tem grande potencial para a melhor compreensão dos contextos contemporâneos, em que as desigualdades são presentes, diversas e manifestam-se de forma notória.

Referências

- Piketty, T. (2014). *O capital no século XXI*. Rio de Janeiro: Intrínseca.
- Stotesbury, N. & Dorling, D. (2015, October). Understanding income inequality and its implications: Why better statistics are needed. *Statistics View*. Recuperado de <https://www.statisticsviews.com/details/feature/8493411/Understanding-Income-Inequality-and-its-Implications-Why-Better-Statistics-Are-N.html>